TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación: 11001-3199-002-2019-00304-01
Asunto: Verbal –Responsabilidad del Administrador.
Demandante: Inversiones Janna Raad y Cia S en C.
Demandado: Aníbal José Janna Raad
Recurso: Apelación Auto

Decídese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente al auto de 28 de julio de 2020, proferido por la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso verbal -de responsabilidad del administrador- instaurado por Inversiones Janna Raad y Cia. S. en C. contra Aníbal José Janna Raad.

ANTECEDENTES

1. El proveído opugnado negó la solicitud formulada por el apelante en su demanda, consistente en decretar y practicar los testimonios de Yolanda Luz Janna Raad, Daniel Felipe Coca Londoño y Daniel Felipe Coca Londoño, así como también los medios probatorios consistentes en la inspección judicial, la exhibición de documentos y los dictámenes periciales, pedidos al momento de descorrer las excepciones de mérito propuestas por su contraparte.

Esa determinación la fundó en que la solicitud de prueba testimonial no cumplía los requisitos contemplados en el artículo 212 del C.G.P; la inspección judicial,

porque consideró que ésta reservada para hechos que solo pueden ser acreditados únicamente con ese medio, además, estaba enderezada a recaudar documentos ya incorporados al plenario, y los dictámenes estimó que no reunían las exigencias legales.

2. La actora apeló esa decisión, pretextando, en lo medular, que si bien en la demanda omitió señalar la dirección dónde podían ser citados sus testigos, lo cierto es que luego suministró el correo electrónico, acogiéndose al Decreto 806 de 2020.

Alegó, también, que la solicitud de exhibición de documentos e intervención de peritos reunían las exigencias legales, siendo útiles para establecer los hechos fundantes de la acción, por estar relacionadas con la preparación de los estados financieros y las irregularidades que los rodean, pudiendo evidenciar el trato inequitativo al que ha sido sometida la sociedad Janna Raad y Cia. S. en C.

Adujo, asimismo, que el Código General del Proceso habilita la práctica de dictámenes periciales, en caso de negarse la inspección judicial y, aunque, "los elementos" podían probarse a través de los documentos exhibidos, requerían una "valoración técnica", siendo vital la intervención de un perito informático con el objeto de establecer cuáles son los correos, comunicaciones electrónicas y archivos digitales contenidas en los servidores respectivos, siendo igualmente necesaria la experticia contable, para determinar si los estados financieros están acordes con las normas contables.

CONSIDERACIONES

1. Como es bien sabido, la garantía supralegal del debido proceso comporta, entre otros aspectos, el derecho de las partes a demostrar los hechos invocados como fundamento de sus pretensiones y excepciones; por ende, el administrador de justicia está llamado a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de dicha prerrogativa.

Empero, el ordenamiento prevé varias exigencias que los interesados han de satisfacer al momento de pedir el decreto y recaudo de pruebas -*v. gr.* testimonios, inspección judicial, exhibición de documentos-, en aras de garantizar su adecuada contradicción.

Al tenor del artículo 168 del C.G.P., la solicitud de recaudo de un medio de convicción será rechazada cuando el mismo sea ilícito, inconducente, notoriamente impertinente y/o manifiestamente superfluo o inútil; por ende, si alguna duda subsiste sobre esos particulares, aquel habrá de decretarse[1]. Ello es así, atendiendo los principios de necesidad, eficacia y utilidad de las pruebas, por cuya virtud el juez está llamado a acopiar "*aquellas idóneas para forjar su convencimiento acerca de la verdad que subyace al litigio, labor en la que no puede cifrar sus expectativas únicamente en unos elementos probatorios, por más que los considere suficientes, a fuer de despreciar otros que también pueden nutrir su percepción de los hechos*"[2].

2. Pues bien, la disputa suscitada en este caso concierne, en lo medular, al presunto incumplimiento de los deberes del administrador de la sociedad -Aníbal José Janna Raad-, de quien la demandante sostiene ha recibido un trato desigual respecto de los demás accionistas, en la medida que le ha impedido efectuar la inspección sobre informes de gestión de los revisores fiscales, los proyectos de distribución de utilidades, lo cual era necesario para su aprobación en la Asamblea General convocada para el 29 de marzo de 2019.

De igual modo, la actora sostiene que su contendor ha convocado a diversas asambleas, pese a no ostentar la calidad de representante legal desde el 1 de abril de 2019, en las que ha limitado el ejercicio de los derechos de Inversiones Janna Raad y Cia S en C., sin que haya podido votar respecto a los estados financieros

[1] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 7 de junio de 2016, exp. 001-2015-00245-01 (M.P. Oscar Fernando Yaya Peña).
[2] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 2 de febrero de 2015, exp. 023-2013-00731-01 (M.P. Nubia Esperanza Sabogal Varón).

con corte a 31 de diciembre de 2018, el informe de gestión de la administración y el proyecto de distribución de utilidades.

.

3. Desde esa perspectiva, la SIC acertó al negar ciertas pruebas, pero erró al abstenerse de decretar algunas otras. En efecto:

3.1 El a quo negó el decreto y práctica de la inspección y exhibición de documentos deprecada por el extremo demandante, siendo, de la dos, tan solo recurrida esta última; sin embargo, de oficio requirió a la sociedad Janna Motors para que en el término de 10 días aportara copia de las actas de reunión de la junta directiva de la compañía para el periodo comprendido entre 2018 a 2019; copia de los estados financieros que hubiera presentado Aníbal José Jana Rad ante entidades financieras entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2019 para solicitud de créditos de Janna Motors S.A.S. y, de los estados financieros de Janna Motors S.A.S con sus notas a corte de 31 de diciembre de 2018.

Documentos anteriores, relacionados directamente con los hechos que fundaron la demanda, luciendo así superflua la exhibición pedida, pero con todo, la solicitud del mentado medio de prueba de todos modos resultaba inatendible por no colmar las exigencias del artículo 266 del C.G.P., a cuyo tenor, "*quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos*", en tanto que no expresó con claridad la relación de los documentos cuya exhibición pretendía con los hechos de la demanda.

En punto de la intervención de los peritos informático y contable, la misma, en principio, no deviene necesaria, en la medida que si el litigio está centrado en la presunta obstaculización de derechos provocada por el demandado a la demandante para que esta accediera a la aludida documentación, tratándola de manera inequitativa respecto de los demás accionistas, convocando a asambleas cuando, según el dicho de la actora, éste ya no ostentaba la calidad de representante legal, tales hechos bien

pueden ser dilucidados con la documental y testimonial acopiada durante el trámite, luciendo, por ahora, superfluo, su decreto y práctica.

No obstante, el a quo, de considerarlo útiles durante el curso del proceso, podrá bajo las previsiones del artículo 169 del C.G.P., decretarlas para el esclarecimiento de los hechos relacionados con lo alegado por los extremos de la litis.

3.2. Empero, los testimonios de Yolanda Luz Janna Raad, Miguel Ángel Veloza Sierra y Daniel Felipe Coca Londoño, pedidos en la demanda, aunque allí no se indicó el domicilio, residencia o lugar donde podían ser citados, ello no era óbice para su decreto y negarlas tajantemente a falta de un requisito formal, menos aún, cuando el inciso 2° del numeral 11° del artículo 78 del C.G.P. contempla como deberes de las partes y sus apoderados " *citar a los testigos cuya declaración haya sido decretada a instancia suya, por cualquier medio eficaz…"*.

Y es que no es factible calificar esa prueba como manifiestamente innecesaria, superflua o inútil, en la medida que, según fue sostenido en el escrito introductor, aquellos declararán sobre las condiciones en que se han adelantado las Asambleas de Accionistas y, el último de los nombrados, especialmente sobre las circunstancias en que fue desarrollada la inspección previa a la reunión programada para el 29 de marzo de 2019.

Por ende, habrán de decretarse, claro está, sin perjuicio de la facultad que el inciso 2° de la misma disposición le confiere al funcionario cognoscente para limitar su recepción -mas no su decreto, como erradamente lo hizo el *a quo*- "*cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba*".

4. Así las cosas, la apelación en estudio prosperará con alcance parcial, lo cual conduce a modificar el pronunciamiento cuestionado, sin que haya lugar a imponer condena en costas de esta instancia, ante esa prosperidad de la alzada.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- **MODIFICAR** el auto apelado -fechado 28 de julio de 2020-, en el sentido de **DECRETAR** la práctica de los testimonios de Yolanda Luz Janna Raad, Miguel Ángel Veloza Sierra y Daniel Felipe Coca Londoño, para lo cual el juzgador cognoscente programará la respectiva audiencia.

Segundo.- En lo demás, se **CONFIRMA** el proveído apelado.

Tercero.- Oportunamente, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.

Sin costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso No.	11001319900220190033 8 **03**
Clase:	VERBAL – PRESUPUESTOS DE INEFICACIA
Demandante:	OWLO ACADEMY LLC
Demandada:	OWLO SPACE S.A.S.

Con fundamento en los artículos 322 (incisos 2° y 3° del numeral tercero), 323 (numeral primero) y 327 (últimos dos incisos) del Código General del Proceso, se ADMITE, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación que de un lado, la sociedad demandada interpuso contra la totalidad de la sentencia del 12 de noviembre de 2020; y de otro, que la demandante impetró contra el numeral 5° de su parte resolutiva; la cual fue proferida en audiencia virtual por la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria I de la Superintendencia de Sociedades, y entre otras, declaró "que Owlo Academy LLC es accionista y propietaria de 510 acciones en Owlo Space S.A.S.", advirtió la ineficacia de las decisiones adoptadas en las reuniones de la asamblea de accionistas de Owlo Space S.A.S. celebradas el 19 y 24 de julio de 2019, y desestimó "la pretensión 1 de la demanda".

En oportunidad, secretaría controlará los traslados que por cinco (5) días regula el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, luego de lo cual el asunto ingresará al despacho para resolver lo pertinente.

So pena de los efectos procesales correspondientes, la **sustentación** de la alzada admitida versará, únicamente, sobre los reparos concretos presentados contra el fallo de primer grado, conforme lo regula el inciso final del artículo 327 del CGP. Las partes harán llegar sus respectivos escritos al correo electrónico de la secretaría: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
Magistrado.

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5513a8f6553e4f2a23ddc970d78fcfcd29f74963c5e1b0f07d0aa12560e1d54f
Documento generado en 16/12/2020 08:39:19 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	OTROS
DEMANDANTE	**:**	OPERADOR DEL CARBÓN DE SANTA MARTA
DEMANDADO	**:**	MAURICIO SUÁREZ
RADICACIÓN	**:**	1100131 99 002 2019 00407 01
DECISIÓN	**:**	**CONFIRMA**
FECHA	**:**	16 de diciembre de 2020

Se decide la apelación que formuló el demandado contra el auto proferido en la audiencia del 29 de septiembre de 2020, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades negó la expedición de un oficio dirigido a la Fiscalía y otro a la ANLA; de igual forma denegó la exhibición de unos documentos de las sociedades Carbosan y de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

De cara a los oficios dirigidos a la Agencia de Licencias Ambientales y a la Fiscalía, argumentó el a quo que i) no se había cumplido con la carga del artículo 173 del Código General del Proceso; ii) no se aclaró la imposibilidad de obtener la prueba por su propio medio; iii) además, que en lo que tiene que ver con el oficio dirigido a la Fiscalía no se estableció la relación que guardaba con los hechos de la demanda.

En lo que atañe a la exhibición de documentos, manifestó que no se cumplían con los requisitos señalados en el artículo 286 del Código General del Proceso.

LA APELACIÓN. La inconforme alegó, en suma, que no le era dable presentar petición ante la Fiscalía porque es parte civil y victima en las investigaciones penales allí adelantadas; además, que por estar en etapa de indagación no puede acceder a las pruebas allí obtenidas.

Respecto del oficio dirigido a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales manifestó que no es parte en ese proceso, ya que el demandado ya no es representante legal de Carbosan ni de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, por ende, no era posible obtener copia de la actuación administrativa adelantada.

Finalmente, sobre la exhibición de documentos, manifestó que sí se cumplió con los presupuestos del canon 286 del estatuto adjetivo vigente; adicionalmente, que ello guarda fina relación con la prueba pericial decretada.

CONSIDERACIONES

Se confirmará el auto impugnado por las razones que a continuación se consignarán.

1. El artículo 173 del Código General del Proceso impone la carga a las partes de respetar y cumplir con las oportunidades y el trámite previamente determinados para solicitar pruebas, con independencia de que los términos procesales conferidos para tal fin, les resulten escasos. Dice la citada norma:

> "*Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello en este Código.*

(…) El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente"

Resulta notorio que su finalidad es lograr la efectiva celeridad y economía procesal dentro del proceso oral, concentrando la etapa probatoria de manera tal que, al momento del decreto de pruebas, sólo sean decretadas aquéllas que las partes estuvieron en la imposibilidad de aportar de manera anticipada.

Es más, para afianzar tal objetivo, se buscó que quedara expresamente consagrado en el Código General del Proceso, como un deber de las partes y sus apoderados "*Abstenerse de solicitar al Juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiera podido conseguir*" –artículo 78, numeral 10º-.

En armonía con lo anterior, también el artículo 43 numeral 5º de la misma obra, señala como uno de los poderes de ordenación e instrucción de los operadores judiciales, el de exigir a las autoridades o a los particulares la información solicitada por el interesado y que no haya sido suministrada oportunamente.

Cómo puede verse, en cada una de las disposiciones citadas el interesado tiene la carga probatoria de aportar, en su debida oportunidad, los documentos e informes que pueda obtener sin la mediación judicial y el juez a su vez tiene el deber de decretar y practicar sólo aquéllas pruebas que las partes no se encuentran en la capacidad de presentar, bien sea porque i) no fue atendida la solicitud con la que se buscaba obtenerlas por parte de las autoridades o de los particulares, ii) no fue suministrada a tiempo o, iii) le fue negada.

2. Alude el apelante que no presentó petición ante la Fiscalía toda vez que es víctima y parte civil en las tres investigaciones mencionadas en el acápite de pruebas[1], lo que de por sí le impediría que obtener copia *"completa de la totalidad de las actuaciones realizadas"*[2]

Dicho argumento no es suficiente para revocar la decisión tomada por el a quo, habida cuenta que pese a que la etapa de investigación se caracteriza por ser reservada, para efectos de garantizar los derechos de las víctimas de los delitos a la verdad, justicia y reparación, la Corte Constitucional "*ha señalado que dicha limitación al principio de publicidad no las puede cobijar y que, por el contrario, las víctimas pueden conocer las actuaciones adelantadas por la Fiscalía dirigidas a averiguar la verdad de lo sucedido, de ahí que si bien es cierto la ley podía establecer la reserva de la investigación previa para salvaguardar la eficacia de la justicia, los derechos a la intimidad y al buen nombre del investigado, no lo es menos que no podía excluir a la parte civil, como era anteriormente denominada, porque afectaría de manera desproporcionada el núcleo esencial de los derechos de las víctimas."* (T-049/08).

En ese orden de ideas, la etapa de investigación en el proceso penal deberá ser reservada salvo, para las víctimas de los delitos.

En tal virtud, la mera suposición que por ser víctima no se le expediría copia de la investigación adelantada no lo exime de la carga impuesta por el artículo 173 del Código General del Proceso.

3. Similar situación ocurre frente al oficio dirigido a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, pues el argumento del apelantes es que, como quiera que el demandado dejó de ser representante legal de la sociedad actora, no podía obtener copias de las actuaciones adelantadas por tal entidad; sin embargo, aunado a lo ya descrito, el artículo 36 del CPACA, dispone que cualquier persona tiene derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren,

---

[1] NUC 470016001020201800705 de Carbosan contra Mauricio Suarez; 470016001020201900108 de Mauricio Suárez y Javier Prada; y 470016001020201800915 de Javier Prada y víctima Mauricio Suárez.
[2] Folio 47, archivo 29.

salvo los documentos sujetos a reserva, y podrá *"obtener copias y certificaciones sobre los mismos".*

Así, el apelante no estaba imposibilitado de aportar la prueba que era de suyo allegar para los fines que pretendía probar, por lo que el incumplimiento de su carga impide el decreto de la prueba.

4. Finalmente, sobre la prueba de exhibición de documentos:

Conforme al artículo 265 del Código General del Proceso los requisitos para solicitar la exhibición de documento son:

1. Afirmar que el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlo.

2. Hechos que pretende demostrar con la exhibición. Presupuesto que tiene que ver con la pertinencia de la prueba, saber cuáles son los hechos que se van a demostrar.

3. Expresar con claridad de qué clase de documento se trata y demás características a fin de determinarlo.

El demandado pretende que se exhiba soportes contables de Sociedad Portuaria de Santa Marta y de Carbosan, actas de juntas directivas, comunicaciones cruzadas sobre, actas de comité, contratos celebrados, entre otros.

Ahora, como ya se manifestó es requisito procesal que se anuncie el hecho que se pretende probar, y en este caso el genérico de "*ausencia de apropiaciones indebidas del señor Mauricio Suárez (…) y [que] disfrutó [de] los beneficios laborales en el marco del esquema de compensación flexible",* no suplen el mentado presupuesto, pues no se esclareció puntualmente el hecho a probar.

5. No prospera por ende, la alzada en estudio.

DECISIÓN

Así las cosas, el suscrito Magistrada CONFIRMA el auto que se profirió en audiencia del 29 de septiembre de 2020, emitido por la Superintendencia de Sociedades en el proceso verbal de la referencia. Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese



LIANA AIDA LIZARAZO VACA

Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4ea1046702be3d601863bc1cb46da920f26ff95b4fafaff885fd19314fe35840**

Documento generado en 16/12/2020 03:18:12 p.m.

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Asunto. Proceso Verbal (Impugnación de Actas de Asamblea) promovido por Jorge Hernán Botero Ramírez y otra contra Edificio Portal de Santa Bárbara P.H.

Rad. 003 2018 00304 01

Previo a resolver sobre la admisión del recurso de apelación que formuló la parte demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado 3 Civil del Circuito de Bogotá el 20 de enero de 2020 dentro del proceso de la referencia, por Secretaría requiérase a este último para que remita a esta sede el archivo o copia de los folios 163 y 165 del cuaderno identificado como *05CuadernoPrincipal18-304.pdf* que hace parte de la carpeta *01CuadernoPrincipal*, en vista de que a pesar de que hacen parte de la demanda (acápite de los hechos) no se encuentran escaneados o reproducidos en debida forma, en tanto que pasan del 162 al 164 y del 164 al 166 (Cfr.).

Adviértase que el término previsto en el artículo 121 del C.G.P., habrá de computarse una vez se registre la recepción de la totalidad del expediente en la secretaría del Tribunal.

Notifíquese,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-003-2017-00267-03
Asunto: Ejecutivo Singular
Recurso. Apelación Auto
Demandante: Fernando Valbuena Barrios.
Demandados: BP Constructores SA, Arquitectos Constructores e Interventores Ltda., Constructora JG&A Ltda, Consultoría Colombiana SA, integrantes del Consorcio Rio Seco.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por BP Constructores SA y el Consorcio Rio Seco frente al auto emitido el 23 de septiembre de 2019, por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, dentro del juicio compulsivo adelantado por Fernando Valbuena Barrios contra BP Constructores SA, Arquitectos Constructores e Interventores Ltda., Constructora JG&A Ltda., Consultoría Colombiana S.A., integrantes del Consorcio Rio Seco.

ANTECEDENTES

1. El proveído opugnado aprobó la liquidación de costas en cuantía de $300.000.oo, correspondiente únicamente a las agencias en derecho fijadas a favor de la parte ejecutada, por esta Corporación en el proveído emitido el 27 de julio de 2018.

2. Oportunamente BP Constructores SA y el Consorcio Rio Seco recurrieron esa decisión, en reposición y apelación subsidiaria, pidiendo aumentar el importe total de las agencias en derecho a la suma de $45'000.000, por cuanto, a su juicio, en su tasación fueron desatendidas las pautas fijadas en el Acuerdo PSAA16-10554, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura el día 5 de agosto de 2016.

Sustentó su inconformidad en que, según el numeral 4º del artículo 366 del C.G.P., en la fijación de las agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura; de ahí, que en la regulación del citado concepto en este caso debió atenderse el artículo 5º, numeral 4º, literal C del precitado Acuerdo, tomándose en consideración que con su actuación obtuvo la revocatoria del mandamiento de pago librado por $1.489.639.051.36, como también el levantamiento de las cautelas.

Alegó, también, que debió tenerse en cuenta la naturaleza del asunto, la calidad y duración de la controversia, al igual que las actuaciones que desplegó en las acciones constitucionales instaurada por su contendor.

3. El ejecutante, en la réplica a la impugnación, solicitó confirmar el proveído recurrido, aduciendo, en esencia, que el litigio no se trabó y, por ende, no generó costas; agregó, en todo caso, el mandamiento de pago no cobró ejecutoria, y mal podría condenarse al pago de aquellas, las que solo se producen como efecto de una sentencia.

4. El A quo mantuvo la providencia impugnada, soportado en que la fijación de las agencias en derecho solo es predicable en el evento en que se hubiera dictado sentencia y que la misma hubiese resuelto favorablemente las excepciones en favor del ejecutado, lo que no ocurrió en este caso porque el conflicto no se zanjó de fondo.

Subsecuentemente, concedió la alzada subsidiaria, la que ahora es

objeto de decisión, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Como es sabido, el pago de la condena en costas corre por cuenta de la parte vencida en el proceso y, de ser el caso, está a cargo de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto, como también en los casos especiales previstos en el estatuto procesal vigente (artículo 392 del C. de P. C., hoy 365 del C.G.P.).

Igualmente, habrá lugar a imponer esa condena a quien se le resuelva de manera negativa un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

A su vez prevé el artículo en cita que la imposición de la misma se efectuara en la sentencia o el auto que resuelva la actuación que dio lugar a ella.

2. En el caso sub-júdice, toda la actuación surtida se circunscribió a determinar si había o no lugar a dictar la orden de pago reclamada por el ejecutante. Es así, como el *a quo,* en últimas, la negó y levantó las cautelas, decisiones confirmadas por esta instancia, en el auto emitido el 27 de julio de 2018, el cual resolvió los recursos de apelación que fueron propuestos por el actor.

En la tramitación de la primera instancia ninguna condena en costas fue impuesta y, por contera, no había lugar a fijar agencias en derecho. Obsérvese, el juzgador al revocar parcialmente la orden de apremio inicialmente emitida (auto fechado 16 agosto 2017), y luego revocar esa decisión para, en su lugar, negar la misma (proveído de 20 octubre de 2017), no impuso condena de costas alguna; tampoco lo hizo en la providencia dictada el 1º de febrero de 2018, en la cual levantó las medidas cautelares.

Luego, siendo así las cosas, mal podría fijarse agencias en derecho por el trámite de la primera instancia, pues, ello presupone la imposición de la respectiva condena en costas en el auto que resuelva la actuación que dio lugar a ella (Art.365, numeral 2º C.G.P.).

3. Ahora, en lo que concierne a la segunda instancia, esta Corporación cuando desató las alzadas propuestas (auto 27 de julio de 2018), por el demandante contra las providencias proferidas el 16 de agosto de 2017 y 1º de febrero de 2018, condenó en costas a dicho litigante, tasando las agencias en derecho en $300.000.oo, monto que, a juicio del aquí recurrente, no se ajusta a las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, además, de pasar por alto la naturaleza del asunto, la calidad y duración de la controversia, al igual que las actuaciones que desplegó en las acciones constitucionales instaurada por su contendor.

3.1 Ciertamente, para la fijación de agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, y si éstas fijan únicamente un mínimo, o éste y un máximo, habrá de tomarse en consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del asunto y otras circunstancias especiales (art. 366 numeral 4° del C.G.P., y 2° del Acuerdo PSAA16-10554, vigente para la época de presentación de la demanda[1]).

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reguló las tarifas de agencias en derecho propias de los procesos judiciales en el prenombrado Acuerdo, el cual estableció para la segunda instancia de los litigios ejecutivos un rango "*entre 1 y 6 S.M.M.L.V*" (art. 5°, núm. 4).

[1] El artículo 7° del Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016, prevé que su vigencia inicia "*a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha*"; la demanda fue presentada el 28 de abril de 2017.

Por ende, resulta procedente determinar si los parámetros determinados por La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fueron escrutados al momento de tasar las agencias en derecho de la segunda instancia, tomando, en consideración la naturaleza del asunto, la calidad y el tiempo de la labor desplegada por el mandatario del extremo pasivo.

3.2 Acá la segunda instancia fue desatada en un lapso breve (2 meses, aproximadamente), entre la entrada al despacho del primer recurso y el auto que resolvió la alzada, y menos de un mes entre la llegada del segundo recurso y este último proveído-, sin que aparezca alguna actuación del demandado, por lo que su gestión judicial se circunscribió a la vigilancia del proceso, labor que, en todo caso, debe ser compensada[2], en tanto aquel estuvo atento a todo cuanto pudiera suceder en el mismo.

Sin embargo, la tarifa de las agencias en derecho de la segunda instancia ($300.000.oo) se tasó en menos del mínimo previsto para estos casos. Por ende, no constituye una justa compensación por la tarea allí desarrollada, pues, insístase, el monto mínimo establecido en la normatividad aplicable al caso resultaría ser un salario mínimo mensual vigente, que para el año 2018 correspondía a $781.242.oo.

4. En esos términos, se modificará la tasación de las agencias en derecho de la segunda etapa de este juicio, estableciéndola en tres millones de pesos ($3.000.000.oo), cantidad ajustada a los límites fijados en el susodicho acuerdo y que atiende a la gestión de vigilancia de la parte convocada en la aludida ejecución; de suerte, pues, que la liquidación de costas será aprobada en esa cuantía.

Por lo expuesto, se

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 5 de marzo de 2010, Exp. 2000-23975-01, en el que se reiteran los proveídos de 25 de agosto de 1998, exp. 4724; 27 de septiembre de 1999, Exp. 5180; 24 de junio de 2004, Exp. 7843, y 5 de abril de 2006, Exp. 1996-05893, entre otros.

RESUELVE

Primero.- MODIFICAR el auto opugnado, en el sentido de aprobar la liquidación de costas del asunto de la referencia en cuantía de **$3.000.000.oo**, correspondiente a las agencias en derecho impuestas dentro del trámite de la segunda instancia.

Segundo.- Oportunamente, **devuélvase** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

PROCESO:	**2018 - 377**
DEMANDANTE:	**EDIFICIO LINA MARÍA**
DEMANDADOS:	**LEOPOLDO FORERO POMBO Y MARÍA TERESA GURAÍN.**
ASUNTO:	**RECUSACIÓN**

Se resuelve la recusación formulada la parte demandante en contra del Juez 1° Civil del Circuito de Bogotá D.C, Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano.

ANTECEDENTES

El Edifico Lina María, a través de apoderado, promovió demanda verbal en contra de Leopoldo Forero Pombo y María Teresa Guarín.

El 26 de febrero del 2020, la parte demandante recusó al juez de la causa ante la “evidente parcialidad con que usted ha actuado en este proceso”, pero el 3 de marzo el juez precisó que el memorial debía estar suscrito por el apoderado judicial de la copropiedad. En cumplimiento de dicha providencia, el 12 de marzo el representante judicial presentó la recusación y como sustento de ello invocó la causal que del numeral 12 del artículo 141 del C. G. del P.

El 11 de junio de 2020 el juez no aceptó las reclamaciones esgrimidas, argumentando que no se especificó la causal de recusación; además, porque las afirmaciones del abogado eran “apreciaciones subjetivas”.

CONSIDERACIONES

De manera preliminar adviértase que, contrario a lo afirmado por el juez de circuito, la parte demandante sí invocó una de las causales de recusación que contempla la ley, la del numeral 12 el artículo mencionado. De haber sido, como lo adujo el funcionario, que la recusación adolecía de causal debía haberla rechazado, no autorizado su trámite ante el Tribunal.

Ahora bien, recuérdese que la recusación es un acto exclusivo de quienes fungen como partes dentro de un proceso, que se formula directamente en contra del juez que tenga el conocimiento de la causa propuesta, el que,

supuestamente, está incurso en alguna de las causales establecidas, de forma taxativa, por el legislador. Lo anterior, con la imperiosa necesidad de mantener el equilibrio y objetividad en la actividad judicial desarrollada y eliminar cualquier asomo de parcialidad en su desarrollo.

El numeral 12 del artículo 141 del C.G.P. que la causal consiste en “haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”; sin embargo, revisado el escrito del abogado de la parte actora, este remite al presentado por la representante legal de la copropiedad demandante, quien afirma que el juez de la causa fue parcial toda vez que después de las audiencias que celebró “los demandados se quedaron hablando con el juez y éste dándoles consejos y, entre otras cosas, manifestaba que lo más probable es que negara la demanda”.

No obstante, debe decirse que adicional a la manifestación de la administradora de la copropiedad demandante no hay ningún elemento que permita acreditar tal circunstancia o que evidencien la configuración de la causal invocada y que demuestren que el juez de la causa actuó parcialmente, por lo que sin lugar a disquisiciones adicionales, declarará infundada la recusación.

RESUELVE

Declarar infundada la recusación formulada por la parte demandante, en contra del Juez 1° Civil del Circuito de Bogotá D.C, Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano.

Devuélvase el expediente al Despacho de origen.

NOTIFIQUESE



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso	Recurso extraordinario de revisión
Demandante	Grupo Comercial Jordania S. A. S. En reorganización
Demandado	Banco de Occidente S. A.
Radicado	11 001 22 03 000 **2019 1111 00**
Decisión	Declara infundado recurso

Proyecto discutido en Salas del 19, 26 de noviembre, 03 y 10 de diciembre de 2020

Se procede a resolver mediante sentencia escritural anticipada el recurso extraordinario de revisión fundamentado en la causal contemplada en el numeral 8) del artículo 355 del Código General del Proceso, promovido por Grupo Comercial Jordania S. A. S. en reorganización, contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado por Banco de Occidente S. A. contra Grupo Comercial Jordania S. A. en reorganización, radicado 11 001 31 03 008 2018 00387 00.

I. EL RECURSO DE REVISIÓN

1. Peticiones

Grupo Comercial Jordania S. A. S. en reorganización, formuló recurso extraordinario de revisión contra Banco de Occidente S. A., a fin de que se deje sin efectos la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, por el Juzgado 8 Civil

del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado radicado 11 001 31 03 008 2018 00387 00.

2. Fundamentos fácticos del recurso

2.1. Mediante memorial del 31 de mayo de 2018, la demandante presentó solicitud de admisión a proceso de reorganización empresarial.

El 24 de julio siguiente, el Banco de Occidente S. A. radicó proceso declarativo No. 2018-00387, con pretensiones de declarar terminado el contrato de leasing financiero inmobiliario No. 180-113669.

La demanda fue admitida mediante auto del 13 de agosto de esa anualidad, y el 24 de septiembre siguiente, se notificó el representante legal de la actora.

Se formularon las excepciones denominadas: *"incapacidad inminente de pago y buena fe",* sustentadas en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, en el entendido de que estaba imposibilitada para realizar pagos de cánones de arrendamiento.

Mediante auto del 8 de noviembre de 2018, ese Juzgado requirió constancia de pagos de cánones adeudados como requisito para que la pasiva fuera escuchada.

2.2. La sociedad fue admitida por la Superintendencia de Sociedades a proceso de reorganización empresarial mediante auto del 18 de diciembre de 2018, en los términos de la citada Ley, situación que fue puesta en conocimiento del Despacho el 29 de enero siguiente (Cfr. Hecho 10, fls. 211).

No obstante, el 5 de febrero de 2019, se dio continuidad al trámite, se decretó la terminación del contrato, y se ordenó la restitución del inmueble.

El Juez se abstuvo de practicar pruebas, reclamó el pago de los cánones de arrendamiento vencidos, sin tener en cuenta que se tenía prohibido cumplir con ese acto, situación que vulneró el derecho de la demandada a ser escuchada.

Tampoco se convocó a audiencia, se vulneró el derecho de defensa y contradicción de la demandante en revisión.

2.4. De lo dicho surge que la sentencia configuró las causales de nulidad consagradas en los numerales 3) y 5) del artículo 133 del Código General del Proceso, a pesar de que se informó la apertura del trámite concursal, se ignoró lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1116 de 2006, en relación con los procesos de restitución, cuando es el Juez del concurso a quien corresponde determinar la operacionalidad de un activo en disputa.

En ese trámite procedía suspender el proceso de conformidad con el artículo 161 *ibidem,* por existir un pleito pendiente entre las partes que debía ser resuelto en audiencia de resolución de objeciones.

Se presentó solicitud en ese sentido antes de que se profiriera sentencia, y *"fue reiterada mediante recurso de reposición presentado contra esta"*.

La Entidad Financiera siguió recibiendo el pago de los cánones causados con posterioridad a la fecha de la apertura del trámite concursal, conforme al artículo 71 del Estatuto de Insolvencia, en relación con los gastos de administración.

2.5. En ese proceso se puso en conocimiento que el inmueble objeto de restitución a pesar de estar destinado a uso habitacional, fue denunciado ante la Superintendencia de Sociedades como operacional, sin que eso fuera tenido en cuenta en la motivación del fallo.

Ese hecho debía ser atendido por el operador de insolvencia dentro de la etapa correspondiente a la resolución de objeciones contra el inventario, y no en sede judicial que debía ser suspendida conforme lo dispone el artículo 22 del Estatuto de Insolvencia.

2.6. En la contestación de la demanda se informó de la apertura del proceso de reorganización, era obligatorio determinar si era procedente

continuar el trámite, debió practicar pruebas de oficio y requerir a la Superintendencia de Sociedades.

Teniendo en cuenta que el contrato de leasing es un contrato atípico, era necesario concretar si el demandado debía ser escuchado, aun cuando se encontrara en cesación de pagos.

2.7. El contrato de arrendamiento financiero otorgó el inmueble para uso habitacional, lo habitan accionistas de la empresa y sus hijos menores, quienes tienen en tenencia el inmueble desde hace 20 años, pero la necesidad de generar recursos, originaron que allí se celebrara ese negocio, y su producto fue destinado a la operación de la empresa.

3. Réplica al recurso.

Banco de Occidente S. A. se opuso a las pretensiones. Formuló las excepciones que denominó:

i) "Moratoria incumplimiento del deudor en el proceso que ventiló en el Juzgado 8 Civil del Circuito". Las pretensiones del proceso adelantado ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, se fundamentaron en el incumplimiento del contrato de leasing inmobiliario No. 180-113369, y se originaron por cánones anteriores, y causados desde marzo de 2018, y no para finales de mayo del mismo año (fecha de solicitud de admisión, como se pretende hacer ver.

ii) "Destinación y uso de los bienes vinculados al leasing". Claramente está estipulado en la E. P. No. 22.367 del 30 de noviembre de 2016, de la Notaría 29 de Bogotá, que se trató de una transferencia de dominio a título de leasing habitacional de vivienda familiar.

El inmueble no es necesario para el desarrollo del objeto social de la demandante que es la producción, comercialización y procesamiento de productos agropecuarios y alimentos en general, explotación agrícola, avícola y ganadera.

La demandada tiene su domicilio en Villavicencio Meta, tiene dos establecimientos de comercio inscritos, uno en la misma ciudad y otro en vía Acacías, lo que corrobora que ese inmueble no es necesario para el desarrollo de su objeto social.

iii) "Ineptitud en la formulación del recurso extraordinario". Se omitió el requisito señalado en el numeral 5 del artículo 82 del Código General del Proceso. Los hechos no se numeraron y clasificación.

iv) "Ausencia de vicios en la sentencia proferida". Se profirió sentencia en armonía con las normas procesales. La ley es categórica en informar que si la demanda de restitución se basa en mora en el pago la parte demandada no podrá ser escuchada.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren dentro de la presente actuación los presupuestos procesales, amén de que no se advierte irregularidad constitutiva de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado.

La competencia funcional de esta Sala de Decisión para proveer sobre el presente asunto está determinada en el numeral 4 del artículo 31 del Código General del Proceso, que consagra: *"[l]os tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil: (…) 4. Del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces civiles de circuito, civiles municipales y de pequeñas causas, y por las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales"*.

2. De conformidad con el artículo 354 ibidem, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas.

En lo que tiene que ver con sus características generales, el doctrinante Hernando Morales Molina, en su obra denominada Curso de Derecho Procesal Civil, citando a Manresa, dice: "(…) *el recurso de revisión es un remedio extraordinario*

que concede la ley para que se rescinda y deje sin efecto una sentencia en firme, ganada injustamente, a fin de que se vuelva a abrir el juicio y se falle con arreglo a la justicia"[1].

Por su parte, Humberto Murcia Ballen en su obra Recurso de Revisión Civil, con respecto a las características generales de ese medio impugnaticio, ilustró: *"la revisión civil es un recurso eminentemente extraordinario. Y como tal la ley lo reserva para impugnar con él ciertas y determinadas providencias, las sentencias que hayan pasado en autoridad de cosa juzgada; solo se autoriza por los motivos o causales que en forma taxativa ha establecido el legislador al efecto; y, además los poderes del juez llamado a decidirlo están igualmente limitados"*[2].

En lo que atañe a las características del recurso de revisión, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de antaño explicó:

> "*[E]l recurso de revisión es un remedio extraordinario que la ley concede para atacar precisamente la fuerza de cosa juzgada material atribuible a una determinada sentencia, o por mejor decirlo al pronunciamiento jurisdiccional en ella contenido, cuando éste último de manera notoria hiere la garantía de la justicia o es producto de un proceso seguido con manifiesto quebranto del derecho de defensa" (Sentencia 3479 10 de junio de 1.993).*
>
> *De las anteriores características se desprende que el recurso de revisión no constituye una instancia adicional del proceso, cerrado como está en virtud de la sentencia cuyo ataque se impetra por vía de revisión. Y de allí se deduce con claridad, que él no está instituido para replantear el debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo más explícito u ordenado. Se ha dicho, en efecto, que "no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en "numerus clausus" y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad* (…)"[3].

Recurriendo de nuevo a la doctrina y en aras de concluir las generalidades del recurso bajo estudio, se recuerda que su ejercicio implica: "*a) que se trate de una sentencia ejecutoriada; b) que se interponga dentro del término legal; c) que se funde en causal prevista por la ley; d) que la demanda se dirija contra quienes deben intervenir en el*

---

[1] MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Undécima edición. Bogotá: Editorial ABC-. 1991. Pág. 683.
[2] MURCIA BALLEN, Humberto. Recurso de Revisión Civil. Bogotá: Librería Editorial El foro de la Justicia. 1981. Pág. 124.
[3] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. Magistrado Ponente; Jorge Santos Ballesteros. Sentencia del 30 de septiembre de 1999. Referencia: Expediente N° 6464.

recurso; e) que se promueva ante la autoridad competente; f) que la demanda cumpla los requisitos legales"[4].

Por lo anterior, el recurso de revisión "*es formalista, restringido y dirigido exclusivamente a verificar la existencia o inexistencia de las causales que lo estructuran y están taxativamente señaladas en la ley*"[5].

3. El artículo 355 del Código General del Proceso consagra las denominadas causales de revisión dentro de las cuales está prevista la del numeral 8) que dispone*: "[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso".*

Como puede verse, esta causal está compuesta por dos requisitos: *i)* que la nulidad alegada se haya originado en la sentencia; y *ii)* que ésta no sea susceptible de ningún recurso.

De igual modo, es evidente que es idéntica a la consagrada en el numeral 8 del derogado artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, sobre la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, precisó**:** *"[n]o se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarse saneada (…), sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad"*[6].

4. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el recurso de revisión se adelantó en contra de la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por Banco de Occidente S. A., contra Grupo Comercial Jordania S. A. S., radicado 11 001 31 03 008 2018 00387 00.

En esa providencia se acogieron las pretensiones de la demanda, se declaró

---

[4] MORALES MOLINA, Hernando. Ob. Cit. Pág. 686.
[5] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. Magistrado Ponente: Nicolas Bechara Simancas. Sentencia del veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997). Referencia: Expediente No. 5407.
[6] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. Sentencia del 18 de julio de 1974. G.J. TCXLVIII, p. 185.

la terminación del contrato de leasing financiero No. 180-113669 celebrado el 27 de julio de 2016, entre el Banco de Occidente S. A. en calidad de arrendador, y Grupo Comercial Jordania S. A. S., en calidad de locatario, sobre los inmuebles ubicados en la calle 22b No. 63-24 INT. 5 del Edificio Parque Refugio de Salitre de Bogotá D. C., apartamento 302, garaje 153 y depósito 48, de folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50C-1387750, 50C-1387948 y 50C-1388005.

En consecuencia, se ordenó a la parte demandada la restitución de esos bienes dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del fallo, se comisionó al Juez Civil Municipal de Bogotá en el evento de no acatarse esa orden, y se condenó en costas a los demandados.

5. La parte recurrente alega la configuración de la causal de revisión consagrada en el numeral 8) del artículo 356 del Código General del Proceso esto es "*[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso".*

Se denunció que se estructuraron en esa providencia las nulidades procesales dispuestas en los numerales 3) y 5) del artículo 133 *ibidem*, a recordar: *"3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida",* y *"5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria".*

5.1. Frente al supuesto de nulidad del numeral 3) del artículo 133 del Código General, la doctrina explicó: *"cuando el debate procesal prosigue su trámite en presencia de cualquiera de las causales de interrupción o suspensión del proceso previstas en los artículos 159 y 161 del Código General del Proceso, si estos se reanudan antes de la oportunidad debida, ello constituye nulidad, pues deja suspendida la competencia mientras dure el motivo que lo produce"*[7].

5.1.1. La parte demandante en revisión fundamentó sus alegaciones de suspensión del proceso de restitución en el numeral 1) del artículo 161 del

[7] CANOSA TORRADO, Fernando. Las Nulidades en el Código General del Proceso. Séptima Edición. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. 2017. Pág. 253.

Código General del Proceso, el cual prevé que "*[e]l juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los siguientes casos: 1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención".*

Refirió que solicitó la suspensión del proceso previo a que se emitiera sentencia de fondo por *"pleito pendiente"* que debía ser atendido dentro del proceso de reorganización donde el juez del concurso determinaría *"la operacionalidad del activo objeto de la litis, dentro de la etapa correspondiente a la resolución de objeciones".*

Si bien con ese argumento se pretende acreditar que en el proceso de restitución base de este recurso procedía su suspensión por prejudicialidad y que debido a ello se configuró dicha causal de nulidad, puntualmente porque era en el trámite de insolvencia era donde procedía resolver acerca del carácter operacional del inmueble objeto de restitución, se olvidó que es precisamente la reglamentación especial la que se convierte en óbice insalvable.

Recuérdese, el artículo 7 de la Ley 1116 de 2006, pregona: "*NO PREJUDICIALIDAD. El inicio, impulsión y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza.* ***De la misma manera, la decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad***" (negrilla fuera de texto).

En ese orden, si por disposición especial la decisión del proceso de insolvencia no constituye prejudicialidad, la alegación relativa a que debió suspenderse el trámite de restitución mientras se resolvía el carácter operacional del bien a restituir a todas luces se torna infundada.

5.1.2. De otro lado, la configuración de esa causal de nulidad también se sustentó en que la iniciación del proceso de reorganización daba lugar a la suspensión del trámite de restitución de bienes muebles e inmuebles operacionales.

Sobre ese tema, se impone recordar que el artículo 22 de la Ley 1116 de 2006, preceptúa: *"[a] partir de la apertura del proceso de reorganización no podrán iniciarse o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing"*.

De esa regla emerge con claridad que a partir de la apertura del proceso de reorganización no pueden iniciarse o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles "*operacionales"*, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de "*arrendamiento o de leasing"*.

No obstante, a pesar de que esa regla dice que "*no pueden iniciarse o continuarse procesos"* de ese tipo, como puede verse no consagra la suspensión como efecto o consecuencia jurídica de la apertura del proceso de reorganización sobre los litigios que se encuentran en trámite sino su terminación. Sobre el tema la doctrina versada ha dicho:

> "*A partir de la apertura del proceso de reorganización no podrán iniciarse o continuarse procesos de restitución contra el deudor sobre bienes operacionales recibidos a título de arrendamiento o de leasing. Eso implica una pérdida de la competencia de los jueces ordinarios y una terminación anormal o atípica para los procesos de restitución en curso al momento de la apertura del proceso de reorganización. Es necesario resaltar que en este caso la norma no indicó que los procesos se suspendían, sino que los mismos no continuarían, lo que implica su terminación*[8].

Si se mira la finalidad del proceso de reorganización también resulta entendible que el efecto de la apertura es la terminación de procesos de restitución sobre bienes operacionales, y no la suspensión como parece entenderlo la parte recurrente.

De conformidad con el artículo 1) de la Ley 1116 de 2006, el régimen judicial de insolvencia tiene por objeto entre otros, la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica.

---

[8] Rodríguez Espitia, Juan José. Nuevo Régimen de Insolvencia. Segunda Edición. Bogotá: Universidad Externado. 2019. Pág. 374.

Ese mismo artículo, en el inciso segundo pregona que el proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

Quiere decir entonces que, si la finalidad del proceso de reorganización es preservar empresas viables y normalizar sus relaciones mediante la *"restructuración operacional",* es evidente que la terminación de los procesos de restitución de bienes muebles o inmuebles *"operacionales"* aboga por la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica.

Por eso también resulta entendible que el inciso segundo del artículo 22 de la Ley de Insolvencia, permita la iniciación de procesos ejecutivos y restitución de ese tipo de bienes por el incumplimiento del pago de cánones causados con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, es que, si la explotación de la empresa definitivamente no produce siquiera el cubrimiento del pago de la renta de bienes operaciones, esa reglamentación permite el correspondiente cobro y restitución.

Memórese, esa regla dice: "*[e]l incumplimiento en el pago de los cánones causados con posterioridad al inicio del proceso podrá dar lugar a la terminación de los contratos y facultará al acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución, procesos estos en los cuales no puede oponerse como excepción el hecho de estar tramitándose el proceso de reorganización".*

En ese orden, el debate en punto a si el inmueble objeto de restitución era o no operacional se torna inane de cara a la causal de nulidad y por ende de revisión invocada. Así se hubiese tratado de un bien de ese carácter, la apertura del proceso de reorganización no traía como efectos la suspensión procesal, por eso la causal de nulidad consagrada en numeral 3) del artículo 133 del Código General del Proceso, no puede encontrarse estructurada.

5.2. Otra nulidad que la parte recurrente consideró configurada es la establecida en el numeral 5) del artículo 133 del Código General del Proceso,

esto es, *"[c]uando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria"*.

5.2.1. Se rebate que se presentó contestación a la demanda, se informó al operador judicial lo correspondiente a la apertura del proceso de reorganización empresarial, y por eso este, se encontraba en la obligación de practicar las pruebas conducentes para determinar si era procedente continuar con el trámite, debió practicar pruebas de oficio, y requerir a la Superintendencia de Sociedades.

De igual modo, se denuncia que en el Juzgado de conocimiento se limitaron a reclamar el pago de cánones de arrendamiento vencidos, sin tener en cuenta que la empresa tenía prohibido cumplir con ese acto, lo que vulneró el derecho a ser escuchada aun cuando se encontraran en cesación de pagos.

Frente a esas quejas lo primero que tiene que ponerse de presente es que, a pesar de que en este juicio se denuncia que se omitió la oportunidad para *"solicitar"* pruebas, llama la atención que en la contestación de la demanda no se pidió el decreto y práctica de un solo medio de convicción (Cfr. fls. 41 cuaderno de restitución).

De manera que, si la parte reclamante no solicitó pruebas, no resulta coherente pregonar que se omitió la oportunidad para decretarlas y practicarlas.

Se olvidó entonces la regla dispuesta en el artículo 167 del Código General del Proceso, que impone: "*incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*.

De igual modo, pese a que la actora en revisión se queja de que se violó su derecho de defensa porque no fue escuchada, no puede soslayarse que previo a la sentencia demandada se emitió auto advirtiendo esa circunstancia sin que se hubiese formulado ningún reproche de parte de la interesada.

Nótese, mediante auto del 23 de enero de 2019, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, dispuso: *"[t]éngase en cuenta para los efectos legales que una vez notificada del auto admisorio de la demanda personalmente conforme a lo establecido en el*

artículo 291 del Código General del Proceso (…), la accionada, contesto en tiempo la demanda, sin embargo, a aquella no se le dará el trámite legal correspondiente puesto que no se acreditó el pago de los cánones de arrendamiento adeudados, causal invocada por los demandantes para la restitución" (fls. 50 restitución).

5.2.2. Se censuró también que el Juez de conocimiento se encontraba en la obligación de practicar pruebas para determinar si era procedente continuar con el trámite una vez enterado del aviso de apertura de reorganización.

Como se dijo, al tamiz del artículo 7 de la Ley 1116 de 2006, la decisión del proceso de insolvencia no constituye prejudicialidad, por lo tanto, también resulta infundado sostener que se debía trabar el curso normal del proceso mientras se decretaban pruebas de oficio para corroborar si los inmuebles a restituir eran operacionales.

Es que, en verdad, esa fue una alegación de la parte demandada en restitución en la contestación de la demanda, era a esta a quien correspondía demostrar el supuesto de hecho -bien operacional- para obtener el efecto jurídico que ahora reclama -terminación del proceso- o suspensión como pareció entenderlo.

No obstante, a la contestación de la demanda no se allegó una sola prueba en ese sentido, ni si quiera que fundara por lo menos una duda razonable que le impusiera al Juez aclararla mediante el decreto de pruebas de oficio. Recuérdese, el artículo 170 del Código General del Proceso, dispone: "*[e]l juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia".*

De igual modo, el juez tampoco está obligado por disposición legal a decretar pruebas de oficio para corroborar si un bien objeto de restitución tiene la calidad de operacional. Recuérdese, sobre ese deber la Corte Suprema de Justicia, ha dicho:

> "*[E]l juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio cuando la ley se lo impone, como, por ejemplo, tratándose de la prueba genética en los procesos de filiación o impugnación de la paternidad o maternidad; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto al pago de frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De igual modo debe practicarlas para*

impedir fallos inhibitorios y evitar nulidades.

También, como lo ha señalado la jurisprudencia, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda sobreviene un hecho que altera o extingue la pretensión inicial y ese hecho es demostrado con una prueba idónea que no ha sido legal y oportunamente incorporada al proceso. (CSJ SC, 12 Sep 1994. Rad. 4293)

Pero, además, debe hacer uso de tal prerrogativa cuando existen elementos de juicio suficientes que indican con gran probabilidad la existencia de un hecho que reviste especial trascendencia para la decisión, de suerte que solo falte completar las pruebas que lo insinúan"[9].

Así las cosas, atendiendo que la prueba que reclama la parte recurrente no corresponde a un medio de convicción que por disposición legal correspondía decretar, tampoco puede entenderse que se estructuró la causal de nulidad consagrada en el numeral 5) del artículo 133 del Código General del Proceso.

Con todo se tiene que decir, la causal de revisión invocada no se abre paso por falta de aplicación de una regla de derecho o aplicarla indebidamente. Así lo enseñó la Corte Suprema de Justicia: *"traer como motivo de nulidad originada en la sentencia que esta contiene, apreciaciones erradas, por valorar mal las pruebas o interpretar erróneamente los contratos, o no aplicar una regla de derecho o aplicarla indebidamente o interpretarla torcidamente, no constituyen causas que autoricen la revisión"*[10].

6. Corolario de lo expuesto es que las pretensiones del recurso de revisión son infundadas, situación que releva a la Sala de resolver las excepciones formuladas.

7. Se condenará en costas a la parte demandante en revisión en favor de la demandada, a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de revisión y en este mismo proveído se fijarán las agencias en derecho (art. 365 y 366 del C. G. P.)

III. DECISIÓN

[9] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrado Ponente: ARIEL SALAZAR RAMÍREZ. SC11337-2015. Radicación nº 11001-31-03-041-2004-00059-01. Sentencia del veintisiete (27) de agosto de dos mil quince (2015).
[10] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 11 de marzo de 1991. Citada por MURCIA BALLEN, Humberto. Recurso de Revisión Civil. Tercera Edición. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá: 2006. Pág. 271.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE

Primero. **DECLARAR** infundado el recurso extraordinario de revisión fundamentado en la causal del numeral 8) del artículo 355 del Código General del Proceso*,* promovido por Grupo Comercial Jordania S. A. S. En reorganización, contra la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por Banco de Occidente S. A. contra Grupo Comercial Jordania S. A. en reorganización, radicado 11 001 31 03 008 2018 00387 00.

Segundo. **CONDENAR** en costas a la parte demandante en revisión y en favor del demandado. Como agencias en derecho el Magistrado sustanciador fija la suma de $1.000.000. Liquídense por secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE;

Los Magistrados,



IVAN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Documento con firma electrónica del Ponente

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA

JUEZ CIRCUITO

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

95f9b44c4d68918287b65d77f5d151c43017e902e0e282a94276710b2b07c36a

Documento generado en 16/12/2020 09:36:47 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

RE: PROYECTO CIVIL SALA DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020

Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 14/10/2020 20:06

Para: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Respetado Magistrado:
Iván Dario Zuluaga Cárdona

Atendiendo a las directrices de teletrabajo autorizadas y conforme a lo lineamientos previstos en la ley 527 de 1999, por medio del presente correo electrónico manifiesto como Magistrada **la aprobación al proyecto sometido a estudio**

Proceso Recurso extraordinario de revisión
Demandante Grupo Comercial Jordania S. A. S. En reorganización
Demandado Banco de Occidente S. A.
Radicado 11 001 22 03 000 2019 1111 00
Decisión Declara infundado recurso

Esta aprobación suple la firma, y hace parte integral de la decisión.

Cordialmente,

LIANA AÍDA LIZARAZO VACA
Magistrada

De: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 12 de octubre de 2020 10:57
Para: Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PROYECTO CIVIL SALA DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020

Apreciados compañeros de Sala.

Adjunto les remito el proyecto de sentencia civil anunciado en el aviso de Sala anterior. El enlace del expediente virtual se encuentra en el mismo texto del proyecto en su parte inicial.

Se remite sin firma escaneada, atendiendo a que la información remitida desde el correo institucional personal se presume auténtica, conforme los artículos 2 y 11 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Atentamente;

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado Sala Civil Tribunal Superior de Distrito de Bogotá D.C.

Sobre la presunción de autenticidad de la información remitida por correo electrónico, ver las siguientes normas:

- DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020. ARTÍCULO 11
- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 103
- LEY 527 DE 1999. ARTÍCULOS 1, 5 y 7
- ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020. ARTÍCULOS 1 Y 2. Suspensión de términos y Trabajo en casa.
- ACUERDO No. PCSJA17-10715 Julio 25 de 2017. ARTÍCULO DIECIOCHO. USO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

RE: Proyectos aviso de sala del 19 de noviembre de 2020

Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/12/2020 17:05

Para: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona, cordial saludo.

Conforme a los acuerdos vigentes del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas sobre trabajo en línea, a raíz de las medidas contra el COVID 19, por medio de este mensaje de datos **APRUEBO** el(los) proyecto(s) de acción(es) remitido(s), según el correo electrónico que respondo aquí, así:

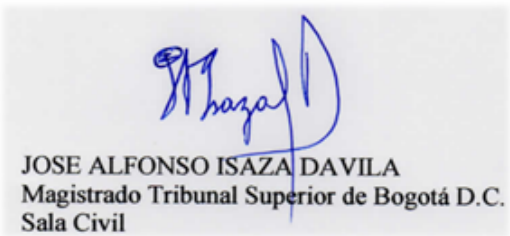
ASUNTO(S) CIVILES:

Radicado: 110013103 010 2016 00347 03
Proceso: Ejecutivo
Demandante: Inversiones Mensuli S.A.S.
Demandado: Luis Eduardo Ordoñez Cardozo
Observaciones: Confirma

Radicado 11 001 22 03 000 2019 1111
Recurso extraordinario de revisión
Demandante Grupo Comercial Jordania S. A. S. En reorganización
Demandado Banco de Occidente S. A.
Observaciones: Declara infundado

Respecto del proyecto Radicado: 110013103 029 2018 00204 01, ejecutivo de Basf Química Colombia S.A. contra Luis Hernando Vásquez Higuera y otro, estoy en revisión, conforme a lo comentado, para posible salvedad de voto, que en caso de ser necesario, remitiré en correo separado.

Este mensaje desde el correo institucional debe tenerse como parte de la decisión, habida cuenta las circunstancias de dicho trabajo en línea. Anexo firma copiada o digitalizada del suscrito servidor judicial, según los arts. 11 del Decreto 491 de 2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y demás normas pertinentes.



De: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de noviembre de 2020 6:38 p. m.
Para: Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Proyectos aviso de sala del 19 de noviembre de 2020

Apreciados compañeros de Sala.

Adjunto les remito los proyectos de la Sala del día de hoy.

Los enlaces de acceso a los expedientes están en el respectivo proyecto, salvo el proceso civil 029-2018-00204-02 que apenas se está escaneando. Una vez se termine se remitirá el link.

Se remite sin firma escaneada, atendiendo a que la información remitida desde el correo institucional personal se presume auténtica, conforme los artículos 2 y 11 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Atentamente;

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado Sala Civil Tribunal Superior de Distrito de Bogotá D.C.

Sobre la presunción de autenticidad de la información remitida por correo electrónico, ver las siguientes normas:
- DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020. ARTÍCULO 11
- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 103
- LEY 527 DE 1999. ARTÍCULOS 1, 5 y 7
- ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020. ARTÍCULOS 1 Y 2. Suspensión de términos y Trabajo en casa.
- ACUERDO No. PCSJA17-10715 Julio 25 de 2017. ARTÍCULO DIECIOCHO. USO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

República de Colombia

Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación.	**11001-2203-000-2020-01962-00**
Recurso.	Revisión
Demandante.	Iván Darío Blanco León.
Demandado.	Jesús David Simanca Mejía.

1. Iván Darío Blanco León, por conducto de apoderado judicial, manifestó interponer recurso extraordinario de revisión frente a "**la sentencia** proferida por el Juzgado 29 Civil Municipal de Bogotá" (sic), en la ejecución singular adelantada en su contra por Jesús David Simanca Mejía.

Fundó dicha impugnación extraordinaria en la causal 2ª del artículo 355 del C.G.P., invocando que el título valor base de la ejecución era falso, según lo dictaminó la Fiscalía General de La Nación. Y en la situación fáctica expuesta respecto a la ejecución se limitó a exponer que su contendor había demandado el cobro coercitivo de una letra de cambio por $40.000.000.oo, librándose el mandamiento correspondiente, el cual recurrió en reposición que resulto extemporánea y, agregó que "surtido el trámite, dentro del proceso ejecutivo, el juzgado, en sentencia del siete (7) de febrero de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución en contra del señor Iván Darío Blanco León, en los términos inicialmente

decretados y condenó en costas por la suma de $7.000.000.oo", **omitiendo precisar que en ese juicio no hubo oposición.**

2. Empero, examinado el expediente del juicio compulsivo (Rad.2015 01281), se advierte que el ejecutado aunque formuló excepciones, lo hizo de forma extemporánea, como da cuenta el auto de 10 de noviembre de 2016 -fl. 20 cdno.1-, por lo que el juez de esa causa, adoptó la referida determinación con sustento en las prescripciones del artículo 440 del C.G.P., el cual prevé que "si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de **auto** que no admite recurso el remate (…) o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo (…). (Negrilla fuera del texto original).

Y de acuerdo con lo estatuido en el artículo 278 *ibídem*, únicamente son **sentencias** aquellas decisiones judiciales "*que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión*", en cambio, "*Son autos todas las demás providencias".*

Además, conforme al numeral 5° del artículo 443 *ejusdem*, en los juicios ejecutivos, son sentencias las que resuelven las excepciones de mérito y hace tránsito a cosa juzgada.

Siendo ello así, aunque la providencia censurada haya sido proferida con la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley", esa formalidad, *per se,* no le confiere el carácter de sentencia, pues, insístese, el propio legislador la catalogó como un auto (Art.440 C.G.P.).

En punto de esa temática, la Corte Suprema de Justicia asentó:

«(…) No se trata, pues, de que a la sentencia que se profiera para ordenar llevar adelante la ejecución o decretar la venta en pública subasta del bien hipotecado, cuando el ejecutado no haya propuesto excepciones, produzca efectos de cosa juzgada, los cuales,

como se dijo, están reservados en el proceso ejecutivo para la sentencia que resuelva excepciones de mérito en los términos referidos en el artículo 512 del C. de P.C"[1].

3. De suerte pues, que el proveído en cuestión no es susceptible del recurso extraordinario de revisión, dado que, a voces del artículo 354 del C.G.P. éste *"procede contra las* ***sentencias ejecutoriadas",*** siendo el propósito, de ese recurso, según la Corte Suprema de Justicia, el de "… *aniquilar los efectos de la cosa juzgada material que se predique de una sentencia (…)»*[2], (subraya fuera del texto original).

Es así como la precitada Corporación sostuvo: ***"****(…) Justamente, atendiendo a esa característica propia, es que según lo ha dicho en forma reiterada la Corte,* ***no cabe la interposición del recurso de revisión respecto de actos ajenos a la sentencia ni menos contra autos****, cuyo control efectivo, se sabe, debe verificarse dentro del proceso mediante otros trámites, según sea el caso, pero no por el recurso extraordinario,* ***reservado exclusivamente para impugnar decisiones con categoría de sentencia****."* (Auto de Corte Suprema de Justicia - nº 11001-02-03-000-2014-02273-00 de 14 de Octubre de 2014)[3]. (Subraya y negrilla fuera del texto original).

4. Así las cosas, aunque las decisiones judiciales no son revocables ni reformables por la autoridad judicial que las emite, al existir una decisión que altera el orden jurídico, como sucede en este caso, excepcionalmente, bajo la aplicación de la *teoría del antiprocesalismo*, es viable su invalidación, pues, "*los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez ni a las partes*". (CSJ, sentencia de junio 28 de 1979, citada en sentencia STC 1639 de 2018, entre otros pronunciamientos).

Consecuentemente, procede declarar sin valor ni efecto el auto de 3 de agosto de 2020 y, en su lugar, improcedente la impugnación extraordinaria aquí interpuesta.

5. En todo caso, cabe anotar, que el recurrente cuenta con mecanismos legales para ventilar en la ejecución la situación **sobreviniente** de "la supuesta falsedad" del título valor base de la misma, en tanto ese juicio no haya culminado.

---

[1] C.S.J., Cas Civ. 10 de Septiembre de 2001. Exp.No. 6771.
[2] Sent. Rev. de enero 13/2004, Exp. 0211-01
[3] AC 6213-2014. Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero: **DECLARAR IMPROCEDENTE** el recurso de revisión interpuesto por Iván Darío Blanco León frente al auto de 7 de febrero de 2018 -ordena seguir adelante la ejecución-, proferido por el Juzgado 29 Civil Municipal de Bogotá D.C., dentro del proceso ejecutivo singular que en su contra promovió Jesús David Simanca Mejía (Rad. 2015-01281).

Segundo: Por secretaría, devuélvasele el libelo y sus anexos a la recurrente, sin necesidad de desglose

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

N.E.S.V. Exp. 2020-01962-00

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

MAGISTRADO:

LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ

Bogotá D. C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte

Se decide la controversia suscitada entre los Juzgados Treinta y Tres y Treinta y Cuatro Civiles del Circuito de esta urbe.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. El Juez Treinta y Tres Civil del Circuito remitió el expediente del proceso declarativo adelantado por los señores Delia Susana Celemin Gómez, Delia Amparo, Ana Lucia, Nohora Alba, Carmen Elena, Gloria Susana, Edgar Felix, Miguel Hernando y Andrés Javier Gómez Silva contra Médicos Asociados S.A. y Servimed IPS S.A., al Juzgado Treinta y Cuatro de la misma categoría, fundada en que perdió competencia para continuar conociendo del asunto desde el primero de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la que feneció el año contado a partir del día siguiente a la radicación de la demanda, sin que se hubiere prorrogado ni emitido sentencia.

2. Al recibir el expediente, el despacho judicial ordenó la devolución del legajo al Juez Treinta y Tres Civil del Circuito de esta urbe esgrimiendo que se desconocieron los precedentes jurisprudenciales emanados de la H. Corte Constitucional, particularmente, el del

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve en el que se declaró inexequible las expresiones contenidas en el artículo 121 del CGP "[…] de peno derecho y […] el vencimiento de los términos deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales […]", lo que condujo a que suscitara conflicto negativo de competencia al no tenerse presente que "cuando esta Judicatura dio aplicación al artículo 121 del CGP por auto del 26 de agosto de 2019, aún no se había proferido la referida sentencia, y por tal motivo, no le eran aplicables las consideraciones allí expuestas al caso concreto.

3. En aras de resolver la diferencia expuesta es preciso mencionar que, con el propósito de hacer efectivo el cometido de la celeridad y eficacia en los procesos, se introdujo en el ordenamiento procesal la hipótesis contaminante de la gestión que tiene como fuente el simple transcurso del tiempo, tema que fue regulado en el artículo 121 del Código General del Proceso, según el cual "salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada" plazo que al culminar sin que se hubiere dictado la providencia correspondiente, ocasionaría la pérdida automática de competencia.

Sobre la aplicación de las consecuencias consagradas en la codificación procesal vigente desde el 1 de enero de 2016, la Corte Constitucional afirmó que para la operancia de la norma es "necesario armonizar el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia, contribuir en hacer realidad la aspiración

ciudadana de una justicia recta, pronta y oportuna, y hacer efectivo el deber de lealtad procesal que le asiste a las partes en sus actuaciones ante las autoridades judiciales”[1].

4. Así mismo explicó que la incursión en un “incumplimiento meramente objetivo” no implica “*a priori*, la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática”[2], de donde fluye que a pesar del agotamiento de tal lapso para fallar no se genera el factor que inhabilita la actuación del Juez, en garantía, del principio de lealtad procesal y el plazo razonable, por lo que para llegar a esa conclusión de renegar el poder de decir el derecho, el juzgador debe hacer un estudio minucioso respecto del plazo razonable para proferir el fallo, el cumplimiento de los requisitos para que opere el tránsito de legislación en caso de que el litigio hubiere iniciado antes de la vigencia de la norma procesal en cita, la utilización de la prórroga prevista por el mismo artículo 121 del Código General del Proceso, el uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial que incida en su duración, la justificación del tiempo tomado para resolver el debate, e incluso la posibilidad de que hubiere cambiado el titular el despacho judicial.

5. En el caso puesto a consideración de esta Corporación y teniendo en con base en las especiales circunstancias que lo cobijan, tales como que la controversia se propuso el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis; el tiempo que tardó la integración

[1] Corte Constitucional, Sentencia T 341 de 2018
[2] Ibídem

del litisconsorcio; los controles de legalidad efectuados; y, además, el transcurso del tiempo sin que las partes hubieren alegado causal de nulidad alguna, permiten concluir que no hay lugar a que bajo el amparo del artículo 121 del Código General del Proceso se abra paso al apartamiento excepcional del conocimiento por el juzgado que tiene asignado el proceso, pretextando la pérdida de competencia, pues aquella además de no operar de manera automática, en efecto, no se encuentra acreditada.

6. Así las cosas, a pesar de haberse superado, desde el punto de vista formal, el término previsto en el artículo 121 del CGP el primero de septiembre de dos mil diecisiete, era de rigor indagar los motivos por los que el fallo no se emitió dentro del referido plazo legal, investigación que habría dejado en claro que en ello tuvo fuerte influencia el tiempo que tardó el rito de notificación y el decreto oficioso de las medidas de saneamiento. Por demás, si se analiza que el proceso inició hace trece años; que los efectos de la nulidad de pleno derecho fueron declarados inexequibles; que nada garantiza que el juez que sigue en turno cumpla con el cometido de emitirla en un período menor y que las partes no alegaron la pérdida de competencia[3], menos sentido tiene el decaimiento de la gestión agotada.

7. En consecuencia, se dispondrá el envío del expediente al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de esta urbe, para que continúe con el trámite del asunto que motivó este conflicto.

Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

[3] Corte Constitucional, Sentencia C 443 del 25 de septiembre de 2019

RESUELVE

PRIMERO: Declarar que corresponde al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá continuar con el conocimiento del proceso declarativo adelantado por los señores Delia Susana Celemin Gómez, Delia Amparo, Ana Lucia, Nohora Alba, Carmen Elena, Gloria Susana, Edgar Felix, Miguel Hernando y Andrés Javier Gómez Silva contra Médicos Asociados S.A. y Servimed IPS S.A.

Remítase el expediente al despacho mencionado.

SEGUNDO: Comuníquese al Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de esta urbe la presente decisión.

Notifíquese,



LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ

Magistrado

Rad. 11001220300020200184800

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-2203-000-2020-01859-00

Asunto: Conflicto de competencia de la misma especialidad

Conforme a lo normado en el artículo 139 del C.G.P., se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 33 y 34 Civiles del Circuito de esta ciudad, para conocer del proceso promovido por Luz Marina Bonilla Ramírez contra la Constructora Timiza del Parque S.A.S en Liquidación.

ANTECEDENTES.

1. En proveído de 6 de septiembre de 2019[1], atendiendo la solicitud formulada el 26 de agosto de 2019[2] por la parte demandante, el Juez 33 Civil del Circuito declaró la pérdida de competencia al considerar consumado el término para proferir la sentencia en el memorado asunto (art.121 C.G.P.), por cuanto la demanda pese a que fue radicada el 11 de mayo de 2016 se admitió hasta el 15 de septiembre de 2016; por consiguiente, el computo del aludido plazo inició el 12 de mayo de 2016, según lo previsto el artículo 90 *ejusdem*, y culminó el 12 de mayo de 2017, sin que la instancia hubiera sido prorrogada, remitiendo, consecuencialmente, el expediente al Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá.

2. Su homólogo, en proveído de 15 de enero de 2020, determinó que no procedía avocar el conocimiento del asunto, luego de remembrar que la Corte Constitucional, el 25 de septiembre de 2019, declaró inexequible la expresión “de pleno

[1] Folios 267 y 268 del documento en Pdf denominado “01Cuaderno1”
[2] Folio 266 ibídem.

derecho" contemplada en el artículo 121 del C.G.P., siendo necesario que las partes alegaran la nulidad que trata dicha norma, circunstancia que no ocurría en el caso en particular, devolviendo, en consecuencia, las diligencias al despacho primigenio, autoridad esta última quien el 14 de septiembre de 2020, suscitó el conflicto negativo de competencia, aludiendo que el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, pasó por alto la solicitud radicada por el demandante el 26 de agosto de 2019.

CONSIDERACIONES

1. La colisión aquí suscitada involucra jueces de igual categoría de la jurisdicción ordinaria y de la misma especialidad (Juzgados 33 y 34 Civil del Circuito de Bogotá), pertenecientes al mismo Distrito (Bogotá), por lo que corresponde definirlo a esta Corporación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del C.G.P.

2. El artículo 121 del Código General del Proceso, recuérdes establece: *"salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada"*, por lo cual, *"vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso",* aclarando que "*excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más"*, y que *"**será nula (de pleno)[3] derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia**".*

2. Como es sabido, la norma trasuntada generó una serie de debates y posturas jurídicas, finalmente, zanjadas con la emisión de la Sentencia C-443 de 2019, dilucidándose, entre otros aspectos, concernientes a la referida norma, que "*debe entenderse que la pérdida de la competencia y la nulidad originada en este vicio debe ser alegada **antes de proferirse la sentencia**, esto es, cuando expiren los términos legales contemplados en el artículo 121 del CGP. Con ello se pone fin a la práctica*

[3] Expresión declarada Inexequible en sentencia C-443 de 2019

denunciada en este proceso por algunos intervinientes, en la que las partes permiten el vencimiento del plazo legal y guardan silencio sobre la pérdida automática de la competencia, para luego alegar la nulidad del fallo que es adverso a una de ellas". (Negrilla fuera del texto Original).

Más adelante precisó, por una parte, que "(…) la pérdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha pérdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia" y, por la otra, "que la nulidad es saneable en los términos del artículo 136 del C.G.P.".

Bajo esos argumentos, resolvió: *"**Primero.** Declarar la **INEXEQUIBILIDAD** de la expresión "de pleno derecho" contenida en el inciso sexto del artículo 121 del Código General del Proceso, y la **EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA** del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso.*

***Segundo.** Declarar la **EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA** del inciso segundo del artículo 121 del Código General del Proceso, en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia.*

(…)".

Ahora bien, el artículo 90 en su inciso 6° contempla que el plazo previsto en canon 121 será computado desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda, cuando el auto admisorio no resulte notificado dentro de los 30 días siguientes a esa data.

3. Según emerge de las diligencias, el escrito introductor fue presentado el

11 de mayo de 2016[4] y admitido hasta el 15 de septiembre de ese año[5], es decir, superando los 30 días en comento, por lo que el hito temporal enunciado en el artículo 121 ibídem, en este asunto, despunta desde el 12 de mayo de 2016 -día siguiente a la presentación de la demanda- y, por ende, culminaba el 12 de mayo de 2017.

Pero ocurre, que el extremo demandante NO alegó la nulidad en cuestión como consecuencia de la pérdida de competencia y, por el contrario, ejecutó actuaciones sin proponerla subsanándola de esa manera.

Obsérvese, que el 3 de mayo de 2017, previo a la consumación del año contado de la manera explicada, solicitó el emplazamiento del extremo demandado y, la inscripción de la demanda, solicitudes atendidas en auto de 28 de julio de 2017[6].

Posteriormente, el 27 de octubre de 2017, aportó el emplazamiento[7], siendo ingresado el proceso al despacho el 2 de noviembre de 2017, determinándose el registro respectivo en el Sistema de Personas Emplazadas, mediante proveído de 23 de marzo de 2018 y, adicionalmente fue prorrogada la instancia, sin que esta última decisión hubiera sido censurada por el extremo demandante, pese a que para ese momento ya había transcurrido el término del año contemplado en el artículo 121 del C.G.P. en concordancia con el inciso 6° del canon 90 de esa codificación.

Y el 15 de junio de 2018, pidió el nombramiento de curador *ad litem*, a favor de su contraparte emplazada.

Aunado a lo anterior, reliévese que en la petición formulada el 26 de agosto de 2019, el memorialista aludió, tan solo, a la pérdida de competencia, más nada dijo en punto de la correlativa nulidad que podía generar, la que de todas maneras para esa data, ya estaba saneada, al no haber sido alegada su configuración y, por el contrario, ante las distintas actuaciones desplegadas por el demandante, posteriores a la expiración del plazo del año en comento.

---

[4] Folio 76 ibídem
[5] Folios 158 a 160 ibídem
[6] Folios 190 y 191
[7] Folio 195 ibídem

En esas condiciones, no podía el juez 33 Civil del Circuito de Bogotá, abstenerse de seguir tramitando el proceso iniciado por Luz Marina Bonilla Ramírez en contra de la Constructora Timiza del Parque S.A.S. y, por consiguiente ha de continuar conociendo de ese asunto.

Por lo brevemente expuesto, se

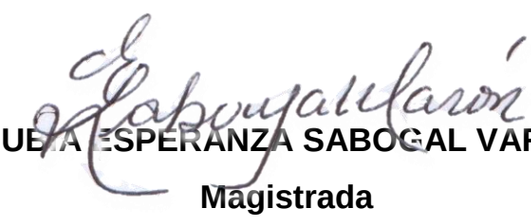
RESUELVE

Primero.- Declarar que al Juzgado 33 Civil del Circuito de esta ciudad le corresponde seguir conociendo el proceso promovido por Luz Marina Bonilla Ramírez en contra de la Constructora Timiza del Parque S.A.S.

Segundo.- Por Secretaría remítase el expediente del evocado litigio al prenombrado despacho judicial, para lo de su cargo.

Tercero.- Comunicar esta decisión a los funcionarios que suscitaron este pronunciamiento. Líbrense los oficios de rigor.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

DEMANDANTE	**:**	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MEDICOS DE COLOMBIA – IPS DISMECOLSOCIEDAD LIMITADA
DEMANDADO	**:**	ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.
CLASE DE PROCESO	**:**	EJECUTIVO

El último inciso del artículo 306 del C.G.P. prevé que "La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, **de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción**" (negrilla propia del Despacho); a su vez, el artículo 31 ib. establece la competencia de las Salas Civiles de los Tribunales Superiores, sin que entre ellas se encuentre el conocimiento de asuntos ejecutivos en primera instancia, al margen del título en el que se fundamenten, lo que corresponde a los jueces municipales y de circuito según la cuantía.

Por esa razón, se **RESUELVE**:

Rechazar la demanda formulada por DISMECOLSOCIEDAD LIMITADA.
Por secretaría remítase el asunto a la Oficina de Reparto para que sea asignada según corresponda.

Notifíquese,



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso No.	11001220300020200199900
Clase:	CONFLICTO DE COMPETENCIA
Demandante:	WILLIAM ALFREDO BOTÓN REYES
Demandado:	LUIS ALEJANDRO URIBE NIÑO

Con fundamento en el inciso 1° del artículo 139 del Código General del Proceso, se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Jueces 33 y 34 Civiles del Circuito de esta ciudad, para lo cual son suficientes las siguientes,

CONSIDERACIONES

El suscrito Magistrado asignará el conocimiento del asunto del epígrafe al primero de los juzgadores mencionados, por lo siguiente:

La Corte Constitucional en la sentencia C-443 de 2019 declaró inexequible la expresión "de pleno derecho" contenida en el inciso 6° del artículo 121 del estatuto procesal civil, así como la exequibilidad condicionada del resto de ese inciso, "en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso"; así mismo, declaró exequible el inciso 2° de esa disposición, pero en el entendido de que "la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte"[1].

De acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Constitucional, es claro que la expiración del término para dictar el fallo no provoca la pérdida "automática" de competencia, porque dicha hipótesis de invalidez solo se abrirá paso ante la solicitud oportuna de alguno de los litigantes; por tanto, de conformidad con los lineamientos que trazó la

[1] Ver comunicado de prensa número 37 de 25 y 26 de septiembre de 2019.

aludida corporación, "la alegación de las partes sobre la pérdida de la competencia y sobre la inminencia de la nulidad debe ocurrir antes de proferirse sentencia"; además, dicha causal de nulidad "puede ser saneada en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del CGP".

Sobre la convalidación de dicha hipótesis de invalidez, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó, con criterio que hoy día es pacífico, que, "… al no estar la nulidad del artículo 121 del Código General del Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una 'nulidad especial', no es posible afirmar que es una anomalía procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidación o saneamiento. **De esta forma, si se actuó sin proponerla**, o la convalidó en forma expresa, **la nulidad quedará saneada**…" (STC15542 de 14 de noviembre de 2019; se resalta).

En el presente asunto, ninguno de los extremos de la contienda judicial solicitó la invalidación de lo actuado por el vencimiento del plazo legal para dictar sentencia, lapso que, según el juez que provocó la presente colisión, feneció el 23 de agosto de 2018; antes bien, con posterioridad a esa fecha se han surtido diversas actuaciones procesales que implicaron que quedara convalidado ese supuesto de nulidad.

Esas diversas actuaciones, así como la omisión de las partes en alegar el supuesto de invalidación en comento, implicó que la hipótesis de nulidad del artículo 121 del CGP quedara convalidada, de conformidad con la jurisprudencia que viene de citarse y lo previsto en el numeral 1° del artículo 136 *ibídem*, según el cual "la nulidad se considerará saneada… 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla".

Por lo tanto, es innegable que debe ordenarse la remisión del expediente al juzgador que se separó del conocimiento del asunto, pues es claro que no paró mientes en que la invalidez que declaró de oficio, se hallaba saneada.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado sustanciador,

RESUELVE

DECLARAR que es el Juez 33 Civil del Circuito de esta ciudad quien debe conocer del proceso de la referencia; en consecuencia, secretaría remita las diligencias a ese despacho judicial para que, sin más dilaciones, continúe el trámite procesal que corresponda; mediante

telegrama, comuníquese lo aquí resuelto al Juzgado 34 Civil del Circuito de la misma ciudad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
bd97337a7aa33d2b195923da5a832c32b3e83e73d6dd8d5e332233b46ffa9d79

Documento generado en 16/12/2020 08:41:46 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Ref. 11 001 31 99 001 **2015 21940 02**

Por la Secretaría del Tribunal ofíciese a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio para que en el menor tiempo posible remita con destino a este Tribunal el link de acceso a todas las audiencias practicadas en el proceso en referencia. Para ese efecto, se suministran los siguientes correos electrónicos:

des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Lo anterior, en razón a que el despacho ha tenido serios inconvenientes para acceder a las audiencias y en razón a que el audio es muy deficiente.

CÚMPLASE

Documento con firma electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1a961ba3c6d36c2d08806c5ef323a4acd072f2cec4eaf7aff50b502ba159f10d
Documento generado en 16/12/2020 02:19:37 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

De conformidad con el artículo 316 del C.G.P., se acepta el desistimiento del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra el auto del 25 de septiembre de 2020, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sin condena en constas por no encontrarse causadas.

Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Sala Civil Dual

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

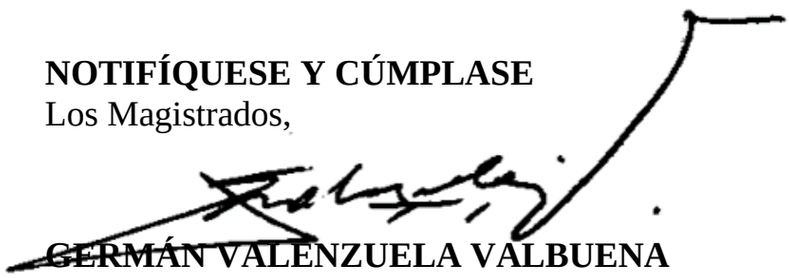
Magistrado Ponente: **Germán Valenzuela Valbuena.**

Radicado: 11001 31 99 001 **2019 28477** 01
Ordinario: Conjunto Residencial Bisso P.H. ***Vs***. Inmobiliaria Bisso S.A.S. y Otro.
Asunto: **Recurso de Súplica**.
Aprobación: Sala virtual 50 de la fecha.

Se **rechaza** la súplica interpuesta por la parte demandante contra el auto proferido por el Magistrado sustanciador el 30 de noviembre de 2020, habida cuenta que dicho recurso no es el medio pertinente para impugnar la providencia mediante la cual se declara desierto un recurso de apelación formulado contra una sentencia.

Ahora bien, de conformidad con la reconducción prevista en el parágrafo del artículo 318 C.G.P., remítase el expediente al Magistrado sustanciador para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los Magistrados,



GERMÁN VALENZUELA VALBUENA



ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Rad. 11001319900120192847701

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Magistrada Sustanciadora

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

ASUNTO: PROCESO VERBAL PROMOVIDO POR LATIN AMERICAN BUSSINESS SOLUTIONS S.A.S. (LABS ENERGY S.A.S.) E INVERSIONES G.P.D. S.A.S. CONTRA INTERNATIONAL COMMERCIALIZING OF PRECIOUS METALS AND STONES LTDA. (CI PREMETALS LTDA.), CI BOSCONIA MINERALS S.A.S., SANTIAGO GONZÁLEZ RAMOS, MARÍA DUPERLY CANDELO GONZÁLEZ Y LOGÍSTICA Y APOYO EMPRESARIAL S.A.S. Rad. 002 2018 00436 02

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la apoderada de la sociedad Logística y Apoyo Empresarial S.A.S. contra el auto que profirió la Superintendencia de Sociedades, a través de la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria I, en audiencia celebrada el 17 de noviembre de 2020, por medio del cual negó el decreto y práctica de unas pruebas.

I. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. Mediante la citada providencia, la Coordinadora de la autoridad de primera instancia negó la prueba testimonial y de interrogatorio de parte que le solicitó la sociedad apelante, en atención a que ésta no ilustró sobre lo que declararían los testigos, con lo cual incumplió los requisitos previstos en el artículo 212 del Código General del Proceso; y en razón a que, si bien aparece en la contestación una aparente solicitud de interrogatorios, la misma no se concretó.

2. Inconforme la apoderada de dicho ente societario interpuso el recurso de reposición y el subsidiario de apelación, con fundamento en que se requiere la verificación de la información de los señores Santiago González y María Duperly Candelo González y de los representantes legales de las sociedades demandantes en cuanto a la celebración de la asamblea de accionistas del 16 de mayo de 2016 y del contrato de administración delegada con Logística y Apoyo Empresarial S.A.S., para establecer o no la existencia del conflicto de intereses reclamada por la parte actora en los alegatos de conclusión; y que si bien no son imperiosos los testimonios, los interrogatorios de parte de las demandantes sí lo son frente a la naturaleza jurídica y los pormenores del aludido contrato.

3. Para resolver, el Despacho estima oportuno señalar que de conformidad con los postulados del procedimiento civil, se deben respetar los derechos de defensa y contradicción como garantías implícitas a quienes concurren a la administración de justicia. Así mismo, en virtud del principio de igualdad, se les debe garantizar la oportunidad para la defensa de sus intereses, en la forma y momentos en que a cada una le corresponde actuar dentro del proceso, donde pueden invocar los hechos, argumentos y medios de prueba para la protección de sus derechos dentro del litigio.

4. Por lo anterior es que la solicitud de pruebas corresponde a un acto dispositivo en el que se materializan las prerrogativas antes anotadas, por ende, conforme lo establece el artículo 29 de la Carta Política, toda persona tiene derecho "*a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra",* sin embargo, ello no justifica que la parte interesada no deba cumplir con los requisitos mínimos necesarios para su decreto.

Tratándose de prueba testimonial, el artículo 212 del estatuto procesal vigente puntualmente prevé que al momento de solicitarlas no solamente se debe señalar el nombre, domicilio y residencia de los testigos con el fin de facilitar su comparecencia, sino que debe *"enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba",* toda vez que, como lo pregona la doctrina:

> *"La ley se muestra exigente con el solicitante del testimonio, pues le impone el deber de precisar los hechos sobre los cuales declarará el testigo. La previsión tiene el propósito de facilitar el decreto de testimonios y la preparación de la contradicción de la prueba por el adversario de quien la solicita. Con la solicitud de testimonios formulada como lo señala el precepto, el juez puede escoger los testimonios que necesita recibir y descartar los que estén de sobra; y el*

adversario de quien pide la prueba puede preparar adecuadamente el cuestionario que le va a formular al testigo y conseguir las pruebas para refutarlo."[1]

5. Si ello es así, es evidente que no es posible decretar la prueba testimonial cuando el interesado, como en este caso, simplemente asegura que es necesaria la citación de los testigos "*para que declaren sobre los hechos de la presente demanda y respondan el interrogatorio*" que en su debida oportunidad se les formularía (como se desprende del contenido de la contestación de la demanda presentada por la sociedad apelante)[2], pues al ser tan amplia esa aseveración, impide al juez ejercer la actividad de depuración del objeto de esa prueba, por ende, le asiste razón a la funcionaria de primer grado en cuanto a que no se cumplen los requisitos consagrados en el canon 212 del estatuto adjetivo civil vigente.

6. Lo propio se colige frente a la solicitud de decreto y práctica de la prueba de interrogatorio de parte, pues aun cuando en sede de alzada la apoderada del ente societario apelante insiste en la importancia de que los representantes legales de las sociedades convocantes, así como que el señor Santiago González y la señora María Duperly Candelo absuelvan los cuestionamientos relativos a la reunión celebrada el 16 de mayo de 2016 y declaren sobre los pormenores del contrato de administración delegada con Logística Apoyo Empresarial S.A.S., lo cierto es que en el acápite respectivo se limitó a indicar "*Sírvase señor juez citar a los señores que a continuación determino para que bajo juramento declaren sobre los hechos de la presente demanda y respondan el interrogatorio a los representantes legales de los demandantes*", sin indicar de cuál de los representantes legales de las actoras esperaba su comparecencia y absolución, lo que es suficiente para avalar la postura de la autoridad *a quo* al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

[1] *ROJAS GÓMEZ Miguel Enrique. Código General del Proceso Comentado Pág.358*
[2] *Cfr. fl. 160 Archivo digital 2018-800-00436CP15*

PRIMERO. **CONFIRMAR** el auto que profirió la Superintendencia de Sociedades, a través de la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria I, el 17 de noviembre de 2020.

SEGUNDO. **CONDENAR** en costas a la sociedad apelante ante la inviabilidad de la alzada (art. 365 C.G.P.). Liquídense por la autoridad de primera instancia, teniendo como agencias en derecho la suma de $414.058 equivalente a ½ salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo normado en el numeral 7º, artículo 5º del Acuerdo 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO. **DEVOLVER** las diligencias a la dependencia de origen.

NOTIFÍQUESE,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

(2)

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Asunto. Proceso Verbal promovido por Latin American Bussiness Solutions S.A.S. (Labs Energy S.A.S.) e Inversiones G.P.D. S.A. S. contra International Commercializing of Precious Metals and Stones Ltda. (CI Premetals Ltda.), CI Bosconia Minerals S.A.S., Santiago González Ramos, María Duperly Candelo González y Logística y Apoyo Empresarial S.A.S. Rad. 002 2018 00436 03

SE ADMITE en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia que profirió la Superintendencia de Sociedades, a través de la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria I, el 17 de noviembre de 2020, dentro del presente asunto.

Las partes deberán tener en cuenta lo establecido en el inciso 3º del artículo 14 del Decreto 806 de 2020, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes"*, vencidos los cuales el no recurrente deberá descorrer, si a bien lo tiene, el correspondiente traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

Para efecto de dar la plena garantía del debido proceso y derecho de defensa a las partes, por Secretaría **NOTIFÍQUESE a los apoderados de los intervinientes** esta determinación en el marco de la norma reseñada vía correo electrónico a las direcciones que obran en el expediente digital; y en caso de no llegar a obrar las mismas en este, pese a ser una obligación de los togados, remítanse las comunicaciones correspondientes a la dirección física que hayan informado en el expediente o en el Registro Nacional de Abogados.

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia del mismo a la escribiente encargada de los procesos de la suscrita Magistrada mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cumplido lo anterior, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho con informe pormenorizado de Secretaría y, para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,



MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Radicado: 11001 31 03 002 2004 **00573** 02 - **Procedencia:** Juzgado 47 Civil del Circuito.
Queja. **Expropiación,** Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá *vs.* Guillermo Julio Cuervo y Aura Stella Jaramillo de Bernal.

El artículo 352 Cgp establece que *"*[c]*uando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente…"*.

De la revisión detallada de la actuación, se advierte que en el recurso de reposición y en subsidio de queja interpuesto, la parte inconforme no expresó los motivos por los cuales, a su juicio, sí había lugar a conceder la apelación subsidiaria que formuló frente al auto de 3 de septiembre de 2019, por lo que debe ser rechazado. Es de notar, entonces, que en su escrito el recurrente se limitó a cuestionar la decisión contra la que interpuso la alzada, así como decisiones anteriores, pero en parte alguna se indicó argumento dirigido a poner de presente las circunstancias por las cuales, a su juicio, debía concederse la apelación.

Es imperioso acotar que el recurso de queja fue instituido por el legislador con la finalidad de que el superior, con base en los argumentos aducidos por el recurrente[1], determine si la providencia cuestionada es susceptible o no de ser conocida en el segundo grado de competencia y si se interpuso en tiempo por quien tiene la legitimidad para impugnar, con abstracción de toda consideración acerca de los razonamientos de fondo expuestos por el juzgador. En el presente caso, como ya se dijo, la parte recurrente no indicó las razones por los cuales, en su sentir, era viable la concesión de la apelación, sino que se centraron en cuestionar otros

[1] Conforme la actual legislación y sistema procesal, el superior solo es competente para pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el recurrente.

aspectos, apreciaciones que no pueden tratarse ni analizarse en este específico grado jurisdiccional.

Así las cosas, no resulta pasible de tramitación y decisión la queja planteada, comoquiera que el interesado no manifestó, en su recurso, ningún argumento con miras a fundamentar la procedencia y concesión del recurso vertical.

En todo caso, y en gracia de discusión -a modo meramente ilustrativo-, la apelación a que se ha hecho referencia se interpuso contra el auto de 3 de septiembre de 2019, mediante el cual el *a quo* rechazó un recurso de reposición formulado contra otra providencia, y esta específica determinación no se encuentra enlistada como apelable en el artículo 321 Cgp, ni en otra norma especial.

Por lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil**, RECHAZA** el recurso de queja interpuesto por la parte demandante.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Rad. 11001 31 03 002 2004 ***00573*** *02*

Firmado Por:

GERMAN VALENZUELA VALBUENA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 019 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7e3668df21af1a8b76ec84089fd68095d24ebcd98d5fd2f2e1db3b57f5d9cd41**
Documento generado en 16/12/2020 04:29:17 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Demandante	**:**	Bancolombia S.A.
Demandado	**:**	Raúl Andrés Rueda Martínez
Clase de Proceso	**:**	Ejecutivo con Título Hipotecario.

Téngase en cuenta que el 9 de septiembre este Despacho ya se había inadmitido el recurso de apelación concedido en auto del 14 de febrero de 2020, interpuesto contra el auto proferido el 27 de septiembre de 2020, por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias, bajo el radicado 11001-31-03-002-2009-00191-03.

Aunado a lo anterior, se precisa que revisado el expediente no se advirtió que se encontrara pendiente otro recurso de alzada por decidir.

Por esa razón se **RESUELVE:**

Por Secretaría devuélvanse las presentes actuaciones al juzgado de origen, previa verificación del trámite impartido a la apelación No 11001-31-03-002-2009-00191-03 y su respectiva devolución a esa autoridad.

Notifíquese



RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciseises (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso No.	11001319900220190022401
Clase:	VERBAL – ABUSO DEL DERECHO DE VOTO
Demandante:	CÉSAR AUGUSTO VINASCO RENDÓN
Demandados:	ESTEFANÍA CASTILLO MUÑOZ y AGILIDAD MENTES INTEGRALES AMI S.A.S.

Auto discutido y aprobado en sesión No. 45 de quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Para resolver el recurso de súplica que el extremo demandado interpuso contra el auto de 12 de noviembre de 2020, por medio del cual el Magistrado sustanciador declaró inadmisible la alzada, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala Dual confirmará la providencia suplicada, porque el extremo recurrente no rebatió, y menos eficazmente, la razón que llevó al magistrado sustanciador a inadmitir la apelación.

En verdad, la decisión cuestionada se cimentó en que, según el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 (aplicable al presente asunto por tratarse de una controversia relacionada con una sociedad S.A.S), las acciones societarias que encuentren venero en el ejercicio abusivo del derecho de voto, "se adelantarán ante la Superintendencia de Sociedades **mediante el proceso verbal sumario**", aspecto medular de la providencia confutada que no fue objeto de reparo alguno, por lo que ningún reproche merece en sede de súplica.

Ahora bien, en cuanto a los motivos de informidad expuestos por los recurrentes, hay que decir que no están llamados a prosperar si se repara en lo siguiente:

Lo primero, que no es cierto que el encargado de resolver la segunda instancia en este asunto fuera el Tribunal Superior de Ibagué, por tratarse del "superior funcional del juez que fue desplazado por la Superintendencia", porque si bien es cierto que el litigio se originó en esa ciudad, no lo es menos que un correcto entendimiento de la competencia obligaba a que los recurrentes efectuaran su interpretación con miramiento en el numeral 2° del artículo 31 de del CGP, según la cual:

> **"ARTÍCULO 31. COMPETENCIA DE LAS SALAS CIVILES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES.** Los tribunales superiores de distrito judicial conocen, en sala civil:
>
> (…)
>
> 2. **De la segunda instancia de los procesos que conocen en primera instancia las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales**, cuando el juez desplazado en su competencia sea el juez civil del circuito. **En estos casos, conocerá el tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa** o de la sede regional correspondiente al lugar en **donde se adoptó la decisión**, según fuere el caso." (Se resalta).

De acuerdo con el evocado precepto, se tiene que si hay desconcentración de funciones en la entidad administrativa y es una regional la que adopta las decisiones, el tribunal competente en segunda instancia es aquel que corresponda a dicha seccional. Dicho de otra manera, no contempla dicha regla una competencia a prevención, sino que lo que quiere señalar es que si no media la intervención de una seccional, el tribunal competente será el de la sede principal de la autoridad administrativa con facultades jurisdiccionales, a menos que sea la regional la que hubiere intervenido, lo que aquí no ocurrió.

Y ello es así, porque, en la hora actual, la Superintendencia de Sociedades no cuenta con una intendencia regional en la ciudad de Ibagué[1].

El citado artículo 31, antes 26 del CPC, dentro de un conflicto de competencia decidido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, fue explicado de la siguiente manera:

> "La primera de las normas adopta el sistema tradicional del factor funcional y al mismo tiempo regla general de competencia, consistente en que el llamado a asumir la apelación es el juez del circuito o el tribunal correspondiente al circuito o al distrito al que pertenezca el funcionario que profirió la decisión en primera instancia, objeto de inconformidad, según que ésta haya sido dictada por un juez municipal o por uno del circuito, respectivamente; esto es, cuando el asunto, por virtud de la elección del actor es tramitado íntegramente en sus diferentes instancias ante las autoridades judiciales. [El artículo 31 y s.s.] complementan y **concretan el conocimiento de la alzada al** juez del circuito o al **tribunal de la sede principal o regional de la autoridad administrativa correspondiente al lugar donde se ha emitido la resolución**, según que el desplazado en el primer grado haya sido el municipal o el del circuito. Se trata de una regla especial, cuando por la opción del demandante, la primera instancia se surte ante las autoridades administrativas, para efectos del pleno control judicial ulterior de la respectiva decisión en segunda instancia" (AC4917-2014; se resalta).

Por manera que si la decisión de primer grado fue adoptada por la Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades (aquella que tiene su sede en Bogotá), la segunda instancia estaría radicada en este tribunal, de no ser porque se trata de un proceso de única instancia.

La segundo, porque si bien es verdad que según el artículo 368 del CGP, "se sujetará al trámite establecido en este capítulo [proceso verbal] todo asunto contencioso **que no esté sometido a**

---

[1] Según se deduce de la información que reposa en su página web: https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Planeacion/Paginas/Intendencias-Regionales.aspx

un trámite especial", lo cierto es que el legislador determinó que este tipo de litigios, vale decir, los que se funden en el ejercicio abusivo del derecho de voto, se tramitarán "mediante el proceso verbal sumario" (art. 43, Ley 1258 de 2008); esto es, en única instancia según lo regula el parágrafo 1° del artículo 390 del CGP.

Esas, pues, la razones para refrendar la providencia recurrida, motivo por el cual, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Dual de Decisión,

RESUELVE

Confirmar el auto de auto de 12 de noviembre de 2020 proferido por el Magistrado sustanciador dentro del proceso de la referencia, por las razones expuestas.

NOTIFÍQUESE

Los Magistrados,



MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(Rad. No. 11001319900220190022401)



GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
(Rad. No. 11001319900220190022401)

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: **José Alfonso Isaza Dávila**

Radicación: 110013199016-2013-00348-02 (Exp. 5159)
Demandante: Hilda Leonor Moreno de Moya y otros
Demandado: José Buriticá Bohórquez y otro
Proceso: Ordinario
Trámite: Apelación sentencia
Discutido y aprobado en Sala de 26 de noviembre de 2020

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Decídese el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 10 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado 49 Civil del Circuito, en este proceso ordinario de Hilda Leonor Moreno de Moya, Edwin Arney Moya Moreno y Jaime Andrés Moya Moreno contra José Buriticá Bohórquez, Corporación Hospitalaria Juan Ciudad – Hospital Universitario Mayor Méderi.

ANTECEDENTES

1. Pidieron los demandantes[1] se declare que los demandados son responsables del fallecimiento de Jaime Moya Moncada, por un error en el procedimiento quirúrgico que le practicaron y que incumplieron la obligación de seguridad y al sistema de garantía de la calidad en salud; en consecuencia, se les condene a pagar $34.656.310 por lucro cesante (el difunto percibía la suma de $461.500 para el momento de

[1] Folios del cuaderno 1.

los hechos), 100 s.m.l.v. de dañó moral para la víctima, 100 s.m.l.m.v. para la cónyuge supérstite y 80 s.m.l.m.v. para cada uno de los dos hijos, 158,81 s.m.l.m.v. por daño en la vida de relación y 226,68 de daño fisiológico y a la salud, valores todos que deben ser indexados junto con la liquidación de intereses moratorios.

2. Según los hechos de la demanda, en síntesis, el 4 de junio de 2008 Jaime Moya Moncada ingresó al Hospital Universitario Mayor Méderi para valoración de un trauma que sufrió, quedó hospitalizado porque tenía hipertensión endocraniana, le fueron practicados exámenes que determinaron una masa sobre la carótida supraclinoidea, en las ramas de la arteria cerebral media, aunado a herniación subfacial izquierda.

Las *angiografías* mostraron flujo normal en la carótida izquierda, sin disecciones, espasmo ni embolia distal. El 2 de julio siguiente se le practicó cirugía de resección de tumor en la base del cráneo, con ligadura de la arteria carótida interna y "cranealización" del seno frontal, después el paciente ingresó a UCI por choque hemorrágico y hemiparesia derecha. Según la nota de ingreso, esta urgencia se debió a complicación de la cirugía, por desgarro de la carotidea con sangrado abundante, con reacción anafiláctica al medicamento cefalosporina de primera generación. Presentó trastorno severo de oxigenación, hipoperfusión tisular, deterioro neurológico y evolución tórpida, padecimientos que le produjeron la muerte el 12 de julio.

La cirugía fue practicada por el neurocirujano José Buriticá Bohórquez, los demandantes son la cónyuge supérstite y los dos hijos de la víctima, quien era cotizante en la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. Nueva EPS.

3. José Luis Buriticá Bohórquez, médico neurocirujano, se opuso a las pretensiones, aceptó unos hechos, negó otros y formuló las excepciones que denominó: *inexistencia de responsabilidad, falta de*

prueba sobre el lucro cesante, imposibilidad de reclamar daño a la vida de relación, el perjuicio fisiológico es exclusivo de la víctima, indebida tasación del lucro cesante pasado y futuro, la vida probable de la víctima debe calcularse por tiempo inferior a la expectativa promedio, cualquier otra excepción que se encuentre probada[2].

Como fundamento adujo que el Tribunal de Etica Médica lo exoneró de responsabilidad disciplinaria por los hechos de este litigio, en tanto que se hicieron los exámenes necesarios, el tumor filtraba la arteria que irriga gran parte del cerebro, razón por la que fácilmente podía presentar sangrado a pesar de realizarse el acto médico adecuado.

La Corporación Hospitalaria Juan Ciudad - Hospital Universitario Mayor Méderi también se opuso a las pretensiones, aceptó unos hechos, negó otros y formuló como excepciones: l*a actividad médica es de medios, ausencia de culpa, falta nexo causal, inexistencia de responsabilidad del hospital, cualquier otra excepción que se encuentre probada*[3]. También llamó en garantía a Compañía de Seguros Allianz Seguros S.A., por la póliza de responsabilidad civil profesional RCCH-410.

La aseguradora adhirió a las defensas propuestas por su asegurada, y frente al llamamiento formuló las excepciones que llamó: *deducible, límite asegurado, límite de cobertura y cualquier otra que pruebe*[4].

5. El juzgado denegó las pretensiones y condenó en costas a los demandantes[5].

Para esa decisión precisó que pese a ser la demanda ambigua respecto a si la acción promovida es contractual o extracontractual, interpretados

---

[2] Folios 303 a 323 del cuaderno. 1.
[3] Folios533 a 543 del cuaderno 1.
[4] Folios 48 a 52 del cuaderno del llamamiento en garantía.
[5] Folios 1061 a 1054 del cuaderno 1.

los hechos y las pretensiones puede decirse que es la primera opción, cuyo petitum no puede prosperar, toda vez que los demandantes jamás invocaron la condición de herederos del causante o pidieron para la sucesión, además de que tampoco se demostró cuál fue el daño en la vida de relación del fallecido, mientras que inviable es reconocer perjuicios fisiológicos en tanto que son exclusivos de la víctima.

Encontró probada la relación contractual entre el paciente fallecido y los demandados, pues el primero fue cotizante en seguridad social como pensionado, según confesó en la contestación la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad - Hospital Universitario Mayor Méderi.

Precisó unos hechos de la historia clínica, sin que la parte actora identificara la causa o hecho culposo generador del daño, pues el neurocirujano José Luis Buriticá B. reconoció, en su interrogatorio, que en la cirugía hubo un desgarro de la arteria carotidea, pero fue sorteado, también explicó las complicaciones de la operación por ubicación y adherencia del tumor a la arteria, con comportamiento invasor, riesgos consignados en el consentimiento informado suscrito por el paciente.

Analizó el testimonio del médico Mario Fernando Rodríguez Saavedra, quien aclaró que esa intervención tiene como riesgo inherente el daño vascular, más cuando es un tumor en condición envolvente de la arteria carotidea, con compromiso de nervios craneales, por lo que el único tratamiento era la cirugía, sobre todo porque los exámenes previos confirmaban su viabilidad, por haber canales de irrigación sanguínea.

Concluyó que no está probado un procedimiento mejor que el realizado, ni que hubo un accidente quirúrgico, sin que en la historia clínica se evidencie error en el actuar médico, por el contrario, los infortunios del edema e isquemia cerebral corresponden a la gravedad de la enfermedad, ubicación del tumor, el área de intervención microquirúrgica y las condiciones personales o biológicas del paciente.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

En su inconformidad expresaron los demandantes, en resumen, las siguientes críticas:

a) La diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual es una problemática de vieja data, superada por la jurisprudencia, que citó a espacio, la cual hace prevalecer el derecho de la víctima a reclamar indemnización de perjuicios con fines de reparación integral.

b) La responsabilidad de los demandados está probada con la historia clínica, pues con la lectura detenida de los hechos secuenciales allí anotados, se concluye, con probabilidad suficiente, que por la cirugía de resección de tumor selar y supraselar, se presentó un desgarro de la arteria carotidea, con el agravante de que los exámenes previos habían dicho que la zona era permeable y no tenía obstrucción, error que generó un choque hemorrágico atendido con transfusión, pero aún así hubo deterioro neurológico cuando el paciente estaba en UCI, con hematoma subdural y edema cerebral que causaron la muerte. Ese proceso es ajeno a la *lex artis* y no es un riesgo inherente a la cirugía.

c) El juez no supo valorar la historia clínica, máxime cuando no tuvo inmediación de la prueba y desconoció el valor legal que tiene ese documento conforme a la ley 23 de 1981, el decreto reglamentario 3384 de 1981 y la resolución 1995 de 1998, y ese documento permite probar el yerro de los actos médicos. Es clara la falta de inmediatez del juez "*para tener un entendimiento claro del contenido clínico de la demanda le limita en sus consideraciones y criticas en el tema de debate altamente técnico y médico*".

d) La falla fue explicada por el médico demandado en su interrogatorio, con lo cual se prueba la imputación que se le hace.

e) Si bien obra en el folio 22 (vuelto) el consentimiento informado donde se menciona el riesgo de lesión neurológica, complicaciones, sangrado y muerte, el documento carece de la firma del médico tratante (Dr. Buriticá), quien aceptó que no fue quien lo diligenció, acto descuidado que impide catalogar esa prueba como un consentimiento idóneo y completo, y vulneró derechos constitucionales.

f) El acto negligente o descuidado echado de menos por el juez, consiste en el incumplimiento de la obligación de seguridad en el contrato de asistencia médica, ampliamente explicado por la jurisprudencia, que ampliamente se citó.

g) La sentencia apelada de modo inexplicable desconoció, que el acto médico reprochado como falta de previsión y cuidado fue el de resección del tumor cerebral, en tanto que los demás procedimientos fueron no quirúrgicos, a la vez que el daño alegado consistió en la muerte del paciente. También está la negligencia por diligenciar de forma indebida documentos clínicos y consentimientos informados.

El Hospital Universitario Mayor Médedi y la llamada en garantía, oportunamente descorrieron los anteriores reparos[6].

CONSIDERACIONES

1. Verificada la concurrencia de los presupuestos procesales y demás requisitos de validez de la actuación, que hacen posible decidir la controversia en segundo grado, circunscrita la competencia del Tribunal a los puntos objeto de recurso vertical, el debate se centra en

[6] PDF: 06MemorialDescorre y PDF: 08MemorialDescorre

determinar la invocada responsabilidad de los demandados por el fallecimiento del señor Jaime Moya Moncada (q.e.p.d.), por la cirugía de resección de un tumor en la base del cráneo.

Cuestión central que debe responderse de manera adversa, por no estar probada la culpa o responsabilidad en concreto de los demandados, con ocasión al ejercicio de la praxis de la actuación médico-asistencial reprochado, puesto que no está probada la atribución a aquellos a título de culpa y mucho menos de dolo.

2. En relación con el dispositivo jurídico para sostener esa tesis, obsérvase que la demanda reclama la responsabilidad del neurocirujano demandado y de la entidad que tenía a su cargo la salud del paciente, por lo cual comiénzase por recordar que a las personas vinculadas con la prestación de servicios de salud, le son exigibles unas conductas que, si bien no pueden garantizar una segura mejoría en los enfermos, sí es de esperar que procedan, en lo de sus competencias, con real esmero en procura de detener o reversar los efectos nocivos de los problemas de salud, o cuando menos de paliarlos, de acuerdo con los tratamientos e intervenciones recomendados por la ciencia vigente (*lex artis*).

La jurisprudencia ha tenido una particular evolución en torno a las obligaciones requeridas a los médicos para buscar el remedio a los padecimientos de salud. Entre muchos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, cumple recordar que la sentencia de 5 de marzo de 1940, distinguió entre obligaciones de medio y de resultado en los servicios médicos, aunque no fue una tesis radical, pues dijo que "*por lo regular la obligación que adquiere el médico* '*es de medio*'", porque "*puede haber casos en que el médico asume una obligación de resultado, como la intervención quirúrgica en una operación de fines estéticos*".

Aunque anotó que no pueden sentarse reglas absolutas puesto que la cuestión de hecho y de derecho varía, de manera que en materia de responsabilidad médica contractual mantiene vigencia el principio de la carga de demostrar la culpa del médico, porque aun teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos y científicos del acto profesional, la conducta sigue siendo enmarcable dentro de los límites de la culpa común, pero sin perder de vista la profesionalidad, ya que según se dice, "*el médico responderá cuando cometa un error científico objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase*" (G.J. t. XLIX, páginas. 116 y s.s.). En similar sentido están las sentencias de 3 de noviembre de 1977 y de 12 de septiembre de 1985.

Sin embargo, con posterioridad la Corte matizó la línea jurisprudencial, cuando dilucidó que si bien en otras ocasiones se ha partido de la distinción entre obligaciones de medio y de resultado, "*para definir la distribución de la carga de la prueba en la responsabilidad contractual del médico..., lo fundamental está en identificar el contenido y alcance del contrato de prestación de servicios médicos celebrado en el caso concreto, porque es este contrato específico el que va a indicar los deberes jurídicos que hubo de asumir el médico, y por contera el comportamiento de la carga de la prueba en torno a los elementos que configuran su responsabilidad y particularmente de la culpa, porque bien puede suceder, como en efecto ocurre, que el régimen jurídico específico excepcione el general de los primeros incisos del artículo 1604 del Código Civil, conforme lo autoriza el inciso final de la norma*."[7].

Comentó enseguida la naturaleza del contrato de prestación de los médicos, no previsto en la ley, así como la necesidad de no trazar reglas probatorias estrictas en la responsabilidad de los mismos, y remató que probado el daño, queda por dirimirse la relación de causalidad entre este y la actividad del médico, "***donde no es posible***

[7] Casación civil, sentencia de 30 de enero de 2001, expediente 5507.

***sentar reglas probatorias absolutas con independencia del caso concreto**, pues los habrá donde el* onus probandi *permanezca inmodificable, o donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, **pero también aquellos donde cobre vigencia ese carácter dinámico de la carga de la prueba, para exigir de cada una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboración, y dadas las circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes del tema de decisión**. Todo, se reitera, teniendo en cuenta las características particulares del caso: autor, profesionalidad, estado de la técnica, complejidad de la intervención, medios disponibles, estado del paciente y otras circunstancias exógenas, como el tiempo y el lugar del ejercicio, pues no de otra manera, con justicia y equidad, se pudiera determinar la corrección del acto médico (lex artix)*" (ibidem. Se resaltó).

Así, desde esa ocasión la jurisprudencia estima con mayor énfasis que para la responsabilidad del acto médico es necesaria la culpa probada, pero debe tenerse en cuenta el dinamismo propio de la carga probatoria, o acaso una especie de aligeramiento probatorio, para que el afectado que ha sufrido un percance o lesión en el curso de un tratamiento clínico-médico, o sus familiares, tengan posibilidad de acreditar los hechos sin tantas exigencias. Concepción que, insístese, deviene adaptable cuando el tratamiento médico-asistencial involucra a entidades responsables de la salud del respectivo usuario.

La Corte ha reiterado esa línea jurisprudencial, aunque con ciertas variaciones en casos concretos, como la que se palpa en la sentencia SC13924 de 2016, en la que pareció abrir paso a una mayor flexibilidad cuando acontece una concreta falla operativa en un servicio médico-asistencial más o menos continuo, no de un acto solitario, en cuyo marco no sea fácil determinar responsabilidad concreta de las personas que intervienen a lo largo del itinerario prestacional, eventos

en que la responsabilidad puede atribuirse a entidades que participan en las circunstancias que originaron el hecho lesivo de la salud o la vida.

3. Para esta especie de litis, asiste razón al apelante en que debe flexibilizarse la discusión en cuanto a la distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, expuesta en la sentencia de primera instancia, pues por encima de posibles inexactitudes sobre la categoría invocada en la demanda, debe estar la potestad-deber del juez de interpretar ese escrito y el contexto litigioso, en procura de la efectividad de los derechos en juego y, sobre todo, la prevalencia sustancial de reparar un daño injustificado cuando quiera que se así se compruebe[8].

4. Sin embargo, esa premisa en nada varía la decisión, en la medida en que al cabo de todo, analizados los elementos de la responsabilidad con independencia del tipo de vínculo obligacional que haya podido suscitarse entre las partes, en el asunto bajo juicio de ninguna manera es admisible el reproche de los demandantes que atribuye el hecho dañoso -muerte del paciente-, a la comisión de un error contrario a la *lex artis*, en el procedimiento quirúrgico practicado, consistente en la resección de tumor en la base del cráneo, con ligadura de la arteria carotidea interna y "*cranealización*" del seno frontal, pues quedó carente de prueba la culpa.

Elemento que no puede inferirse así nomás, con los datos registrados en la historia clínica, cual alega con particular énfasis el apelante, y tampoco se denota que los demandados hayan incumplido con la obligación de seguridad en el marco de la asistencia médica. Porque de lo contrario tendría que aceptarse, en oposición a la doctrina jurisprudencial citada, que las actuaciones desarrolladas en servicios de salud, son actividades peligrosas en que se presume la culpa, o que se aplica una forma de responsabilidad objetiva, regímenes en los cuales

[8] CSJ, SC, sentencia de 17 de noviembre de 2011, rad. 11001-3103-018-1999-00533-01.

la única forma de exoneración es que el demandado demuestre una causa extraña; planteamientos a todas luces infundados, en primer lugar, porque el ejercicio de la atención médico-hospitalaria y asistencial sería casi imposible, y en segundo lugar, examinado que si bien la praxis de esa actividad ostenta riesgos, estos casi siempre son inherentes a su especial naturaleza, engranada a la inquebrantable finalidad de curación o sanación para tratar de resguardar la salud y la vida de las personas.

5. La responsabilidad en asuntos de este linaje, no puede asirse con meras afirmaciones, así puedan tener soporte técnico en la literatura sobre el tema, o en el conocimiento abstracto y especulativo del juez o de las partes, sino en una prueba científica pasada por el tamiz de la contradicción procesal, que así lo demuestre, verbigracia un dictamen pericial. Aberrante sería hallar la culpa con conceptos teoréticos, frente a un litigio que requiere prueba de especialidad científica aplicada al caso en concreto, sobre una forma de culpabilidad o mala praxis.

Y aunque viene de verse que la prueba puede aligerarse y ser indiciaria, debe fundarse en hechos ciertos, no en hipótesis, pues al tenor del art. 240 del CGP, "*para que un hecho pueda considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso*".

La ajenidad del juez en torno al tema, acusada con insistencia en la apelación, descansa en la categoría científica del debate, que por eso requiere prueba científica controvertida, claro está que en relación con los hechos del temario a decidir, por ser evidente que toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art. 164 del CGP).

6. En la tramitación no se practicó dictamen pericial, pese a que en la apelación de un auto se accedió a la solicitud de la parte demandante

para su decreto[9], pues el Instituto de Medicina Legal informó que no tenía en su portafolio de servicios evaluaciones por neurología forense, porque "*no cuenta en su personal con estos especialistas*"[10].

El neurocirujano Mario Fernando Rodríguez Saavedra[11], luego de revisar la historia clínica, declaró que durante la resección del tumor se dio el desgarro, "*porque uno no ve la arteria*", el "*desgarro se produjo por unas pinzas*". Explicó que al desgarrarse la arteria carotidea, se presenta una lesión isquémica que conduce al edema cerebral. Sobre la gravedad del tumor precisó que comprometía la arteria carotidea interna, además los nervios craneales 3, 4 y 6, es decir, envolvía esa arteria, cuyo tratamiento solo es quirúrgico de microcirugía, técnica igual hace 50 años. Afirmó que en "*neurocirugía no hay garantías y menos en tumores de la base del cráneo, donde, en los reportes mundiales de cirugía, el riesgo es mayor*", y que no encontró ningún error en el procedimiento, sin que haya forma de eliminar riesgos de desgarro, por lo cual la morbilidad de esos tumores es más alta.

El Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá precluyó la actuación contra el cirujano demandado y su ayudante quirúrgico Jorge Eduardo Almario Chaparro, promovida por la esposa del paciente mediante queja disciplinaria. La entidad, tras analizar las versiones libres de los médicos y familiares del fallecido, junto con la historia clínica y demás pruebas puestas a su disposición, coligió que los neurocirujanos actuaron ciñéndose a la *lex artis*, "*con un evidente ánimo de beneficiar al paciente y de respetar su autonomía al momento informarlo* (sic)*, proponerle la cirugía y solicitar su autorización*"[12].

El Comité Médico Interno Institucional del hospital, con base en la historia clínica y por solicitud de la esposa de Jaime Moya Moncada

---

[9] Providencia de 23 de octubre de 2015 del Tribunal Superior de Bogotá.
[10] Folio 1020 del cuaderno 1.
[11] Folios 719 a 720 del cuaderno 1.
[12] Folios 326 a 332 del cuaderno 1.

(q.e.p.d.), concluyó que se realizó "*un estudio y manejo adecuado, oportuno, pertinente y con racionalidad técnico científica de acuerdo con la evidencia médica internacional*", "*se encontraron consentimientos informados diligenciados*", autorizados para los procedimientos quirúrgicos y anestésicos por parte del paciente, quien se encontraba en estado de alerta, "*orientado en las tres esferas y conocedor de su enfermedad y riesgos*": Detalló que la junta quirúrgica de 16 de junio de 2008 decidió la cirugía, previo test de oclusión carotidea por riesgo de oclusión vascular intraoperatorio, y la familia fue informada de los riesgos, además de que si bien era un tumor de patología benigna, "*su comportamiento varía por su ubicación y compromiso de estructuras vasculares y nerviosas vecinas, en este caso de alta complejidad, situación explicada a la familia*"[13].

7. Del mismo modo, también es verdad que la historia clínica, elemento de juicio de indiscutible importancia, cual invocó la censura, en ciertos casos puede demostrar la culpa en los procedimientos de salud, porque situaciones hay en que las cosas hablan por sí solas (*res ipsa loquitur*), cual acontece cuando, por ejemplo, el documento muestra una grave e indiscutible negligencia en adelantar una intervención urgente, que ahí mismo recomendaron los profesionales tratantes, como aceptó este Tribunal en otra ocasión[14].

Empero, tal no es el caso de autos, porque la historia clínica muestra los hechos[15], conforme a los cuales el deterioro de salud del paciente fue después de la cirugía de resección de tumor referido, como es afirmado por los apelantes, aunque es prueba por sí sola no exhibe negligencia o culpa en los actos médicos, y en un tema tan especializado, es indispensable saber si el procedimiento fue contrario a la *lex artis*, inferencia a la que no se puede arribar, vistos los medios

[13] Folios 999 a 1003 del cuaderno 1.
[14] Sentencia de 14 de noviembre de 2018, proceso declarativo de Nasly Yohana Peñuela P. contra Cruz Blanca EPS S.A. y otro, Rad. 1100131030006-2012-00653-01.
[15] Folios 777 a 984.

probatorios relacionados, pues todos coinciden en que se tomaron las precauciones y la intervención quirúrgica fue idónea y adecuada; como tampoco muestra negligencia en la oportunidad de la atención.

Las pruebas revelan que era una cirugía complicada, de alto riesgo de lesión neurológica, sangrado, infección y muerte, según fue informado al paciente[16], sin garantía de otro procedimiento que suprimiera el peligro, como explicó el citado testigo Rodríguez Saavedra.

Pretender, como se invocó en recurso, que con la sola historia clínica se determine –con probabilidad suficiente– que los demandados erraron en el desarrollo de la cirugía, es contrario a la sólida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quien reiteró la necesidad de probar la culpa, aunque con el dinamismo propio de la carga probatoria, en sentencia SC3847 de 13 octubre de 2020, pues anotó que la prestación de servicios de salud es "*atada a los principios de benevolencia y no maledicencia o* primun non nocere", con una obligación ética y jurídica, que exige a los involucrados contribuir al bienestar de los pacientes y evitar el incremento del daño físico o síquico; a más de que su formación teórica y práctica rigurosa, de actualización permanente, "*asegura que sus decisiones las adoptan en beneficio de los enfermos para evitar perjuicios innecesarios en su integridad física y moral*". De modo que los citados principios "*conminan a los profesionales de la salud a optar siempre por los procedimientos y alternativas terapéuticas menos dolorosas y lesivas para los pacientes y usuarios de los servicios*", lo cual "*presupone, en general, que el actuar médico se realiza con diligencia y cuidado. Por esto, los menoscabos o las lesiones causadas a la salud, también en línea de principio, se entienden que son excusables. Las excepciones se refieren a las faltas injustificadas (groseras, culposas, negligentes o descuidadas)...*".

[16] Folio 914 del cuaderno 1.

De ahí que, iteró, incumbe a quien demanda responsabilidad en ese campo: "*1. Desvirtuar los principios de benevolencia o no maledicencia. 2. Según la naturaleza de la responsabilidad en que se incurra (subjetiva u objetiva), o de la modalidad de las obligaciones adquiridas (de medio o de resultado), mediante la prueba de sus requisitos axiológicos. En particular, probar la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquélla, así como la culpabilidad. En todo caso, no basta la afirmación del actor carente de los medios de convicción demostrativos de los hechos que se imputan*"; lo cual es acorde con el art. 26 de la ley 1164 de 2007 (modif. art. 104 de la ley 1438 de 2011), alusiva al talento humano en salud, bajo cuyo tenor "*la relación médico-paciente «genera una obligación de medio, basada en la competencia profesional» sin perjuicio de las «estipulaciones especiales de las partes» (articulo 1604, in fine, del Código Civil), en una evidente distinción con las obligaciones de resultado*".

8. En el interrogatorio de José Luis Buriticá Bohórquez no hay confesión de un actuar negligente en su actuación, porque reconoció que se presentó desgarro de la arteria carotidea, cuando realizó la disección del tumor, pero explicó que este último estaba muy adherido a esa zona, tenía un comportamiento invasor y "*había ocluido parcialmente la luz de la arteria, es decir, la había colapsado*", y que a nivel científico no hay ninguna otra intervención posible. Dijo que hubo sangrado importante con cambios hemodinámicos, pero fueron corregidos de inmediato "*por el anestesiólogo con transfusión de hemoderivados, glóbulos rojos empacados y control proximal del sangrado con la colocación de un clip de aneurisma proximal y distal con la porción infiltrada por el tumor con la exclusión de la circulación por la carótida, evidenciando adecuado flujo contralateral por las arterias del complejo del polígono de Wills*". Precisó que el desgarro es una complicación inherente al procedimiento y a la patología del paciente.

En consecuencia, el haber aceptado el desgarro de la arteria carotidea con la resección del tumor, no permite atribuirle la culpa médica endilgada en la demanda, puesto que el demandado explicó ese hecho como un riesgo inherente al procedimiento, pese al actuar diligente de la intervención quirúrgica, que fue aprobada previamente por junta médica y con sustento en los exámenes de escenografía cerebral, resonancia nuclear magnética, arteriografía y test de oclusión carotidea, entre otros, exculpaciones que, además de los elementos de juicio ya comentados, también deben aceptarse conforme al principio de indivisibilidad de la confesión prevista en el art. 196 del CGP.

9. En esa declaración, el neurocirujano expuso que el consentimiento informado no fue diligenciado por él, sino por un integrante del equipo quirúrgico, aunque al paciente también le explicaron los riesgos por los tres neurocirujanos que intervinieron en el acto.

En el folio 914 del expediente se encuentra dicho documento, suscrito por el paciente, en donde se informan todas las posibles complicaciones de la cirugía, la cual pretendía evitar la progresión de la lesión y el daño neurológico, sin que exista un tratamiento distinto para el tumor supraselar izquierdo, con complicaciones específicas de muerte, lesión neurológica transitoria o permanente, sangrado e infección.

Al respecto, la falta de firma del médico tratante en nada demerita la validez del consentimiento informado, en tanto que la ley 23 de 1981, el decreto 3380 de 1981 y la resolución 1995 de 1999, no determinan que sea un requisito necesario para informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar, pues la jurisprudencia reconoce que no es solemne, pues al contrario, "*es un acto dispositivo espontáneo, esencialmente revocable, singular al tratamiento o intervención específica, recepticio,* ***de forma libre o consensual, puede***

acreditarse con todos los medios de prueba, verbi gratia, documental, *confesión, testimonios, etc., y debe ser oportuno*"[17] (se resaltó); aserción de la jurisprudencia que, por cierto, es citada por el apelante.

La Corte también resaltó la importancia de ese documento, conforme al cual el médico no expondrá al paciente a riesgos injustificados, además de darle "*información razonable, clara, adecuada suficiente o comprensible acerca de los tratamientos médicos y quirúrgicos... la utilidad del sugerido, otras alternativas o su ausencia, el «riesgo previsto» por reacciones adversas, inmediatas o tardías hasta el cual va su responsabilidad (artículos 16, Ley 23 de 1981 y 10, Decreto 3380 de 1981), deber que cumple «con el aviso que en forma prudente, haga a su paciente o a sus familiares o allegados, con respecto a los efectos adversos que... pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o procedimiento médico» (artículo 10, Decreto 3380 de 1981) y dejará constancia «en la historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla» (artículo 12, Decreto 3380 de 1981)*".

Requisitos que cumplió el consentimiento informado suscrito por Jaime Moya Moncada, pues no requería de la firma por el médico demandado, y en últimas lo relevante es que aquel fue consciente de su complicación de salud y los riesgos de la cirugía.

10. En conclusión, conforme al acervo probatorio obrante en el expediente, se determina que las pretensiones de la demandante se truncan y, por ende, la sentencia de primera instancia será confirmada.

Se condenará en costas de segunda instancia a la demandante, en aplicación de lo preceptuado en el art. 365, num. 3º, del CGP.

---

[17] Sentencia citada, de 17 de noviembre de 2011, Rad. 11001-3103-018-1999-00533-01.

DECISIÓN

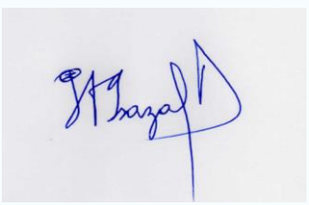
Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil Cuarta de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia de fecha y precedencia anotadas

Se condena en costas de segunda instancia a la parte apelante, que se liquidarán conforme a lo previsto en el art. 366 del CGP.

El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho de la segunda instancia, la suma de $2.000.000.

Este documento es válido con firma digitalizada de cualquiera de los magistrados y su aprobación por correo electrónico, según los arts. 11 del Dec. 491/2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y pertinentes.

Notifíquese y oportunamente devuélvase.



JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADA

APROBACIÓN PROYECTOS CIVILES DE SALA 2020-11-26

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Jue 3/12/2020 6:12 PM

Para: Jose Alfonso Isaza Davila
CC: Despacho 18 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C.

Magistrado ponente:
JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA

Reciba cordial y respetuoso saludo.

Me permito manifestarle que, por medio de este correo electrónico, **apruebo en su totalidad** los siguientes proyectos, discutidos en Sala del 26 de noviembre de 2020:

Radicación: 110013199016-2013-00348-02 (Exp. 5159)
Demandante: Hilda Leonor Moreno de Moya y otros
Demandado: José Buriticá Bohórquez y otro
Proceso: Ordinario
Trámite: Apelación sentencia
Decisión: confirma fallo de primera instancia

Se remite sin firma escaneada, atendiendo a que la información remitida desde el correo institucional personal se presume auténtica, conforme los artículos 2 y 11 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Atentamente;

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado Sala Civil Tribunal Superior de Distrito de Bogotá D.C.

Sobre la presunción de autenticidad de la información remitida por correo electrónico, ver las siguientes normas:
- DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020. ARTÍCULO 11
- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 103
- LEY 527 DE 1999. ARTÍCULOS 1, 5 y 7
- ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020. ARTÍCULOS 1 Y 2. Suspensión de términos y Trabajo en casa.
- ACUERDO No. PCSJA17-10715 Julio 25 de 2017. ARTÍCULO DIECIOCHO. USO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

Magistrado
José Alfonso Isaza Dávila

Atendiendo a la directrices de teletrabajo autorizadas mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 complementado por el acuerdo PCSJA20-11518, y conforme a lo lineamientos previstos en la ley 527 de 1999, por medio del presente correo electrónico manifiesto como Magistrada **la aprobación a los proyectos sometidos a estudio,** referente a los siguientes expedientes:

Radicación:	110013199016-2013-00348-02 (Exp. 5159)
Demandante:	Hilda Leonor Moreno de Moya y otros
Demandado:	José Buriticá Bohórquez y otro
Proceso:	Ordinario
Trámite:	Apelación sentencia
Decisión:	Confirma

Esta aprobación suple la firma, y hace parte integral del proyecto

Cordialmente



Liana Aida Lizarazo Vaca
Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f73b1a07faf5387d22b88cf89a31d5bc4ade277d2102a225bbd2dce7c3785909**

Documento generado en 10/12/2020 04:55:44 p.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Proceso:	Verbal
Demandante:	Carlos Alfonso López Bayona
Demandado:	John Edinsón Rincón Lombana y otro.
Radicación:	11001310301720150070102
Procedencia:	Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá
Asunto:	Aclaración de sentencia.

Se resuelve sobre la solicitud de aclaración de la sentencia proferida por esta Sala el 20 de noviembre de 2020.

ANTECEDENTES

Solicita el apoderado del señor Mario Alberto Huertas Cotes, se proceda a la aclaración del numeral 5º de la parte resolutiva del fallo que esta sede emitió, en el sentido ajustar el nombre de "Miguel Huertas Cotes" por Mario Huertas Cotes, que como se evidencia en la providencia y en el plenario, es un error de mecanografía, a fin de evitar inconvenientes en la ejecución de la condena.

CONSIDERACIONES

1. La aclaración de una providencia procede como correctivo a la decisión oscura o ambigua, cuando en

ella aparezcan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, *"siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella",* tal como lo establece el artículo 285 de la Ley 1564 de 2012.

Frente a los conceptos o frases que carecen de comprensión la Corte ha dicho:

> *«Igualmente en decisión CSJ SC, 6 abr. 2011, precisó:*
> *Con base en tal precepto, la Sala, de antaño, tiene precisado que el derecho que de ella surge para las partes para solicitar la aclaración de una providencia judicial, exige las satisfacción de los siguientes requisitos: 'a) Que se haya pronunciado una sentencia susceptible de aclaración…b) Que el motivo de duda de conceptos o frases utilizados por el sentenciador sea verdadero y no simplemente aparente…c) Que dicho motivo de duda sea apreciado como tal por el propio fallador, no por la parte, por cuanto 'es aquel y no ésta quien debe explicar el sentido de lo expuesto por el fallo...' (G.J., XVIII, pág. 5)…d) Que la aclaración tenga incidencia decisoria evidente, pues si lo que se persigue con ella son explicaciones meramente especulativas o provocar controversias semánticas, sin ningún influjo en la decisión, la solicitud no procede. Y…e) Que la aclaración no tenga por objeto renovar la discusión sobre la juridicidad de las cuestiones ya resueltas en el fallo, como tampoco buscar explicaciones tardías sobre el modo de cumplir' las decisiones en él incorporadas (…).*
> *Si como ha quedado visto, la figura de que se viene hablando, en principio procede únicamente respecto de conceptos o frases contenidos en su parte resolutiva que carecen de comprensión, con miras a precisar su verdadera orientación, debido a que por su redacción ininteligible o por la vaguedad de su alcance puedan servir para interpretar equivocadamente lo resuelto, circunstancia que excluye la posibilidad de replantear aspectos que ya fueron objeto de debate, es del caso señalar que en el presente asunto, la «sentencia sustitutiva» no muestra ninguna confusión que haga viable la aplicación del precitado remedio procesal»*[1].

2. Bien, puntual resulta el concepto de corrección de las decisiones judiciales, cuando el artículo 286 del mismo compendio establece su regla a partir de la cual:

> *"Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.*
> *Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.*

[1] Corte Suprema de Justicia. Auto 1999-01651. Marzo 26 de 2014. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Reglas reiteradas en proveído AC6007-2016 del 9 de septiembre de 2016

> *Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.".*

3. Significa lo anterior, que la oportunidad de corrección no tiene límite temporal de preclusión o iniciativa para provocarla dentro del proceso, ya sea por inexactitudes aritméticas para el reporte de una cifra a modo de condena, o cuando redundan en las palabras ya sea por omisión, cambio o alteración, condicionadas a su existencia en la parte resolutiva o que influyan en ella.

4. Ahora bien, en el *sub lite* cierto resulta el argumento invocado por el apoderado del señor Mario Alberto Huertas Cotes, en lo concerniente al yerro en cuando al nombre del beneficiario de la condena en costas impuesta en el numeral 5.

Por esta razón y ante la realidad procesal, observa la Corporación que se incurrió en error en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia expedida el 20 de noviembre de 2020, cuando se indicó que la condena allí impuesta era a favor de "Miguel Huertas Cotes", lapsus que habrá de ser enmendado, para que en su lugar se establezca que la penalidad allí referida, es a favor de ***Mario*** Huertas Cotes, nombre correcto del demandado.

Por lo anterior, es suficiente para proceder a la corrección deprecada.

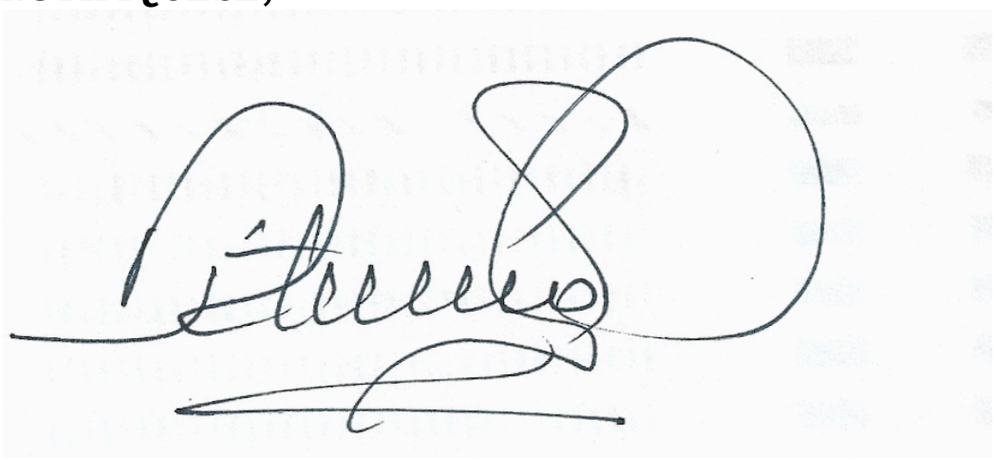
DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, **RESUELVE**:

1. **CORREGIR** el numeral quinto de la parte resolutiva, de la sentencia proferida por la Sala el 20 de noviembre de 2020, que quedará así:

*"**QUINTO: CONDENAR** al demandante Carlos Alfonso López Bayona al pago de las costas de ambas instancias a favor de Mario Huertas Cotes.*
La Magistrada Sustanciadora fija la suma de $2'000.000,oo como agencias en derecho".

NOTIFÍQUESE,



RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada



MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada



JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
MAGISTRADO

Firmado Por:

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 011 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f17bf04b97f00aa696c41057de056926474d5fbcde50ac7d264096ef99b48ce8**

Documento generado en 16/12/2020 03:50:33 p.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Rad. 019-2019-00116-01

Revisada las actuaciones en el expediente digital aportado, el Despacho **DISPONE:**

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2020, por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad.

SEGUNDO: IMPRIMIR a este proceso el trámite consagrado en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, con el objetivo de resolver la apelación instaurada contra el fallo de primer grado.

TERCERO: De conformidad con el inciso 2° del artículo 14 *ibídem,* se corre traslado a los recurrentes para que sustenten los reparos que, de manera concreta, formularon contra la sentencia del *a quo*, dentro del término de cinco (5) días que se contabilizará, una vez se notifique este proveído, so pena de declararse desierto.

CUARTO: Vencido el término antes indicado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Por secretaría, contrólese los mencionados términos, para que vencidos, se ingrese el expediente al Despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Los memoriales correspondientes deberán ser enviados, preferiblemente, a la dirección de correo electrónico: *secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co*

Notifíquese,



NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ

MAGISTRADA

016-2019-00116-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Magistrado ponente: **MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA**

Proceso No.	11001319900320180132701
Clase:	VERBAL - ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Demandante:	WILDER BELTRÁN SÁNCHEZ
Demandado:	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. actuación a la que se vinculó al BANCO DAVIVIENDA S.A.

Sentencia discutida y aprobada en sesiones n.os 40, 41 42, 44, 45 de 10,17, 24 de noviembre, 9 y 15 de diciembre de 2020, respectivamente.

Con fundamento en el artículo 14, inciso 2° del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, el Tribunal emite sentencia escrita con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 4 de junio de 2020 proferida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la cual negó sus pretensiones.

ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero prevista en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, Wilder Beltrán Sánchez, a través de apoderado judicial, demandó a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. para que se hagan las siguientes declaraciones: *(i)* que existe una relación contractual con la Compañía de Seguros Bolívar S.A., con ocasión de la suscripción de la póliza de vida n.° 45155 y la póliza de educadores plus n.° 2036653, *(ii)* que la Unión Temporal Medicolsalud le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 99.5% de origen profesional, con fecha de estructuración 18 de enero del año 2017, data que corresponde a la ocurrencia del siniestro y, en consecuencia, se condene a la aludida aseguradora a pagarle las sumas de $31.500.000 y $90.000.000, correspondientes a los valores asegurados en las referidas pólizas, así como los intereses de mora sobre dichos montos y su indexación.

Como soporte de sus súplicas, el actor relató que el 1° de mayo de 2015 suscribió en calidad de asegurado la póliza educadores plus n.° 2036653, en la cual figuraba como tomador la Corporación Social Educadores de Colombia, con un valor de recaudo mensual de $70.495, y un monto asegurado por el amparo de incapacidad total y permanente de $90.000.000; posteriormente, el 18 de julio de 2016 firmó en la misma calidad, la póliza de vida grupo deudores n.° 45155 que amparaba el saldo insoluto del crédito n.° 05900465900028593 adquirido con el Banco Davivienda S.A. (como tomador), cuyo valor a la fecha de estructuración del dictamen de PCL[1] era de $31.534.028.

Señaló que desde el año 2016 presentó afectaciones en su salud a causa de "estrés" derivado de "inconvenientes con sus compañeros de trabajo y su puesto de trabajo", y que le fue diagnosticado "trastorno de ansiedad, hipoacusia oído izquierdo, vértigo y déficit cognitivo", patologías con fundamento en las cuales el 18 de enero del año 2017 la Junta de Calificación de la Unión Temporal Medicolsalud le dictaminó una PCL del 99.5%, de origen profesional.

Finalmente, indicó que para la fecha en que se determinó su PCL, las pólizas se encontraban vigentes, por lo que reclamó ante la aseguradora demandada su efectividad[2], con el objeto de afectar el amparo de incapacidad total y permanente, peticiones que fueron descartadas por la compañía de seguros con soporte en que sus enfermedades fueron diagnosticadas con anterioridad a la suscripción de los contratos de seguro, y, por consiguiente, existió inexactitud en la declaración de su estado de salud.

2. El auto admisorio de 14 de septiembre de 2018 fue notificado a la demandada[3], quien manifestó que en efecto suscribió con el accionante las declaraciones de asegurabilidad para el ingreso a la pólizas números 45155 y 2036653, pero que el señor Beltrán Sánchez faltó a la verdad al manifestar que sus condiciones de salud eran normales, pues de su historia clínica se desprende que desde julio del 2013 presentaba afectaciones derivadas de las enfermedades de "vértigo, hipoacusia y trastornos de la articulación" y que en el año 2016 le diagnosticaron "déficit cognitivo, trastorno mixto de ansiedad, depresión y trastorno cognoscitivo", patologías que no fueron reportadas antes de la celebración de los contratos de seguro, pues de haber sido conocidas, se hubiese retraído de la referida contratación o se hubiere hecho en condiciones más onerosas; por lo que esos convenios adolecen de nulidad por reticencia; luego de lo cual, se opuso a las pretensiones, con excepción de las referentes a la declaratoria de existencia de los contratos de

[1] Pérdida de capacidad laboral
[2] El 14 de septiembre de 2017 solicitó la efectividad de la póliza de vida n.° 2036653 y el 30 de marzo de 2017 la de la póliza de vida n.°. 45155.
[3] Mediante comunicación del 27 de septiembre y 8 de octubre de 2018.

seguro por encontrase probadas en este asunto, y formuló los medios de defensa que denominó "nulidad de los contratos de seguro por reticencia en la declaración de estado del riesgo", "riesgo no cubierto" e "improcedencia del cobro simultaneo de intereses e indexación".

Para sustentar la "nulidad", alegó que le correspondía al demandante al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad manifestar con sinceridad todas las circunstancias que rodean el riesgo objeto de amparo, ello en atención al principio de buena fe que gobierna la relación contractual, y como así no obró, el consentimiento de la aseguradora se afectó, y la consecuencia de dicha omisión informativa, es la nulidad del contrato de seguro.

En cuanto al "riesgo no cubierto", adujo que el convenio se refiere al cubrimiento de la incapacidad total y permanente derivada de un hecho que no ocurrió en vigencia de las pólizas, porque las patologías del accionante son anteriores a estas.

En lo atinente a la última defensa, pidió tener en cuenta que el reclamo simultáneo de dichos réditos resulta improcedente, "pues constituye un doble cobro de la indexación".

Dispuesta la vinculación del Banco Davivienda como litisconsorte por pasiva[4], y en calidad de tomador del seguro de vida grupo deudores identificado con la póliza n.° 45155, solicitó la vinculación de la Sociedad Serlefin S.A. por ser en la actualidad la acreedora del crédito en virtud del cual aseguró al demandante[5]; agregó que la reticencia en que incurrió el accionante al no revelar su estado de salud verdadero configuró la nulidad del contrato de seguro, pues aunque el asesor del banco está autorizado para colaborar con el diligenciamiento del formulario, lo hace con "la información que el cliente le suministraba", quien en todo caso aceptó el contenido de la declaración de asegurabilidad al haber firmado e incluido su huella; seguidamente propuso las excepciones que denominó "falta de legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva", "cumplimiento estricto de todas las obligaciones legales y contractuales a su cargo derivadas de los contratos de seguro de vida grupo deudores y crediexpress fijo libranza", y "existencia de un eximente de responsabilidad: culpa exclusiva de la víctima".

---

[4] Decisión proferida en audiencia de 29 de abril de 2020.
[5] Petición que fue desestimada en audiencia 14 de noviembre de 2019, en consideración a que la cesionaria no es una entidad sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, y por consiguiente, no puede ser llamada al presente asunto.

3. La sentencia de primera instancia.

La falladora de primera instancia declaró probadas las excepciones de "nulidad de los contratos de seguro por reticencia en la declaración del riesgo" propuesta por la aseguradora accionada, y de oficio, la titulada "no acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de Banco Davivienda S.A.", y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Como argumentos para ello expresó, en resumidos términos, que en el presente asunto se acreditó que el asegurado presentaba afectaciones en su salud causadas por "vértigo paroxístico benigno, hipoacusia, tinnitus" que le fueron diagnosticados en el año 2013, y por las patologías de "déficit cognitivo, trastorno mixto de ansiedad, depresión y trastorno cognoscitivo" que datan del 18 de enero del 2016, así como también, que el demandante perdió su ojo derecho en el año 1975; hechos todos estos que son anteriores a la suscripción de las declaraciones de asegurabilidad y que no fueron mencionados por el accionante; por lo que concluyó que estaba "acreditada la existencia de una reticencia en la información suministrada en su oportunidad por el asegurado para las dos pólizas".

Añadió que la referida falta de sinceridad para con la aseguradora vició de nulidad relativa los contratos por expresa disposición del artículo 1058 del Código de Comercio, por lo que se abre paso a la excepción de "nulidad de los contratos de seguro por reticencia en la declaración del riesgo", la cual es suficiente para negar las pretensiones de la demanda respecto de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.; y como quiera que en el *sub lite* no se acreditó un incumplimiento contractual de la entidad bancaria vinculada, ni un nexo causal entre éste y el daño que pretende sea resarcido, estimó de oficio, que tiene lugar la excepción de "no acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de Banco Davivienda S.A.", argumento con fundamento en el cual, negó las pretensiones respecto de esta compañía.

4. La apelación.

El accionante alegó que la decisión adoptada, de forma errónea, estima que "omitió entregar información sobre sus problemas de salud, y que ya padecía una serie de enfermedades al momento de suscribir las pólizas", toda vez que las afectaciones a su salud comenzaron en el año 2016, y de ello dan cuenta las citas médicas relacionadas en el dictamen de pérdida de capacidad laboral del 18 de enero de 2017, por lo que "al momento de suscribir la declaración de asegurabilidad, aún no le habían diagnosticado las patologías de trastorno de ansiedad, depresión, déficit cognitivo, vértigo", y que el juzgador de primera instancia no tuvo en cuenta que le correspondía a la aseguradora demostrar las preexistencias que adujo para negar el

reconocimiento de las pólizas, a través de un examen médico de ingreso que diera cuenta de su real estado de salud, el cual, no le fue practicado.

CONSIDERACIONES

La Sala encuentra que la actuación se ha desarrollado normalmente, no hay causal de nulidad que se tenga que declarar, se cumple con los presupuestos procesales y el Tribunal es competente para decidir el recurso de apelación en los términos y con las limitaciones que establece el artículo 328 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[6].

Cabe añadir que en razón a que los reparos concretos que fueron sustentados por la parte recurrente, versan exclusivamente sobre la declaratoria de "nulidad de los contratos de seguro por reticencia en la declaración del riesgo", excepción que está soportada en que el señor Wilder Beltrán Sánchez, asegurado dentro de las pólizas de vida n.° 45155 y la de educadores plus n.° 2036653, no informó ni declaró de manera veraz y sincera el verdadero estado del riesgo al momento de su ingreso a los referidos seguros; de conformidad con el referido artículo 328, el Tribunal se limitará al estudio de este medio de defensa, pues nada apuntó el apelante en cuanto a la prosperidad de la "no acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual de Banco Davivienda S.A.", que excluyó a la entidad bancaria de esta controversia, luego es un punto pacífico, sobre el que no versa la discusión ante esta instancia.

En ese orden de exposición, los problemas jurídicos que se deben resolver se contraen a determinar si la información que suministró el señor Beltrán Sánchez en las declaraciones de asegurabilidad fue verídica y sí existía por parte la Compañía de Seguros Bolívar S.A. la obligación de realizarle un examen médico previo a la suscripción de las pólizas, para verificar su real estado de salud. La respuesta a los interrogantes es negativa y ello conlleva a la prosperidad de la aludida defensa y la confirmación de la sentencia recurrida, como pasa a explicarse.

En el caso que se analiza, el recurrente se duele, en el primero de sus reparos concretos, de la errónea apreciación que sobre el origen de sus patologías realizó el juzgador de primera instancia, pues, en su criterio, no es verdad que "omitió entregar información sobre sus problemas de salud, y que ya padecía una serie de enfermedades al momento de suscribir las pólizas", toda vez que las dolencias en su salud comenzaron en el año 2016, y de ello

[6] "El apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P. C., y 328 del C. G. del P.)." (CSJ, sentencia del 1° de agosto de 2014, expediente sc10223-2014, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).

dan cuenta las citas médicas relacionadas en el concepto de PCL del 18 de enero de 2017.

De la documental allegada al plenario, se evidencia que el mencionado dictamen[7], proferido por la Junta de Calificación de la Unión Temporal Medicolsalud, determinó una PCL del demandante del 99.5%, se fundamentó en el diagnóstico de 4 enfermedades a saber: "trastorno ansiedad, déficit cognitivo, hipoacusia oído izquierdo y vértigo", y señaló, como consultas pertinentes para dicha calificación las realizadas por las siguientes especialidades: *(i)* psiquiatría del 9 de diciembre de 2016, *(ii)* psicología del 3 de noviembre de 2016, *(iii)* neuropsicología del 13 de octubre de 2016, *(iv)* otorrinolaringología del 16 de noviembre de 2016, *(v)* medicina interna del 16 de junio de 2016, *(vi)* audiometría del 9 de noviembre de 2016, *(vii)* neurología del 15 de junio de 2016, y *(viii)* oftalmología del 14 de septiembre y 16 de diciembre de 2016; las cuales aunque en efecto, su mayoría, son posteriores a la fecha de suscripción de las pólizas (11 de marzo de 2015[8] y 18 de julio de 2016[9]), no permiten colegir que las padecimientos base del dictamen hayan sido diagnosticadas en esas consultas.

Revisada la historia clínica del señor Beltrán Sánchez[10], se observa que al menos desde el año 2013, presentaba problemas de salud relacionados con la pérdida de su capacidad laboral, pues de ello dan cuenta reportes existentes, entre los que se destacan los siguientes diagnósticos:

(i) 21 de noviembre de 2013[11]: "vértigo paroxístico benigno, hipoacusia no especificada, tinnitus, trastornos de la articulación temporomaxilar",

(ii) 11 de septiembre de 2014[12]: "hipoacusia no especificada, trastornos de la articulación temporomaxilar, vértigo paroxístico benigno",

(iii) 13 de enero de 2017[13]: "cuadro de ansiedad con insomnio de mantenimiento, 1 año de evaluación", (…) además, vértigo posicional, evisceración ojo derecho a los seis años de edad".

Evidencias estas que con suficiencia demuestran que las patologías constituyentes de su PCL, no fueron determinadas en las consultas relacionadas en el dictamen, pues existen además numerosos apuntes en su historial médico, que dan cuenta de la preexistencia de alteraciones, como el del 13 de marzo de 2014 que refiere "**hipoacusia derecha de 1 año de**

---

[7] Derivado 000, del expediente digital, pág. 13
[8] Fecha de suscripción de la póliza educadores plus n.° 2036653
[9] Fecha de suscripción de la póliza de vida grupo deudores n.° 45155
[10] Obrante en el derivado 008 del expediente digital.
[11] Extracto de historia clínica, derivado 008 del expediente digital, pág. 1
[12] *ib*., pág., 10.
[13] *ib*., pág., 12.

evolución, y **desde hace 3 meses hipoacusia izquierda**", el del 15 de junio de 2016[14], que establece como problemas previos "vértigo, inestabilidad, **hace 18 meses**"; con diagnóstico de "**vértigo posicional, ansiedad y depresión**", y el del 9 de diciembre de 2016 (relacionado también el dictamen), que se refiere a la prórroga de una incapacidad y señala que a esa fecha "**completa 150 días de incapacidad**".

Aunado a lo anterior, está probado en el proceso que el señor Wilder Beltrán Sánchez, el 11 de marzo de 2015 al diligenciar la declaración de asegurabilidad de la póliza n.° 2036653[15], negó presentar afectaciones de salud relacionadas con las enfermedades contenidas en los ítems: "1.16 enfermedades psiquiátricas, 1.17 depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, esquizofrenia., y 1.19 disminución de la audición en uno o ambos oídos", y guardó silencio cuando puntalmente el formulario, indagó "su estado de salud presenta otra circunstancia no relacionada en los numerales anteriores?. ¿En caso afirmativo indicar cuál?".

De ello además, da cuenta la declaración de la señora Luz Dary Pachón[16], ex funcionaria del Banco Davivienda, quien cumplía labores de asesoramiento en productos bancarios, e indicó que previo a "firmar", los tomadores de las pólizas, como eran profesores, revisaban muy bien los documentos, "son muy recelosos" [17], por lo que aunque el demandante aduce que la asesora le colaboró con el diligenciamiento del formulario, lo cierto es que también admitió que ella lo hizo con la información que le iba solicitando, luego las manifestaciones allí efectuadas corresponden exclusivamente a la expresión de su voluntad.

Lo mismo ocurrió el 18 de julio de 2016 cuando suscribió la declaración de asegurabilidad de la póliza n.° 45155, ocasión en la cual indicó, entre otras cosas, "mi estado de salud es normal, no padezco ninguna enfermedad crónica ni me encuentro en estudio médico por afecciones de mi estado de salud, (…) en la actualidad no sufro síntomas, enfermedades crónicas o adicciones que puedan incidir sobre mi estado de salud, [y], no tengo limitación física ni mental alguna (…) ", declaraciones que el demandante conocía, debían ser verídicas, y que una actuación contraria provocaría la nulidad del contrato, pues al firmar dicho documento aceptó las afirmaciones que allí efectuó, así como también la referida condición, sin informar en ese momento, al banco y/o a la compañía de seguros sus antecedente médicos; más aún si se tiene en cuenta que para esa época, recientemente había acudido a la cita médica del 15 de junio de 2016[18], en la que se reiteró los diagnósticos de "**vértigo posicional, ansiedad y depresión**", y que además,

[14] Historia clínica, derivado 008 del expediente digital pág. 83.
[15] Derivado 000, anexos de la demanda del expediente digital, pág. 39.
[16] Declaración rendida en audiencia de 26 de mayo de 2020.
[17] Audiencia de 26 de mayo de 2020, minuto 27
[18] Historia clínica, derivado 008 del expediente digital pág., 83

según el reporte médico del 9 de diciembre de 2016[19], para esa data completaba "**5 meses de incapacidad continua**".

De lo referido, la Sala colige que el señor Beltrán Sánchez, para cuando ingresó a las referidas pólizas de seguro, ya presentaba las dolencias que configuraron su PCL, él era conocedor de esas patologías, las cuales se abstuvo de informar a la aseguradora y a la entidad bancaria tomadora de una de ellas (póliza) al momento de firmar las declaraciones de asegurabilidad; por lo que puede colegirse que fue reticente en sus declaraciones, y como faltó a su deber de "declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo", ello lleva a la nulidad del contrato de seguro en los términos que establece el artículo 1058 del Código de Comercio[20], en concordancia con el artículo 1158 *ídem*[21].

Y es que no se puede olvidar que como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil:

> "En el contrato de seguro se torna medular la declaración del estado del riesgo (art. 1058 C. de Co.), entendida, *lato sensu*, como uno de los más resonantes deberes impuestos al tomador (*in potentia*) que, circunscrito a la esfera precontractual permite al asegurador conocer, de primera mano, los pormenores atinentes al riesgo, 'materia prima del seguro'. El cometido de la declaración en cita, luce inobjetable, puesto que finca en permitir que la entidad aseguradora, oportuna, reflexiva y suficientemente, pueda valorar la conveniencia de 'asumir el riesgo' o, por el contrario, de abstenerse de hacerlo, en un todo de acuerdo con lo disciplinado por los cánones técnicos, jurídicos y financieros que gobiernan la materia, los cuales, contrastados con la información suministrada (declaración de ciencia), le otorgarán los elementos de juicio necesarios para obrar con arreglo a su libertad contractual. Es pues en consideración a su diáfana teleología, que **la declaración de asegurabilidad debe contener una información fidedigna, amén de veraz y oportuna, como quiera que, en función suya, preponderantemente, el asegurador expresará su voluntad de establecer una relación contractual con el sujeto que, en la**

[19] Relacionado en el dictamen pericial del 18 de enero de 2017.
[20] "**Artículo 1058 Código de Comercio**. Declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o reticencia: el tomador está obligado a **declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo**, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducción a estipular condiciones más onerosas, **producen nulidad relativa del seguro**…".
[21] "**Artículo 1158 Código de Comercio.** Prescindencia de examen médico y declaración del estado del riesgo**:** aunque el asegurador prescinda del examen médico, **el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni de las sanciones a que su infracción dé lugar**."

> **etapa precedente: la precontractual, fungió en calidad de candidato a tomador del seguro** -llamado en algunos círculos asegurando, por su potencialidad-."[22]

Lo anterior, porque el contrato de seguro, "en sí mismo considerado, es un negocio jurídico de ***uberrimae bona fidei*****,** vale decir, un acuerdo en donde la buena fe -*per se* vigente en todos los tipos negociales- ocupa un protagónico y, de suyo, más intenso rol, al punto que se erige en su núcleo, a la vez que en la *ratio* que fundamenta un apreciable número de figuras que estereotipan la singular institución del seguro"[23].

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta, que en el presente asunto, la entidad aseguradora adujo de forma expresa en la contestación a la demanda y en el interrogatorio de parte que rindió su representante legal, que de haberse enterado del efectivo estado de salud señor Beltrán Sánchez, se hubiese retraído de la contratación o se hubiere hecho en condiciones más onerosas, de lo que resulta palmario, que su consentimiento estuvo viciado, pues no le fue posible si quiera considerar los términos bajo los cuales podría, si así lo hubiese decidido, asumir el amparo de incapacidad total y permanente; y por consiguiente resultaba procedente, como en efecto lo hizo la juzgadora de primera instancia, declarar prospera la excepción de nulidad de los contratos de seguro propuesta por la aseguradora enjuiciada.

Por lo demás, respecto del segundo reparo concreto, según el cual a juicio del demandante, le correspondía a la aseguradora realizarle un examen médico previo a la suscripción de las pólizas para determinar su real estado de salud, el artículo 1158 del Código de Comercio, establece que "aunque el asegurador prescinda del examen médico, **el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058, ni de las sanciones a que su infracción dé lugar**", lo que se significa, que la carga informativa pesa sobre el asegurado, y nada impone a la aseguradora la obligación de verificar la autenticidad de sus afirmaciones; pues el deber de declarar en las condiciones anteriormente referidas, implica, además, "la adopción de un severo régimen sancionatorio, para el evento de que el futuro tomador lo pretermita, en muestra de inequívoco resquebrajamiento del axial principio de la buena fe, piedra angular de los negocios de confianza, como lo es el seguro, por antonomasia, **sin perjuicio de eventuales investigaciones o inspecciones que, *motu proprio*, efectúe la entidad aseguradora –facultativamente-, para mejor proveer, si así lo estima aconsejable** (art. 1.048 C. de Co), **ya que, en rigor, no está obligada a realizarlas. No en balde, son un arquetípico *plus* y no un *prius***"[24].

---

[22] Corte Suprema De Justicia, sentencia de 2 de agosto de 2001, exp. 6146
[23] *ibídem.*
[24] Corte Suprema De Justicia, sentencia de 2 de agosto de 2001, exp. 6146

Luego, no puede predicarse que la realización de un examen médico previo a la suscripción de las declaraciones de asegurabilidad, era una carga que se debía cumplirse por la Compañía de Seguros Bolívar S.A., en razón a que es una actuación meramente facultativa, pues es el asegurado, quien tiene la obligación de expresar de forma veraz su estado de salud.

En conclusión, como el apelante, con la sustentación de sus reparos concretos, no logró desvirtuar los argumentos de la primera instancia, se impone confirmar el fallo impugnado, con la consecuente condena en costas de esta instancia a su cargo, en favor de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

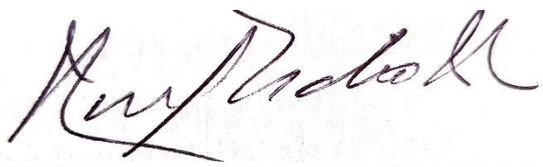
RESUELVE:

Primero. Confirmar la sentencia de 4 de junio de 2020 proferida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a lo dicho.

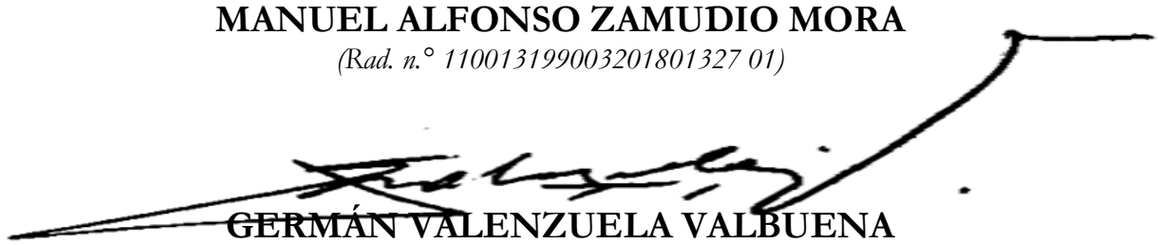
Segundo. Costas de esta instancia a cargo de la demandante. El Magistrado Sustanciador fija la suma de $1’000.000,oo como agencias en derecho. Liquídense de la forma prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,



MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(Rad. n.° 11001319900320180132701)



GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
(Rad. n.° 11001319900320180132701)



ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
(Rad. n.° 11001319900320180132701)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Magistrado ponente: ***MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA***

Proceso No.	11001319900320180283601
Clase:	VERBAL – PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO
Demandante:	PASOS SHOES & CÍA. S.A.S.
Demandada:	ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., actuación a la que fue llamada en garantía SEGUROS SBS S.A.

Sentencia discutida y aprobada en sesiones de sala n.os 38, 39, 40, 41 y 42 de 27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2020, respectivamente.

Con fundamento en el artículo 278.3 del CGP, el Tribunal emite sentencia escrita mediante la cual resuelve la apelación interpuesta por la parte demandante contra el fallo anticipado de 4 de mayo de 2020 proferido por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante el cual halló probada, en aplicación del aludido precepto, la excepción de transacción y, en consecuencia, negó las pretensiones y se abstuvo de emitir condena en costas.

ANTECEDENTES

1. En la demanda subsanada, y con soporte en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, Pasos Shoes y Cía. S.A.S. pidió que "*por incumplimiento en las obligaciones contractuales y legales*", se obligue a Acción Fiduciaria S.A. a devolverle la suma de $612'500.000,oo que le entregó por virtud del contrato de encargo fiduciario individual n.° 0001100010199 de 14 de marzo de 2014[1], cifra que pidió indexar junto con sus "intereses legales", desde que fue depositada a su opositora y hasta que se verifique su pago.

2. Para sustentar sus pretensiones, la actora sostuvo que a través del referido contrato de encargo fiduciario se vinculó como **inversionista** para la adquisición del local n.o 2-058 del proyecto inmobiliario denominado "*Centro Comercial Marcas Mall Cali*", concebido para la construcción de 340

[1] Negocio jurídico suscritos por Urbo Colombia S.A.S. (*promotor*), Sociedad Acción Fiduciaria S.A. (*fiduciaria*) y la acá demandante (*inversionista*).

unidades de diverso formato, 139 oficinas, 1800 parqueaderos, áreas especiales corporativas, culturales de exposiciones y eventos, todo lo cual a desarrollarse en una "*única etapa*" en el lote identificado con el folio de matrícula n.° 370-695292 de la Oficina de Instrumentos Públicos de esa ciudad, según se determinó en el contrato de encargo fiduciario de preventas promotor MR-799 Marcas Mall suscrito mediante documento privado de 17 de diciembre de 2013 únicamente entre Urbo Colombia S.A.S.[2], como promotora, y su contraparte (Acción Fiduciaria S.A.), en su calidad de fiduciaria, quien según la **cláusula tercera** del referido convenio, estableció ocho **condiciones** para la transferencia de los recursos de la sociedad inversionista vinculada al proyecto.

Agregó que [el 20 de enero de 2014] Urbo Colombia S.A.S. cedió su posición contractual a la sociedad Marcas Mall Cali S.A.S.[3] (*promotora-fideicomitente*) respecto del encargo fiduciario en comento (MR-799); el día 14 de marzo de 2014, la demandante suscribió con la promotora (Marcas Mall S.A.S.) y su aquí opositora (Acción Fiduciaria S.A.), el encargo fiduciario individual n.º 0001100010199 para que esta última tuviera la "*guarda, administración, custodia y cuidado*" de sus recursos, y ***"una vez se cumplieran los requisitos de transferencia"***, sus dineros fueran trasladados a la "promotora" para adquirir el local 2-058, sin que hasta la fecha se haya suscrito la correspondiente escritura pública de venta.

Agregó que el 28 de marzo de 2014, la aquí "accionada" y la "promotora" suscribieron el contrato de fiducia mercantil inmobiliaria fideicomiso (patrimonio autónomo) FA-2351 Marcas Mall Cali[4].

Manifestó que optó por demandar tan solo a Acción Fiduciaria S.A. por haber sido con quien suscribió el encargo fiduciario individual y por ser quien recibió sus dineros, persona jurídica que, a su juicio, no podía trasladar los emolumentos a la promotora, como lo hizo, según consta en el ***acta de verificación de requisitos*** de 4 de noviembre de 2014[5], por no encontrarse satisfechas hasta ese momento las "condiciones de transferencia" y porque no se contaba con la *ratificación* de la parte demandante, de suerte que como el que "*paga mal paga dos veces*", la accionada debe asumir el reclamado reintegro.

En lo medular, el incumplimiento contractual (del encargo original, sus otrosíes e individual en comento) y legal, la actora lo hizo consistir en que:

---

[2] Persona jurídica respecto de la cual, junto a Urbanizar S.A., mediante autos de 17 de junio y 18 de diciembre de 2019, la primera instancia desestimó la excepción previa formulada por Acción Fiduciaria S.A. consistente en *"no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios"*.

[3] Mediante documentos privados de 19 de octubre de 2016, de un lado, la sociedad Marcas Mall Cali S.A.S. cedió su posición contractual en el Fideicomiso FA-2351 Marcas Mall Cali a Urbanizar S.A., en un **70.4%**, y de otro, en el mismo porcentaje, hizo lo propio Proyectos y Construcciones San José Ltda. en cabeza de Urbanizar S.A., según la documental aportada por la demandada al replicar.

[4] Fideicomiso en el que se echa de menos la vinculación de la aquí demandante.

[5] Documento que dijo conocer la demandante hasta marzo de 2018, esto es, al momento de demandar.

a) si bien se previó que el terreno en el que se haría el centro comercial Marcas Mall en Cali, debía estar en cabeza del fideicomiso administrado por la accionada, lo cierto es que para la fecha de la supuesta ***acta de verificación*** (4 de noviembre de 2014), la propiedad del inmueble en el que se desarrollaría ese proyecto **aún** se encontraba en cabeza de Laboratorios Baxter S.A.S., mas no de Acción Fiduciaria S.A., en calidad de vocera del patrimonio autónomo FA-2351, según la anotación n.° 11 del certificado de tradición n.° 370-695292;

b) para el 4 de noviembre de 2014, fecha del acta de verificación de requisitos, no se cumplió la condición según la cual debía celebrarse un total de contratos de "encargos fiduciarios individuales de preventa inversionista" equivalente al **52%** de las ventas estimadas del proyecto, o de cada etapa del proyecto, si es del caso, porcentaje que no se alcanzó, pues de acuerdo con la respuesta de 14 de noviembre de 2017 que la accionada emitió con ocasión de una petición presentada por uno de los inversionistas, para ese momento las ventas ascendían a **$92.827'383.075,oo**, cuando en los encargos fiduciarios estaban proyectadas para la fase n.° 1 en **$253.031'332.726,oo** (es decir, menos del **37%**), pues el punto de equilibrio correspondía al monto de $131.576.293,017.;

c) Tampoco se le informó lo atinente a la **supresión** (que, entre otras, tuvo lugar a través del otrosí n.° 3 de 15 de octubre de 2014 que suscribieron convocada y promotora) de la condición 7ª del encargo MR-799, atinente a que para la transferencia de sus recursos, los encargos fiduciarios de los *inversionistas* debían contar con saldos equivalentes al 15% del valor de las unidades comprometidas en compraventa por los *inversionistas.*

Lo anterior, por cuanto para el 4 de noviembre de 2014, el valor de las unidades comprometidas en venta ascendía a $92.827'383.075,oo, por lo que el aludido porcentaje (15%) de los saldos no debía superar los $13.924'107.461,oo; empero, lo pagado por la demandada solo llegaba a $24.345'893.031,oo y los saldos superaban los $83.002'345.308,oo.

d) Incumplió con verificar el requisito de la carta de aprobación o pre-aprobación del crédito constructor, toda vez que en la mencionada acta de 4 de noviembre de 2014 la demandada así lo aseguró, fecha para la cual no existía comunicación de la promotora, la que solo se obtuvo hasta el 14 siguiente, conforme lo acreditó su revisora fiscal, Adriana Aguilón Ramírez.

Añadió que el **15 de diciembre de 2016** suscribió **otrosí** (n.º 4) *"general reglamentario" "**mediante maniobras engañosas**"* y *"**dolo**"* de su opositora, pues las sumas que dio por concepto de inversión ya habían sido entregadas por la convocada –en silencio- a Marcas Mall Cali S.A.S. dos años atrás; la actora cumplió con sus obligaciones, entre ellas, la entrega de todos los recursos acordados; su contraparte y la "promotora" cambiaron las condiciones para la transferencia de los recursos al agregar "convenientemente" las expresión: "***si es del caso***", sin habérselo

informado a los inversionistas, lo que desconoce el artículo 97 del EOSF.

Sostuvo que en el parágrafo 1° de la cláusula primera del otrosí (al encargo individual) suscrito entre las aquí comprometidas el 15 de diciembre de 2016 -estipulación que considera ***abusiva*** e ***ineficaz de pleno derecho*** al tenor de los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 2011- acordaron que *"**las partes mediante el presente contrato**, además de pactar las nuevas condiciones y términos del objeto del encargo fiduciario, **manifiestan que transan y desisten de cualquier incumplimiento surgido con ocasión al contrato fiduciario originario** firmado por las partes el día "**14 de marzo de 2014**[6] y sus posteriores otrosíes"*, el que en efecto firmó bajo la convicción errada de que su opositora había verificado el cumplimiento de las condiciones para la transferencia de recursos; agregó que la respuesta de la demandada con motivo de su reclamación directa, constituye un indicio grave en su contra, ya que transfirió los recursos sin la debida verificación de las condiciones.

Por último, señaló que su contradictora faltó a sus deberes contractuales de lealtad, buena fe, información, diligencia, profesionalidad, especialidad, previsión, protección de los bienes fideicomitidos, legales y aquellos consagrados en el EOSF, pues de lo contrario sus dineros le habrían sido devueltos.

3. Admitida la demanda por auto de 25 de enero de 2019, la demandada, en esencia, señaló:

a) solo fungió como **administradora** y vocera del encargo fiduciario MR-799 en la modalidad de preventa inmobiliaria (pues no medió transferencia de la propiedad), mas no de un patrimonio autónomo; **b)** su responsabilidad iba hasta la verificación del punto de equilibrio y nada más; **c)** mediante otrosí reglamentario de 15 de diciembre de 2016, desprovisto de engaño, se modificaron los planes de pago, cuyo clausulado no califica como abusivo; **d)** si lo pretendido es alegar un vicio en el consentimiento por la suscripción de esas adiciones, debió pedirse la nulidad de los convenios signados; **e)** siempre informó a la actora de las modificaciones a través de boletines; **f)** la demandadante no tiene los recursos consignados en su encargo fiduciario, porque "fueron puestos a disposición del fideicomitente promotor" –sin precisar cuándo-, "de conformidad con lo pactado" en el contrato, para que éste ejecutara el proyecto, y **g)** si hubo un perjuicio para la demandante, fue consecuencia de los actos emanados de la Promotora Marcas Mall Cali S.A.S. y Urbanizar S.A.

[6] Fundamento de la pretensión.

Por tales razones excepcionó *"**transacción**", "cláusula compromisoria", "no es contractualmente responsable", "inexistencia del daño"* [7] y de *"nexo causal"*[8], *"error en la identificación del contrato celebrado"*[9] y la "*genérica*". Por último, objetó el juramento estimatorio[10].

La primera de las aludidas defensas (***transacción***, que fue la acogida por el *a quo*), la cimentó en que la parte actora no podía desconocer el acuerdo al que también llegó con la Promotora Marcas Mall Cali S.A.S. (fideicomitente) y Urbanizar S.A. (gerente del proyecto), lo que consta en el otrosí al contrato de encargo fiduciario individual n.º 0001100010199 suscrito el 15 de diciembre de 2016, a través del cual se pactaron *"**nuevas condiciones** y términos objeto del encargo fiduciario, **transaron y desistieron** de cualquier reclamo derivado **del incumplimiento** que pudo haberse dado en el contrato de encargo individual original"*, por lo que de acuerdo con el artículo 2469 del C.C., cualquier obligación derivada de una infracción negocial relacionada con el encargo fiduciario, *"se encuentra por completo extinta" "bajo los efectos… de la cosa juzgada"*.

Con soporte en la póliza n.° 1000099 (amparo de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras), Acción Fiduciaria llamó en garantía a SBS Seguros Colombia S.A. (antes AIG Seguros Colombia S.A.)[11].

4. Intervención de la llamada en garantía. La referida aseguradora coadyuvó las defensas presentadas por su llamante, se opuso a la demanda y excepcionó:

4.1. *"Inexistencia de responsabilidad civil en cabeza de la demandada Acción Fiduciaria"*: *"improcedencia de lo pretendido en virtud de la existencia de una **transacción**"; "inexistencia de responsabilidad civil en cabeza de Acción Fiduciaria por no acreditarse los elementos de la responsabilidad civil por parte de la demandante"*[12]; *falta de legitimación en la causa por pasiva – Acción Fiduciaria no está llamado a responder por*

---

[7] Porque no actuó con culpa, ni existe nexo causal, ni se generó un daño efectivo, real, directo y determinable, pues el dinero invertido por la actora se encuentra representado en la parte o alícuota que le corresponde del inmueble con matrícula n.° 370-695292 "**en el que se desarrollaría el proyecto**".

[8] Soportada en que "**no tenía el deber de verificar el cumplimiento de**" los "**requisitos**" a que alude la demandante, cuando ello era del resorte de la promotora e interventor, aunado a que no existe nexo causal, al haberse dado inicio a la obra.

[9] Fincada en que existe una diferencia fundamental del encargo fiduciario frente a la fiducia mercantil, que radica en la transferencia de la propiedad de los bienes fideicomitidos dados en la segunda, la cual es inexistente en el primero. Que en este asunto, "el único vínculo contractual que existió entre la parte demandante y Acción Fiduciaria, fue un encargo fiduciario, mas no un fideicomiso o patrimonio autónomo; es decir, que la propiedad de los recursos es del titular del encargo, Promotora Marcas Mall Cali S.A.S., sociedad constituyente, quien estableció las condiciones para el cumplimiento del punto de equilibrio y sólo ella las declara cumplidas como constituyente del encargo.

[10] Que la primera instancia se abstuvo de tramitar.

[11] Solicitud radicada el 17 de julio de 2019.

[12] Apoyada en que la parte demandante no cumplió con la carga de demostrar la responsabilidad civil de Acción Fiduciaria, conforme lo prevén los artículos 167 del CGP y 1604 del C.C., como tampoco probó los alegados perjuicios, máxime cuando los recursos invertidos los recibió la promotora y/o alguno otro sujeto diferente por ella autorizado.

el actuar de Marcas Mall Cali S.A.S.-"[13]*; "procedencia de la sentencia anticipada en cuanto se concreten los supuestos que dan lugar a su configuración"* y la *"genérica"*.

La primera defensa, que pidió acoger en sentencia anticipada (artículo 278 del CGP), soportada en que al existir *"una* ***transacción*** *como figura por medio de la cual se extinguen las obligaciones a la luz del Código Civil…, la demanda presentada… deriva en una clara intención de congestionar el sistema judicial…, dado que la misma carece de cualquier sustento fáctico y jurídico"*.

4.2. Frente al llamamiento también se opuso y excepcionó: *"ausencia de cobertura – inexistencia de responsabilidad de Acción Sociedad Fiduciaria"*[14], *"ausencia de cobertura de la póliza Sección III de responsabilidad profesional de la póliza n.° 1000099 expedida por SBS Seguros Colombia S.A. en cuanto sea aplicable cualquiera de las exclusiones dispuestas consignadas en los numerales 3.7. y 3.14 de las condiciones generales del seguro"*[15]; en subsidio, formuló las defensas que denominó: *"improcedencia de la indemnización de cualquier suma que resulte superior al límite asegurado de la Sección III de responsabilidad profesional de la póliza n.° 1000099 expedida por SBS Seguros Colombia S.A."*[16], *"agotamiento del valor asegurado"*[17], *"aplicación del deducible a cargo del asegurado pactado en la* [aludida] *póliza y Sección de responsabilidad civil profesional"*[18] y *"sujeción a los términos, límites y condiciones previstos en la Sección III de responsabilidad profesional de la póliza n.° 1000099 expedida por SBS Seguros Colombia S.A."*.

5. Sentencia anticipada de primera instancia.

El *a quo*, en audiencia, luego de exponer las razones para desestimar la excepción de cláusula compromisoria, y con soporte en el numeral 3° del artículo 278 del CGP, profirió fallo anticipado con el que acogió la excepción de **transacción** formulada por la sociedad demandada, sin condenar en costas.

Para concluir lo anterior, comenzó por recordar que los negocios acá cuestionados correspondían a la tipología de **fiducia inmobiliaria** regulada por los artículos 1226 del C. de Co.[19], 29 (lit. b) del EOSF y la Circular

---

[13] Fundada en que no está llamada a responder por acciones u omisiones de un tercero como Marcas Mall Cali S.A.S. en torno a la construcción del centro comercial.
[14] La aludida defensa, porque conforme al artículo 1056 del C. de Co., debe haber un daño, incumplimiento contractual y legal, y un nexo causal, lo que aquí no se demostró.
[15] Soportada en que según el numeral 3° de las condiciones generales de la póliza con fundamento en la cual ha sido llamada, excluyó su responsabilidad "en casos en los cuales se acredite que los reclamos provienen efectivamente de actos profesionales incorrectos de Acción Fiduciaria derivados de conductas delictivas, deshonestas, fraudulentas o maliciosas; o con violación de la ley por parte del asegurado, o ante un fraude que dé origen a los reclamos contra el asegurado por parte de sus clientes".
[16] Conforme a los artículos 1079, 1089 y 1111 del C. de Co., y lo pactado en la carátula de la póliza, existe un límite asegurado de $15.000'000.000,oo, suma a distribuir entre todos los asegurables que hayan reclamado durante la vigencia del contrato de seguro.
[17] Para cuyo efecto pidió primero certificar el estado de la póliza y valores pagados.
[18] Conforme al artículo 1103 del C. de Co., y lo acordado en el punto 4.14 del contrato de seguro, de haber una condena, deben deducirse $150'000.000,oo.
[19] Según el cual, se trata de un *"negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario"*.

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, para significar que la función de la demandada consistía en administrar los recursos de la inversionista, además de verificar unas condiciones plasmadas en el contrato de desarrollo y vinculación, para asegurar la recuperación de los costos del proyecto que debía comprobar, junto con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras (primera etapa). En cuanto a la ejecución o desarrollo (segunda etapa), sostuvo que a partir de ella se daba la transferencia de los recursos invertidos, para que, luego, la administradora (demandada) entregara las unidades adquiridas en el centro comercial y, por último, la liquidación (tercera etapa) que se relevaba de analizar por innecesaria.

Luego de considerar que en aquellas fases surgían varios contratos, como acá, esto es, el de encargo fiduciario de preventas promotor MR-799 (de 17 de diciembre de 2013), el de **fiducia mercantil** inmobiliaria FA-2351 (de 28 de marzo de 2014) y el encargo individual o de vinculación (n.º 0001100010199 de 14 de ese último mes y año) suscrito por la demandante, señaló que debían entenderse **coligados** y afectados entre sí conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (CSJ, SC18476-2017), sin poner en duda la calidad de **beneficiaria** de la actora por virtud de la cláusula 5ª del convenio MR-779 que la consideró así por ser **inversionista** (legitimación por activa).

Tras recordar los tres elementos específicos del fenómeno de la transacción (entre ellos el de "***concesiones recíprocas***" (min. 26:45) y sus efectos de cosa juzgada, el *a quo* señaló que hicieron presencia en la convención que de ese tenor suscribieron las partes, que podía ser consensual, pues en el otrosí reglamentario de 15 de diciembre de 2016, fue esa la *"voluntad de las partes"* conforme al artículo 1495 del C.C. y 824 del C. de Co., por lo que se *"extinguieron las relaciones jurídicas"* anteriores; allí se pactaron, además, adiciones en las cuales se sustituyeron los convenios de vinculación de 2014 y otrosíes, que obedecieron a la *"reestructuración financiera, técnica y comercial"* del proyecto Marcas Mall, que comprendió la *"total modificación de los términos y condiciones pactados"*, con la modificación de los encargos MR-799 de 2013 e individual de 2014, documentos que incluso dieron cuenta de los *"recursos transferidos al promotor"*, por lo que era admisible la renuncia de su derecho a demandar.

Aseveró que si bien el reconocimiento de intereses de los recursos entregados por la inversionista[20], se sujetó a un hito temporal desde el ingreso del dinero y hasta la entrega del local o la suscripción de las respectivas escrituras, la transacción no suponía haber quedado atada a esta solemnidad; además, lo convenido en el otrosí, fue dar paso a unas "*reglas del negocio nuevas*" para continuar con el proyecto inmobiliario, al punto que hubo un compromiso de suscribir un "otrosí" a la promesa de compraventa del local dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma de ese documento.

[20] Según el otrosí de 15 de diciembre de 2016, el promotor, Marcas Mall S.A.S., se obligó a pagar una tasa de interés del 0.75% mensual sobre los dineros que ingresaron al fideicomiso aportados para la inversionista, causados desde la suscripción de ese convenio y hasta la firma de la escritura pública de compraventa, o hasta que se haga entrega del local.

En cuanto al **engaño** de que dijo ser objeto la actora por desconocer para el 15 de diciembre de 2016 la entrega de los dineros al promotor, adujo que lo cierto era que existían elementos de juicio que permitían inferir que aquélla "sí conocía del estado del proyecto" y la aludida transferencia, porque:

a) En la demanda habló del estancamiento del proyecto tres años atrás (abril de 2015); pese a ello, suscribieron la transacción meses después, según se confesó en la demanda y se deducía de la reclamación directa.

b) No era dable que el representante legal de la demandante desconociera la transacción que firmaba, en la que se anunciaba la transferencia de los recursos al promotor de tiempo atrás, quien no pidió aclaración del otrosí que la recogió; es decir, la actora suscribió el nuevo acuerdo renunciando a su deber de informarse.

Refirió que la afirmación del extremo activo según la cual desconocía de la transferencia de los dineros al promotor y firmó mediante presión, carecía de soporte y se oponía a lo consignado en el otrosí; agregó que tampoco tenía el privilegio de hacer de su dicho su propia prueba, amén de que no se trató de un acuerdo de adhesión.

6. El recurso de apelación.

La parte demandante formuló sus reparos concretos en la audiencia, en esencia, soportados en lo siguiente:

6.1. El *a quo* fundamentó su fallo en la celebración del otrosí general reglamentario que suscribió, pero desconoció todas las actuaciones y pruebas documentales aportadas al proceso, que precedieron la suscripción del mismo; ignoró lo ordenado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y especialmente lo estipulado en la Circular Externa de 24 de julio de 2016, que imparte instrucciones en materia de negocios fiduciarios y establece los requisitos mínimos para los contratos de fiducia inmobiliaria; y principalmente, emitió su sentencia sin la observancia de los principios generales del derecho, en especial, el principio rector de la buena fe contractual.

6.2. Las pruebas demuestran que la demandante sí fue llevada a firmar dicho *otrosí* con engaños que viciaron su consentimiento, violando los principios de transparencia y debida y correcta información por parte de la entidad demandada.

6.3. Desconoció o no valoró las pruebas que demuestran que desde el 4 de noviembre de 2014, la accionada actuó de manera dolosa, al dar por "verificadas" unas condiciones que no se habían cumplido.

6.4. Pasó por alto que la demandada faltó a su deber de información, pues no le comunicó: **a)** las modificaciones que realizó al Contrato de Encargo de Preventas MR-799 sino hasta finales de noviembre de 2014, en tanto que el 4 anterior había iniciado la transferencia de los recursos, sin atender las condiciones pactadas con la inversionista en el encargo individual; **b)** la grave situación por la que atravesaba el proyecto; **c)** que renunciaba a su derecho de demandar las actuaciones dolosas del representante legal de la demandada; **d)** que el proyecto se descapitalizó en parte porque ella pagó el lote denominado Baxter, y **e)** que los dineros los había transferido tres (3) años antes, sin el cumplimiento de las condiciones establecidas para ello, sin que pudiera obviarse que la mera transgresión de la prestación consistente en suministrar datos relevantes para el consumidor es, *per se*, constitutivo de culpa.

6.5. Está prohibido "convenir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de la posición dominante", de suerte que el otrosí contentivo de la transacción, califica como una cláusula abusiva.

6.6. El fallo se fundamenta en la existencia del fenómeno de la "transacción", desconociendo los elementos esenciales para su formación, en especial, las **concesiones recíprocas**, pues la tasa de interés mensual que reconoció la promotora a favor de la inversionista, jamás se percibió, como tampoco el local comercial fue escriturado ni entregado.

6.7. La primera instancia se limitó a dar valor probatorio en forma aislada, sin otorgarle estudio alguno a las pruebas aportadas y practicadas.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 328 del CGP y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[21], la competencia del Tribunal se circunscribe al análisis de la sentencia anticipada apelada, en cuanto acogió la excepción de transacción propuesta por la sociedad demandada, defensa respecto de la cual se concedió y admitió la alzada.

El problema jurídico medular que le corresponde resolver en esta instancia al Tribunal, se concreta en determinar si la transacción que soporta la decisión recurrida constituye una cláusula eficaz o si, por el contrario, de acuerdo con las normas vigentes, y con apoyo en la jurisprudencia y la doctrina, es ineficaz de pleno derecho.

La Sala, una vez analizó los argumentos del juez *a quo*, los reparos concretos que acompañan el recurso de apelación y el material probatorio

---

[21] "El apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P. C., y 328 del C. G. del P.)." (CSJ, sentencia del 1° de agosto de 2014, expediente SC10223-2014, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).

recaudado, concluye que dicha estipulación, amén de ser ineficaz de pleno derecho, es nula de nulidad absoluta, lo que conlleva, en consecuencia, a revocar el aludido fallo, con soporte en los argumentos que a continuación se exponen.

En la demanda subsanada, Pasos Shoes S.A.S. pidió que *"por incumplimiento en las obligaciones contractuales y* ***legales****, se obligue a Acción Sociedad Fiduciaria S.A. a efectuar la devolución/restitución/reintegro total de los recursos depositados"*.

Como fundamento de tales pedimentos, la libelista relató, en esencia, que con motivo del contrato de fiducia mercantil fideicomiso (patrimonio autónomo) FA-2351 Marcas Mall Cali, el día 14 de marzo de 2014 se vinculó como **inversionista** con el local n.° 2-058, al proyecto inmobiliario denominado "*Centro Comercial Marcas Mall Cali*", a través del encargo fiduciario individual n.º 0001100010199 que suscribió con la Promotora Marcas Mall Cali S.A.S. (cesionaria contractual de Urbo Colombia S.A.S.) y Acción Fiduciaria S.A. (acá demandada); que de acuerdo con el clausulado del referido encargo individual, la accionada debía colocar a disposición de la promotora los recursos depositados junto con los rendimientos generados, "una vez se cumplan los requisitos establecidos en el presente contrato y en la cláusula tercera del encargo fiduciario de preventas promotor" MR-799 Marcas Mall de 17 de diciembre de 2013, cuya copia se les entregó; en su defecto, devolver los dineros a los inversionistas.

Añadió que de acuerdo con la citada estipulación tercera (MR-799), Urbo Colombia S.A.S. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A., acordaron como "**condici[ones]** para la transferencia de los recursos", las siguientes:

(i) constancia de radicación del permiso de ventas para cada etapa del proyecto; ***(ii)*** licencia de urbanismo y construcción vigentes para cada etapa del proyecto; ***(iii)*** carta de aprobación o pre-aprobación del crédito constructor otorgado por una entidad financiera para el desarrollo de cada etapa del proyecto; ***(iv)*** haber celebrado un total de contratos de promesas de compraventa con los *inversionistas* del proyecto que equivalgan al 52% de las ventas estimadas del proyecto; ***(v)*** haber celebrado un total de contratos de encargos fiduciarios individuales de preventa inversionistas que equivalgan al 52% de las ventas estimadas del proyecto; ***(vi)*** haber suministrado el presupuesto de construcción y el flujo de caja del proyecto debidamente aprobado por el *interventor* del mismo y por el *promotor*; ***(vii)*** que los encargos fiduciarios de los *inversionistas* cuenten, en suma, con saldos equivalentes al 15% del valor de las utilidades comprometidas en compraventa por los *inversionistas*, y ***(viii)*** certificado de tradición actualizado del terreno sobre el cual se desarrollará el proyecto, en el que conste que la propiedad del mismo está en cabeza de un fideicomiso administrado por Acción Fiduciaria S.A.

Las reseñadas condiciones también fueron plasmadas en el encargo individual n.º 0001100010199, fundamento de esta acción.

Sin embargo, los dineros de la inversionista –acá demandante- fueron transferidos al promotor, sin que: **(i)** se encontrara la propiedad del inmueble en el que se desarrollaría el proyecto, en cabeza de Acción Fiduciaria y **(ii)** los contratos de encargos fiduciarios individuales de preventa inversionista superaran el acordado **52%**.

Aunado a lo anterior, reprochó que su opositora, de un lado, suprimiera –sin informarle- la condición 7ª del encargo MR-799 atinente a que para la transferencia de sus recursos a la promotora, los encargos fiduciarios de los *inversionistas* debían contar con saldos equivalentes al 15% del valor de las utilidades comprometidas en compraventa, y de otro, que no verificara el requisito obligatorio de la carta de aprobación o pre-aprobación del crédito constructor, con lo que la demandada faltó a sus *"deberes contractuales"* de *"información, diligencia, profesionalidad, especialidad, previsión"* y *"de protección de los bienes fideicomitidos*", al igual que los *"**legales**"* previstos en los artículos 1618 a 1624 del C.C. y las normas que sobre fiducia prevén los artículos 1234 y siguientes del C. de Co., en claro desconocimiento de sus derechos como **beneficiaria**, cuya calidad, dicho sea de paso, no puso en duda la demandada[22].

Para fundamentar su medio exceptivo de transacción, la pasiva invocó el otrosí que ella como vocera del fideicomiso MR-799 Marcas Mall, junto con Marcas Mall Cali S.A.S. (promotora) y Urbanizar S.A. (Gerente del Proyecto), suscribió con Pasos Shoes S.A.S. el 15 de diciembre de 2016, según el cual: *"Las partes mediante el presente contrato, además de pactar las nuevas condiciones y términos del objeto del encargo fiduciario, manifiestan que transan y desisten de cualquier incumplimiento surgido con ocasión del contrato de encargo fiduciario originario firmado por las partes"* el día 14 de marzo de 2014, *"y sus posteriores otrosíes"*.

Pues bien, en el presente caso, la aludida transacción impone a la jurisdicción ordinaria asumir el conocimiento del asunto con un cuidado especial, por cuanto la endilgada desatención legal de los artículos 1618 a 1624 del C.C. y las normas que sobre fiducia estipulan los artículos 1234 y siguientes del C. de Co., ciertamente conlleva a analizar el clausulado bajo la óptica *pro consumatore*[23], o favorable al consumidor (artículo 78 de la Constitución Nacional[24]), si se tiene en cuenta que:

---

[22] Según se deduce del clausulado del encargo individual n.º 0001100010199: *"El (los) BENEFICIARIO(S) del presente contrato será(n) el (los) INVERSIONISTA(S)"*.

[23] puesto que *"… por su mayor vulnerabilidad, a lo que se suma el desequilibrio y la asimetría que, a menudo, signa la relación de consumo en la praxis (asimetría de poderes), se hace necesario considerar con mayor detenimiento y atención y, de contera, proteger más, entre ellos el fortalecimiento de los deberes especiales de información precontractual - y contractual según el caso-…"*. Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio (2015). La compraventa en el Derecho del Consumo, Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana e Ibáñez, pg. 94.

[24] CSJ, Cas. Civ. Sentencia de 12 de febrero de 2018, exp. 2010-00364-01, SC129-2018; se resalta).

En primer lugar, tal como lo sostuvo el *a quo* en un asunto de similares contornos (rad. n.° 201801214), desde la suscripción del encargo fiduciario individual, en este caso el n.º 0001100010199 de 14 de marzo de 2014, la demandada, en la **cláusula décima** que denominó "**manifestación especial**", mostró que actuaba como *"simple administradora fiduciaria del proyecto"* y que quedaba eximida de *"cualquier responsabilidad derivada directa o indirectamente"* de su *"ejecución"*, lo que calificó como una cláusula abusiva que se oponía a los artículos 11 de la Ley 1328 de 2009 y 43 de la Ley 1480 de 2011. Desde luego que la demandada tampoco desconoció que la redacción de ese clausulado era de su completa autoría.

La anterior redacción tampoco fue ajena a la cláusula primera (atinente al **objeto**) del otrosí de 15 de diciembre de 2016, a través del cual la pasiva invitaba a desistir de reclamar frente a "*cualquier incumplimiento surgido con ocasión del contrato de encargo fiduciario originario"*, sin que pueda obviarse que conforme al artículo 11, literal a) de la Ley 1328 de 2009, en concordancia con el artículo 43 de la Ley 1480 de 2011, toda convención que implique *"limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros"*, o limite los *"derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero"* (lit. d), se considera abusiva, como en este caso, cuya estipulación no podía incluirse so pena de su ineficacia de "pleno derecho" (artículo 42 de la citada ley 1480), únicamente frente a quienes aquí son parte.

Desde esa perspectiva, a juicio de la Sala, el parágrafo de la cláusula primera del otrosí suscrito por Acción Fiduciaria S.A. (fiduciaria), Marcas Mall S.A.S. (promotora), Urbanizar S.A. (gerente del proyecto), y Pasos Shoes S.A.S. (inversionista), el 15 de diciembre de 2016, debe considerarse ineficaz, no solo porque no se probó que "*las nuevas condiciones y términos del objeto del encargo fiduciario"*, en especial, lo atinente a los requisitos de transferencia de los recursos a la promotora, hubiesen sido debidamente informadas a la demandante con antelación a la firma de la transacción, sino porque al impedirle reclamar *"cualquier incumplimiento surgido con ocasión del contrato de encargo fiduciario"*, se "gener[ó] un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contra[jeron] las partes"; además, porque "incluida… en un contrato de contenido predispuesto [como acá], [dicha estipulación] establece, sin explicación seria, proporción ni razonabilidad, ventajas o prerrogativas excesivas para el predisponente, o cargas, obligaciones o gravámenes injustificados para el adherente, todo ello en detrimento del principio de celebración y ejecución de buena fe contractual y del normal y razonable equilibrio contractual"[25].

De cara a lo primero, esto es, sobre la ausencia del deber de información hacia la actora, en su condición de consumidor financiero,

[25] CSJ, Cas civ., 2 de febrero de 2001. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo J.

previo a la firma de la transacción, de "*las nuevas condiciones y términos del objeto del encargo fiduciario"*, en especial, de los requisitos de punto de equilibrio para la transferencia de los recursos al fideicomitente, no puede pasarse inadvertido que si a la demandante, la sociedad fiduciaria, cuya diligencia exigible *"no es apenas la que se espera de un buen padre de familia, referida por tanto a los negocios propios, sino la que corresponde a un profesional que deriva provecho económico de un servicio que compromete el ahorro privado y en el que existe un interés público"*[26], le anuncia en el otrosí de 15 de diciembre de 2016 que sus recursos **no han sido transferidos** al promotor -sin que la sociedad demandada hubiere acreditado que la actora sabía (con las pruebas recaudadas hasta ese momento) de la transferencia de sus recursos-, no puede menos que concluirse que su consentimiento no fue debidamente informado, como para aceptar, sin reparo alguno, la eficacia de la aludida clausula transaccional.

Y es que:

> "… en la medida en que las sociedades fiduciarias pretenden que sea el o los fideicomitentes promotores/ constructores/desarrolladores y los terceros interesados en adquirir las unidades inmuebles resultantes del proyecto de construcción quienes asuman los riesgos a los que está expuesto el desarrollo de éste, **la actitud de un profesional prudente y avisado las obliga no solo a informar, previamente a la celebración del respectivo negocio fiduciario, acerca de los riesgos a los que se encuentra expuesta la construcción, alertar sobre las dificultades y fracasos y, en su caso, exigir la aceptación expresa del o de los fideicomitentes promotores/ constructores/ desarrolladores y de los terceros interesados en adquirir las unidades inmuebles**, sino también cerciorarse hasta donde les sea posible, actuando de forma diligente, del estado de ejecución del proyecto de construcción, comparándolo con el presupuesto de costos directos, indirectos y financieros, y las fuentes proyectadas de financiamiento, **con miras a evitar que el proyecto se desarrolle en términos y condiciones distintas a las que se tuvieron en cuenta por** el o los fideicomitentes promotores/ constructores/ desarrolladores [y **los inversionistas interesados en adquirir las unidades inmuebles**] y, por ende, prevenir o evitar que se presenten hechos que degeneren en una grave alteración de la convivencia social o que sean constitutivos de punibles contra el patrimonio económico, o, en fin, que ocasionen perjuicios irreparables a quienes confiados y de buena fe aceptaron sin reparo alguno acceder [al inmueble resultante del proyecto de

[26] CSJ. Sentencia 3 de agosto de 2004. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Cfr, además. G.J. Tomo LXIX, pág. 688.

> construcción] valiéndose de un vehículo fiduciario"[27] (se subraya y resalta).

En cuanto a lo segundo; es decir, en lo que concierne a la estipulación según la cual los signantes *"manifiestan que transan y desisten de cualquier incumplimiento surgido con ocasión del contrato de encargo fiduciario originario firmado por las partes"* el día 14 de marzo de 2014, *"y sus posteriores otrosíes"*, aunque podría sostenerse, como lo hizo la primera instancia, que dicha cláusula deviene del libre juego de la autonomía privada, no puede obviarse que *"la concepción moderna de la autonomía de la voluntad privada supone la existencia de un poder dispositivo de regulación, pero sometido a la intervención normativa del Estado, de suerte que,* ***lejos de entrañar un poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares****, como era lo propio del liberalismo individualista, se encuentra sometido a la realización de la función social de la propiedad privada y de las libertades básicas de la economía de mercado. Así, en la actualidad, la autonomía de la voluntad privada se manifiesta de la siguiente manera: (…) (ii) En el logro o consecución no sólo del interés particular sino también del interés público o bienestar común; (iii) En el control a la producción de efectos jurídicos o económicos, con el propósito de evitar el abuso de los derechos; (iv)* ***En el papel del juez consistente en velar por la efectiva protección de los derechos de las partes, sin atenerse exclusivamente a la intención de los contratantes*** *y; (v)* ***A la sujeción de la autonomía de la voluntad a los parámetros éticos de la buena fe****"*[28].

Además, resulta de utilidad recordar que la sociedad accionada redactó en solitario el contenido del otrosí fustigado, sin que su oponente, interesada en adquirir uno de los locales resultantes del proyecto de construcción, hubiere tenido oportunidad real o efectiva de discutir su contenido[29], al tratarse, se *itera*, de cláusulas predispuestas o prediseñadas de modo unilateral, en las que no hay espacio para su negociación individual[30].

La jurisprudencia ha destacado la posición de dominio que, en muchas ocasiones, ostentan las instituciones financieras y de la que, en algunos casos, se sirven "para imponer el contenido del contrato, en la determinación unilateral de su configuración y en la posterior administración de su ejecución"[31], y que "… en la formación de un contrato y, específicamente, en la determinación de 'las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, pueden darse conductas abusivas', ejemplo prototípico de las cuales lo suministra el ejercicio del llamado 'poder de negociación' por parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no

---

[27] BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo. Fiducia Inmobiliaria. Tensión entre la autonomía privada, el derecho a la vivienda digna y el derecho del consumo, 1ª ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pág. 307.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-468 de 2003.
[29] Memos aún si, como se dijo, desconocía que sus recursos ya habían sido transferidos a la promotora, en razón a la inconsulta modificación de las condiciones de punto de equilibrio.
[30] CSJ. Sentencia de 2 de febrero de 2001. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
[31] *Ib.*, sentencia de 14 de diciembre de 2011 M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

solamente ha señalado desde un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contratación"[32].

Aplicadas las anteriores nociones al *sub judice*, considera la Sala que la cláusula en virtud de la cual la partes *"manifiestan que transan y desisten de [reclamar] cualquier incumplimiento surgido con ocasión del contrato de encargo fiduciario originario firmado…"* el día 14 de marzo de 2014, *"y sus posteriores otrosíes"*, debe considerarse como una manifestación abusiva derivada de la posición dominante que ostenta la sociedad fiduciaria en el contrato, pues la coloca en una posición de privilegio frente a la adherente, en la medida en que se favorece de manera excesiva o desproporcionada su posición contractual, en desmedro de aquella que ostenta la inversionista interesada en adquirir el local resultante del desarrollo del proyecto de construcción[33].

Y es que dicha estipulación no podría considerarse eficaz, si se repara en que, en el presente asunto, precisamente lo que se discute es la desatención de los deberes que en el marco de los negocios fiduciarios descritos en el acápite de antecedentes, le competía honrar a la sociedad fiduciaria, en particular, el relativo a la transferencia de los recursos a la promotora, una vez se hubieren satisfecho las condiciones previstas para tal fin, de suerte que "negarle a los terceros interesados en adquirir las unidades inmuebles resultantes del proyecto de construcción la posibilidad de reclamarle a la sociedad fiduciaria…, implica provocar una inequitativa y de paso inconsulta dilación en el cumplimiento del deber de prestación a cargo de la sociedad fiduciaria, desnaturalizando así la inocultable teleología de los negocios fiduciarios en general y, en particular, de la fiducia inmobiliaria y, por contera, modificando lo dispuesto en los artículos 1226 y 1234 numeral 1° del Código de Comercio"[34].

Ya la doctrina ha reconocido que "la estipulación en virtud de la cual [los] terceros adherentes manifiestan conocer y aceptar que la sociedad fiduciaria no es ni constructor ni gerente, ni interventor, ni promotor, ni participa de manera alguna en el desarrollo del proyecto de construcción, **ni verifica ni ejerce control sobre la destinación de los recursos entregados por ellos** y, en consecuencia, no es responsable ni puede serlo por la terminación, calidad o precio del bien que se determine en los contratos de vinculación, **ni tampoco por la administración, utilización y destinación de los recursos por parte del fideicomitente/ promotor/**

---

[32] *OP cit.,* CSJ. sentencia de 2 de febrero de 2001. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo J. G.J. Tomo CCXXXI, pág. 746.
[33] CSJ. Sentencia de 2 de febrero de 2001. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
[34] BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo. Fiducia Inmobiliaria. Tensión entre la autonomía privada, el derecho a la vivienda digna y el derecho del consumo, 1ª ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, pág. 307.

constructor, encuadra en lo que se ha señalado como caracterización de una cláusula abusiva, dada la notable y ventajosa desproporción, además injustificada, que genera a favor de las sociedades fiduciarias y en contra de los terceros adherentes" [35] (se resalta).

Y como uno de los **deberes indelegables** de las sociedades fiduciarias, se concreta en "… prevenir, evaluar y mitigar los riesgos a los que quedaría expuesta la construcción del proyecto si se dieran por satisfechas o cumplidas, **sin estarlo**, las condiciones de las que depende el denominado punto de equilibrio del proyecto"[36], no puede menos que concluirse que esa obligación *ex lege*[37] no puede soslayarse por la sola inclusión de una cláusula, cualquiera que sea su arquetipo, transaccional en el *sub lite*, que exonere de responsabilidad a la sociedad fiduciaria, porque conforme al artículo 11, literales a) y d) de la Ley 1328 de 2009, en concordancia con el artículo 43 de la Ley 1480 de 2011, "**se prohíben** las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que: a) prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros (…) [y] d) cualquiera… que limite los derechos de los consumidores financieros **y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato**, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero", lo que supone que cualquier estipulación en contrario, como la que se pactó en el presente asunto, debe reputarse, amén de abusiva, **absolutamente nula**, a voces de lo previsto en el numeral 1° del artículo 899[38] del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 6°[39], 1523[40], 1741[41] y 1742[42] del Código Civil, aplicables al presente asunto por la remisión a que alude el precepto 822[43] del estatuto mercantil.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en punto a las cláusulas abusivas, ha precisado que:

---

[35] *Ib.*, BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo. Fiducia inmobiliaria. Tensión entre la autonomía privada, el derecho a la vivienda digna y el derecho del consumo, pág. 136.
[36] *Ib.*, BAENA CÁRDENAS, Luis Gonzalo. Fiducia inmobiliaria. Tensión entre la autonomía privada, el derecho a la vivienda digna y el derecho del consumo, págs. 293 y 294.
[37] Dimanante de los artículos 1226 y 1234 del Código de Comercio.
[38] "Será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 1) **Cuando contraría una norma imperativa**, salvo que la ley disponga otra cosa; 2) **Cuando tenga** causa u **objeto ilícitos** (…)".
[39] "(…) **En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley**, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos".
[40] "**Hay** así mismo **objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes**".
[41] "**La nulidad producida por un objeto** o causa **ilícita**, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, **son nulidades absolutas**".
[42] "**La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato**; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. **Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse** por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria".
[43] "Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa".

> "(…) [son] todas aquellas que aún negociadas individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o corrección y comportan un significativo desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora económico, según los derechos y obligaciones contraídos (cas.civ, sentencias de 19 de octubre de 1994, CCXXXI, 747; 2 de febrero de 2001, exp. 5670; 13 de febrero de 2002, exp. 6462), que la doctrina y el derecho comparado trata bajo diversas locuciones polisémicas, tales las de cláusulas vejatorias, exorbitantes, leoninas, ventajosas, excesivas o abusivas con criterios disimiles para denotar la ostensible, importante, relevante, injustificada o transcendente asimetría entre los derechos y prestaciones, deberes y poderes de los contratantes, la falta de equivalencia, paridad e igualdad en el contenido del negocio o el desequilibrio *'significativo'* (art. L-132-1, *Code de la consommation Francia*; artículo 1469 bis *Codice Civile italiano*) *'importante'* (Directiva 93/13/93, CEE y Ley 7ª/1998 - modificada por leyes 24/2001 y 39/2002- España), *'manifiesto'* (Ley 14/7/91 Bélgica), *'excesivo'* (art. 51, ap. IV. Código de Defensa del Consumidor del Brasil; art. 3º Ley de contratos standard del 5743/1982 de Israel) o *'exagerado'* (C.D. del Consumidor del Brasil), *'sustancial y no justificado'* (Ley alemana del 19 de julio de 1996, adapta el AGB-Gesetz a la Directiva 93/13/93 CEE) en los derechos, obligaciones y, en menoscabo, detrimento o perjuicio de una parte, o en el reciente estatuto del consumidor, las ***'que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos'***, en cuyo caso *'[p]ara establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza'*, no podrán incluirse por los productores y proveedores en los contratos celebrados con los consumidores, y *'en caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho'* (artículos 42 y ss), y que igualmente las Leyes 142 de 1994 (artículos 131, 132 y 133) y 1328 de 2009 (D.O. 47.411, julio 15 de 2009, arts. 2o, 7o, 9o, 11 y 12), prohíben estipular"[44] (se resalta).

Puestas así las cosas, con fundamento en los anteriores argumentos, el fallo anticipado objeto de apelación se revocará, y en su lugar, se declarará nula la transacción que soportó la excepción que en ese sentido arguyó la demandada y en que se cimentó la sentencia recurrida; como consecuencia de ello, se regresará la actuación al fallador de primer grado para que continúe el trámite procesal que corresponda y dirima el litigio mediante sentencia definitiva; esto es, previo agotamiento de las etapas procesales previstas en la ley; sin condena en costas ante la prosperidad del recurso de alzada (artículo 365 del CGP).

[44] Sentencia del 19 de octubre de 2011. Referencia: 11001-3103-032-2001-00847-01

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Séptima Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. Revocar la sentencia anticipada de 4 de mayo de 2020 proferida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia; en consecuencia, declarar nula la transacción que soportó la excepción que en ese sentido arguyó la demandada y en que se cimentó la sentencia recurrida y, en su lugar, ordenar al *a quo* continuar con el trámite que legalmente corresponda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

Segundo. Sin condena en costas ante la prosperidad del recurso de apelación (artículo 365 del CGP).

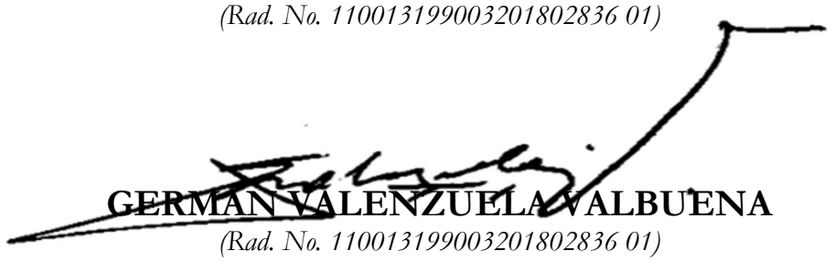
Devuélvase el proceso al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(Rad. No. 11001319900320180283601)



GERMAN VALENZUELA VALBUENA
(Rad. No. 11001319900320180283601)



ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
(Rad. No. 11001319900320180283601)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación: **11001-3199-003-2019-01224-01**
Asunto. Verbal –Acción del Consumidor
Recurso. Apelación de Sentencia.
Demandante. Italcol Obras S.A.S.
Demandado. Bancolombia S.A.
Reparto. 11/11//2020

ADMITIR, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación propuesto por el extremo demandante frente a la sentencia de 7 de octubre de 2020, dictada por la Superintendencia Financiera de Colombia -Delegatura para Funciones Jurisdiccionales- dentro del proceso verbal de mayor cuantía impetrado por Italcol Obras S.A.S. contra Bancolombia S.A.

ACEPTAR el desistimiento de la alzada interpuesta por la demandada -Banco de Colombia S.A.-, sin que ese actor procesal genere condena en costas, por no aparecer causadas (Art.316 C.G.P.).

En firme, reingrese **INMEDIATAMENTE** el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación:	**11001-3199-003-2019-03755-02**
Asunto:	Verbal –Acción del Consumidor
Recurso.	Apelación de Sentencia.
Demandante.	Centro de Investigaciones Médicas de Antioquia Cima en Liquidación
Demandado.	Bancolombia S.A.
Reparto.	11/11//2020

ADMÍTASE, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación propuesto por el extremo demandante frente a la sentencia de 9 de octubre de 2020, dictada por la Superintendencia Financiera de Colombia -Delegatura para Funciones Jurisdiccionales- dentro del proceso verbal de mayor cuantía impetrado por el Centro de investigaciones Médicas de Antioquia cima (en liquidación) contra Bancolombia S.A.

En firme, ingrese **INMEDIATAMENTE** el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

DEMANDANTE	:	ÁLVARO LAGUNA GARAY
DEMANDADOS		SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
CLASE DE PROCESO	:	VERBAL.

Se ADMITE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2020 por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del proceso de la referencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, la Secretaría procederá a contabilizar el término de cinco (5) días que tiene la accionada para sustentar su recurso, pues en caso de no hacerlo, el mismo se le declarará desierto; y de la sustentación que se presente correrá traslado a la parte contraria en la forma y términos previstos por el artículo 14, en concordancia con el 9, del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Tanto la sustentación como la réplica se remitirán al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cada parte, si es del caso, acreditará el envío del escrito a su contraparte para los efectos del artículo 3 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto mencionado, lo cual deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría

Notifíquese

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso No.	11001310300420160056**8 01**
Clase:	ADJUDICACION DE GARANTIA REAL
Ejecutante:	LUZ VIRGINIA LOZANO BUITRAGO
Ejecutado:	ÓSCAR GIL GUTIÉRREZ y otros

Con miras a darle impulso a este asunto, por secretaría requiérase con los apremios de ley al Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, para que, en el término de la distancia, se sirva informar el trámite dado a la solicitud realizada en auto del pasado 6 de octubre.

CÚMPLASE

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
**54f4724a45783695dc2eeae3e591329373b3c66e3a0f9c19f2d8ed77
6c7f5b1e**
Documento generado en 16/12/2020 09:08:12 a.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica**

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrado Sustanciador Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Proceso	Verbal
Demandante	Luis Alejandro Vásquez Rojas y/o
Demandado	Médicos Asociados S. A. Y/O
Radicado	11 001 31 03 **005 2007 00324 01**
Instancia	Segunda
Decisión	Niega concesión de recurso extraordinario de casación

Se decide sobre la concesión del recurso de casación planteado por Médicos Asociados S. A. contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación dentro del proceso en referencia.

I. CONSIDERACIONES

1. De conformidad con el artículo 334 del Código General del Proceso, el recurso extraordinario de casación procede frente a las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y las emitidas para liquidar una condena en concreto.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 338 ibídem, cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv).

Por su parte, el artículo 337 *ejusdem*, en torno a la oportunidad y legitimación para interponer el recurso, establece que éste podrá

formularse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia, no obstante, si se solicitó oportunamente adición, corrección o aclaración, o estas se hicieren de oficio, el término para recurrir en casación se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva.

Adviértase, la norma en cita también dispone que no podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado, cuando la proferida por el Tribunal hubiere sido exclusivamente confirmatoria de aquella.

2. En el sub examine dentro del término previsto en el citado artículo 337, la demandada Médicos Asociados S. A., interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia dictada por esta Corporación el 18 de agosto de 2020, por manera que los requisitos de legitimación y oportunidad de ese recurso se encuentran cumplidos.

No obstante, la resolución desfavorable al impugnante no acredita el interés necesario para recurrir en casación, la cuantía del agravio no supera el límite establecido en el artículo 338 del C. G. del P.

3. Atendiendo que la sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, se tiene que el agravio a Médicos Asociados S. A. son las siguientes condenas confirmadas en su contra:

Demandante	***Perjuicio***	***Resolución desfavorable***
Luis Miguel de la Coromoto Vásquez Zabala	*Moral*	*35 s. m. m. l. v.*
María Mónica Zabala López	*Moral*	*5 s. m. m. l. v.*
Luis Alejandro de la Coromoto Vásquez Roja	*Moral*	*5 s. m. m. l. v.*
	Total condena	*45 s. m. m. l. v*

De manera que, como la resolución desfavorable a la recurrente equivale solo a 45 s. m. m. l. v., refulge palmario que no supera la cuantía para recurrir en casación, no es superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 s. m. l. m. v.)

4. Así las cosas, si bien se encuentran satisfechos los presupuestos de legitimación y oportunidad para interponer el recurso de casación, no ocurre lo mismo con su procedencia. El valor actual de la resolución desfavorable a la recurrente no es superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), situación que abre paso a la denegatoria del recurso de casación bajo estudio.

II. DECISIÓN

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO. DENEGAR el recurso extraordinario de casación planteado por Médicos Asociados S. A. contra la sentencia proferida por esta Corporación en segunda instancia el 18 de agosto de 2020, dentro del proceso en referencia.

SEGUNDO. En firme este proveído devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE

Documento con firma electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
517139b728bacdd8adb619ae6ae30833869ccbe856a5c75c6ee0b885bfd746e7
Documento generado en 16/12/2020 02:19:38 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 1101-3199-005-2018-09645-01
Asunto: Verbal
Recurso. Apelación Auto
Demandante: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia - Sayco.
Demandado: María Angélica Vidal.

Decídase lo pertinente respecto a la apelación interpuesta por la demandada frente a la decisión proferida en audiencia el 14 de octubre de 2020, por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales, dentro del proceso de propiedad intelectual citado en la referencia.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

1. **El auto recurrido**. Decretó la prueba documental allegada por la parte demandante denominada "*planilla del repertorio utilizado en el evento anunciado como concierto los Tigres del Norte que se llevó a cabo el día 3 de noviembre de 2019 en el Municipio de la Plata –Huila*"

2. **La censura**. La recurrente rebatió esa decisión, en reposición con alzada subsidiaria, cimentando su disenso, en que, debió ser rechazada la documental "*planilla del repertorio utilizado en el evento anunciado como concierto los*

Tigres del Norte", por ser ilícita pues no emanó del encargado de la organización del evento, resultando violatoria del debido proceso.

3. **Análisis del caso en concreto**. Como es bien sabido, en materia de apelación de autos, el Código General del Proceso consagró el sistema de la taxatividad (numerus clausus), conforme al cual únicamente son censurables por esa vía los pronunciamientos frente a los que el legislador así lo autorice[1] y, por contera, no es posible acudir en este punto, a interpretaciones extensivas o analógicas.

Así, a la luz del numeral 3º del artículo 321 del Código General del Proceso solamente será apelable el auto "que niegue el decreto o la práctica de pruebas".

Y ocurre que en el caso sub-júdice el auto atacado, en estrictez, decretó como pruebas documentales las aportadas por la demandante, entre ellas, la planilla objeto de la censura formulada; por consiguiente, esa determinación no es susceptible de la alzada interpuesta, pues, no está enlistada en el precitado artículo ni en norma especial

4. Por lo demás, si bien la apelante al sustentar su inconformidad adujo la ilicitud de la prueba, la cual decantaría en una eventual nulidad constitucional por vulneración al debido proceso, lo cierto es que, tal como quedó dicho, la decisión opugnada versó sobre el decreto de la prueba en cuestión, mas nada resolvió respecto a la eventual nulidad constitucional a que hizo alusión la recurrente en la fundamentación del recurso.

Aún más, si en gracia de discusión, la demandada perseguía la declaración de una supuesta nulidad constitucional, sobreviniente al decreto de la prueba tildada de ilícita, debió entonces formular la respectiva solicitud ciñéndose a las normas que regulan dicha institución, a fin de que fuese sometida al trámite correspondiente para su definición por el juez cognoscente y, en el evento de disentir de lo allí resuelto traer la discusión a esta instancia.

[1] FORERO SILVA, Jorge. Oralidad en los procesos civiles -Código General del Proceso-. Módulo de Aprendizaje Autodirigido del Plan de Formación de la Rama Judicial. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2014, pág. 130.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- Declarar **INADMISIBLE** el recurso de apelación, interpuesto por la demandada contra el auto que decretó la prueba documental denominada "planilla del repertorio utilizado en el evento anunciado como concierto los Tigres del Norte que se llevó a cabo el día 3 de noviembre de 2019 en el Municipio de la Plata – Huila", proferido en la audiencia realizada el 14 de octubre de 2020, por la Dirección Nacional de Derechos de Autor – Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales, dentro del proceso de propiedad intelectual citado en la referencia.

Segundo.- Devolver el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación:	1101-3199-005-2018-09645-02
Asunto:	Verbal
Recurso.	Apelación Auto
Demandante:	Sociedad de Autores y Compositores de Colombia - Sayco.
Demandado:	María Angélica Vidal.

Decídese lo pertinente respecto a la apelación interpuesta por la demandada frente al auto que aceptó el desistimiento de la práctica del testimonio de Juan Carlos García, proferido en la audiencia del 24 de noviembre de 2020, por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales, dentro del juicio compulsivo citado en la referencia.

Para resolver, bastan las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El estatuto procesal civil vigente[1], en materia de apelación de autos, acogió el sistema de la taxatividad (numerus clausus), según el cual únicamente son susceptibles de ese medio de impugnación las decisiones que expresamente así lo autorice el legislador y, por ende, no es admisible interpretación extensiva en orden a buscar la determinación de autos apelables sobre el supuesto de que son parecidos similares a los que la admiten.

[1] Código General del Proceso.

De ahí que la precitada codificación, determina claramente los proveídos proferidos en primera instancia que son objeto de alzada, relacionádolos en los numerales 1º al 9º de su artículo 321, adicionando además los expresamente señalados en norma especial (Art.321, num.10 ibídem).

Por ello, la doctrina ha explicado que "salvo los casos señalados en el artículo 321, los restantes autos no admiten recurso de apelación por cuanto se quiso dar al mismo un carácter eminentemente taxativo, con lo cual se prestó un valioso servicio a la economía procesal, pues se impide la apelación de múltiples autos que no justifican el dispendioso trámite del recurso. La taxatividad implica que se erradica de manera definitiva la tendencia de algunos jueces a permitir el recurso de apelación respecto de providencias que no lo tienen previsto, sobre la base de que son parecidas o con efectos similares a otras donde sí está permitido, por cuanto el criterio de taxatividad impide este tipo de interpretación (…)"[2].

2. En el caso sub-júdice, el proveído opugnado aceptó el desistimiento del demandante de la declaración de Juan Carlos García, pues advirtió que aún no había sido recaudada, y así lo permitía la regulación legal; arguyó, también, que el deponente no concurrió a la audiencia, y en ella, según el artículo 373 del C.G.P., se recepcionaran "*las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás*".

Empero, esa decisión no está enlistada "expresamente" en el citado artículo 321, ni en norma especial, lo cual evidencia que no es susceptible de la alzada propuesta, habiéndose equivocado el a quo en su concesión.

---

[2] *López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Parte General. Bogotá, DUPRE Editores, 2016, pág.793 y 794).*

Y es que resulta desafortunado entender que la aceptación del "desistimiento de la práctica" de dicho testimonio **equivale** a negar la práctica de la misma, decisiones disimiles, en tanto que la primera presupone la renuncia a su práctica por la parte que la solicitó, en ejercicio del poder dispositivo reconocido en el artículo 175 ejusdem[3], es decir, media la voluntad de aquel, lo que no ocurre cuando el juzgador niega la misma, determinación ésta que amerita la revisión por el superior de los fundamentos esgrimidos por el *a quo* para no acceder a la realización de la prueba, lo cual explica el porqué de su apelabilidad.

3. Siendo ello así, se impone inadmitir la alzada de que aquí se trata.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- Declarar **INADMISIBLE** el recurso de apelación, interpuesto por la demandada frente al auto que aceptó el desistimiento de la práctica del testimonio de Juan Carlos García, proferido en la audiencia del 24 de noviembre de 2020, por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Secretaría de Asuntos Jurisdiccionales, dentro del juicio compulsivo citado en la referencia.

Segundo.- Oportunamente, **devuélvase** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Magistrada

*[3] Artículo 175 del C.G.P., según el cual "Las partes **podrán desistir de las pruebas no practicadas** que hubieren solicitado. No se podrá desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 270".*

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	EJECUTIVO
DEMANDANTE	**:**	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.
DEMANDADO	**:**	CÉSAR QUINTERO TOVAR
RADICACIÓN	**:**	1100131 03 006 2020 00124 01
DECISIÓN	**:**	**REVOCA**
FECHA	**:**	16 de diciembre de 2020

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra del auto de veintiséis (26) de febrero de 2020, mediante el cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá denegó el mandamiento de pago solicitado en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES:

Por intermedio de apoderado judicial, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. presentó demanda ejecutiva contra CÉSAR QUINTERO TOVAR, con el fin de obtener de este el pago de la obligación contenida en la Resolución No. 0597 de 30 de abril de 2019, que asciende a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS ($141.854.103).

Mediante el auto apelado el Juzgado de conocimiento negó la ejecución deprecada; decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación.

FUNDAMENTOS DEL AUTO APELADO:

El Juzgado negó el mandamiento por considerar que no se encontraba probada la exigibilidad de la obligación cuyo cobro se pretende por la vía ejecutiva. El *a quo* arribó a esa conclusión al encontrar que en la Resolución No. 0597 de 30 de abril de 2019 "*no se especificó en qué tiempo debía realizarse el pago o en que fecha se haría exigible la obligación*". En consecuencia, negó el mandamiento de pago, por considerar que el acto administrativo carecía del requisito de exigibilidad.

ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE:

La parte actora replicó la decisión del *a quo* con fundamento en que se desconoció en el auto apelado que la obligación cuya ejecución se pretende es pura y simple. Explicó que era claro que se trataba de una obligación pura y simple, pues no estaba sujeta a plazo o condición. Así las cosas, la obligación era exigible desde su nacimiento, por lo que resultaba viable su ejecución, por tratarse de un acto administrativo que se encontraba en firme.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:

Sin que exista en este momento discusión alguna respecto del cumplimiento de los requisitos formales del título ejecutivo, el Despacho centrará su estudio en el reparo formulado, para lo que analizará si la obligación contenida en la Resolución No. 0597 de 30 de abril de 2019 es exigible.

El *a quo* determinó que dicha obligación no cumplía con el requisito de exigibilidad debido a que "*no se especificó en qué*

tiempo debía realizarse el pago o en qué fecha se haría exigible la obligación".

No comparte dicho criterio este Despacho, pues, ciertamente, se trata de una premisa que desconoce que las obligaciones cuando no se encuentran sometida a ninguna modalidad (plazo, condición o modo) son exigibles desde el momento de su nacimiento. Se trata de las obligaciones conocidas como puras y simples, en las que, como ya se dijo, se confunde el momento de su nacimiento con el de su exigibilidad, debido a que ocurren de forma simultánea. En palabras de la Corte Suprema de Justicia: "*En las obligaciones puras y simples, el momento en que la obligación nace y aquél en que debe ser cumplida, es decir, el instante del nacimiento y el de su exigibilidad, se confunde. Esos dos momentos son uno mismo en el tiempo*"[1].

De ahí que la jurisprudencia reconozca que, de cara a su ejecución, la prestación "*es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida*"[2]. Esta posición también es recogida en la doctrina, de acuerdo con la cual "*se dice que una obligación es exigible cuando se puede requerir su solución: porque es pura y simple. Si estuvo sujeta a plazo o condición, porque aquel y esta se han cumplido*"[3].

Ahora bien, tratándose de un acto administrativo debe tenerse en cuenta, que "*la exigibilidad del título ejecutivo implica, también, que el acto haya adquirido firmeza, esto es que se encuentre*

---

[1] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 8 de agosto de 1974. M.P. Germán Giraldo Zuluaga.
[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de Tutela 14 de marzo de 2019. No. STC3298-2019. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
[3] Jairo Parra Quijano. *Derecho Procesal Civil*, Tomo II, Parte Especial (Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1995), p. 265.

ejecutoriado"[4], de tal forma que "*una vez en firme, tiene la calidad de providencia que conlleva ejecución*"[5].

Sin perjuicio de que este punto se estudie nuevamente con posterioridad, en una fase subsiguiente del trámite, de manera inicial, se observa que la obligación contenida en la Resolución No. 0597 de 30 de abril de 2019 corresponde a una obligación pura y simple, pues no se le sujetó ninguna modalidad, de tal forma que aquella era exigible desde el momento de su nacimiento. Adicionalmente, se observa preliminarmente que la firmeza y ejecutoria del acto administrativo, así como el carácter de primer ejemplar de la copia del referido acto administrativo acompañada con la demanda, se encuentran certificados con la constancia de 2 de mayo de 2019, suscrita por la Coordinadora GIT ASREC (fl. 4, C.1).

En tal virtud, comoquiera que erró el *a quo* a la hora de examinar la exigibilidad de la obligación, al pasar por alto el régimen de las obligaciones puras y simples en punto de su exigibilidad, se revocará la providencia apelada y se ordenará al *a quo* que estudie los demás presupuestos del título ejecutivo en los términos del artículo 422 del C.G.P. y demás normar concordantes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. – Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO. Revocar el auto de veintiséis (26) de febrero de 2020, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, y, en su lugar, ordenar al juez de conocimiento que estudie los demás

---

[4] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 14 de febrero de 2019. No. 60049. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
[5] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 27 de julio de 2005. No. 23565. C.P. Ruth Stella Correa.

presupuestos del título ejecutivo en los términos del artículo 422 del C.G.P. y demás normar concordantes.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE,



LIANA AIDA LIZARAZO V.
Magistrada.

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f2482f6de64b3053708be2c6b0653b7befe1d0e9f77d0d473dd33391e4bd4772**
Documento generado en 16/12/2020 09:29:27 a.m.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte

1. El presente proceso fue remitido a este despacho por la H. Magistrada a quien, de manera inicial, se le repartió este asunto, al considerar que el término para emitir sentencia de segunda instancia había fenecido sin que oportunamente se prorrogara el plazo legal, por lo que dispuso "declarar la pérdida de competencia de [ese] despacho judicial para continuar conociendo de este proceso", ordenando que se enterara de esa determinación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la remisión del expediente al suscrito magistrado, quien le sigue en turno en esta sala de decisión.

2. No obstante que esa remisión tiene apoyo formal en lo dispuesto por el artículo 121 del Código General del Proceso, existen variadas razones de orden legal y fáctico que me llevan a rechazar la competencia que se me asigna, comenzando por la circunstancia de que antes de la emisión de la sentencia C-443 de 2019 -que definió la constitucionalidad de la citada regla-, resolví cerca de 38 conflictos de competencia suscitados entre juzgados civiles del circuito en los que expuse mi posición sobre la inviabilidad de la pérdida de competencia que se amparaba en la norma evocada, analizando las circunstancias acaecidas en cada evento particular, como: *i)* la verificación de si se cumplía con un plazo razonable, *ii)* el contraste de la gestión desplegada por las partes con el principio de lealtad procesal, *iii)* el escrutinio acerca del uso de los medios de defensa utilizados y la incidencia en la duración del juicio, *iv)* la justificación del tiempo tomado para resolver el debate e, incluso, *v)* la posibilidad de que el titular del despacho hubiere cambiado. Por igual, en algunos casos fue preciso establecer la correcta

aplicación del tránsito de legislación entre los Códigos de Procedimiento Civil y General del Proceso.

2.1. Así mismo, es importante destacar que en las referidas decisiones se valoró que mediante sentencia T-341 de 2018, la Corte Constitucional explicó que en la implementación del artículo 121 es "necesario armonizar el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia, contribuir en hacer realidad la aspiración ciudadana de una justicia recta, pronta y oportuna, y hacer efectivo el deber de lealtad procesal que le asiste a las partes en sus actuaciones ante las autoridades judiciales", época desde la que se advertía que la incursión en un "incumplimiento meramente objetivo" no implica "*a priori*, la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto, la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática".

2.2. Por igual, conviene evocar que en la sentencia C-443 de 2019 se consignó que "la circunstancia de que el sólo vencimiento de los términos legales tuviese como consecuencia inexorable el traslado del respectivo proceso a otro operador de justicia, independientemente de la voluntad de las partes, del estado del trámite judicial y de las razones de la tardanza, genera una serie de traumatismos en el funcionamiento de los procesos y del sistema judicial en general. Estos traumatismos y disfuncionalidades, muchas veces de gran calado, provocan la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y del derecho al debido proceso…", por lo que "… el juez que conoce de un proceso cuyo plazo legal ha fenecido, en principio puede seguir actuando en el mismo, salvo que una de las partes reclame la pérdida de la competencia y manifieste expresamente que las actuaciones ulteriores son nulas de pleno derecho".

2.3. La pérdida automática de competencia *per se* encarna una irregularidad que, conforme lo establece el artículo 133 del Código General del Proceso queda subsanada "si no se impugna oportunamente por los mecanismos que este código establece", tal cual

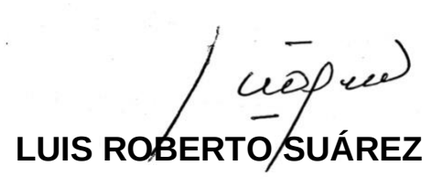
acaece en este asunto, porque ninguno de los litigantes ha cuestionado esa circunstancia con posterioridad al vencimiento de la oportunidad para definir la instancia, por lo que, en concordancia con el artículo 139 del estatuto adjetivo “el juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes [circunstancia que aquí ocurrió], salvo por los factores subjetivo y funcional”, de los cuales ninguno se configura.

2.4. De igual manera, cumple recordar que la Sala de Gobierno de esta corporación, en auto del 12 de diciembre de 2019, al resolver un conflicto de competencia surgido en virtud de la aplicación del artículo 121 del estatuto adjetivo, estimó que “…el término que se dispone en la norma, corre de manera interrumpida siempre y cuando el funcionario hubiera tenido los medios y la oportunidad de resolver el recurso, y aún así no se hubiera realizado. Contrario a ello, no se puede … atribuirle a un funcionario judicial el vencimiento de términos judiciales –con posibles consecuencias disciplinarias– cuando material y jurídicamente se encontraba imposibilitado de tal proceder.

3. Aplicadas las anteriores nociones al caso en estudio, estimo que no había lugar a que la H. Magistrada se apartara del conocimiento del asunto porque además de que ninguna de las partes hizo alguna manifestación sobre ese particular luego del vencimiento del término para fallar, la reincorporación de la compañera de sala al cargo ocurrió el 14 de octubre de 2020 –según se indicó en auto del 19 del mismo mes y año–, de donde se desprende que, materialmente, estaba imposibilitada para definir la apelación propuesta contra la sentencia de primera instancia, dentro del término objetivo previsto para tal efecto, siendo del caso que se valore el silencio de las partes –que deja ver su anuencia para que el asunto continúe bajo la sustanciación de la H. Magistrada– y la excepcional circunstancia de que la funcionaria se reincorporó al Tribunal, siéndole imposible zanjar la instancia en el plazo señalado en el artículo 121 del Código General del Proceso. En consecuencia, ante las circunstancias expuestas, este despacho carece de atribución para presentar la ponencia que resuelva la alzada, siendo del caso proponer **conflicto negativo de competencia**.

Finalmente, como la divergencia se promueve entre dos autoridades de igual categoría pertenecientes al mismo distrito y, de acuerdo con pronunciamiento del 12 de diciembre de 2019 –citado– la Sala de Gobierno de esta corporación estimó ser la competente al efecto, en aplicación de lo consagrado en el artículo sexto literal “e” del acuerdo PCSJA17-10715, según el cual concierne a esa dependencia “resolver los conflictos que por razón del reparto de asuntos sometidos a las salas especializadas se susciten entre los magistrados”, remítasele para los fines pertinentes.

Notifíquese,



LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-008-2018-00093-01
Asunto: Ejecutivo
Recurso. Apelación Auto
Demandante: José Desiderio Barrera López.
Demandados: Jaime Rojas García.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante frente al auto emitido el 19 de noviembre de 2019, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, dentro del juicio ejecutivo adelantado por José Desiderio Barrera López contra Jaime Rojas García.

ANTECEDENTES

1. El proveído opugnado modificó y aprobó la liquidación del crédito en $840’972.575,80.

2. Oportunamente el demandante recurrió esa decisión, en reposición y apelación subsidiaria, pidiendo aumentar el importe total del crédito, porque, a su juicio, ese estado de cuenta no aplicó tasa máxima del interés moratorio, certificada por la Superintendencia Financiera, conforme se decretó en el mandamiento de pago.

3. El ejecutado guardó silencio, dentro del traslado respectivo.

4. El A-quo mantuvo la providencia impugnada, soportado en que la liquidación fue elaborada en el programa respectivo de la Rama Judicial, el que está actualizado y se ajusta a las tasas de la prenombrada Superintendencia.

Subsecuentemente, concedió la alzada subsidiaria, la que ahora es objeto de decisión, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. En la fase liquidatoria del crédito no es viable cuestionar la idoneidad y los términos de la ejecución, pues el escenario concebido para tal fin se cierra indefectiblemente con el proferimiento de la providencia que ordena proseguir el compulsivo.

Sobre el particular, el Tribunal sostuvo: "*sentada la inmutabilidad de la sentencia y la conexidad de la liquidación del crédito que no puede ser cuestión distinta que a la mera refrendación, para el caso, del mandamiento de pago, en concordancia con el fallo (…) so pretexto de la liquidación del crédito no es de recibo, ni es el camino viable, para de nuevo abrir la posibilidad de cambiar, ni la fuerza vinculante, ni el claro entendimiento de la sentencia, y de paso, no solamente volver a discutir la prestación debida, abriendo veladamente la posibilidad de retrotraer la actuación que quedó sellada al precluir el término para promover excepciones, sino más grave aún, pretendiendo modificar la sentencia*", la cual, una vez ejecutoriada y en firme, "*determina la posición de las partes para el futuro*"[1].

Entonces, la elaboración del estado de cuenta comporta la verificación cuantitativa de la obligación, claro está, con estricto apego a la orden compulsiva y a la sentencia, de suerte que en esa etapa no procede reexaminar aspectos ya

[1] *Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, autos de 9 de febrero de 2011, exp. 16-2008-00419-05, y 16 de mayo de 2012, exp. 22-2002-00685-03 (M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez); con similar orientación, los proveídos de 17 de septiembre de 2013, exp. 22-2003-00282-03, 25 de septiembre de 2015, exp. 18-2014-00313-01 y 16 de diciembre de 2016, exp. 06-1999-13006-07 (M.P. Nubia Esperanza Sabogal Varón).*

planteados por las partes en el decurso de la ejecución, y mucho menos, suscitar controversias que ellas dejaron de someter oportunamente a estudio de la jurisdicción.

2. Siendo ello así, para dilucidar la suerte de la alzada resulta indispensable remitirse al auto de apremio y a la providencia que ordenó continuar con el cobro para establecer si la liquidación aprobada por el fallador de primer grado, frente a las obligaciones contenidas en las letras de cambio allegadas al proceso, se ajusta o no a los parámetros esbozados en tales pronunciamientos.

El mandamiento ejecutivo fue librado el 18 de abril de 2018 y adicionado el 9 de mayo de 2019, donde se ordenó el pago de las obligaciones contenidas en los títulos-valores, así:

Capital	Intereses de plazo (a la tasa de la Superintendencia Financiera).	Intereses de mora (a la tasa de la Superintendencia Financiera).
$25’473.000	21 feb. 2013 – 20 oct. 2017	Desde el 21 oct. 2017
$41’010.000	21 feb. 2013 – 20 oct. 2017	Desde el 21 oct. 2017
$50’000.000	21 feb. 2013 – 20 oct. 2017	Desde el 21 oct. 2017
$213’600.000	21 feb. 2013 – 20 oct. 2017	Desde el 21 oct. 2017
$42’000.000	21 feb. 2013 – 20 oct. 2017	Desde el 21 oct. 2017

2. Ante el silencio del enjuiciado, el *a-quo* dispuso seguir adelante la ejecución en los mismos términos de la orden de apremio, el 21 de junio de 2019.

4. Así, en principio el reproche esgrimido en torno a la fórmula de cálculo de los réditos de mora sobre cada uno de los capitales, será desestimado, como quiera que el inconforme no explicitó -y menos demostró- de manera clara y precisa, cuáles son las inconsistencias de dicha fórmula matemática, o los errores en el cálculo de las tasas de interés moratorio utilizadas, aspecto sobre el cual ninguna ilustración ofrece la liquidación por él aportada primigeniamente, pues en su estado de cuenta ni siquiera diferenció los intereses corrientes de los de mora, conforme lo dispuesto en la orden coercitiva. Además, como ya se dijo esa no

es una etapa que permita modificar el mandamiento ejecutivo, por lo que a todas luces, se insiste, ese estado de cuenta tampoco refleja la orden de pago.

Por ende, en lo que concierne a la tasa aplicada para liquidar los réditos moratorios, no le asiste razón al recurrente, toda vez que tal y como aparece en la liquidación emitida en primera instancia, se están indicando los porcentajes correspondientes certificados por la Superintendencia Financiera para cada periodo aplicado, teniendo en cuenta que el liquidador los arroja automáticamente.

5. Sin embargo, en la liquidación realizada por el juez de primera instancia se observa que sobre el capital de $50'000.000 no se aplicaron los intereses de plazo ordenados, en el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2013 y el 20 de octubre de 2017, es más, ni siquiera se imputaron réditos. Adicionalmente, en todos los capitales los rendimientos corrientes se impusieron hasta el 19 de octubre de 2017, cuando se decretaron hasta el 20 de octubre de ese año.

Lo anterior, comporta razón suficiente para realizar nuevamente la liquidación del crédito en los términos del mandamiento de pago y la orden de seguir adelante.

6. En suma, la decisión cuestionada será revocada, para incluirse en el estado de cuenta los intereses remuneratorios en comento y conforme a los plazos establecidos.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- REVOCAR el auto de fecha y procedencia prenotadas, para en su lugar modificar y aprobar la liquidación del crédito con corte al 4 de octubre de 2019, en cuantía de ochocientos ochenta y cuatro millones ciento un mil ciento

sesenta y dos pesos ($884’101.162.oo) m/cte., conforme a la liquidación del crédito adjunta a esta providencia y que hace parte integral de la misma.

Segundo.- Oportunamente, **devolver** el expediente a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas en la instancia, ante el éxito de la alzada.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

Desde	Hasta	Dias	Tasa Annual	Maxima	Aplicado	Capital	Capital a Liquidar	Interés Plazo Periodo	Saldo Interés Plazo	Interés Mora	Saldo Interés Mora	Abonos	SubTotal
21/02/2013	28/02/2013	8	20,75	31,125	20,75	$ 25.473.000,00	$ 25.473.000,00	$ 105.298,16	$ 105.298,16	$ 0,00		$ 0,00	$ 25.578.298,16
1/03/2013	31/03/2013	31	20,75	31,125	20,75	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 408.030,37	$ 513.328,53	$ 0,00		$ 0,00	$ 25.986.328,53
1/04/2013	30/04/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 396.255,47	$ 909.584,01	$ 0,00		$ 0,00	$ 26.382.584,01
1/05/2013	31/05/2013	31	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 409.463,99	$ 1.319.048,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 26.792.048,00
1/06/2013	30/06/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 396.255,47	$ 1.715.303,47	$ 0,00		$ 0,00	$ 27.188.303,47
1/07/2013	31/07/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 400.668,20	$ 2.115.971,66	$ 0,00		$ 0,00	$ 27.588.971,66
1/08/2013	31/08/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 400.668,20	$ 2.516.639,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 27.989.639,86
1/09/2013	30/09/2013	30	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 387.743,41	$ 2.904.383,27	$ 0,00		$ 0,00	$ 28.377.383,27
1/10/2013	31/10/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 391.836,61	$ 3.296.219,89	$ 0,00		$ 0,00	$ 28.769.219,89
1/11/2013	30/11/2013	30	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 379.196,72	$ 3.675.416,61	$ 0,00		$ 0,00	$ 29.148.416,61
1/12/2013	31/12/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 391.836,61	$ 4.067.253,22	$ 0,00		$ 0,00	$ 29.540.253,22
1/01/2014	31/01/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 388.221,53	$ 4.455.474,75	$ 0,00		$ 0,00	$ 29.928.474,75
1/02/2014	28/02/2014	28	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 350.651,71	$ 4.806.126,46	$ 0,00		$ 0,00	$ 30.279.126,46
1/03/2014	31/03/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 388.221,53	$ 5.194.347,99	$ 0,00		$ 0,00	$ 30.667.347,99
1/04/2014	30/04/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 375.348,09	$ 5.569.696,08	$ 0,00		$ 0,00	$ 31.042.696,08
1/05/2014	31/05/2014	31	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 387.859,69	$ 5.957.555,77	$ 0,00		$ 0,00	$ 31.430.555,77
1/06/2014	30/06/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 375.348,09	$ 6.332.903,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 31.805.903,86
1/07/2014	31/07/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 382.424,85	$ 6.715.328,71	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.188.328,71
1/08/2014	31/08/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 382.424,85	$ 7.097.753,56	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.570.753,56
1/09/2014	30/09/2014	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 370.088,56	$ 7.467.842,13	$ 0,00		$ 0,00	$ 32.940.842,13
1/10/2014	31/10/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 379.520,69	$ 7.847.362,82	$ 0,00		$ 0,00	$ 33.320.362,82
1/11/2014	30/11/2014	30	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 367.278,09	$ 8.214.640,91	$ 0,00		$ 0,00	$ 33.687.640,91
1/12/2014	31/12/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 379.520,69	$ 8.594.161,60	$ 0,00		$ 0,00	$ 34.067.161,60
1/01/2015	31/01/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 380.247,10	$ 8.974.408,70	$ 0,00		$ 0,00	$ 34.447.408,70
1/02/2015	28/02/2015	28	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 343.448,99	$ 9.317.857,69	$ 0,00		$ 0,00	$ 34.790.857,69
1/03/2015	31/03/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 380.247,10	$ 9.698.104,79	$ 0,00		$ 0,00	$ 35.171.104,79
1/04/2015	30/04/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 370.790,60	$ 10.068.895,38	$ 0,00		$ 0,00	$ 35.541.895,38
1/05/2015	31/05/2015	31	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 383.150,28	$ 10.452.045,67	$ 0,00		$ 0,00	$ 35.925.045,67
1/06/2015	30/06/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 370.790,60	$ 10.822.836,26	$ 0,00		$ 0,00	$ 36.295.836,26
1/07/2015	31/07/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 381.154,76	$ 11.203.991,02	$ 0,00		$ 0,00	$ 36.676.991,02
1/08/2015	31/08/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 381.154,76	$ 11.585.145,78	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.058.145,78
1/09/2015	30/09/2015	30	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 368.859,44	$ 11.954.005,23	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.427.005,23
1/10/2015	31/10/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 382.424,85	$ 12.336.430,08	$ 0,00		$ 0,00	$ 37.809.430,08
1/11/2015	30/11/2015	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 370.088,56	$ 12.706.518,64	$ 0,00		$ 0,00	$ 38.179.518,64
1/12/2015	31/12/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 382.424,85	$ 13.088.943,49	$ 0,00		$ 0,00	$ 38.561.943,49
1/01/2016	31/01/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 388.764,18	$ 13.477.707,67	$ 0,00		$ 0,00	$ 38.950.707,67
1/02/2016	29/02/2016	29	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 363.682,62	$ 13.841.390,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 39.314.390,29
1/03/2016	31/03/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 388.764,18	$ 14.230.154,46	$ 0,00		$ 0,00	$ 39.703.154,46
1/04/2016	30/04/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 391.221,89	$ 14.621.376,36	$ 0,00		$ 0,00	$ 40.094.376,36
1/05/2016	31/05/2016	31	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 404.262,62	$ 15.025.638,98	$ 0,00		$ 0,00	$ 40.498.638,98
1/06/2016	30/06/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 391.221,89	$ 15.416.860,87	$ 0,00		$ 0,00	$ 40.889.860,87
1/07/2016	31/07/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 418.581,10	$ 15.835.441,96	$ 0,00		$ 0,00	$ 41.308.441,96
1/08/2016	31/08/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 418.581,10	$ 16.254.023,06	$ 0,00		$ 0,00	$ 41.727.023,06

República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1 **Juzgado** 110013403005

1/09/2016	30/09/2016	30	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 405.078,48	$ 16.659.101,54	$ 0,00		$ 0,00	$ 42.132.101,54
1/10/2016	31/10/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 430.145,71	$ 17.089.247,24	$ 0,00		$ 0,00	$ 42.562.247,24
1/11/2016	30/11/2016	30	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 416.270,04	$ 17.505.517,28	$ 0,00		$ 0,00	$ 42.978.517,28
1/12/2016	31/12/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 430.145,71	$ 17.935.662,99	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.408.662,99
1/01/2017	31/01/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 436.347,38	$ 18.372.010,36	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.845.010,36
1/02/2017	28/02/2017	28	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 394.120,21	$ 18.766.130,57	$ 0,00		$ 0,00	$ 44.239.130,57
1/03/2017	31/03/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 436.347,38	$ 19.202.477,95	$ 0,00		$ 0,00	$ 44.675.477,95
1/04/2017	30/04/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 422.100,42	$ 19.624.578,37	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.097.578,37
1/05/2017	31/05/2017	31	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 436.170,43	$ 20.060.748,80	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.533.748,80
1/06/2017	30/06/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 422.100,42	$ 20.482.849,21	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.955.849,21
1/07/2017	31/07/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 429.968,25	$ 20.912.817,47	$ 0,00		$ 0,00	$ 46.385.817,47
1/08/2017	31/08/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 429.968,25	$ 21.342.785,72	$ 0,00		$ 0,00	$ 46.815.785,72
1/09/2017	30/09/2017	30	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 416.098,31	$ 21.758.884,03	$ 0,00		$ 0,00	$ 47.231.884,03
1/10/2017	20/10/2017	20	21,15	31,725	21,15	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 267.863,87	$ 22.026.747,90	$ 0,00		$ 0,00	$ 47.499.747,90
21/10/2017	31/10/2017	11	31,725	31,725	31,725	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 211.611,04	$ 211.611,04	$ 0,00	$ 47.711.358,95
1/11/2017	30/11/2017	30	31,44	31,44	31,44	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 572.582,85	$ 784.193,89	$ 0,00	$ 48.283.941,79
1/12/2017	31/12/2017	31	31,155	31,155	31,155	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 586.969,33	$ 1.371.163,22	$ 0,00	$ 48.870.911,13
1/01/2018	31/01/2018	31	31,035	31,035	31,035	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 584.987,51	$ 1.956.150,73	$ 0,00	$ 49.455.898,63
1/02/2018	28/02/2018	28	31,515	31,515	31,515	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 535.526,18	$ 2.491.676,91	$ 0,00	$ 49.991.424,82
1/03/2018	31/03/2018	31	31,02	31,02	31,02	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 584.739,65	$ 3.076.416,56	$ 0,00	$ 50.576.164,47
1/04/2018	30/04/2018	30	30,72	30,72	30,72	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 561.074,11	$ 3.637.490,67	$ 0,00	$ 51.137.238,58
1/05/2018	31/05/2018	31	30,66	30,66	30,66	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 578.782,60	$ 4.216.273,27	$ 0,00	$ 51.716.021,18
1/06/2018	30/06/2018	30	30,42	30,42	30,42	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 556.260,13	$ 4.772.533,41	$ 0,00	$ 52.272.281,31
1/07/2018	31/07/2018	31	30,045	30,045	30,045	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 568.568,01	$ 5.341.101,42	$ 0,00	$ 52.840.849,33
1/08/2018	31/08/2018	31	29,91	29,91	29,91	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 566.319,34	$ 5.907.420,76	$ 0,00	$ 53.407.168,67
1/09/2018	30/09/2018	30	29,715	29,715	29,715	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 544.903,68	$ 6.452.324,44	$ 0,00	$ 53.952.072,35
1/10/2018	31/10/2018	31	29,445	29,445	29,445	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 558.556,03	$ 7.010.880,47	$ 0,00	$ 54.510.628,38
1/11/2018	30/11/2018	30	29,235	29,235	29,235	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 537.136,35	$ 7.548.016,83	$ 0,00	$ 55.047.764,73
1/12/2018	31/12/2018	31	29,1	29,1	29,1	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 552.778,16	$ 8.100.794,99	$ 0,00	$ 55.600.542,89
1/01/2019	31/01/2019	31	28,74	28,74	28,74	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 546.732,64	$ 8.647.527,63	$ 0,00	$ 56.147.275,53
1/02/2019	28/02/2019	28	29,55	29,55	29,55	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 506.087,77	$ 9.153.615,40	$ 0,00	$ 56.653.363,31
1/03/2019	31/03/2019	31	29,055	29,055	29,055	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 552.023,39	$ 9.705.638,80	$ 0,00	$ 57.205.386,70
1/04/2019	30/04/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 532.998,25	$ 10.238.637,05	$ 0,00	$ 57.738.384,95
1/05/2019	31/05/2019	31	29,01	29,01	29,01	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 551.268,36	$ 10.789.905,41	$ 0,00	$ 58.289.653,31
1/06/2019	30/06/2019	30	28,95	28,95	28,95	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 532.510,88	$ 11.322.416,28	$ 0,00	$ 58.822.164,19
1/07/2019	31/07/2019	31	28,92	28,92	28,92	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 549.757,51	$ 11.872.173,79	$ 0,00	$ 59.371.921,69
1/08/2019	31/08/2019	31	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 550.764,86	$ 12.422.938,65	$ 0,00	$ 59.922.686,55
1/09/2019	30/09/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 532.998,25	$ 12.955.936,90	$ 0,00	$ 60.455.684,80
1/10/2019	4/10/2019	4	28,65	28,65	28,65	$ 0,00	$ 25.473.000,00	$ 0,00	$ 22.026.747,90	$ 70.350,79	$ 13.026.287,69	$ 0,00	$ 60.526.035,59

Resumen Liquidación 1

Capital	$ 25473000,000
Capitales Adicionados	$,000
Total Capital	$ 25473000,000
Total Interés de plazo	$ 22026747,9000

República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

Total Interes Mora	$ 13026287,69000
Total a pagar	$ 60526035,59000
- Abonos	$,000
Neto a pagar	$ 60526035,59000

Liquidación Capital 2

Desde	Hasta	Dias	Tasa Annual	Maxima	Aplicado	Capital	Capital a Liquidar	Interés Plazo Periodo	Saldo Interés Plazo	Interés Mora	Saldo Interés Mora	Abonos	SubTotal
21/02/2013	28/02/2013	8	20,75	31,125	20,75	$ 41.010.000,00	$ 41.010.000,00	$ 169.523,71	$ 169.523,71	$ 0,00		$ 0,00	$ 41.179.523,71
1/03/2013	31/03/2013	31	20,75	31,125	20,75	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 656.904,39	$ 826.428,11	$ 0,00		$ 0,00	$ 41.836.428,11
1/04/2013	30/04/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 637.947,51	$ 1.464.375,62	$ 0,00		$ 0,00	$ 42.474.375,62
1/05/2013	31/05/2013	31	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 659.212,43	$ 2.123.588,05	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.133.588,05
1/06/2013	30/06/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 637.947,51	$ 2.761.535,56	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.771.535,56
1/07/2013	31/07/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 645.051,73	$ 3.406.587,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 44.416.587,29
1/08/2013	31/08/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 645.051,73	$ 4.051.639,02	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.061.639,02
1/09/2013	30/09/2013	30	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 624.243,61	$ 4.675.882,62	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.685.882,62
1/10/2013	31/10/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 630.833,41	$ 5.306.716,04	$ 0,00		$ 0,00	$ 46.316.716,04
1/11/2013	30/11/2013	30	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 610.483,95	$ 5.917.199,98	$ 0,00		$ 0,00	$ 46.927.199,98
1/12/2013	31/12/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 630.833,41	$ 6.548.033,39	$ 0,00		$ 0,00	$ 47.558.033,39
1/01/2014	31/01/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 625.013,35	$ 7.173.046,74	$ 0,00		$ 0,00	$ 48.183.046,74
1/02/2014	28/02/2014	28	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 564.528,19	$ 7.737.574,93	$ 0,00		$ 0,00	$ 48.747.574,93
1/03/2014	31/03/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 625.013,35	$ 8.362.588,27	$ 0,00		$ 0,00	$ 49.372.588,27
1/04/2014	30/04/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 604.287,88	$ 8.966.876,15	$ 0,00		$ 0,00	$ 49.976.876,15
1/05/2014	31/05/2014	31	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 624.430,81	$ 9.591.306,96	$ 0,00		$ 0,00	$ 50.601.306,96
1/06/2014	30/06/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 604.287,88	$ 10.195.594,84	$ 0,00		$ 0,00	$ 51.205.594,84
1/07/2014	31/07/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 615.681,04	$ 10.811.275,88	$ 0,00		$ 0,00	$ 51.821.275,88
1/08/2014	31/08/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 615.681,04	$ 11.426.956,92	$ 0,00		$ 0,00	$ 52.436.956,92
1/09/2014	30/09/2014	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 595.820,36	$ 12.022.777,28	$ 0,00		$ 0,00	$ 53.032.777,28
1/10/2014	31/10/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 611.005,52	$ 12.633.782,80	$ 0,00		$ 0,00	$ 53.643.782,80
1/11/2014	30/11/2014	30	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 591.295,67	$ 13.225.078,46	$ 0,00		$ 0,00	$ 54.235.078,46
1/12/2014	31/12/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 611.005,52	$ 13.836.083,98	$ 0,00		$ 0,00	$ 54.846.083,98
1/01/2015	31/01/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 612.174,99	$ 14.448.258,97	$ 0,00		$ 0,00	$ 55.458.258,97
1/02/2015	28/02/2015	28	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 552.932,25	$ 15.001.191,22	$ 0,00		$ 0,00	$ 56.011.191,22
1/03/2015	31/03/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 612.174,99	$ 15.613.366,20	$ 0,00		$ 0,00	$ 56.623.366,20
1/04/2015	30/04/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 596.950,59	$ 16.210.316,79	$ 0,00		$ 0,00	$ 57.220.316,79
1/05/2015	31/05/2015	31	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 616.848,94	$ 16.827.165,73	$ 0,00		$ 0,00	$ 57.837.165,73
1/06/2015	30/06/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 596.950,59	$ 17.424.116,32	$ 0,00		$ 0,00	$ 58.434.116,32
1/07/2015	31/07/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 613.636,27	$ 18.037.752,59	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.047.752,59
1/08/2015	31/08/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 613.636,27	$ 18.651.388,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.661.388,86
1/09/2015	30/09/2015	30	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 593.841,55	$ 19.245.230,41	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.255.230,41
1/10/2015	31/10/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 615.681,04	$ 19.860.911,45	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.870.911,45
1/11/2015	30/11/2015	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 595.820,36	$ 20.456.731,81	$ 0,00		$ 0,00	$ 61.466.731,81
1/12/2015	31/12/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 615.681,04	$ 21.072.412,85	$ 0,00		$ 0,00	$ 62.082.412,85
1/01/2016	31/01/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 625.886,98	$ 21.698.299,83	$ 0,00		$ 0,00	$ 62.708.299,83
1/02/2016	29/02/2016	29	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 585.507,17	$ 22.283.807,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 63.293.807,00



República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

1/03/2016	31/03/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 625.886,98	$ 22.909.693,97	$ 0,00		$ 0,00	$ 63.919.693,97
1/04/2016	30/04/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 629.843,75	$ 23.539.537,72	$ 0,00		$ 0,00	$ 64.549.537,72
1/05/2016	31/05/2016	31	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 650.838,54	$ 24.190.376,26	$ 0,00		$ 0,00	$ 65.200.376,26
1/06/2016	30/06/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 629.843,75	$ 24.820.220,01	$ 0,00		$ 0,00	$ 65.830.220,01
1/07/2016	31/07/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 673.890,42	$ 25.494.110,43	$ 0,00		$ 0,00	$ 66.504.110,43
1/08/2016	31/08/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 673.890,42	$ 26.168.000,85	$ 0,00		$ 0,00	$ 67.178.000,85
1/09/2016	30/09/2016	30	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 652.152,02	$ 26.820.152,87	$ 0,00		$ 0,00	$ 67.830.152,87
1/10/2016	31/10/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 692.508,75	$ 27.512.661,62	$ 0,00		$ 0,00	$ 68.522.661,62
1/11/2016	30/11/2016	30	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 670.169,76	$ 28.182.831,38	$ 0,00		$ 0,00	$ 69.192.831,38
1/12/2016	31/12/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 692.508,75	$ 28.875.340,13	$ 0,00		$ 0,00	$ 69.885.340,13
1/01/2017	31/01/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 702.493,07	$ 29.577.833,20	$ 0,00		$ 0,00	$ 70.587.833,20
1/02/2017	28/02/2017	28	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 634.509,87	$ 30.212.343,06	$ 0,00		$ 0,00	$ 71.222.343,06
1/03/2017	31/03/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 702.493,07	$ 30.914.836,13	$ 0,00		$ 0,00	$ 71.924.836,13
1/04/2017	30/04/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 679.556,32	$ 31.594.392,45	$ 0,00		$ 0,00	$ 72.604.392,45
1/05/2017	31/05/2017	31	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 702.208,20	$ 32.296.600,64	$ 0,00		$ 0,00	$ 73.306.600,64
1/06/2017	30/06/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 679.556,32	$ 32.976.156,96	$ 0,00		$ 0,00	$ 73.986.156,96
1/07/2017	31/07/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 692.223,06	$ 33.668.380,02	$ 0,00		$ 0,00	$ 74.678.380,02
1/08/2017	31/08/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 692.223,06	$ 34.360.603,09	$ 0,00		$ 0,00	$ 75.370.603,09
1/09/2017	30/09/2017	30	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 669.893,29	$ 35.030.496,38	$ 0,00		$ 0,00	$ 76.040.496,38
1/10/2017	20/10/2017	20	21,15	31,725	21,15	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 431.244,74	$ 35.461.741,12	$ 0,00		$ 0,00	$ 76.471.741,12
21/10/2017	31/10/2017	11	31,725	31,725	31,725	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 340.681,07	$ 340.681,07	$ 0,00	$ 76.812.422,19
1/11/2017	30/11/2017	30	31,44	31,44	31,44	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 921.823,99	$ 1.262.505,06	$ 0,00	$ 77.734.246,18
1/12/2017	31/12/2017	31	31,155	31,155	31,155	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 944.985,37	$ 2.207.490,43	$ 0,00	$ 78.679.231,55
1/01/2018	31/01/2018	31	31,035	31,035	31,035	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 941.794,75	$ 3.149.285,18	$ 0,00	$ 79.621.026,30
1/02/2018	28/02/2018	28	31,515	31,515	31,515	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 862.164,99	$ 4.011.450,17	$ 0,00	$ 80.483.191,29
1/03/2018	31/03/2018	31	31,02	31,02	31,02	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 941.395,71	$ 4.952.845,89	$ 0,00	$ 81.424.587,01
1/04/2018	30/04/2018	30	30,72	30,72	30,72	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 903.295,62	$ 5.856.141,50	$ 0,00	$ 82.327.882,62
1/05/2018	31/05/2018	31	30,66	30,66	30,66	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 931.805,23	$ 6.787.946,73	$ 0,00	$ 83.259.687,85
1/06/2018	30/06/2018	30	30,42	30,42	30,42	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 895.545,40	$ 7.683.492,13	$ 0,00	$ 84.155.233,25
1/07/2018	31/07/2018	31	30,045	30,045	30,045	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 915.360,35	$ 8.598.852,48	$ 0,00	$ 85.070.593,60
1/08/2018	31/08/2018	31	29,91	29,91	29,91	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 911.740,12	$ 9.510.592,61	$ 0,00	$ 85.982.333,73
1/09/2018	30/09/2018	30	29,715	29,715	29,715	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 877.262,20	$ 10.387.854,80	$ 0,00	$ 86.859.595,92
1/10/2018	31/10/2018	31	29,445	29,445	29,445	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 899.241,66	$ 11.287.096,46	$ 0,00	$ 87.758.837,58
1/11/2018	30/11/2018	30	29,235	29,235	29,235	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 864.757,27	$ 12.151.853,73	$ 0,00	$ 88.623.594,85
1/12/2018	31/12/2018	31	29,1	29,1	29,1	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 889.939,64	$ 13.041.793,37	$ 0,00	$ 89.513.534,49
1/01/2019	31/01/2019	31	28,74	28,74	28,74	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 880.206,71	$ 13.922.000,08	$ 0,00	$ 90.393.741,20
1/02/2019	28/02/2019	28	29,55	29,55	29,55	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 814.770,92	$ 14.736.771,00	$ 0,00	$ 91.208.512,12
1/03/2019	31/03/2019	31	29,055	29,055	29,055	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 888.724,50	$ 15.625.495,51	$ 0,00	$ 92.097.236,63
1/04/2019	30/04/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 858.095,17	$ 16.483.590,68	$ 0,00	$ 92.955.331,80
1/05/2019	31/05/2019	31	29,01	29,01	29,01	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 887.508,95	$ 17.371.099,62	$ 0,00	$ 93.842.840,74
1/06/2019	30/06/2019	30	28,95	28,95	28,95	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 857.310,53	$ 18.228.410,15	$ 0,00	$ 94.700.151,27
1/07/2019	31/07/2019	31	28,92	28,92	28,92	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 885.076,56	$ 19.113.486,72	$ 0,00	$ 95.585.227,84
1/08/2019	31/08/2019	31	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 886.698,34	$ 20.000.185,06	$ 0,00	$ 96.471.926,18
1/09/2019	30/09/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 858.095,17	$ 20.858.280,23	$ 0,00	$ 97.330.021,35
1/10/2019	4/10/2019	4	28,65	28,65	28,65	$ 0,00	$ 41.010.000,00	$ 0,00	$ 35.461.741,12	$ 113.260,55	$ 20.971.540,78	$ 0,00	$ 97.443.281,89



República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

Resumen Liquidación 2

Capital	$ 41010000,000
Capitales Adicionados	$,000
Total Capital	$ 41010000,000
Total Interés de plazo	$ 35461741,12000
Total Interes Mora	$ 20971540,78000
Total a pagar	$ 97443281,89000
- Abonos	$,000
Neto a pagar	$ 97443281,89000

Liquidación Capital 3

Desde	Hasta	Dias	Tasa Annual	Maxima	Aplicado	Capital	Capital a Liquidar	Interés Plazo Periodo	Saldo Interés Plazo	Interés Mora	Saldo Interés Mora	Abonos	SubTotal
21/02/2013	28/02/2013	8	20,75	31,125	20,75	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 206.685,83	$ 206.685,83	$ 0,00		$ 0,00	$ 50.206.685,83
1/03/2013	31/03/2013	31	20,75	31,125	20,75	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 800.907,58	$ 1.007.593,40	$ 0,00		$ 0,00	$ 51.007.593,40
1/04/2013	30/04/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 777.795,06	$ 1.785.388,47	$ 0,00		$ 0,00	$ 51.785.388,47
1/05/2013	31/05/2013	31	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 803.721,57	$ 2.589.110,03	$ 0,00		$ 0,00	$ 52.589.110,03
1/06/2013	30/06/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 777.795,06	$ 3.366.905,09	$ 0,00		$ 0,00	$ 53.366.905,09
1/07/2013	31/07/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 786.456,63	$ 4.153.361,73	$ 0,00		$ 0,00	$ 54.153.361,73
1/08/2013	31/08/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 786.456,63	$ 4.939.818,36	$ 0,00		$ 0,00	$ 54.939.818,36
1/09/2013	30/09/2013	30	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 761.087,06	$ 5.700.905,42	$ 0,00		$ 0,00	$ 55.700.905,42
1/10/2013	31/10/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 769.121,45	$ 6.470.026,87	$ 0,00		$ 0,00	$ 56.470.026,87
1/11/2013	30/11/2013	30	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 744.311,08	$ 7.214.337,94	$ 0,00		$ 0,00	$ 57.214.337,94
1/12/2013	31/12/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 769.121,45	$ 7.983.459,39	$ 0,00		$ 0,00	$ 57.983.459,39
1/01/2014	31/01/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 762.025,54	$ 8.745.484,93	$ 0,00		$ 0,00	$ 58.745.484,93
1/02/2014	28/02/2014	28	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 688.281,13	$ 9.433.766,06	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.433.766,06
1/03/2014	31/03/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 762.025,54	$ 10.195.791,60	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.195.791,60
1/04/2014	30/04/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 736.756,74	$ 10.932.548,35	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.932.548,35
1/05/2014	31/05/2014	31	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 761.315,30	$ 11.693.863,64	$ 0,00		$ 0,00	$ 61.693.863,64
1/06/2014	30/06/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 736.756,74	$ 12.430.620,39	$ 0,00		$ 0,00	$ 62.430.620,39
1/07/2014	31/07/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 750.647,45	$ 13.181.267,84	$ 0,00		$ 0,00	$ 63.181.267,84
1/08/2014	31/08/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 750.647,45	$ 13.931.915,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 63.931.915,29
1/09/2014	30/09/2014	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 726.433,02	$ 14.658.348,30	$ 0,00		$ 0,00	$ 64.658.348,30
1/10/2014	31/10/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 744.946,99	$ 15.403.295,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 65.403.295,29
1/11/2014	30/11/2014	30	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 720.916,44	$ 16.124.211,73	$ 0,00		$ 0,00	$ 66.124.211,73
1/12/2014	31/12/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 744.946,99	$ 16.869.158,72	$ 0,00		$ 0,00	$ 66.869.158,72
1/01/2015	31/01/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 746.372,82	$ 17.615.531,54	$ 0,00		$ 0,00	$ 67.615.531,54
1/02/2015	28/02/2015	28	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 674.143,19	$ 18.289.674,74	$ 0,00		$ 0,00	$ 68.289.674,74
1/03/2015	31/03/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 746.372,82	$ 19.036.047,55	$ 0,00		$ 0,00	$ 69.036.047,55
1/04/2015	30/04/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 727.811,01	$ 19.763.858,56	$ 0,00		$ 0,00	$ 69.763.858,56
1/05/2015	31/05/2015	31	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 752.071,37	$ 20.515.929,94	$ 0,00		$ 0,00	$ 70.515.929,94
1/06/2015	30/06/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 727.811,01	$ 21.243.740,94	$ 0,00		$ 0,00	$ 71.243.740,94
1/07/2015	31/07/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 748.154,44	$ 21.991.895,38	$ 0,00		$ 0,00	$ 71.991.895,38
1/08/2015	31/08/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 748.154,44	$ 22.740.049,82	$ 0,00		$ 0,00	$ 72.740.049,82

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

1/09/2015	30/09/2015	30	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 724.020,42	$ 23.464.070,24	$ 0,00		$ 0,00	$ 73.464.070,24
1/10/2015	31/10/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 750.647,45	$ 24.214.717,69	$ 0,00		$ 0,00	$ 74.214.717,69
1/11/2015	30/11/2015	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 726.433,02	$ 24.941.150,71	$ 0,00		$ 0,00	$ 74.941.150,71
1/12/2015	31/12/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 750.647,45	$ 25.691.798,16	$ 0,00		$ 0,00	$ 75.691.798,16
1/01/2016	31/01/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 763.090,68	$ 26.454.888,84	$ 0,00		$ 0,00	$ 76.454.888,84
1/02/2016	29/02/2016	29	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 713.859,02	$ 27.168.747,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 77.168.747,86
1/03/2016	31/03/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 763.090,68	$ 27.931.838,54	$ 0,00		$ 0,00	$ 77.931.838,54
1/04/2016	30/04/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 767.914,83	$ 28.699.753,38	$ 0,00		$ 0,00	$ 78.699.753,38
1/05/2016	31/05/2016	31	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 793.512,00	$ 29.493.265,37	$ 0,00		$ 0,00	$ 79.493.265,37
1/06/2016	30/06/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 767.914,83	$ 30.261.180,21	$ 0,00		$ 0,00	$ 80.261.180,21
1/07/2016	31/07/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 821.617,19	$ 31.082.797,40	$ 0,00		$ 0,00	$ 81.082.797,40
1/08/2016	31/08/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 821.617,19	$ 31.904.414,60	$ 0,00		$ 0,00	$ 81.904.414,60
1/09/2016	30/09/2016	30	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 795.113,41	$ 32.699.528,01	$ 0,00		$ 0,00	$ 82.699.528,01
1/10/2016	31/10/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 844.316,93	$ 33.543.844,94	$ 0,00		$ 0,00	$ 83.543.844,94
1/11/2016	30/11/2016	30	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 817.080,90	$ 34.360.925,85	$ 0,00		$ 0,00	$ 84.360.925,85
1/12/2016	31/12/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 844.316,93	$ 35.205.242,78	$ 0,00		$ 0,00	$ 85.205.242,78
1/01/2017	31/01/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 856.489,96	$ 36.061.732,74	$ 0,00		$ 0,00	$ 86.061.732,74
1/02/2017	28/02/2017	28	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 773.603,84	$ 36.835.336,58	$ 0,00		$ 0,00	$ 86.835.336,58
1/03/2017	31/03/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 856.489,96	$ 37.691.826,54	$ 0,00		$ 0,00	$ 87.691.826,54
1/04/2017	30/04/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 828.525,14	$ 38.520.351,68	$ 0,00		$ 0,00	$ 88.520.351,68
1/05/2017	31/05/2017	31	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 856.142,64	$ 39.376.494,32	$ 0,00		$ 0,00	$ 89.376.494,32
1/06/2017	30/06/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 828.525,14	$ 40.205.019,46	$ 0,00		$ 0,00	$ 90.205.019,46
1/07/2017	31/07/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 843.968,62	$ 41.048.988,08	$ 0,00		$ 0,00	$ 91.048.988,08
1/08/2017	31/08/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 843.968,62	$ 41.892.956,70	$ 0,00		$ 0,00	$ 91.892.956,70
1/09/2017	30/09/2017	30	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 816.743,83	$ 42.709.700,53	$ 0,00		$ 0,00	$ 92.709.700,53
1/10/2017	20/10/2017	20	21,15	31,725	21,15	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 525.779,99	$ 43.235.480,52	$ 0,00		$ 0,00	$ 93.235.480,52
21/10/2017	31/10/2017	11	31,725	31,725	31,725	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 415.363,41	$ 415.363,41	$ 0,00	$ 93.650.843,93
1/11/2017	30/11/2017	30	31,44	31,44	31,44	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.123.901,48	$ 1.539.264,89	$ 0,00	$ 94.774.745,40
1/12/2017	31/12/2017	31	31,155	31,155	31,155	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.152.140,18	$ 2.691.405,06	$ 0,00	$ 95.926.885,58
1/01/2018	31/01/2018	31	31,035	31,035	31,035	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.148.250,12	$ 3.839.655,18	$ 0,00	$ 97.075.135,70
1/02/2018	28/02/2018	28	31,515	31,515	31,515	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.051.164,34	$ 4.890.819,52	$ 0,00	$ 98.126.300,04
1/03/2018	31/03/2018	31	31,02	31,02	31,02	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.147.763,61	$ 6.038.583,13	$ 0,00	$ 99.274.063,65
1/04/2018	30/04/2018	30	30,72	30,72	30,72	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.101.311,41	$ 7.139.894,54	$ 0,00	$ 100.375.375,06
1/05/2018	31/05/2018	31	30,66	30,66	30,66	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.136.070,75	$ 8.275.965,29	$ 0,00	$ 101.511.445,80
1/06/2018	30/06/2018	30	30,42	30,42	30,42	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.091.862,23	$ 9.367.827,52	$ 0,00	$ 102.603.308,04
1/07/2018	31/07/2018	31	30,045	30,045	30,045	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.116.020,91	$ 10.483.848,43	$ 0,00	$ 103.719.328,95
1/08/2018	31/08/2018	31	29,91	29,91	29,91	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.111.607,07	$ 11.595.455,51	$ 0,00	$ 104.830.936,02
1/09/2018	30/09/2018	30	29,715	29,715	29,715	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.069.571,08	$ 12.665.026,58	$ 0,00	$ 105.900.507,10
1/10/2018	31/10/2018	31	29,445	29,445	29,445	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.096.368,76	$ 13.761.395,35	$ 0,00	$ 106.996.875,86
1/11/2018	30/11/2018	30	29,235	29,235	29,235	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.054.324,88	$ 14.815.720,23	$ 0,00	$ 108.051.200,74
1/12/2018	31/12/2018	31	29,1	29,1	29,1	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.085.027,60	$ 15.900.747,83	$ 0,00	$ 109.136.228,35
1/01/2019	31/01/2019	31	28,74	28,74	28,74	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.073.161,08	$ 16.973.908,91	$ 0,00	$ 110.209.389,42
1/02/2019	28/02/2019	28	29,55	29,55	29,55	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 993.380,78	$ 17.967.289,69	$ 0,00	$ 111.202.770,20
1/03/2019	31/03/2019	31	29,055	29,055	29,055	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.083.546,09	$ 19.050.835,78	$ 0,00	$ 112.286.316,30
1/04/2019	30/04/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.046.202,35	$ 20.097.038,13	$ 0,00	$ 113.332.518,65

Fecha 09/12/2020
Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1 **Juzgado** 110013403005

1/05/2019	31/05/2019	31	29,01	29,01	29,01	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.082.064,07	$ 21.179.102,20	$ 0,00	$ 114.414.582,71
1/06/2019	30/06/2019	30	28,95	28,95	28,95	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.045.245,71	$ 22.224.347,91	$ 0,00	$ 115.459.828,42
1/07/2019	31/07/2019	31	28,92	28,92	28,92	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.079.098,47	$ 23.303.446,38	$ 0,00	$ 116.538.926,89
1/08/2019	31/08/2019	31	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.081.075,76	$ 24.384.522,14	$ 0,00	$ 117.620.002,66
1/09/2019	30/09/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 1.046.202,35	$ 25.430.724,49	$ 0,00	$ 118.666.205,01
1/10/2019	4/10/2019	4	28,65	28,65	28,65	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 43.235.480,52	$ 138.088,94	$ 25.568.813,43	$ 0,00	$ 118.804.293,95

Resumen Liquidación 3

Capital	$ 50000000,000
Capitales Adicionados	$,000
Total Capital	$ 50000000,000
Total Interés de plazo	$ 43235480,52000
Total Interes Mora	$ 25568813,43000
Total a pagar	$ 118804293,95000
- Abonos	$,000
Neto a pagar	$ 118804293,95000

Liquidación Capital 4

Desde	Hasta	Dias	Tasa Annual	Maxima	Aplicado	Capital	Capital a Liquidar	Interés Plazo Periodo	Saldo Interés Plazo	Interés Mora	Saldo Interés Mora	Abonos	SubTotal
21/02/2013	28/02/2013	8	20,75	31,125	20,75	$ 213.600.000,00	$ 213.600.000,00	$ 882.961,85	$ 882.961,85	$ 0,00		$ 0,00	$ 214.482.961,85
1/03/2013	31/03/2013	31	20,75	31,125	20,75	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.421.477,16	$ 4.304.439,01	$ 0,00		$ 0,00	$ 217.904.439,01
1/04/2013	30/04/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.322.740,51	$ 7.627.179,52	$ 0,00		$ 0,00	$ 221.227.179,52
1/05/2013	31/05/2013	31	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.433.498,53	$ 11.060.678,05	$ 0,00		$ 0,00	$ 224.660.678,05
1/06/2013	30/06/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.322.740,51	$ 14.383.418,56	$ 0,00		$ 0,00	$ 227.983.418,56
1/07/2013	31/07/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.359.742,73	$ 17.743.161,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 231.343.161,29
1/08/2013	31/08/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.359.742,73	$ 21.102.904,02	$ 0,00		$ 0,00	$ 234.702.904,02
1/09/2013	30/09/2013	30	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.251.363,93	$ 24.354.267,95	$ 0,00		$ 0,00	$ 237.954.267,95
1/10/2013	31/10/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.285.686,82	$ 27.639.954,77	$ 0,00		$ 0,00	$ 241.239.954,77
1/11/2013	30/11/2013	30	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.179.696,92	$ 30.819.651,69	$ 0,00		$ 0,00	$ 244.419.651,69
1/12/2013	31/12/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.285.686,82	$ 34.105.338,51	$ 0,00		$ 0,00	$ 247.705.338,51
1/01/2014	31/01/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.255.373,11	$ 37.360.711,62	$ 0,00		$ 0,00	$ 250.960.711,62
1/02/2014	28/02/2014	28	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 2.940.337,00	$ 40.301.048,62	$ 0,00		$ 0,00	$ 253.901.048,62
1/03/2014	31/03/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.255.373,11	$ 43.556.421,73	$ 0,00		$ 0,00	$ 257.156.421,73
1/04/2014	30/04/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.147.424,80	$ 46.703.846,53	$ 0,00		$ 0,00	$ 260.303.846,53
1/05/2014	31/05/2014	31	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.252.338,96	$ 49.956.185,49	$ 0,00		$ 0,00	$ 263.556.185,49
1/06/2014	30/06/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.147.424,80	$ 53.103.610,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 266.703.610,29
1/07/2014	31/07/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.206.765,91	$ 56.310.376,20	$ 0,00		$ 0,00	$ 269.910.376,20
1/08/2014	31/08/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.206.765,91	$ 59.517.142,11	$ 0,00		$ 0,00	$ 273.117.142,11
1/09/2014	30/09/2014	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.103.321,85	$ 62.620.463,95	$ 0,00		$ 0,00	$ 276.220.463,95
1/10/2014	31/10/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.182.413,54	$ 65.802.877,49	$ 0,00		$ 0,00	$ 279.402.877,49
1/11/2014	30/11/2014	30	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.079.755,04	$ 68.882.632,53	$ 0,00		$ 0,00	$ 282.482.632,53
1/12/2014	31/12/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.182.413,54	$ 72.065.046,07	$ 0,00		$ 0,00	$ 285.665.046,07
1/01/2015	31/01/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.188.504,69	$ 75.253.550,75	$ 0,00		$ 0,00	$ 288.853.550,75
1/02/2015	28/02/2015	28	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 2.879.939,72	$ 78.133.490,47	$ 0,00		$ 0,00	$ 291.733.490,47



República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

1/03/2015	31/03/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.188.504,69	$ 81.321.995,15	$ 0,00		$ 0,00	$ 294.921.995,15
1/04/2015	30/04/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.109.208,62	$ 84.431.203,78	$ 0,00		$ 0,00	$ 298.031.203,78
1/05/2015	31/05/2015	31	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.212.848,91	$ 87.644.052,69	$ 0,00		$ 0,00	$ 301.244.052,69
1/06/2015	30/06/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.109.208,62	$ 90.753.261,31	$ 0,00		$ 0,00	$ 304.353.261,31
1/07/2015	31/07/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.196.115,76	$ 93.949.377,07	$ 0,00		$ 0,00	$ 307.549.377,07
1/08/2015	31/08/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.196.115,76	$ 97.145.492,82	$ 0,00		$ 0,00	$ 310.745.492,82
1/09/2015	30/09/2015	30	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.093.015,25	$ 100.238.508,07	$ 0,00		$ 0,00	$ 313.838.508,07
1/10/2015	31/10/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.206.765,91	$ 103.445.273,98	$ 0,00		$ 0,00	$ 317.045.273,98
1/11/2015	30/11/2015	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.103.321,85	$ 106.548.595,83	$ 0,00		$ 0,00	$ 320.148.595,83
1/12/2015	31/12/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.206.765,91	$ 109.755.361,73	$ 0,00		$ 0,00	$ 323.355.361,73
1/01/2016	31/01/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.259.923,39	$ 113.015.285,12	$ 0,00		$ 0,00	$ 326.615.285,12
1/02/2016	29/02/2016	29	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.049.605,75	$ 116.064.890,87	$ 0,00		$ 0,00	$ 329.664.890,87
1/03/2016	31/03/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.259.923,39	$ 119.324.814,25	$ 0,00		$ 0,00	$ 332.924.814,25
1/04/2016	30/04/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.280.532,17	$ 122.605.346,43	$ 0,00		$ 0,00	$ 336.205.346,43
1/05/2016	31/05/2016	31	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.389.883,25	$ 125.995.229,67	$ 0,00		$ 0,00	$ 339.595.229,67
1/06/2016	30/06/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.280.532,17	$ 129.275.761,84	$ 0,00		$ 0,00	$ 342.875.761,84
1/07/2016	31/07/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.509.948,65	$ 132.785.710,50	$ 0,00		$ 0,00	$ 346.385.710,50
1/08/2016	31/08/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.509.948,65	$ 136.295.659,15	$ 0,00		$ 0,00	$ 349.895.659,15
1/09/2016	30/09/2016	30	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.396.724,50	$ 139.692.383,65	$ 0,00		$ 0,00	$ 353.292.383,65
1/10/2016	31/10/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.606.921,94	$ 143.299.305,60	$ 0,00		$ 0,00	$ 356.899.305,60
1/11/2016	30/11/2016	30	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.490.569,62	$ 146.789.875,22	$ 0,00		$ 0,00	$ 360.389.875,22
1/12/2016	31/12/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.606.921,94	$ 150.396.797,16	$ 0,00		$ 0,00	$ 363.996.797,16
1/01/2017	31/01/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.658.925,11	$ 154.055.722,28	$ 0,00		$ 0,00	$ 367.655.722,28
1/02/2017	28/02/2017	28	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.304.835,59	$ 157.360.557,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 370.960.557,86
1/03/2017	31/03/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.658.925,11	$ 161.019.482,98	$ 0,00		$ 0,00	$ 374.619.482,98
1/04/2017	30/04/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.539.459,39	$ 164.558.942,37	$ 0,00		$ 0,00	$ 378.158.942,37
1/05/2017	31/05/2017	31	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.657.441,37	$ 168.216.383,74	$ 0,00		$ 0,00	$ 381.816.383,74
1/06/2017	30/06/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.539.459,39	$ 171.755.843,13	$ 0,00		$ 0,00	$ 385.355.843,13
1/07/2017	31/07/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.605.433,95	$ 175.361.277,08	$ 0,00		$ 0,00	$ 388.961.277,08
1/08/2017	31/08/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.605.433,95	$ 178.966.711,03	$ 0,00		$ 0,00	$ 392.566.711,03
1/09/2017	30/09/2017	30	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 3.489.129,63	$ 182.455.840,67	$ 0,00		$ 0,00	$ 396.055.840,67
1/10/2017	20/10/2017	20	21,15	31,725	21,15	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 2.246.132,10	$ 184.701.972,77	$ 0,00		$ 0,00	$ 398.301.972,77
21/10/2017	31/10/2017	11	31,725	31,725	31,725	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 1.774.432,49	$ 1.774.432,49	$ 0,00	$ 400.076.405,26
1/11/2017	30/11/2017	30	31,44	31,44	31,44	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.801.307,10	$ 6.575.739,60	$ 0,00	$ 404.877.712,36
1/12/2017	31/12/2017	31	31,155	31,155	31,155	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.921.942,83	$ 11.497.682,43	$ 0,00	$ 409.799.655,20
1/01/2018	31/01/2018	31	31,035	31,035	31,035	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.905.324,50	$ 16.403.006,94	$ 0,00	$ 414.704.979,70
1/02/2018	28/02/2018	28	31,515	31,515	31,515	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.490.574,06	$ 20.893.581,00	$ 0,00	$ 419.195.553,76
1/03/2018	31/03/2018	31	31,02	31,02	31,02	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.903.246,15	$ 25.796.827,15	$ 0,00	$ 424.098.799,91
1/04/2018	30/04/2018	30	30,72	30,72	30,72	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.704.802,33	$ 30.501.629,47	$ 0,00	$ 428.803.602,24
1/05/2018	31/05/2018	31	30,66	30,66	30,66	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.853.294,23	$ 35.354.923,70	$ 0,00	$ 433.656.896,47
1/06/2018	30/06/2018	30	30,42	30,42	30,42	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.664.435,46	$ 40.019.359,16	$ 0,00	$ 438.321.331,93
1/07/2018	31/07/2018	31	30,045	30,045	30,045	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.767.641,34	$ 44.787.000,50	$ 0,00	$ 443.088.973,27
1/08/2018	31/08/2018	31	29,91	29,91	29,91	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.748.785,42	$ 49.535.785,92	$ 0,00	$ 447.837.758,69
1/09/2018	30/09/2018	30	29,715	29,715	29,715	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.569.207,65	$ 54.104.993,57	$ 0,00	$ 452.406.966,34
1/10/2018	31/10/2018	31	29,445	29,445	29,445	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.683.687,36	$ 58.788.680,93	$ 0,00	$ 457.090.653,69



República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

1/11/2018	30/11/2018	30	29,235	29,235	29,235	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.504.075,89	$ 63.292.756,81	$ 0,00	$ 461.594.729,58
1/12/2018	31/12/2018	31	29,1	29,1	29,1	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.635.237,91	$ 67.927.994,73	$ 0,00	$ 466.229.967,49
1/01/2019	31/01/2019	31	28,74	28,74	28,74	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.584.544,12	$ 72.512.538,84	$ 0,00	$ 470.814.511,61
1/02/2019	28/02/2019	28	29,55	29,55	29,55	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.243.722,70	$ 76.756.261,55	$ 0,00	$ 475.058.234,31
1/03/2019	31/03/2019	31	29,055	29,055	29,055	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.628.908,90	$ 81.385.170,45	$ 0,00	$ 479.687.143,22
1/04/2019	30/04/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.469.376,45	$ 85.854.546,90	$ 0,00	$ 484.156.519,67
1/05/2019	31/05/2019	31	29,01	29,01	29,01	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.622.577,69	$ 90.477.124,59	$ 0,00	$ 488.779.097,36
1/06/2019	30/06/2019	30	28,95	28,95	28,95	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.465.289,66	$ 94.942.414,26	$ 0,00	$ 493.244.387,02
1/07/2019	31/07/2019	31	28,92	28,92	28,92	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.609.908,66	$ 99.552.322,92	$ 0,00	$ 497.854.295,68
1/08/2019	31/08/2019	31	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.618.355,66	$ 104.170.678,58	$ 0,00	$ 502.472.651,35
1/09/2019	30/09/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 4.469.376,45	$ 108.640.055,03	$ 0,00	$ 506.942.027,79
1/10/2019	4/10/2019	4	28,65	28,65	28,65	$ 0,00	$ 213.600.000,00	$ 0,00	$ 184.701.972,77	$ 589.915,95	$ 109.229.970,97	$ 0,00	$ 507.531.943,74

Resumen Liquidación 4

Capital	$ 213600000,000
Capitales Adicionados	$,000
Total Capital	$ 213600000,000
Total Interés de plazo	$ 184701972,77000
Total Interes Mora	$ 109229970,97000
Total a pagar	$ 507531943,74000
- Abonos	$,000
Neto a pagar	$ 507531943,74000

Liquidación Capital 5

Desde	Hasta	Dias	Tasa Annual	Maxima	Aplicado	Capital	Capital a Liquidar	Interés Plazo Periodo	Saldo Interés Plazo	Interés Mora	Saldo Interés Mora	Abonos	SubTotal
21/02/2013	28/02/2013	8	20,75	31,125	20,75	$ 42.000.000,00	$ 42.000.000,00	$ 173.616,09	$ 173.616,09	$ 0,00		$ 0,00	$ 42.173.616,09
1/03/2013	31/03/2013	31	20,75	31,125	20,75	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 672.762,36	$ 846.378,46	$ 0,00		$ 0,00	$ 42.846.378,46
1/04/2013	30/04/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 653.347,85	$ 1.499.726,31	$ 0,00		$ 0,00	$ 43.499.726,31
1/05/2013	31/05/2013	31	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 675.126,12	$ 2.174.852,43	$ 0,00		$ 0,00	$ 44.174.852,43
1/06/2013	30/06/2013	30	20,83	31,245	20,83	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 653.347,85	$ 2.828.200,28	$ 0,00		$ 0,00	$ 44.828.200,28
1/07/2013	31/07/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 660.623,57	$ 3.488.823,85	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.488.823,85
1/08/2013	31/08/2013	31	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 660.623,57	$ 4.149.447,42	$ 0,00		$ 0,00	$ 46.149.447,42
1/09/2013	30/09/2013	30	20,34	30,51	20,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 639.313,13	$ 4.788.760,55	$ 0,00		$ 0,00	$ 46.788.760,55
1/10/2013	31/10/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 646.062,02	$ 5.434.822,57	$ 0,00		$ 0,00	$ 47.434.822,57
1/11/2013	30/11/2013	30	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 625.221,31	$ 6.060.043,87	$ 0,00		$ 0,00	$ 48.060.043,87
1/12/2013	31/12/2013	31	19,85	29,775	19,85	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 646.062,02	$ 6.706.105,89	$ 0,00		$ 0,00	$ 48.706.105,89
1/01/2014	31/01/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 640.101,45	$ 7.346.207,34	$ 0,00		$ 0,00	$ 49.346.207,34
1/02/2014	28/02/2014	28	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 578.156,15	$ 7.924.363,49	$ 0,00		$ 0,00	$ 49.924.363,49
1/03/2014	31/03/2014	31	19,65	29,475	19,65	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 640.101,45	$ 8.564.464,95	$ 0,00		$ 0,00	$ 50.564.464,95
1/04/2014	30/04/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 618.875,66	$ 9.183.340,61	$ 0,00		$ 0,00	$ 51.183.340,61
1/05/2014	31/05/2014	31	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 639.504,85	$ 9.822.845,46	$ 0,00		$ 0,00	$ 51.822.845,46
1/06/2014	30/06/2014	30	19,63	29,445	19,63	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 618.875,66	$ 10.441.721,12	$ 0,00		$ 0,00	$ 52.441.721,12
1/07/2014	31/07/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 630.543,86	$ 11.072.264,98	$ 0,00		$ 0,00	$ 53.072.264,98
1/08/2014	31/08/2014	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 630.543,86	$ 11.702.808,84	$ 0,00		$ 0,00	$ 53.702.808,84



República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

1/09/2014	30/09/2014	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 610.203,73	$ 12.313.012,57	$ 0,00		$ 0,00	$ 54.313.012,57
1/10/2014	31/10/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 625.755,47	$ 12.938.768,05	$ 0,00		$ 0,00	$ 54.938.768,05
1/11/2014	30/11/2014	30	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 605.569,81	$ 13.544.337,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 55.544.337,86
1/12/2014	31/12/2014	31	19,17	28,755	19,17	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 625.755,47	$ 14.170.093,33	$ 0,00		$ 0,00	$ 56.170.093,33
1/01/2015	31/01/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 626.953,17	$ 14.797.046,50	$ 0,00		$ 0,00	$ 56.797.046,50
1/02/2015	28/02/2015	28	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 566.280,28	$ 15.363.326,78	$ 0,00		$ 0,00	$ 57.363.326,78
1/03/2015	31/03/2015	31	19,21	28,815	19,21	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 626.953,17	$ 15.990.279,95	$ 0,00		$ 0,00	$ 57.990.279,95
1/04/2015	30/04/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 611.361,25	$ 16.601.641,19	$ 0,00		$ 0,00	$ 58.601.641,19
1/05/2015	31/05/2015	31	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 631.739,95	$ 17.233.381,15	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.233.381,15
1/06/2015	30/06/2015	30	19,37	29,055	19,37	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 611.361,25	$ 17.844.742,39	$ 0,00		$ 0,00	$ 59.844.742,39
1/07/2015	31/07/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 628.449,73	$ 18.473.192,12	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.473.192,12
1/08/2015	31/08/2015	31	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 628.449,73	$ 19.101.641,85	$ 0,00		$ 0,00	$ 61.101.641,85
1/09/2015	30/09/2015	30	19,26	28,89	19,26	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 608.177,16	$ 19.709.819,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 61.709.819,00
1/10/2015	31/10/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 630.543,86	$ 20.340.362,86	$ 0,00		$ 0,00	$ 62.340.362,86
1/11/2015	30/11/2015	30	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 610.203,73	$ 20.950.566,59	$ 0,00		$ 0,00	$ 62.950.566,59
1/12/2015	31/12/2015	31	19,33	28,995	19,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 630.543,86	$ 21.581.110,45	$ 0,00		$ 0,00	$ 63.581.110,45
1/01/2016	31/01/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 640.996,17	$ 22.222.106,62	$ 0,00		$ 0,00	$ 64.222.106,62
1/02/2016	29/02/2016	29	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 599.641,58	$ 22.821.748,20	$ 0,00		$ 0,00	$ 64.821.748,20
1/03/2016	31/03/2016	31	19,68	29,52	19,68	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 640.996,17	$ 23.462.744,38	$ 0,00		$ 0,00	$ 65.462.744,38
1/04/2016	30/04/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 645.048,46	$ 24.107.792,84	$ 0,00		$ 0,00	$ 66.107.792,84
1/05/2016	31/05/2016	31	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 666.550,08	$ 24.774.342,91	$ 0,00		$ 0,00	$ 66.774.342,91
1/06/2016	30/06/2016	30	20,54	30,81	20,54	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 645.048,46	$ 25.419.391,37	$ 0,00		$ 0,00	$ 67.419.391,37
1/07/2016	31/07/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 690.158,44	$ 26.109.549,82	$ 0,00		$ 0,00	$ 68.109.549,82
1/08/2016	31/08/2016	31	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 690.158,44	$ 26.799.708,26	$ 0,00		$ 0,00	$ 68.799.708,26
1/09/2016	30/09/2016	30	21,34	32,01	21,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 667.895,27	$ 27.467.603,53	$ 0,00		$ 0,00	$ 69.467.603,53
1/10/2016	31/10/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 709.226,22	$ 28.176.829,75	$ 0,00		$ 0,00	$ 70.176.829,75
1/11/2016	30/11/2016	30	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 686.347,96	$ 28.863.177,71	$ 0,00		$ 0,00	$ 70.863.177,71
1/12/2016	31/12/2016	31	21,99	32,985	21,99	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 709.226,22	$ 29.572.403,94	$ 0,00		$ 0,00	$ 71.572.403,94
1/01/2017	31/01/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 719.451,57	$ 30.291.855,50	$ 0,00		$ 0,00	$ 72.291.855,50
1/02/2017	28/02/2017	28	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 649.827,22	$ 30.941.682,73	$ 0,00		$ 0,00	$ 72.941.682,73
1/03/2017	31/03/2017	31	22,34	33,51	22,34	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 719.451,57	$ 31.661.134,29	$ 0,00		$ 0,00	$ 73.661.134,29
1/04/2017	30/04/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 695.961,12	$ 32.357.095,41	$ 0,00		$ 0,00	$ 74.357.095,41
1/05/2017	31/05/2017	31	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 719.159,82	$ 33.076.255,23	$ 0,00		$ 0,00	$ 75.076.255,23
1/06/2017	30/06/2017	30	22,33	33,495	22,33	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 695.961,12	$ 33.772.216,35	$ 0,00		$ 0,00	$ 75.772.216,35
1/07/2017	31/07/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 708.933,64	$ 34.481.149,99	$ 0,00		$ 0,00	$ 76.481.149,99
1/08/2017	31/08/2017	31	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 708.933,64	$ 35.190.083,63	$ 0,00		$ 0,00	$ 77.190.083,63
1/09/2017	30/09/2017	30	21,98	32,97	21,98	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 686.064,82	$ 35.876.148,45	$ 0,00		$ 0,00	$ 77.876.148,45
1/10/2017	20/10/2017	20	21,15	31,725	21,15	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 441.655,19	$ 36.317.803,63	$ 0,00		$ 0,00	$ 78.317.803,63
21/10/2017	31/10/2017	11	31,725	31,725	31,725	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 348.905,27	$ 348.905,27	$ 0,00	$ 78.666.708,90
1/11/2017	30/11/2017	30	31,44	31,44	31,44	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 944.077,24	$ 1.292.982,51	$ 0,00	$ 79.610.786,14
1/12/2017	31/12/2017	31	31,155	31,155	31,155	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 967.797,75	$ 2.260.780,25	$ 0,00	$ 80.578.583,89
1/01/2018	31/01/2018	31	31,035	31,035	31,035	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 964.530,10	$ 3.225.310,35	$ 0,00	$ 81.543.113,99
1/02/2018	28/02/2018	28	31,515	31,515	31,515	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 882.978,05	$ 4.108.288,40	$ 0,00	$ 82.426.092,03
1/03/2018	31/03/2018	31	31,02	31,02	31,02	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 964.121,43	$ 5.072.409,83	$ 0,00	$ 83.390.213,47
1/04/2018	30/04/2018	30	30,72	30,72	30,72	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 925.101,58	$ 5.997.511,41	$ 0,00	$ 84.315.315,05

República de Colombia
Consejo Superior de la Judicatura
RAMA JUDICIAL

LIQUIDACIONES CIVILES

Fecha 09/12/2020
Juzgado 110013403005

Tasa Aplicada = ((1+TasaEfectiva)^(Períodos/DíasPeríodo))-1

1/05/2018	31/05/2018	31	30,66	30,66	30,66	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 954.299,43	$ 6.951.810,84	$ 0,00	$ 85.269.614,47
1/06/2018	30/06/2018	30	30,42	30,42	30,42	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 917.164,28	$ 7.868.975,12	$ 0,00	$ 86.186.778,75
1/07/2018	31/07/2018	31	30,045	30,045	30,045	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 937.457,57	$ 8.806.432,68	$ 0,00	$ 87.124.236,32
1/08/2018	31/08/2018	31	29,91	29,91	29,91	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 933.749,94	$ 9.740.182,63	$ 0,00	$ 88.057.986,26
1/09/2018	30/09/2018	30	29,715	29,715	29,715	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 898.439,71	$ 10.638.622,33	$ 0,00	$ 88.956.425,96
1/10/2018	31/10/2018	31	29,445	29,445	29,445	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 920.949,76	$ 11.559.572,09	$ 0,00	$ 89.877.375,73
1/11/2018	30/11/2018	30	29,235	29,235	29,235	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 885.632,90	$ 12.445.204,99	$ 0,00	$ 90.763.008,62
1/12/2018	31/12/2018	31	29,1	29,1	29,1	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 911.423,19	$ 13.356.628,18	$ 0,00	$ 91.674.431,81
1/01/2019	31/01/2019	31	28,74	28,74	28,74	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 901.455,30	$ 14.258.083,48	$ 0,00	$ 92.575.887,11
1/02/2019	28/02/2019	28	29,55	29,55	29,55	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 834.439,86	$ 15.092.523,34	$ 0,00	$ 93.410.326,97
1/03/2019	31/03/2019	31	29,055	29,055	29,055	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 910.178,72	$ 16.002.702,06	$ 0,00	$ 94.320.505,69
1/04/2019	30/04/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 878.809,98	$ 16.881.512,03	$ 0,00	$ 95.199.315,66
1/05/2019	31/05/2019	31	29,01	29,01	29,01	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 908.933,82	$ 17.790.445,85	$ 0,00	$ 96.108.249,48
1/06/2019	30/06/2019	30	28,95	28,95	28,95	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 878.006,39	$ 18.668.452,24	$ 0,00	$ 96.986.255,88
1/07/2019	31/07/2019	31	28,92	28,92	28,92	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 906.442,71	$ 19.574.894,96	$ 0,00	$ 97.892.698,59
1/08/2019	31/08/2019	31	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 908.103,64	$ 20.482.998,60	$ 0,00	$ 98.800.802,23
1/09/2019	30/09/2019	30	28,98	28,98	28,98	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 878.809,98	$ 21.361.808,57	$ 0,00	$ 99.679.612,21
1/10/2019	4/10/2019	4	28,65	28,65	28,65	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 36.317.803,63	$ 115.994,71	$ 21.477.803,28	$ 0,00	$ 99.795.606,92

Resumen Liquidación 5

Capital	$ 42000000,000
Capitales Adicionados	$,000
Total Capital	$ 42000000,000
Total Interés de plazo	$ 36317803,63000
Total Interes Mora	$ 21477803,28000
Total a pagar	$ 99795606,92000
- Abonos	$,000
Neto a pagar	$ 99795606,92000

Resumen Total de Liquidaciones

Total de capitales	$ 372083000,000
Total Interes plazo	$ 321743745,94000
Total Interes mora	$ 190274416,15000
Total a pagar	$ 884101162,09000
- Total Abonos	$,000
Neto a pagar	$ 884101162,09000

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Inversiones Mensuli SAS Nit: 9007357609
Demandado	Luis Eduardo Ordoñez Cardozo c.c 5.742.028
Radicado	11 001 31 03 **010 2016 00347 03**
Instancia	Segunda –*apelación de sentencia*-
Procedente	Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá
Fecha de la providencia	16 de diciembre de 2019

Proyecto discutido en salas del 19, 26 de noviembre, 03 y 10 de diciembre de 2020

Se procede a resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante, en contra de la sentencia en referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Que se libre mandamiento ejecutivo a favor de la demandante y en contra del demandado por los siguientes conceptos:

1.1. Obligación de dar por la suma de cuatro mil seiscientos millones de pesos ($4.600.000.000), por concepto de la aplicación de la cláusula penal prevista en el otros si Nro. 2 de fecha 21 de mayo de 2015 de la promesa de compraventa de fecha 14 de mayo de 2014 por incumplimiento de la obligación de hacer prevista en la cláusula quinta de dicho otro si.

1.2. Intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada para las operaciones comerciales desde la fecha del mandamiento ejecutivo y hasta la fecha en que se realice el pago.

1.3. Se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho que ocasione el proceso.

2. Fundamentos fácticos de las pretensiones.

2.1. El 10 de mayo de 2014 se suscribió una promesa de compraventa entre Luis Eduardo Ordoñez Cardozo en calidad de promitente vendedor y César Medina, Fredy Anaya, Luis Sánchez, Jorge González y Miguel Darío Perilla Gómez como promitentes compradores, del inmueble denominado UG3, lote de terreno de 14.281,05 metros cuadrados ubicado en Piedecuesta Santander, que formó parte del de mayor extensión con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 314-50039 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad (ORIP).

2.2. Mediante documento del 14 de abril de 2015, los promitentes compradores cedieron la promesa de compraventa a la sociedad demandante Inversiones Mensuli SAS.

2.3. A través de documento del 21 de mayo de 2015, las partes contratantes Luis Eduardo Ordoñez Cardozo (promitente vendedor) e Inversiones Mensuli SAS (promitente comprador) decidieron darle continuidad a la promesa, modificando a su vez algunas cláusulas.

2.4. En la cláusula QUINTA del OTRO SI Nº 2 las partes acordaron lo siguiente: "*Libertad y saneamiento. El promitente vendedor se obliga a transferir a los promitentes compradores el pleno derecho de dominio del inmueble prometido en compraventa libre de servidumbres, desmembraciones, usufructo, uso, habitación, hipotecas, administraciones, anticresis, condiciones resolutorias de dominio, pleitos pendientes, embargos judiciales, censo, movilización y patrimonio de familia. Adicionalmente se obliga a adelantar todos los trámites, permisos y en general todos los actos que sean necesarios para que sea cancelada la medida cautelar de declaratoria de utilidad pública que pesa sobre el inmueble en la anotación Nro. 1 folio de matrícula inmobiliaria Nro. 314-66441 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha de la firma del presente documento y acepta que en caso de incumplimiento se aplique una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta del inmueble.*"

2.5. El plazo de 2 meses pactado se venció el 21 de julio de 2015 sin que el promitente vendedor obtuviera la cancelación de la medida cautelar de

declaratoria de utilidad pública que aparece en la anotación 1 del 18 de agosto de 2011 en el folio de matrícula Nro. 314-66441. Dicha medida cautelar fue cancelada hasta el 18 de agosto de 2015.

2.6. Las partes acordaron en la cláusula décima de la promesa de compraventa, el mérito ejecutivo así: "*el presente contrato de promesa de compraventa prestará por si mismo mérito ejecutivo por todas las obligaciones de hacer o de dar que puedan derivarse del mismo sin necesidad de requerimientos judiciales o privados, a los cuales renuncian expresamente las partes contratantes. Para todos los efectos las obligaciones que presten mérito ejecutivo, derivadas del presente contrato se ejecutarán por medio del procedimiento ejecutivo, ante la jurisdicción ordinaria y ante los jueces de la República de Colombia.*".

2.7. La obligación incumplida por el primitente vendedor era una obligación de hacer, que contemplaba una cláusula penal la que puede ser cobrada judicialmente a través del proceso ejecutivo por contener una obligación clara, expresa y exigible.

3. Posición de la parte pasiva

Se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que no existe obligación que pueda ser cobrada por la vía del proceso ejecutivo, porque no ha habido declaración de autoridad competente previa que determine que hubo incumplimiento, además por la forma como se redactó la claúsula penal, no cobra ejecutoria separada de la exigencia de la obligación principal o de la prueba de su incumplimiento, al no ser punitiva. Propuso como excepciones de fondo principales, las siguientes:

3.1. Inexistencia de mora que permita el cobro de la cláusula penal por vía ejecutiva – cumplimiento de la obligación principal. Fundada en que la obligación principal del contrato de promesa de compraventa, en la cual fue incluida, está cumplida, y lo estaba para la fecha en que se pactó su cumplimiento. Asegura que entre los contratantes no se pactó de forma explícita, inequitativa y clara que la cláusula penal tenía un efecto solo de apremio, como lo exige el artículo 1594 del Código Civil, sin que se considere entonces que tenía un efecto punitivo pudiendo exigirse el pago de la pena, independientemente del cumplimiento de la obligación principal o de la resolución del contrato.

3.2. Carencia de declaración previa de incumplimiento por parte de la autoridad competente para hacerlo. Como las partes de común acuerdo determinaron en la cláusula décima de la promesa una cláusula compromisoria, se debía demandar previamente el cumplimiento de la obligación principal.

Como excepciones de fondo subsidiarias, propuso las siguientes:

3.3. Cobro de lo no debido. Enriquecimiento sin causa. Sustentada en que como no hubo incumplimiento de la obligación principal, no cobra vida la obligación accesoria contenida en la cláusula penal.

3.4. La obligación cobrada no es exigible al haber incumplido la demandante las obligaciones que para ella se derivaron del mismo contrato que constituye el título ejecutivo. Excepción de contrato no cumplido. Soportada en que la parte demandante estaba incumpliendo el contrato, por la imposibilidad de efectuar la transferencia de dominio del inmueble por causas no imputables al promitente vendedor.

4. Sentencia de primera instancia

Declaró probada la excepción denominada inexistencia de mora que permita el cobro de la cláusula penal por la vía ejecutiva – cumplimiento de la obligación principal, planteada por la parte demandada, y como consecuencia de lo anterior, declaró terminado el proceso junto con la respectiva orden de cancelación de medidas cautelares y la condena en costas en contra de la parte demandante.

Después de valorar el material probatorio recaudado, concluyó que la obligación a que se sometió el vendedor en el aparte pertinente del contrato base de ejecución, se cumplió, toda vez que adelantó todos los trámites que de él dependían para obtener el levantamiento de la medida cautelar, dentro del término establecido en el contrato, como le competía, medida que como se dilucidó, primero, realmente no afectaba el inmueble objeto del contrato, pues, como lo certificó el Subdirector de Planeación e Infraestructura del Área Metropolitana de Bucaramanga, no pesaba ninguna obligación sobre el lote y se considera que el mismo, debía ser desafectado, aunado a que ello no impidió que se efectuara la transferencia del bien en los términos pactados.

Además, el trámite ante la ORIP estaba a cargo de un tercero ajeno al negocio jurídico, esto es, del Área Metropolitana de Bucaramanga. El tiempo que podía tardar la inscripción de la misma era incierto y, en todo caso, ajeno al vendedor, quien adelantó todos los trámites que a él le correspondían dentro de los plazos establecidos, cumpliéndose finalmente la obligación en los términos convenidos por los contratantes.

Se logró demostrar que dentro del plazo establecido en la promesa, el demandado adelantó los trámites que eran necesarios para que la medida cautelar que afectaba el inmueble, se cancelara y levantara, estableciendose que únicamente procedía la cláusula penal en caso de incumplimiento, es decir, que el acreedor únicamente podía demandar el cumplimiento de la obligación o la pena y, al cumplirse la primera, no hay lugar a exigir la segunda.

A lo anterior se suma, que la demandante no ha cumplido con la totalidad del pago del precio que se pactó en el contrato, saldo que se cancelaría con un área no construída, sin embargo, la sociedad entró en liquidación y no adelantó ningún proyecto que permita entregaar dichas áreasa al vendedor, al entrar en insolvencia, como así lo reconoció el liquidador y representante legal en su interogatorio de parte.

También incumplió la demandante el contrato, pues había sido imposible efectuar la transferencia del inmueble por causas no imputables al promitente vendedor, toda vez que dicha sociedad debía dar instrucciones precisas y claras acerca de cómo se realizaría la respectiva transferencia, y no lo hizo, lo que generó que la escritura pública suscrita el 21 de mayo de 2015, fuera devuelta por el registrador.

5. Recurso de apelación.

Oportunamente la parte demandante sustentó por escrito el recurso de apelación, luego de ajustado el trámite de este asunto en segunda instancia, al trámite previsto por el Decreto 806 de 2020.

Los motivos de reparo se pueden clasificar de la siguiente forma:

5.1. La cláusula penal pactada en el contrato de promesa de compraventa no está referida al cumplimiento o incumplimiento del contrato de promesa por parte del vendedor. Se refiere al incumplimiento de una obligación autónoma pactada por las partes dentro del contrato de compraventa. Su no cumplimiento o mora o retardo implicaba para la parte vendedora una sanción o pena. Por ello en nada tiene que ver el cumplimiento o no de la forma de pago de la promesa de compraventa.

Esa obligación especial y autónoma se caucionó con una multa mayor, precisamente por la necesidad que representaba para la compradora de poder iniciar los estudios previos y autorizaciones legales, al haber transcurrido más de un año sin que se obtuviera la transferencia del inmueble y su saneamiento.

Los plazos determinados en el OTRO SÍ N°2 de la promesa fueron definidos por las partes consciente el vendedor de lo que se obligaba y de sus consecuencias sancionatorias. Los plazos allí establecidos eran tan cortos que ni siquiera se dejó previsto que si había un cumplimiento tardío de la obligación, se podía reducir en algún porcentaje la sanción acordada.

El artículo 1596 del código civil señala un camino diferente en caso de cumplimiento tardío, de acordar con el acreedor cumplido, una reducción de la pena.

La comunicación que envió el vendedor al comprador firmada supuestamente por un funcionario del Área Metropolitana, que no estaba autorizado para producir este tipo de comunicaciones oficiales, en la que se puede observar claramente, que no emanaba de la Jefatura que corresponde del Área metropolitana y de su contenido no se podía concluir si se fuese a cumplir dicha cancelación.

Esta obligación especial, con cláusula penal no era condicional., ni la decisión correspondía o estaba en manos de un tercero ya que lo manifestado por el vendedor era que el levantamiento de la medida debía ocurrir por el área Metropolitana ya que el Plan Parcial se había modificado en lo que sería el viaducto que allí se iba a ejecutar y ya no estaba afectado.

La obligación del vendedor a la que se le colocó una cláusula penal de apremio, claramente es otra, muy diferente al objeto principal del contrato. La cláusula penal se introdujo en un OTRO SI muy posterior a la firma de la PROMESA. Y su inclusión obedeció a haberse realizado varios pagos de sumas

importantes del precio sin que se hubiera liberado el bien, de un hecho jurídico que impedía cualquier comercialización o desarrollo del predio. Lo primero a tener en cuenta es que como ya se ha dicho, hay dos actos en un mismo documento. Uno, el contrato de promesa y otra, una obligación caucionada, que tienen de común, a las partes y al predio objeto del contrato de promesa.

5.2. La excepción de contrato no cumplido propuesta por el vendedor demandado, no aplica frente al objeto del presente proceso, como es el cobro de una obligación dineraria resultante del cumplimiento tardío de una obligación autónoma contenida en el mismo documento de promesa de compraventa. La cláusula penal no fue establecida para las obligaciones propias de la promesa de compraventa del inmueble, como era la transferencia y el pago. Entonces mal podría pretenderse ligar los hechos de la promesa con la obligación autónoma prevista por las partes.

No es cierto que Inversiones Mensuli SAS incumplió la obligación de no haber dado las instrucciones necesarias a Acción Fiduciaria para la transferencia del inmueble, ya que en el OTRO SI N° 2 se lee textualmente: ***"TERCERA: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERENCIA****. La CLÁUSULA QUINTA quedará así: las partes acuerdan que para perfeccionar la presente* ***PROMESA DE COMPRAVENTA*** *en cuanto a transferencia del inmueble, el* ***PROMITENTE VENDEDOR****, además de suscribir la escritura pública, otorgará las instrucciones a acción fiduciaria, para que realice el traspaso correspondiente de conformidad con el OTRO SI suscrito el día 14 de abril de 2015, quedando como* ***FIDEICOMITENTE LA PROMITENTE COMPRADORA INVERSIONES MENSULI SAS*** *y cuya finalidad será la de CONSTRUIR UN PROYECTO INMOBILIARIO de conformidad con EL CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN bajo cuyo contenido se desarrollará dicho proyecto. (el subrayado es nuestro) La transferencia deberá realizarse a más tardar el día veintiuno (21) de mayo de 2015 a las 4:00 P.M. en la notaría novena (9ª) de Bucaramanga. Cada una de las partes deberá NOTIFICAR a ACCIÓN FIDUCIARIA S.A. la obligación consignada en la presente cláusula y adjuntar copia del presente OTRO SI para lo cual se firma tres ejemplares útiles, uno para cada parte y uno para ACCIÓN FIDUCIARIA y que quedará en manos de la PROMITENTE COMPRADORA."* (subrayado del apelante).

La excepción de contrato no cumplido, no tiene cabida en este proceso, pues la demanda no tiene pretensiones relacionadas con el contrato de promesa de compraventa. Este caso que se refiere a una obligación diferente caucionada con una sanción monetaria en caso de incumplimiento. Es una obligación autónoma diferente del contrato de promesa. El demandado, si cree que hubo incumplimiento de la promesa, debió acudir ante la jurisdicción correspondiente a fin de demandar a INVERSIONES MENSULI SAS probando dicho incumplimiento y los perjuicios que considere se le hayan causado.

II. CONSIDERACIONES

1. La competencia del Tribunal está delimitada por los puntos de controversia expuestos en la sustentación de la apelación, quedando vedados los temas que no hayan sido debatidos frente al fallo de primera instancia, como lo prevén los artículos 320 y 328 del código general del proceso.

2. Sea lo primero adverar, y en ejercicio del control oficioso de legalidad del título ejecutivo, que la procedencia del juicio ejecutivo para hacer exigibles cláusulas penales no ha sido pacífico en la doctrina, a tal punto que muchos consideran que se requiere previa declaratoria de incumplimiento contractual en un juicio declarativo para abrir campo a la posibilidad de acudir a la acción ejecutiva.

La cláusula penal, tal y como se infiere de los artículo 1592 y siguientes del Código Civil, crea una obligación distinta a la principal del contrato del cual emana, y por tanto, debe considerarse como una obligación accesoria[1] y condicional[2].

La jurisprudencia[3] y la dotrina[4] han establecido que la cláusula penal puede revestir tres funciones, dependiendo de la forma en cómo es pactada por las partes: (i) cláusula penal como apremio (aquella que se acumula con la obligación

[1] De conformidad con el artículo 1593 del Código Civil la nulidad de la obligación principal acarrea la de la pena, más no a la inversa.
[2] Se incurre en la pena si se incumple la obligación principal.
[3] Fallo CSJ SC, 18 dic. 2009, rad. n.° 2001-00389-01: "*En fin, es evidente que el Código Civil, como ya se dijera concibe la aludida estipulación de manera polifuncional, pues junto con su carácter aflictivo, coexisten, a la par su condición de caución y la indemnizatoria, que suele deducirse de la regla contenida en el artículo 1594 en cuanto prevé que "antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos, a su arbitrio*."
[4] Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Editorial Temis, Bogotá, 2013. páginas 928 a 931.

principal), (ii) cláusula penal como garantía cuando recae sobre un tercero (reemplaza la obligación principal incumplida) y (iii) cláusula penal como indemnización de perjuicios (tasación anticipada de perjuicios).

Las normas del Código General del Proceso establecen varios supuestos de hecho que permiten inferir que sí es posible exigir ejecutivamente una cláusula penal, siempre y cuando la pena pactada por las partes en un contrato, tenga una función de tasación anticipada de perjuicios.

La posibilidad de demandar ejecutivamente una obligación contenida en un contrato, emana del tenor literal del artículo 422 del C.G.P. siempre que conste en un documento, que provenga del deudor o de su causante y que de la misma se pueda inferir absoluta claridad, expresividad y exigibilidad.

El artículo 426 permite que la ejecución por una obligación de dar o hacer contenida en una convención, se extienda a los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe o por la mora en la ejecución del hecho, para lo cual el demandante estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo.

Es posible pedir la ejecución de una obligación sometida a condición suspensiva, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la misma. (Artículo 427).

Por último, y en atención al artículo 428 ibídem, en el juicio ejecutivo el acreedor puede demandar desde un principio el pago de perjuicios (compensatorios y moratorios), por la ejecución o no de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual, para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero.

En consecuencia, cuando la cláusula penal pactada, tiene una función de tasación anticipada de perjuicios, ya sea compensatorios o moratorios, es posible acudir al juicio ejecutivo por las siguientes razones: (i) la obligación principal contenida en un contrato permite cobrarse ejecutivamente, (ii) la cláusula penal contenida en un contrato bilateral se considera una obligación accesoria y condicional, (iii) existe un principio de la lógica jurídica que enseña que lo accesorio

sigue la suerte de lo principal, de tal suerte que no hay razón suficiente que excluya la ejecución de este tipo de pacto negocial, y (iv) las normas procesales permiten demandar ejecutivamente los perjuicios derivados del incumplimiento.

El análisis anterior excluye la posibilidad de que cláusula penales que tengan como función exclusivamente el simple apremio sin tasación de perjuicios o la garantía de cumplimiento de la obligación principal por un tercero, puedan cobrarse ejecutivamente, porque requieren juicio declarativo donde se establezca el grado de responsabilidad de cada contratante en el incumplimiento de las obligaciones.

3. Después de confrontar la parte resolutiva de la sentencia, con los puntos de reparo expuestos en la sustentación del recurso de apelación, se considera que no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno relacionado con la excepción de contrato no cumplido, ampliamente criticada en el escrito de sustentación de la apelación, puesto que dicho medio de contradicción no fue declarado probado en la parte resolutiva del fallo recurrido, al indicarse que con la excepción declarada probada, se enerva la totalidad de las pretensiones de la demanda.

4. El problema jurídico principal que concita la atención de la Sala, se circunscribe en determinar si el cumplimiento de la obligación principal pactada en la promesa de compraventa, hacía improcedente el cobro de la claúsula penal; para lo cual deberá analizarse la naturaleza jurídica de dicho pacto y la forma en cómo debe interpretarse el mismo.

5. De conformidad con lo previsto por el artículo 1594 del Código Civil, antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.

Sobre la cláusula penal, en la Sentencia SC3047-2018[5], la Corte Suprema de Justicia precisó: "*en el ámbito de la dogmática jurídica civil, se denomina* «cláusula penal» *al acuerdo de las partes sobre la estimación de los perjuicios compensatorios o moratorios, para el evento del incumplimiento del convenio o la mora en la satisfacción de las obligaciones derivadas del mismo, recibiendo en el primer caso el nombre de* «cláusula penal compensatoria» *y en el segundo,* «cláusula penal moratoria»*; así mismo se reconoce, que cumple la función complementaria de apremiar al deudor para el adecuado cumplimiento de la prestación.*

En virtud de lo anterior, cabe señalar, que dicho pacto tiene el carácter de una «obligación accesoria»*, en cuanto tiene por objeto asegurar el cumplimiento de otra obligación; igualmente, constituye una* «obligación condicional»*, porque la pena solo se debe ante el incumplimiento o retardo de la* «obligación principal»*; y también puede representar una liquidación convencional y anticipada de los perjuicios en caso de configurarse alguno de tales supuestos."*

Sobre la utilidad de la cláusula penal, en sentencia SC, 7 oct. 1976, G.J. t. CLII, n.° 2393, págs. 446-447, la Corte expuso: "*[…] Ahora, la estipulación de una cláusula penal en un contrato le concede al acreedor un conjunto de ventajas, pues en primer término lo libera de la difícil labor de aportar la prueba sobre los perjuicios, porque hay derecho a exigir el pago de la pena establecida por el solo hecho de incumplirse la obligación principal; en segundo lugar, el incumplimiento de la obligación principal hace presumir la culpa del deudor, y por esta circunstancia, el acreedor también queda exonerado de comprobar dicha culpa (Art. 1604 del C. C); en tercer lugar, evita la controversia sobre la cuantía de los perjuicios sufridos por el acreedor.*

[…] Para evitar un doble pago de la obligación, en principio no puede exigir el acreedor, a la vez, la obligación principal y la pena (Art. 1594 del C.C); tampoco puede solicitar el cúmulo de la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios, porque ello entrañaría una doble satisfacción de los mismos, salvo que así se haya estipulado, o que la pena convenida sea de naturaleza moratoria, pues en uno y otro eventos si puede pedirse acumuladamente tales reclamaciones (Art. 1600 del C. C).

Estipulada la cláusula penal y aunque el acreedor no esté obligado a aceptar del deudor el pago parcial de la obligación, sin embargo, cuando lo acepta en esas condiciones renuncia implícitamente a una parte proporcional de la pena, como claramente se desprende de la ley, en

[5] Sentencia del 31 de julio de 2018 M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

cuanto ésta establece que 'si el deudor cumple solamente una parte de la obligación y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal'. (Art. 1596 del CC)».

Puede deducirse entonces que la regla general prevista por el legislador es que el cumplimiento de la obligación principal exime el cumplimiento de la pena, a menos que se den cualquiera de las siguientes excepciones: (i) que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo (cláusula penal moratoria), y (ii) la voluntad de las partes exprese inequívocamente que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal, constituyéndose en un tipo normativo supletivo de la voluntad.

De lo anterior, surge un nuevo interrogante: ¿cómo identificar una cláusula penal moratoria?. Al respecto, la doctrina[6] ha precisado que: "*si la pena es moratoria, pactada por el simple retardo, basta, para que proceda la acumulación, que aparezca haberse estipulado de esa manera, por lo que la voluntad de las partes puede interpretarse, como cuando el valor de la pena es ínfimo en comparación con el de la obligación principal, o cuando se señala que habrá una multa por cada día de retraso, que suele utilizarse en los contratos de ejecución sucesiva, particulamente si es administrativo, etc.*"

Quiere decir lo anterior, que para catalogar una cláusula penal contractual como moratoria, además del indicio de cuantía ínfima, debe desprenderse del tenor literal de la misma, esto es, que la multa se da por el simple retardo.

En tal sentido, podrían identificarse frases que sugieran dicho pacto, tales como: por la sola mora, por el simple hecho de la extemporaneidad, por el solo acaecimiento del atraso, en fin, términos que no ofrezcan ningún motivo de duda sobre el alcance del pacto, pues una simple manifestación general de incumplimiento, hace aplicable la regla general de cláusula penal compensatoria.

6. El pacto negocial que dio origen al presente litigio, inició con la suscripción de los siguientes documentos:

6.1. Contrato de promesa de compraventa sobre un lote denominado Mensuli UG3[7], con un área de 14.281,05 m2 ubicado en Piedecuesta Santander, el

[6] Velásquez Gómez, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones. Editorial Temis, Bogotá, 2013. Página 934
[7] Folios 2 a 10 C1.

cual hace parte de otro de mayor extensión distinguido con matrícula Nro.314-50039, con destino a la transferencia al fideicomiso Mensuli Bucaramanga Acción Fiduciaria S.A. suscrito el 10 de mayo de 2014 entre César Medina, Fredy Anaya, Luis Sánchez, Jorge González y Miguel Darío Perilla Gómez (promitentes compradores) y el señor Luis Eduardo Ordoñez Cardozo (promitente vendedor).

6.2. Por medio de documento de cesión y otro si[8] a la promesa de compraventa del inmueble denominado UG3 suscrita el 10 de mayo de 2014, las partes acordaron el 14 de abril de 2015, que los promitentes compradores cedieran sus derechos y obligaciones en la citada promesa a Inversiones Mensulí SAS., la cual fue debidamente aceptada por el promitente vendedor.

6.3. A través de documento denominado OTROSI Nº2[9] a la promesa de compraventa lote UG3 Mensuli – Piedecuesta Santander, suscrita el 21 de mayo de 2015, las partes ratificaron su interés de darle continuidad a la promesa de compraventa suscrita el 10 de mayo de 2014 y modificada el 14 de abril de 2015, relacionada con el inmueble mencionado. Se dejó expresa constancia en la cláusula segunda de esta modificación, que no ha habido incumplimiento por las partes de la promesa de compraventa y el otro si.

En la cláusula quinta de este documento, denominada libertad y saneamiento, las partes hicieron el siguiente pacto: "*El promitente vendedor se obliga a transferir a el promitente comprador el pleno derecho de dominio del inmueble prometido en compraventa libre de todo tipo de gravámenes, servidumbres, desmembraciones, usufructo, uso, habitación, hipotecas, administraciones, anticresis, condiciones resolutorias de dominio, pleitos pendientes, contribuciones, impuestos, embargos judiciales, censos, compromisos o movilización y patrimonio de familia.* ***Adicionalmente se obliga adelantar todos los trámites, permisos y en general todos los actos que sean necesarios para que sea cancelada la medida cautelar de declaratoria de utilidad pública que pesa sobre el inmueble en la anotación No. 1 folio de matrícula inmobiliaria No. 314-66441 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, cancelación que deberá obtenerse en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha de firma del presente documento y acepta que en caso de incumplimiento se aplique una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta del inmueble.*** *Bajo*

[8] Folios 16 a 20
[9] Folios 11 a 14 C1

las mismas condiciones para efectos del registro de la escritura pública de transferencia, el promitente vendedor se obliga a obtener del Área Metropolitana de Bucaramanga autorización para el registro de la mencionada escritura, en un término no superior a un mes a partir de la entrega de la escritura."[10] (Negrilla y subrayado del Tribunal).

7. Tal y como fue redactada la cláusula penal, es claro para esta Corporación que la misma NO tiene una connotación de moratoria, en virtud a que de la misma no se desprende en forma expresa la voluntad de las partes de hacerla exigible para castigar la mora o retardo en caso de incumplimiento.

Para un mejor entendimiento, se fragmentará el pacto contractual así:

(i) La obligación principal amparada a cargo del deudor era la siguiente: "*adelantar todos los trámites, permisos y en general todos los actos que sean necesarios para que sea cancelada la medida cautelar de declaratoria de utilidad pública*".

(ii) La obligación se sometió a un plazo así: "*cancelación que deberá obtenerse en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir de la fecha de firma del presente documento".*

(iii) La obligación accesoria y condicional, denominada cláusula penal, fue del siguiente tenor: "*acepta que en caso de incumplimiento se aplique una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del precio de venta del inmueble*."

En ningún aparte del convenio contractual se precisó que por el simple retardo, por el solo hecho de la mora o únicamente por el incumplimiento del plazo, se haría exigible la pena, ni mucho menos se especificó que por el pago de la pena no se extinguía la obligación principal. A contrario sensu, se enunció en forma genérica, que en caso de incumplimiento, se imponga la pena, premisa que por definición, constituye una típica cláusula penal compensatoria.

Refuerza la tesis anterior, el hecho de que el valor pactado como cláusula penal, no puede considerarse como ínfimo, puesto que si el valor del precio de venta del inmueble se pactó en veintitrés mil millones de pesos, un veinte por

[10] Ver folios 12 y 13 C1.

ciento sobre dicho tope de ninguna manera puede colegirse o permite inferir que es una cláusula penal moratoria, porque constituye una cifra considerable.

8. Las pruebas allegadas al proceso, tal y como lo precisó la funcionaria de primera instancia, dieron cuenta que el Área Metropolitana de Bucaramanga, mediante oficio DAMB-SPI del 9 de julio de 2015[11], comunicó a la ORIP de Piedecuesta Santander, la cancelación de las anotaciones correspondientes a la utilidad pública, entre otros, del predio distinguido con matrícula inmobiliaria Nro. 314-66441, lo anterior, teniendo en cuenta que corresponde a los saldos de los predios irrigados mediante Acuerdo Metropolitano Nro. 004 de febrero 19 de 2004. Importante advertir que este documento no fue tachado de falso en el trámite de este juicio, razón por la cual se presume su autenticidad, sin que pueda hacerse una valoración en tal sentido en este grado superior.

Según el certificado de tradición sobre el referido inmueble, aportado por la misma parte demandante[12], en la anotación 7 se observa que el 19 de agosto de 2015, en cumplimiento del oficio 201 del 18 de agosto del mismo año remitido por el Área Metropolitana de Bucaramanga, se canceló la anotación 001 de dicho certificado, que contenía la medida cautelar de declaratoria de utilidad pública, dispuesta por el Acuerdo Metropolitano Nro. 004 del 19 de febrero de 2004.

En este orden de ideas, desde la génesis del litigio se vislumbró que la obligación principal a la cual estaba sometida la cláusula penal (cancelación de la medida cautelar), ya se había cumplido por parte del demandado.

De suerte que, como no se pactó una cláusula penal moratoria, sino compensatoria, es intrascendente analizar la mora o el retardo en el cumplimiento de la misma, sin que, como se ha explicado con suficiencia, se pudieran acumular las pretensiones de cumplimiento de la obligación principal y la pena.

Por lo tanto, inane resulta profundizar sobre el argumento expuesto por el apelante, relacionado con que se trata de una cláusula penal exclusiva para la obligación de inscripción de la cancelación de una limitación al dominio diferente a la obligación principal derivada de la promesa de compraventa, porque se itera, la voluntad expresada por las partes en el contrato es la que define la naturaleza

[11] Folio 123 C1
[12] Folio 22 C1

jurídica de la cláusula penal, sumado al hecho de que toda cláusula penal es una obligación accesoria y está inescindiblemente unida a una obligación principal.

Al no preverse una pena moratoria ni acogerse al régimen de excepción de acumular la obligación principal con la pena, en este asunto, por tratarse de una cláusula penal compensatoria, el cumplimiento de la obligación principal (cancelación de la limitación al dominio), no permite hacer exigible la pena, por expresa prohibición contenida en el artículo 1594 del Código Civil.

9. Conclusión. El cumplimiento de la obligación principal en una cláusula penal compensatoria, donde no hubo pacto en contrario de las partes, hace improcedente el cobro de la misma, y por tal razón, acertó la sentencia de primer grado en declarar probada la excepción de inexistencia de mora que permita el cobro de la cláusula penal por vía ejecutiva – cumplimiento de la obligación principal, circunstancia que exime valorar las demás excepciones de mérito, puesto que su probanza derrumba la vocación de prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Costas. Se condenará en costas a la parte demandante en favor del demandado, de conformidad con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2019 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá D.C., pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas por el trámite de la segunda instancia a la parte demandante y en favor de los demandados.

Como agencias en derecho por la segunda instancia el Magistrado sustanciador fija la suma de veintitrés millones de pesos $23.000.000,oo. Ante el *A quo* efectúese la correspondiente liquidación.

NOTIFÍQUES Y CÚMPLASE;

Los Magistrados,



IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Documento con firma electrónica

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
36a5eb0f1a293cad2b485109240158962092fd5c6c4fb655c49bf7482ed90523
Documento generado en 16/12/2020 04:39:28 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

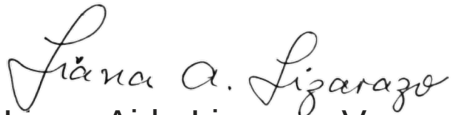
Magistrado
Ivan Dario Cardona Zuluaga

Atendiendo a la directrices de teletrabajo autorizadas mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 complementado por el acuerdo PCSJA20-11518, y conforme a lo lineamientos previstos en la ley 527 de 1999, por medio del presente correo electrónico manifiesto como Magistrada **la aprobación a los proyectos sometidos a estudio,** referente a los siguientes expedientes:

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Inversiones Mensuli SAS Nit: 9007357609
Demandado	Luis Eduardo Ordoñez Cardozo c.c 5.742.028
Radicado	11 001 31 03 **010 2016 00347 03**
Instancia	Segunda –*apelación de sentencia*-
Procedente	Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá
Fecha de la providencia	16 de diciembre de 2019

Esta aprobación suple la firma, y hace parte integral del proyecto

Cordialmente,



Liana Aida Lizarazo Vaca

Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5d2c210bd8aefe5f1a3ab22b1711db6233dce74e1faba8c2c58598dc13adfc9d**
Documento generado en 16/12/2020 03:30:09 p.m.

RE: Proyectos aviso de sala del 19 de noviembre de 2020

Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/12/2020 17:05

Para: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona, cordial saludo.

Conforme a los acuerdos vigentes del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas sobre trabajo en línea, a raíz de las medidas contra el COVID 19, por medio de este mensaje de datos **APRUEBO** el(los) proyecto(s) de acción(es) remitido(s), según el correo electrónico que respondo aquí, así:

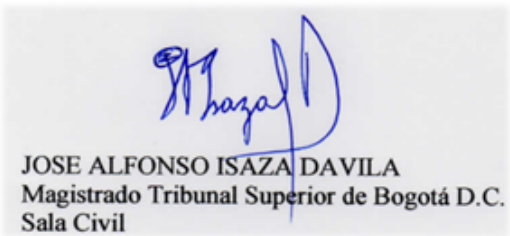
ASUNTO(S) CIVILES:

Radicado: 110013103 010 2016 00347 03
Proceso: Ejecutivo
Demandante: Inversiones Mensuli S.A.S.
Demandado: Luis Eduardo Ordoñez Cardozo
Observaciones: Confirma

Radicado 11 001 22 03 000 2019 1111
Recurso extraordinario de revisión
Demandante Grupo Comercial Jordania S. A. S. En reorganización
Demandado Banco de Occidente S. A.
Observaciones: Declara infundado

Respecto del proyecto Radicado: 110013103 029 2018 00204 01, ejecutivo de Basf Química Colombia S.A. contra Luis Hernando Vásquez Higuera y otro, estoy en revisión, conforme a lo comentado, para posible salvedad de voto, que en caso de ser necesario, remitiré en correo separado.

Este mensaje desde el correo institucional debe tenerse como parte de la decisión, habida cuenta las circunstancias de dicho trabajo en línea. Anexo firma copiada o digitalizada del suscrito servidor judicial, según los arts. 11 del Decreto 491 de 2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y demás normas pertinentes.



De: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de noviembre de 2020 6:38 p. m.
Para: Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Proyectos aviso de sala del 19 de noviembre de 2020

Apreciados compañeros de Sala.

Adjunto les remito los proyectos de la Sala del día de hoy.

Los enlaces de acceso a los expedientes están en el respectivo proyecto, salvo el proceso civil 029-2018-00204-02 que apenas se está escaneando. Una vez se termine se remitirá el link.

Se remite sin firma escaneada, atendiendo a que la información remitida desde el correo institucional personal se presume auténtica, conforme los artículos 2 y 11 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Atentamente;

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado Sala Civil Tribunal Superior de Distrito de Bogotá D.C.

Sobre la presunción de autenticidad de la información remitida por correo electrónico, ver las siguientes normas:
- DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020. ARTÍCULO 11
- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 103
- LEY 527 DE 1999. ARTÍCULOS 1, 5 y 7
- ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020. ARTÍCULOS 1 Y 2. Suspensión de términos y Trabajo en casa.
- ACUERDO No. PCSJA17-10715 Julio 25 de 2017. ARTÍCULO DIECIOCHO. USO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Rad. 002-2007-00642-01

Revisada las actuaciones en el expediente digital aportado, el Despacho **DISPONE:**

PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida el 2 de marzo de 2020, por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad.

SEGUNDO: IMPRIMIR a este proceso el trámite consagrado en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, con el objetivo de resolver la apelación instaurada contra el fallo de primer grado.

TERCERO: De conformidad con el inciso 2° del artículo 14 *ibídem,* se corre traslado a los recurrentes para que sustenten los reparos que, de manera concreta, formularon contra la sentencia del *a quo*, dentro del término de cinco (5) días que se contabilizará, una vez se notifique este proveído, so pena de declararse desierto.

CUARTO: Vencido el término antes indicado, córrase traslado al extremo contrario de la sustentación por el término de cinco (5) días.

Por secretaría, contrólese los mencionados términos, para que vencidos, se ingrese el expediente al Despacho, a fin de proferir la decisión que en derecho corresponda.

Los memoriales correspondientes deberán ser enviados, preferiblemente, a la dirección de correo electrónico: *secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co y/o des14ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co*

Notifíquese,



NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ

MAGISTRADA

002-2007-00642-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad. N° 11001 31 03 ***012 2019 00251*** *01*

Verificado el expediente, así como el sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI, se observa que el Juzgado *a quo* no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110 y 326 del Código General del Proceso, en torno al traslado que, con inclusión en la respectiva lista, se debía realizar antes de remitir el expediente al Superior, por lo que previo a resolver el recurso de apelación objeto de conocimiento, y en aras de evitar futuras nulidades, resulta necesaria la devolución del expediente, a fin de que se revise la actuación y se observe con rigurosidad la normatividad en comento, para que la parte **no** apelante ejerza sus derechos a la contradicción y defensa.

Secretaría proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE[1],

Firmado Por:

ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 017 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **598ae4d27b642cb639da95fef04a5f5db322162cadae17c6995d032882983bef**
Documento generado en 16/12/2020 04:02:18 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[1] *Para consultar el proceso digital visite: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil-despacho-17/14*

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 1101-3103-012-2019-00449 00
Asunto: Ejecutivo con garantía real.
Recurso. Apelación Auto
Demandante: BBVA
Demandado: Hernando Enrique Bolivar Ayala

Decídese lo pertinente respecto a la apelación concedida frente al auto proferido el 25 de agosto de 2020, por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del juicio compulsivo citado en la referencia.

Para resolver, bastan las siguientes

CONSIDERACIONES

Mediante auto proferido el 27 de octubre de 2020, tras resolver la reposición interpuesta por Inversionistas Estrategicos S.A.S. "INVERTS" frente al auto proferido el 25 de agosto de 2020, el *a quo* **concedió** a dicha sociedad el **subsidiario** recurso de apelación, supuestamente interpuesto contra el proveído que negó el reconocimiento de la prenombrada sociedad como sustituta del BBVA Colombia, apoyado en que, al tenor del "inciso 3º del artículo 68 del C.G.P., presuponía la aceptación expresa del demandado, la cual echó de menos.

Empero, examinado el escrito de la reposición formulada por la apoderada judicial de "INVERST S.A.S." contra la susodicha providencia, se advierte que el mismo únicamente versa sobre ese medio de impugnación, sin que aparezca allí propuesta, en forma subsidiaria, la mentada alzada, la cual necesariamente debía

estar allí contenida, habida cuenta que, al tenor de lo prescrito en el numeral 2º del artículo 322 del C.G.P., "la apelación contra autos podrá proponerse directamente o en subsidio de la reposición".

Por tanto, no están cumplidos cabalmente los requisitos para la concesión del recurso en mención, toda vez que ello presupone, obviamente, la interposición del mismo, la cual, se insiste, no emerge del escrito contentivo de la opugnación principal; inclusive, en ningún otro memorial de la actuación digital remitida aparece formulada la alzada subsidiaria.

Así las cosas, con apoyo en las prescripciones del inciso 4º del artículo 325 del C.G.P. , se impone inadmitir la alzada concedida por el a quo frente al proveído de 25 de agosto de 2020.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- Declarar **INADMISIBLE** el recurso de apelación concedido por el a quo a la sociedad Inversionistas Estrategicos S.A.S. "INVERTS" frente al auto proferido el 25 de agosto de 2020, dentro del juicio compulsivo citado en la referencia.

Segundo.- Oportunamente, **devuélvase** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D. C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Magistrado Ponente: **Germán Valenzuela Valbuena**

Radicado: 1100 1310 3014 2009 00241 01 - **Procedencia:** Juzgado 45 Civil del Circuito.
Proceso: Rosa Katherine Gómez Agudelo y otra. **vs.** Expreso Gómez Villa S.A. y otros.
Asunto: Apelación sentencia
Aprobación: Sala virtual n°. 48 (3/12/20)
Decisión: **modifica y adiciona**.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 del Decreto 806 de 2020[1], se resuelve por escrito el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de octubre de 2019, proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito de esta ciudad[2].

ANTECEDENTES

1. Rosa Katherine Gómez Agudelo, actuando en nombre propio y en representación de su hija Alba Carolina Galindo Gómez, instauró demanda en contra de Edisson Perafán Espitia, Carlos Oswaldo Sarmiento, Expreso Gómez Villa S.A. y QBE Central de Seguros, con el propósito de que se declarara que:

i. Existió un contrato de transporte de pasajeros, el cual fue incumplido por los demandados Edisson Perafán Espitia, Carlos Oswaldo Sarmiento y Expreso Gómez Villa S.A.

ii. En consecuencia, sean condenados a pagar solidariamente, junto con QBE Central de Seguros, las sumas de dinero discriminadas en la

[1] Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de la justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.//En este caso el auto dictado en segunda instancia alcanzó firmeza y cumplió su finalidad.
[2] QBE Seguros S.A. también apeló la sentencia de primera instancia, pero **no sustentó su recurso**.

demanda por concepto de perjuicios materiales e inmateriales, más intereses desde que se produjo el accidente hasta la fecha de pago.

2. El fundamento de las pretensiones se resume como sigue:

a. Rosa Katherine Gómez Agudelo celebró el 19 de abril de 2007 un contrato de transporte de pasajeros con Edisson Perafán Espitia, conductor del microbús de placas SVF-438, rodante afiliado a la empresa de transportes Expreso Gómez Villa S.A.

b. El contratista no cumplió la obligación de transportar sana y salva a la pasajera, ya que por exceso de velocidad el conductor fue incapaz de maniobrar adecuadamente el vehículo y 'al marcar la curva del puente del común vía Chía - Bogotá D.C., se accidentó volcándose, y causándole múltiples traumas a mi poderdante'.

c. La demandante tuvo una incapacidad médico legal de 35 días, con '1. Perturbación funcional de miembro superior derecho, de carácter permanente. 2. Perturbación funcional de órgano de la presión, de carácter permanente'. Además se vio afectada económica y moralmente porque: no ha podido volver a laborar, el contrato de trabajo le fue 'cancelado' el 15 de diciembre de 2008 y su hija depende de ella.

3. Contra el auto admisorio de la demanda la aseguradora interpuso recurso de reposición y obtuvo que fuera excluida del contradictorio como demandada.

4. Oposición:

4.1. Expreso Gómez Villa S.A. contestó la demanda, se opuso a las pretensiones, llamó en garantía a QBE Seguros S.A., y formuló las siguientes excepciones de mérito:

a. No se puede atribuir imputación objetiva al conductor señor Edisson Perafán Espitia por el riesgo jurídicamente permitido: de las pruebas debe emerger que el 'riesgo' lo creo el conductor del automotor, en caso contrario, la imputación no existe.

b. Causa extraña por caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad: el vehículo se encontraba en perfectas condiciones mecánicas y de mantenimiento. Lo que se presentó fue un derrape intempestivo por lluvia como lo muestra el informe de tránsito.

c. Cobro excesivo de perjuicios: las sumas pretendidas no se ajustan a derecho y son excesivas. La demandante recibió atención médica a través del Soat y el detrimento deberá ajustarse a los ingresos reales de Rosa Katherine Gómez.

d. Inexistencia de prueba sobre la cuantía de los daños solicitados: el perjuicio pedido no se compadece con los hechos narrados, ni con la capacidad y actividad económica de la demandante y su hija para el momento del accidente.

e. Exoneración de responsabilidad por ausencia de culpa de Expreso Gómez Villa S.A.: si el conductor fue imprudente, es un hecho que no podía controlar la empresa demandada porque no tenía manera de impedir el accidente (no puede hacerse responsable del actuar asumido por su empleado durante el trayecto).

f. Prescripción de la acción que se demanda: el accidente y las heridas que se dice sufrió Rosa Katherine Gómez fueron con ocasión del contrato de transporte. Por ende, la acción no fue presentada dentro del término establecido en el artículo 993 del C. de Co.

g. Inexistencia de intereses moratorios por perjuicios en accidentes de tránsito: los réditos solo proceden para las obligaciones mercantiles.

4.2. QBE Seguros S.A., llamada en garantía se opuso a las pretensiones y planteó las siguientes excepciones:

a. Inexistencia del derecho: se imputa responsabilidad con un 'simple' informe de accidente de tránsito sin que exista pronunciamiento condenatorio por autoridad competente.

b. Enriquecimiento sin causa y ausencia de vínculo causal: el único daño indemnizable es el real y directo, nunca el indirecto ni el hipotético. Las sumas no tienen relación con el hecho supuestamente causante del detrimento.

c. Ausencia de prueba del daño: los elementos de juicio aducidos son insuficientes.

d. Prescripción: conforme al artículo 993 del C. de Co. las acciones provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años contados desde el día en que haya concluido o debió finiquitar la obligación de conducción. Desde el 19 de abril de 2007 a la notificación transcurrieron 3 años, 7 meses y 13 días; a la presentación de la demanda sucedió el tiempo previsto en la ley. En los mismos términos, pero con fundamento en el artículo 1081 *ibídem*, está prescrita la acción derivada del contrato de seguro.

e. Incumplimiento del requisito de procedibilidad: las sociedades convocadas a conciliación presentaron excusas por la inasistencia a la audiencia previa, por lo que la misma ha debido reprogramarse.

f. Pago o compensación: el vehículo contaba con una póliza de seguros de accidentes de tránsito expedida por Seguros del Estado S.A., con la cual se atendió parte de los gastos médicos.

g. Ausencia de amparo: el contrato de seguro solo cubre los riesgos de: muerte, incapacidad, gastos médicos, amparo patrimonial, primeros auxilios, asistencia jurídica y accidentes personales, pero nunca los perjuicios materiales e inmateriales demandados. Alba Carolina Galindo Gómez no es beneficiaria en tanto no era pasajera.

h. Exceso del llamamiento frente al valor asegurado y frente a las pretensiones: la cobertura tiene un límite de 150 Smlmv.

i. Ausencia de reclamación.

j. Límites de responsabilidad: deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de la póliza en cuanto a la 'procedencia, deducible y coaseguro'.

4.3. Carlos Oswaldo Sarmiento Sandoval no contestó la demanda, pues acudió al efecto de manera extemporánea (f. 114 c. 1). Y Edisson Perafán Espitia guardó silencio.

LA SENTENCIA APELADA

Tuvo por probadas algunas excepciones planteadas sobre el *quantum* de la indemnización y denegó las demás; por ende, declaró civil y contractualmente responsables a los demandados. Indicó el a-quo que no hay discusión en punto a la existencia del contrato de transporte; que el informe de la autoridad de tránsito da cuenta de que la causa de los perjuicios fue el accidente ocurrido el 19 de abril de 2007, y que en desarrollo del negocio Rosa Katherine Gómez Agudelo resultó lesionada, por lo que estimó que 'está eximido el estudio de la culpa' porque la

reclamación tuvo desarrolló en el ejercicio de una actividad peligrosa, amén que los eximentes de responsabilidad planteados por la empresa afiliadora no están demostrados, como tampoco las defensas que formuló la aseguradora llamada en garantía, salvo la de 'ausencia de amparo' respecto de los perjuicios inmateriales.

En punto a la prescripción de la acción, destacó que el término estuvo suspendido por el trámite de la conciliación previa, y contado desde su reanudación hasta la fecha de presentación de la demanda, no transcurrió el lapso previsto en el artículo 993 del C. de Co. Además, la radicación del libelo tuvo el efecto de interrumpir civilmente el tiempo prescriptivo.

Sobre la indemnización de perjuicios no reconoció el daño moral, vida de relación y fisiológico, toda vez que: '*del primero nada se señaló siquiera en el libelo introductorio acerca de cómo el accidente perjudicó a la actora y a su hija, limitándose a señalar que se vio seriamente afectada, del segundo y tercero no se hace alusión alguna cómo se ha visto afectada en su vivir diario luego de la ocurrencia del accidente y en qué ha consistido el padecimiento que refiere…*' (f. 92 c. 1 continuación).

Accedió al daño emergente por $5.283.823, suma que indexada ascendió a $6.000.898,30, para lo cual se valió de la prueba pericial donde se discriminaron todos los gastos en que se incurrió con ocasión de las lesiones y que se relacionaron en la demanda.

En lo que respecta al lucro cesante, para su liquidación partió del 25.33% de pérdida de capacidad laboral que fue dictaminado a la pasajera. Sobre el salario desatendió el trabajo que como independiente adujo la actora realizar como modista (consideró insuficiente una certificación de contadora). Tampoco -sigue la Juez- existe certeza sobre la actividad de dependiente judicial que se dijo desempeñar y menos la suma de dinero que se percibía. En síntesis, adoptó el criterio jurisprudencial que hace

referencia a que una persona devenga, por lo menos un salario mínimo (1 Smlmv).

Efectuó el respectivo ejercicio matemático con el salario mínimo vigente para el año 2007 ($433.700) y lo actualizó para el momento de la sentencia ($489.534,58). Posteriormente aplicó a dicho valor el 25.33% de pérdida de capacidad laboral lo que arrojó un monto de $123.999. Cuantificó el lucro cesante[3] con ésta suma y atendiendo la expectativa de vida de la demandante. Con estos parámetros tasó el lucro cesante pasado en $27.300.711 y el futuro en $23.811.391.

En consecuencia, condenó solidariamente a los demandados al pago de los perjuicios materiales y a la aseguradora en virtud del contrato de seguro (tope máximo de 150 Smlmv de cobertura).

LA APELACIÓN

1. Los reparos presentados por la parte demandante ante el a-quo y sustentados en esta instancia, son los siguientes:

a. El ingreso adicional fue probado con la certificación expedida por la contadora Lilian García Mahecha, documento que no fue tachado de falso y goza de presunción de validez.

b. Para el lucro cesante no se tuvo en cuenta el salario mínimo vigente para el momento de la liquidación, sino el que existía para la fecha del accidente, proceder que es contrario a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia de 26 de enero de 2011 (radicación 76001-23-21-000-1996-2874-01), tal como lo señaló la perito en el dictamen.

c. El perjuicio moral está demostrado con el daño causado a la demandante no solo con el dolor físico a consecuencia del accidente, sino

[3] Utilizando las fórmulas matemáticas conocidas.

también por el hecho de verse reducida su capacidad laboral (estos argumentos también sirven de fundamento para el daño moral a favor de Alba Carolina Galindo Gómez -hija-).

El daño a la vida de relación se prueba con la 'movilidad de hombro derecho limitada tanto activa como pasiva, solo permite elevación hasta 90 grados', 'fractura osteocondral reborde inferior'. Y el perjuicio fisiológico está aceptado y probado dentro del proceso en la página 32 de la sentencia.

d. Se debe aceptar en integridad el peritaje rendido por Adriana Arango Castiblanco, comoquiera que la objeción fue negada.

2. Dentro del término de traslado, la aseguradora llamada en garantía replicó que ningún reparo se formuló en el sentido de que la póliza no cubre los perjuicios inmateriales. Que no hay lugar a revocar el ordinal séptimo de la sentencia, porque el llamamiento solo vincula al llamante y al llamado. Que el salario mínimo se estimó bajo parámetros de equidad y si en gracia de discusión se aceptara que se devengaban $2.000.000, éste sería el único ingreso para tasar el lucro cesante y que no se explicó el inconformismo que se hace a la providencia.

3. La aseguradora llamada en garantía también formuló apelación pero **no** sustentó su recurso ante el tribunal.

CONSIDERACIONES

1. En la sentencia de primera instancia se declaró que los demandados son civil y contractualmente responsables por los 'perjuicios ocasionados a la demandante' y sobre este segmento de la decisión **no** se presentó

ningún reparo por la parte actora, único extremo de la contienda que cuestionó y sustentó su recurso en contra de la decisión del a-quo.

En los reproches se reclama que: *i.* se incremente la reparación del lucro cesante; y *ii.* se reconozca la indemnización del perjuicio inmaterial (daño moral, vida de relación y fisiológico), aspectos a los que está delimitada la competencia del Tribunal (art. 328 Cgp)

1.1. Sobre el pretendido incremento de la indemnización por lucro cesante, no es posible tener en cuenta como parámetro para el menoscabo patrimonial la certificación de la contadora Lilian García Mahecha (f. 37 c. 1), pues aunque en ese documento se destacó que Rosa Katherine Gómez Agudelo recibía una suma promedio mensual de $2.000.000 por concepto de 'la confección y comercialización de lencería y decoración de interiores', para que en el caso concreto tuviera efectos de plena prueba debió estar acompañado del respectivo estado financiero donde se hubiera establecido detalladamente valores por: ingresos, costos y gastos, entre otros, que posteriormente arrojaran la utilidad real mensual de $2.000.000. Es decir, no se soportó documentalmente que, en verdad, esa suma correspondiera a ingresos efectivos después de efectuado el respectivo estudio contable. Tampoco en la certificación se hace precisión sobre si la demandante es una persona natural que está o no en la obligación de llevar contabilidad.

Sobre este punto la jurisprudencia ha dicho que: "…*cuando de certificaciones relacionadas con hechos económicos de personas no comerciantes se trata, así éstas no tengan la obligación legal de llevar contabilidad, tales atestaciones no pueden fundarse en simples afirmaciones de quien las expide; deben contener algún grado de detalle*

que reflejen fielmente el origen de su contenido, esto es, de los datos, hechos o circunstancias cuya demostración se pretende."[4]

1.2. De otro lado, se repara en que el análisis del lucro cesante debe hacerse partiendo del valor del salario mínimo legal vigente para el momento de la liquidación y que no es acertada la forma en que se procedió en la sentencia impugnada (se tomó el salario vigente para la fecha del accidente y se indexó). Al respecto, basta decir que le asiste razón a la apelante, habida cuenta que el resarcimiento parte de la declaratoria que proviene de una decisión judicial, y por ende, la pérdida del poder adquisitivo del dinero es una factor que debe tenerse en cuenta para el momento de la sentencia; y si bien la indexación es un elemento que permite traer a valor presente una suma de dinero, lo cierto es que el monto del salario mínimo vigente fijado por el gobierno nacional es superior, de allí que deba tenerse en cuenta en atención al principio de reparación integral.

Sobre el punto, la jurisprudencia precisó que: "*en esta dirección cumple prohijar ahora el razonable argumento de que el salario mínimo mensual a tener en cuenta es el hoy vigente, por supuesto que, como apenas ahora haríase efectiva la indemnización, el nuevo salario legal fijado trae 'implícita la pérdida del poder adquisitivo del peso' (…).*"[5]

Así entonces, sería del caso liquidar en esta instancia el lucro cesante teniendo como parámetro: el salario mínimo vigente para el año 2020[6] ($883.620) y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, aplicando el criterio jurisprudencial que ha establecido que debe deducirse un 25%

---

[4] CSJ, sentencia sustitutiva SC15996-2016 de 29 de noviembre de 2016.
[5] CSJ sentencia de 6 agosto de 2009. Rad. 1994-01268-01. Citada posteriormente en sentencia SC15996-2016 de 29 de noviembre de 2016. Radicación 11001-31-03-018-2005-00488-01.
[6] Inciso segundo artículo 283 Cgp: "El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado".

por gastos personales, lo que indudablemente arrojaría un mayor valor al que se emitió en primera instancia ($51.112.102 sumado lucros pasado y futuro).

No obstante, como en las peticiones del libelo se estimó el lucro cesante en $54.121.642, el Tribunal no está facultado para condenar por un monto superior dada la limitación que existe por el principio de la congruencia[7], muy a pesar de que en las mismas pretensiones se hiciera alusión a la frase '*o lo que se pruebe dentro del proceso*' (f. 51 c. 1), puesto que dicha afirmación se realizó para el monto global de todos los perjuicios reclamados y es claro que con la apreciación del detrimento que efectuó la parte demandante delimitó el monto máximo al que aspiraba en el asunto de marras por el concepto de lucro cesante. En consecuencia, se modificarán los ordinales sexto y séptimo de la sentencia impugnada en el sentido de que la condena por lucro cesante asciende a $54.121.642.

2. El daño moral[8] será indemnizado en la cuantía de $15.000.000 para Rosa Katherine Gómez Agudelo. Al respecto, es evidente que el accidente aquejó a la demandante y su consiguiente recuperación[9] le irrogó dolor físico. Además, los momentos inmediatamente posteriores al choque debieron generarle angustia, incertidumbre y sincera preocupación, afectaciones a los sentimientos que merecen condigna reparación.

---

[7] Artículo 281 *ibídem*: "No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en ésta"

[8] Sobre la indemnización por "daño moral", la Corte Suprema de Justicia, ha expuesto que: "corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo' (cas.civ. sentencia 13 de mayo de 2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos" (fallo de 18 de septiembre de 2009, exp.2005-00406).

[9] Según la Junta Regional de Calificación de invalidez la demandante presentó "politraumatismo y TCE con herida craneana en región parietal izquierda de unos 15 cm de longitud aproximadamente (perdida de la conciencia durante unos minutos), desplazamiento vertebral de C5-C6, trauma ocular y de vías respiratorias altas, trauma en hombro derecho" (f. 33 c. 1 continuación)

No habrá condena por este menoscabo a favor de Alba Carolina Galindo Gómez (hija). Al efecto, téngase en cuenta que tal pretensión se formuló a título consecuencial a la declaratoria de incumplimiento contractual y el mismo sólo puede ser invocado por quien hizo parte de la relación negocial. En este caso la hija de la pasajera no hizo parte del contrato de transporte. Ahora, si bien en principio un heredero o un tercero afectado pudieran acumular el perjuicio personal padecido respecto del causante o de la víctima directa en un convenio de transporte, dicha acción es de carácter extracontractual y en este diferendo no se acudió a dicha figura como detonante del detrimento a resarcir.

2.2. En cuanto al daño a la vida de relación, se reconocerá por este Tribunal en favor de la víctima directa como un perjuicio autónomo del moral. Sobre el punto, también argumentó la Juez para denegar la reparación de esa especie de daño que en la demanda no se dijo siquiera en qué consistió el perjuicio, pero escrutado ese escrito inicial se soportó en '*razón a los daños físicos sufridos los cuales son visibles en la cabeza y la pérdida parcial de movimiento del lado derecho del cuerpo y ostensible alterando la estética del cuerpo.*.' (f. 51 c. 1).

Sobre la naturaleza del daño a la vida de relación, la Corte Suprema de Justicia en decisión que sentó precedente en la materia, consideró que:

"…esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a

causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar". [10]

Basten esas premisas para poner en evidencia la sinrazón de la tesis sostenida en primera instancia para denegar una indemnización por este concepto, pues muy por el contrario, está suficientemente acreditado que el accidente dejó en su víctima directa alteraciones de orden físico que determinaron que se calificara una pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje del 25.33%. A partir de las conclusiones contenidas en el trabajo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez la Sala infiere, por lo demás con la fuerza propia del indicio necesario, que de tales mermas en la fuerza productiva se puede tener por demostrado que su cotidianidad también resultó diezmada.

El daño físico padecido asimismo permite inferir que las afectaciones a la vida de relación se produjeron y trascienden al resto de su vida, pues ellas derivaron en una pérdida catalogada como "incapacidad permanente parcial", según lo determinó la Junta Regional de Invalidez (f. 32 c. 1 continuación). Entonces la Sala estima[11] que por dicho concepto se debe reconocer a favor de Rosa Katherine Gómez Agudelo una indemnización de $10.000.000. No obstante la congruencia, aunque dentro de los límites de lo pedido, esta ponderación, como la de todos los perjuicios

[10] CSJ, sentencia del 13 de mayo de 2008, Radicado 11001-3103-006-1997-09327-01.
[11] "La valoración de ese daño [vida de relación], ha sentado así mismo la doctrina jurisprudencial citada, dada su estirpe extrapatrimonial, es propia del prudente arbitrio del juez (*arbitrium iudicis*), acorde con las circunstancias particulares de cada evento" CSJ sentencia SC22036-2017 de 19 de diciembre de 2017. Radicado No. 73001-31-03-002-2009-00114-01.

inmateriales se hace en pesos y no en salarios mínimos, en atención a claros y consistentes precedentes sobre el punto[12].

Por último, para la Sala es claro que la indemnización del perjuicio fisiológico no procede de manera autónoma, habida cuenta que la jurisprudencia tiene sentado que esa categoría de menoscabo debe entenderse engastada dentro de la más amplia del daño a la vida de relación[13].

Sobre la indemnización QBE seguros S.A. solo debe salir al pago de los perjuicios materiales, puesto que sobre el daño extra patrimonial el a-quo determinó que **no** estaban cubiertos en el contrato de seguro y sobre ese aparte de la sentencia no se presentó ningún inconformismo. Finalmente, no era posible aceptar, sin más, el dictamen rendido por Adriana Arango Castiblanco, comoquiera que cuantificó el lucro cesante con bases salariales que no tenían respaldo probatorio.

3. En consecuencia de todo lo dicho, se modificará la sentencia de primera instancia, para aumentar el monto del resarcimiento por lucro cesante (del cual la parte actora tiene interés para apelar, incluso en la obligación de

---

[12] Al ser la cuantía de los daños extrapatrimoniales "un asunto que queda reservado al justo criterio del fallador, y como quiera que no se trata en este evento más que de mitigar el dolor que sufre el demandante a consecuencia del hecho dañoso, y no en estricto sentido de una reparación propiamente dicha, no tendría sentido acudir a patrones (corrección monetaria, oro, upac, dólar, uvr) cuya utilidad práctica consiste con mayor o menor eficacia en mantener en el tiempo la tasación del daño, en servir de correctivo de la desvalorización de la moneda nacional, que con el paso del tiempo pierde su poder adquisitivo y por tanto hace irrisoria una suma fijada en pesos, a modo de indemnización por equivalente" (CSJ. sent. de 17 de agosto de 2001, exp. 6492. y sent. 19 de noviembre de 2011, exp. 00533).

[13] Cfr. Sentencia de 13 de mayo de 2008, en donde tras reconocer los valiosos aportes que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha efectuado sobre la materia, la Corte, en alusión precisamente a una decisión del Consejo de Estado, señaló que éste tenía precisado que "…el daño a la vida de relación constituye un concepto más amplio que el de perjuicio fisiológico, por lo que es inadecuado asimilarlos, debiendo ser desechado el último término". Ref: Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01

pago que corresponde a la aseguradora), y se adicionará para condenar a los demandados por daño moral y vida de relación a favor de la pasajera.

Ante la prosperidad parcial de la alzada no se impondrá condena en costas.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el ordinal *sexto* de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019, por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, en el sentido de que la condena por lucro cesante corresponde a $54.121.642. Asimismo, se modifica el ordinal *séptimo* en punto a que la obligación de pago de Qbe Seguros S.A. corresponde a: (i) $6.000.898.30 por daño emergente (aspecto que no fue objeto de apelación); y $54.121.642 por lucro cesante.

2. Adicionar al ordinal sexto de la sentencia proferida el 30 de octubre de 2019, por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, el siguiente aparte:

"*Condenar solidariamente a los demandados Edisson Perafán Espitia, Carlos Oswaldo Sarmiento y Expreso Gómez Villa S.A. al pago de perjuicios inmateriales, así: para Rosa Katherine Gómez Agudelo $15.000.000 por daño moral y $10.000.000 por daño a la vida de relación.''*.

3. En todo lo demás se **CONFIRMA** la sentencia apelada.

4. Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

Los Magistrados,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Radicado: 1100 1310 3014 2009 00241- 01

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Radicado: 1100 1310 3014 2009 00241- 01

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
Radicado: 1100 1310 3014 2009 00241 01

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-025-2019-00553-01
Asunto: Ejecutivo Singular
Recurso. Apelación Auto
Demandante: Goimpro S.A.S.
Demandado: Meco infraestructura S.A.S

Decídese el recurso de apelación interpuesto por la actora frente al auto emitido el 25 de febrero de 2020, por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del juicio compulsivo adelantado por Goimpro S.A.S contra Meco Infraestructura S.A.S.

ANTECEDENTES

1. La sociedad ejecutante solicitó librar orden de pago a su favor y en contra de su contendora, por la suma de $517.959.419, capital representado en la factura de venta GO 190 de 6 de agosto de 2019, junto con los intereses moratorios generados desde su exigibilidad hasta cuando sea cancelada esa obligación, liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. El juzgado libró la orden de apremio conforme lo solicitado, proveído que, una vez notificado a la convocada -Meco Infraestructura S.A.S -, fue recurrido en reposición por la última, quien alegó la existencia de una cláusula compromisoria

en el subcontrato de obra IS -156S 2017-24, suscrito entre las partes el 28 de septiembre de 2017, la falta de exigibilidad del título y de los requisitos del mismo.

2. En proveído de 25 de febrero de 2020, el funcionario de primera instancia revocó el aludido mandamiento de pago; y, en consecuencia, declaró la terminación del proceso, levantó las medidas cautelares y condenó en costas al demandante, porque, tras remembrar los requisitos de esa especie de título valor, exigidos a la luz de los artículos 621, 773 y 774 del C. Co. y 617 del Estatuto Tributario, echó de menos los previstos en el incisos 2° del artículo 773 y numeral 3° del artículo 774, ambos del Código de Comercio, pues, en su criterio, el cartular no da cuenta, por una parte, del recibo del servicio figurando tan solo, algunas expresiones como "*RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN", RECIBIDO SUJETO AL ENVÍO DENOTA DE CRÉDITO POR VALOR DE $15.000.000"*, y, por la otra, tampoco contiene la constancia del estado del precio, falencias que no es factible darlas por subsanadas con la nota de crédito concerniente a un descuento de $15.000.000.

3. Oportunamente el ejecutante apeló esa determinación, y fundó su inconformidad, en primer lugar, en que el título si cumple el requisito del inc.2º del artículo 773 del C. Cio., ya que contiene la expresión *"recibí a satisfacción"*, firmada por el representante legal de la ejecutada, explicitando así la voluntad inequívoca del beneficiario del servicio en los términos exigidos; además, la factura fue aceptada tácitamente, por lo que resulta irrazonable considerar que sin recibir el servicio no la hubiere objetado.

Y, en segundo lugar, el otro requisito (numeral 3° del artículo 774 del Código de Comercio), opera para obligaciones de naturaleza condicional, "es decir, únicamente en los eventos en que el estado de la factura sea diferente al que es de su esencia, ósea de 'deuda', o que la operación económica subyacente esté sometida a condiciones"; agregó, que la exigencia en comento obedece a la necesidad de evitar la circulación de títulos contentivos de créditos pagados. Pero, con todo, la factura fundante de la litis, contiene la expresión "*total a pagar"* y, ante la ausencia de algún

sello de “pagado o cancelado”, emergía el cumplimiento del requisito echado de menos por el *a quo*, conteniendo, además, las condiciones del pago, el cual, lo era “de contado”.

4. A su turno, el extremo ejecutante, solicitó ratificar la decisión censurada, alegando, en síntesis, que la factura adosada fue aceptada tácitamente y que al ser lo pretendido la ejecución de un título valor que presta mérito ejecutivo, no era del caso acudir el Tribunal de Arbitramento, máxime cuando el mismo tuvo origen en una controversia suscitada entre las partes y, subsanada conforme a lo pactado en la cláusula vigésimo sexta del contrato aludido por su contradictoria.

CONSIDERACIONES

1. Por sabido se tiene que la apertura de un juicio ejecutivo demanda que, con la presentación del libelo genitor, se incorpore un documento proveniente del deudor o de su causante el cual constituya plena prueba en su contra y dé cuenta de una obligación clara, expresa y exigible (artículo 422 del C.G.P.).

Igualmente, si lo ejercido es la acción cambiaria propia de los títulos-valores, el accionante habrá de fundar sus pretensiones, precisamente, en un cartular que contenga las exigencias generales del artículo 621 del Código de Comercio, al tiempo de las especiales para cada instrumento de contenido crediticio, establecidas en la misma legislación mercantil.

2. En el caso de la factura, deberá incluir, además de la mención del derecho incorporado, la firma de quien la crea y los requisitos fiscales señalados en el Estatuto Tributario (art. 617), los expresamente contenidos en el artículo 774 del C. de Co., preceptiva clara al establecer que “no tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo”.

Entonces, la calidad de título valor de la factura pende del cumplimiento de las exigencias estatuidas "únicamente" en los artículos 621 y 774 del Código de Comercio y del 317 del Estatuto Tributario. Así lo prescribe el inciso final del precitado artículo 774, según el cual "la omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad del título valor de las facturas".

Por consiguiente, al a quo no le asiste razón al desechar como título valor la factura materia de la ejecución aquí pretendida, porque supuestamente no cumple la exigencia del inciso 2º del artículo 773 ibídem, en tanto en ella no consta el recibo del servicio por parte del beneficiario del mismo. Ciertamente, ese requerimiento no afecta la calidad de título valor del cartular traído por el ejecutante, por cuanto, insistese, no está contemplado entre los requisitos que debe reunir la factura, tal como emerge del texto del precitado artículo 774 ejusdem.

Cosa distinta es que esa exigencia concierne con la aceptación de la factura regulada en el artículo 773 de la codificación en mención, la cual aquí operó en forma tácita.

Por supuesto, el sello estampado por la sociedad ejecutada en la factura en cuestión, con la leyenda "*RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN", RECIBO SUJETO AL ENVÍO DENOTA DE CRÉDITO POR VALOR DE $15.000.000"*, no la libera de los efectos de la aceptación tácita, puesto que, tal como lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, "los controles adoptados dentro del andamiaje organizativo de la empresa compradora a efecto de acreditar las condiciones de la mercancía y, de paso, si se honró o no el negocio jurídico subyacente no alcanzan a influir en los supuestos de forma de la factura"[1].

Por lo demás, en punto de este último tema, cabe precisar, según el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, reformatorio del inciso 3º del artículo 773 del

[1] *Sala Cas. Civ., Sent. de tutela de 30 de abril de 2020, Exp.No.2010 00771 01*

Código de Comercio, "[l]a factura se considerará irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción".

La norma es clara; por ende, al recibir las facturas y no rechazarlas ni objetarlas en el perentorio plazo de 3 días hábiles, la ejecutada, a la postre, las aceptó, obligándose en consecuencia conforme el tenor literal de ese título.

Sobre el particular, la jurisprudencia puntualizó que si la "ejecutada recibió las facturas cuyo cobro se pretendió y las dejó para el trámite respectivo, sin que las hubiese devuelto, ni objetado su contenido en el término estipulado en la norma precedente, ello comporta la aceptación irrevocable de que trata el precepto en cuestión (…) se suma a lo precedente que el sello impuesto por la demandada en las facturas, en el que, como se dijo, se hizo constar que las mismas se recibieron para su correspondiente trámite, debe tenerse como aceptación de la mismas, sin que ese específico condicionamiento desnaturalice dicho carácter"[2].

Criterio ese reafirmado en otra ocasión, al considerar la Corte que no era admisible que "siendo irrebatible que el comprador recibió las mercancías -cosa que tampoco fue objeto de debate-, no podía éste, a espaldas del vendedor, aniquilar el título que le fue enviado para instrumentar la operación, valiéndose de la referida expresión que, en buenas cuentas, no es una 'aceptación', pero tampoco comporta un verdadero 'rechazo', ni puede tomarse como tal (…) dar alcance a esa expresión incluida por la compradora, sin más, a la larga sería tanto como permitirle inhabilitar el título sin otra prueba que un grabado que en sí mismo no es justificación de una inconformidad o un desacuerdo concreto y valedero"[3] .

---

[2] Sala Cas. Civ., Sent. tutela 20 de marzo de 2013, Exp.No.2013 00017 01
[3] Sala Cas. Civ., Sent. tutela de 2 de junio de 2009, Exp. 2009-00855-00

De ahí que, la deudora al no haber objetado ni rechazado la factura la resultó aceptando y, por contera, en línea de principio, no puede entenderse omitido el requisito contemplado en el inciso 2° del artículo 773 del Código de Comercio, como fue declarado en el auto confutado.

2.2 En cuanto al estado del pago del precio, si bien el funcionario de primera instancia aludió la ausencia de esa exigencia, apoyándose en lo señalado por el numeral 3º del artículo 774 mercantil, que establece: "el emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso", añadiendo que "a la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura".

Dicha preceptiva lo que busca no es otra cosa que reafirmar los principios de literalidad e incorporación propios de los títulos-valores, en la medida en que si hay un abono a la obligación, aquel tendrá que constar en el cuerpo del cartular, tal como lo dispone el artículo 624 del C. de Co. al indicar que "si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios, [supuestos en los cuales] el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada".

Pero esa exigencia se relativiza, como en este asunto, cuando los mismos involucrados en el negocio subyacente por el que se emitió la factura se enfrentan en su ejecución, es decir, cuando ésta no ha circulado cambiariamente, pues en tal evento, así los pagos no consten en los títulos se podrán formular las excepciones "derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título" (C. Co., art. 784, num. 12), como lo es la solución de la obligación causal.

En ese orden de ideas, en casos similares, la ausencia expresa del estado de pago en la factura de compraventa no puede truncar su condición cartular,

pues dicho requerimiento se instituyó para resguardar los derechos de aquellos terceros tenedores legítimos ajenos a la relación subyacente y, por tanto, ignorantes de la situación del crédito contenido en el título-valor, incluso, así lo entendió el legislador al exponer que: "cuando el vendedor reciba pagos parciales y ya ha transferido la factura, debe informarle al comprador beneficiario del bien o servicio, deudor para efectos del título, y al tercero, tenedor legítimo, con el fin de que estos conozcan el estado real del crédito."

Aún más, dicho requisito resulta superfluo en eventos en los que lo perseguido es el pago total del importe de la factura, pues, en rigor, no existe un "estado del pago" que declarar en el título, bastando para el efecto la afirmación indefinida del acreedor relativa al impago absoluto de la deuda para iniciar la ejecución, de allí que la normativa en comento ordene consignar el "estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago [sólo] si fuere el caso".

Y es que en el presente asunto, si bien no se pretende el pago total del monto contenido en el remembrado título, en tanto que, de acuerdo a una nota de crédito fue efectuado un descuento sobre su importe total, por la suma de $15.000.000, no es del caso exigir el estado del pago respecto del saldo restante, ante la inexistencia de derechos de terceros legítimos de la relación subyacente, amen que quienes concurren al litigio, son los extremos primigenios y, sin que de las manifestaciones efectuadas, hasta ahora, por cada uno de ellos, pueda emerger pagos parciales o, la trasferencia del título a otros.

3. Siendo ello así, se revocará la decisión fustigada para que el funcionario cognoscente examine los requisitos formales de la demanda y se pronuncie sobre el mandamiento de pago según lo considere pertinente, acorde con los parámetros esbozados en precedencia.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- REVOCAR el auto de fecha y procedencia prenotadas y, en su lugar, ordenar al juez de primer grado que examine los requisitos formales de la demanda ejecutiva y se pronuncie sobre la orden de apremio respecto de la factura que sustenta el coercitivo de la referencia, en los términos que estime pertinentes, atendiendo las pautas consignadas en la motivación de esta providencia.

Segundo.- Oportunamente, **devolver** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Tercero.- Sin costas en la instancia, dado el éxito de la alzada.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Sala Civil Dual

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

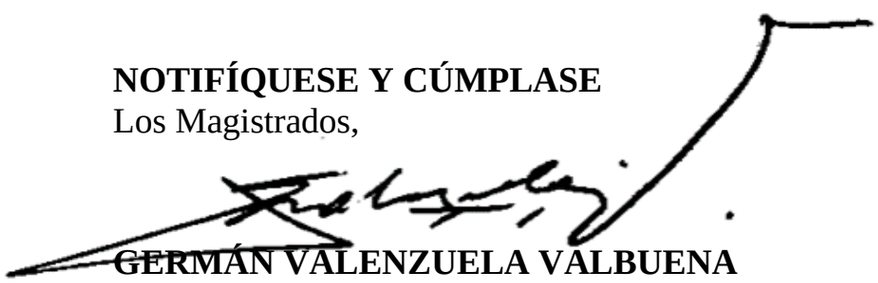
Magistrado Ponente: **Germán Valenzuela Valbuena.**

Radicado: 11001 31 03 026 **2001 00278** 01
Ordinario: Roberto Arturo Santos ***Vs***. Humberto Escobar Molina y Otros.
Asunto: **Recurso de Súplica**.
Aprobación: Sala virtual 50 de la fecha.

Se **rechaza** la súplica interpuesta por la interviniente Ana Victoria Holguín contra el auto proferido por el Magistrado sustanciador el 30 de noviembre de 2020, habida cuenta que dicho recurso no es el medio pertinente para impugnar la providencia mediante la cual se declara desierto un recurso de apelación formulado contra una sentencia.

Ahora bien, de conformidad con la reconducción prevista en el parágrafo del artículo 318 C.G.P., remítase el expediente al Magistrado sustanciador para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los Magistrados,



GERMÁN VALENZUELA VALBUENA



ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Bogotá D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

REF:	**DECLARATIVO**
DEMANDANTE:	**Meridiano Catering Services S.A.S. En Liquidación**
DEMANDADOS:	**GS 1 Colombia**
	Fundación Logyca
RADICACIÓN:	**11001310302620110069003**

RECURSO DE APELACIÓN

Decide el Tribunal el recurso de apelación instaurado por la demandante contra el auto que el 11 de febrero de 2020 profirió el Juzgado 50 Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia a partir del proveído del 12 de octubre de 2018, del Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio de esta ciudad, inclusive.

ANTECEDENTES

1. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11097 del 25 de septiembre de 2018 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el proceso de la referencia fue remitido por la juez *a quo* al Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio, y culminada la medida transitoria adoptada en el aludido acuerdo, regresó al despacho de origen.

2. Las demandadas solicitaron el dos de mayo de 2019 la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la ejecutoria del auto que el 22 de marzo de 2018 proferido por el *a quo*, por medio del cual fijó inicialmente fecha para audiencia de alegatos y fallo, la cual fue rechazada de plano mediante proveído del 30 de mayo de 2019, decisión recurrida por las demandadas y revocada por auto del cuatro de septiembre de 2019 (fl. 497, c. 1).

3. Por lo anterior la juez *a quo* dio trámite a la nulidad propuesta por las demandadas el cual concluyó con la decisión objeto de la apelación.

LA DECISIÓN APELADA

4. Por auto del 11 de febrero de 2020 la juez *a quo* declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 12 de octubre de 2018, proferido por el Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio, inclusive, "y los actos consecuentes con la ejecución de la sentencia".

5. Para llegar a su decisión el *a quo* expuso, entre otras que:

5.1. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11097 del 25 de septiembre de 2018 el expediente fue remitido al Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio, luego "al margen de si era procedente o no emitir un auto informando sobre su remisión (pues no era la actual titular la juez de conocimiento), lo cierto es, se insiste, la remisión se realizó, y de ella se dio publicidad" (fl. 527 vto., c. 1).

5.2. Al momento de su remisión se encontraba pendiente la práctica de un testimonio, como se aprecia en auto del 22 de marzo de 2018; sin embargo, cuando el juzgado transitorio avocó su conocimiento no se pronunció sobre la práctica de tal prueba.

5.3. Las demandadas, a través de su apoderado judicial, sólo comparecieron al proceso el dos de mayo de 2019, cuando el expediente regresó del juzgado transitorio, fecha en la que ya había culminado la instancia con decisión de fondo[1].

5.4. Asumido el conocimiento del proceso por parte del juzgado transitorio, este cambió la fecha en que se llevaría a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento, pero dicha modificación "no se informó a las partes por un medio efectivo, mírese que más allá de la notificación por estado –realizada en un juzgado diferente a este- no reposa comunicación alguna que permita inferir la suficiencia del enteramiento de la variación de la fecha" (fl. 527 vto., c. 1).

5.5. En casos similares la Corte Suprema de Justicia y este Tribunal han concluido que la ausencia de una comunicación efectiva sobre el cambio de fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento, ubica a las partes en un escenario de indefensión, tal y como se aprecia en la sentencia STC14870-2017, L. Tolosa, de la Corte Suprema de Justicia, así como en varias decisiones del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá (rad. 2019-00969, M. García; rad. 2019-01944, J. Moya, y rad. 2019-01214, O. Ramírez).

---

[1] El Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio profirió sentencia el 14 de noviembre de 2018 (fls. 436 a 450, c. 1).

5.6. La irregularidad en el enteramiento de la nueva fecha de audiencia menoscabó el derecho de defensa y contradicción de las demandadas, y además, en la diligencia se pretermitió la práctica de la prueba testimonial ya mencionada, con lo cual se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 5° del art. 133 CGP.

EL RECURSO DE APELACIÓN

6. La demandante considera que el auto apelado debe revocarse integralmente por las siguientes razones:

6.1. Comoquiera que no existe auto que ordene la remisión del expediente al juzgado transitorio, no había lugar a su notificación y por tanto no se configuró irregularidad alguna. En todo caso, las demandadas actuaron sin alegar la supuesta nulidad, luego de seis meses de proferida la sentencia, contrariando el contenido de los arts. 134, 135 y 136 CGP.

6.2. Frente al argumento, según el cual, se pretermitió la práctica de una prueba testimonial, destaca que la demandada actuó en el proceso sin proponerla ni recurrió el auto del 12 de octubre de 2018 que omitió pronunciarse sobre la misma[2]. De manera que al igual que ocurre con la nulidad por indebida notificación, la demandada pretende que también se declare por pretermitirse la práctica del testimonio, pasados de seis meses de proferida la sentencia, con el único fin de dilatar el proceso y hacer incurrir en error al juzgado.

6.3. En el proceso no se omitió ninguna oportunidad para solicitar, decretar o practicar pruebas. En lo que hace a la prueba que no se practicó precisa que fue programada dos veces sin que las demandadas hubiesen hecho comparecer a la testigo. Además, la declaración en comento no es una prueba obligatoria, como ocurre con las inspecciones judiciales en procesos de pertenencia, por tanto, no se configura la nulidad del numeral 5° del art. 133 CGP.

6.4. El auto apelado contraría las consideraciones efectuadas por el Tribunal en decisión del 16 de diciembre de 2019 al confirmar el auto del 30 de mayo de 2019 que rechazó la solicitud de nulidad invocada por las demandadas con fundamento en lo preceptuado en el art. 121 CGP.

---

[2] Se refiere la demandante al auto por medio del cual el juzgado transitorio avocó conocimiento del proceso y fijó nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art. 373 CGP (fl. 429, c. 1).

6.5. Cualquier vicio susceptible de causar nulidad debe entenderse saneado en la medida que ya obra sentencia que puso fin al proceso y ordenó seguir adelante con la ejecución, decisión sobre la que la parte demandada no efectuó pronunciamiento alguno. La presunta nulidad por cuestiones anteriores a la sentencia afecta a la demandante que sí ha estado al tanto de las actuaciones surtidas en el proceso.

CONSIDERACIONES

PROBLEMAS JURÍDICOS

7. Los antecedentes del caso imponen al Tribunal determinar si:

7.1. Dado que el proceso de la referencia se encontraba en vigencia del Código de Procedimiento Civil, las nulidades objeto del recurso de apelación debieron ser las establecidas en dicha normatividad, y en caso tal,

7.2. Como consecuencia de haberse convocado a la audiencia de que trata el art. 373 CGP encontrándose pendiente la práctica de una prueba testimonial decretada en vigencia del código anterior, por una parte, se desconocieron las reglas de tránsito de legislación, y por otra, se pretermitió la práctica del medio probatorio.

7.3. Además de lo anterior, al no haberse comunicado de manera efectiva la modificación de la fecha de la aludida audiencia, se incurrió en indebida notificación.

REGLAS DE TRÁNSITO LEGISLATIVO

8. El art. 625 CGP establece reglas concretas para que los procesos que iniciaron en vigencia del Código de Procedimiento Civil empiecen a tramitarse con la nueva legislación. Para lo que aquí interesa, las reglas aplicables al presente caso son las siguientes:

8.1. El literal "b", numeral 1°, art. 625 CGP, establece que si en el proceso se profirió auto que decreta pruebas, estas deben practicarse de acuerdo con la normatividad anterior.

8.2. Concluida la etapa probatoria "se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código", es decir, la contemplada en el art. 373 ibídem.

8.3. Conforme con el numeral 5° de la norma que se viene citando, los incidentes deberán tramitarse de acuerdo con la ley vigente al momento en que fueron promovidos.

PRETERMISIÓN DE LAS OPORTUNIDADES PARA SOLICITAR, DECRETAR O PRACTICAR PRUEBAS

9. De conformidad con lo establecido en el numeral 6° del art. 140 CPC el proceso es nulo, en todo, o en parte "cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión".

10. La posibilidad de solicitar, decretar o practicar pruebas son garantías mínimas que rodean el derecho fundamental al debido proceso, y en concreto del debido proceso probatorio, por tanto, hacen parte de su núcleo esencial, como lo explica la Corte Constitucional:

> *La Sala Plena ha indicado que el debido proceso probatorio supone un conjunto de garantías en cabeza de las partes en el marco de toda actuación judicial o administrativa. De este modo, ha afirmado que estas tienen derecho (i) a presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se presenten en su contra; (iii) a la publicidad de las evidencias, en la medida en que de esta forma se asegura la posibilidad de contradecirlas, bien sea mediante la crítica directa a su capacidad demostrativa o con apoyo en otros elementos; (iv)a que las pruebas sean decretadas, recolectadas y practicadas con base en los estándares legales y constitucionales dispuestos para el efecto, so pena su nulidad; (v) a que el funcionario que conduce la actuación decrete y practique de oficio los elementos probatorios necesarios para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (Arts. 2 y 228 C.P.); y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso* (itálica original)[3].

LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES

11. El numeral 9° del art. 140 CPC señala que el proceso es nulo, en todo o en parte:

> Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.

12. Conforme el art. 144 ibídem, las nulidades se podrán sanear, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla; (ii) cuando la misma parte la convalidó en forma expresa antes de ser renovada la actuación anulada, y (iii) cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad sin vulnerar el derecho de defensa.

---

[3] CConst. C-163/2019. D. Fajardo.

13. La H. Corte Suprema de Justicia explica que la norma citada en el párrafo once supra busca proteger el derecho fundamental al debido proceso "en su más prístina manifestación, como es la posibilidad de ser enterado de la actuación judicial iniciada en contra y, por esa senda, acceder al abanico de posibilidades de contradicción que brinda el ordenamiento jurídico, pues, de no darse aquella, queda cercenada de tajo cualquier posibilidad ulterior de ejercicio de esos privilegios"[4].

14. Sobre la indebida notificación el alto Tribunal precisa que este tipo de nulidades deben confrontarse con el principio de trascendencia, pues no todo yerro "puede conferírsele entidad suficiente para dar al traste con la actuación procesal, sino a aquellos que afecten radicalmente el derecho fundamental de contradicción"[5].

CASO CONCRETO

15. Una vez analizados los antecedentes del caso, y al confrontarlos con los fundamentos jurídicos de esta decisión y los medios de prueba que obran en el expediente, el Tribunal concluye que la providencia apelada debe confirmarse, como pasa a explicarse.

Las nulidades invocadas debieron ser las previstas en el CPC aunque sean tramitadas bajo las reglas del CGP

16. El proceso de la referencia comenzó en vigencia del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado, y como se verá más adelante, está en curso de hacer tránsito al sistema procesal previsto en el Código General del Proceso.

17. Sugiere lo anterior que las nulidades sobre las que se pronunció la juez *a quo* debieron ser las consagradas en los numerales 6° y 9° del art. 140 CPC, aludidas en los fundamentos de esta decisión, y no las previstas en el Código General del Proceso; sin embargo, en la medida que los hechos en que se fundan están contemplados en ambos sistemas procesales, tal imprecisión a juicio de este Tribunal, no tiene trascendencia.

18. Cosa diferente, es que por virtud de la ya citada regla prevista en el numeral 5° del art. 625 CGP, el trámite a impartir sea el de la ley procesal vigente, como lo hizo la primera instancia, pues cabe recordar que la solicitud

[4] CSJ Civil, 22 Mar. 2018, e2012-02174-00. A. García (SC788-2018).
[5] Ibídem.

de nulidad fue presentada por las demandadas el dos de mayo de 2019, es decir, en vigencia del Código General del Proceso[6].

Se pretermitió la práctica de una prueba testimonial

19. Este Tribunal al resolver anterior apelación recordó lo acaecido con la declaración de la testigo Diana Cubillos Moreno, la cual echan de menos las demandadas:

> (…) Por auto del 2 de julio de 2014 se abrió a pruebas, y entre otras se decretó, por solicitud de la parte demandada, el testimonio de la señora Diana Cubillos Moreno para ser practicado el 5 de agosto del mismo año (…), pero se reprogramó mediante proveído del 27 de agosto del año en mención, para el 24 de septiembre siguiente, por estar en trámite un recurso de reposición (…).
>
> El apoderado de las demandadas informó al juzgado el 19 de septiembre de 2014 que la testigo no podía comparecer a declarar en la última data asignada para tal fin, por cuanto empezaba licencia de maternidad, y aduciendo la importancia de la prueba solicitó fijar una nueva fecha (…). Acreditó su dicho con el registro civil de nacimiento del hijo de la declarante (…).
>
> En virtud de lo anterior, el juzgado en audiencia de septiembre 24 de 2014 fijó el 20 de octubre del mismo año para escuchar a la señora Cubillos (…), sin que tampoco pudiera evacuarse la prueba, pues obra constancia secretarial según la cual entre el 16 de octubre y el 19 de diciembre de 2019 no corrieron términos por efectos del paro judicial (…).

20. Lo expuesto deja en evidencia que no asiste razón a la apelante en cuanto que el medio de prueba no se practicó por negligencia de las demandadas, por el contrario, hubo motivos fundados para que la convocada no pudiera comparecer a rendir la declaración decretada.

21. En el mismo auto proferido por este Tribunal quedó claro, por una parte, que no obra en el expediente manifestación de las demandadas que indique que desistieron del medio de prueba, ni auto que reprograme la diligencia o exponga las razones para no practicarla, por otra, se consideró que la etapa probatoria debía culminar conforme con las reglas procesales del CPC, y una vez agotada, convocar a la audiencia de que trata el art. 373 CGP exclusivamente para evacuar la etapa de alegatos y fallo.

22. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de la referencia no correspondía a aquellos que debían remitirse a los juzgados transitorios, pues se recuerda que los procesos cobijados con estas medidas de descongestión eran aquellos que se encontraban en la etapa de alegaciones y fallo, no así los que se hallaban en instrucción, lo cual puede explicar por qué el juzgado transitorio una vez avocó conocimiento entendió que lo procedente era escuchar los alegatos finales y proferir sentencia.

---

[6] El CGP entró en vigor el 1° de enero de 2016, conforme se aprecia en el Acuerdo PSAA15-10392 del 1° de octubre de 2015.

23. Lo expuesto, además de contravenir las normas del tránsito legislativo, del CPC al CGP, atentó contra la garantía que en el marco del derecho fundamental al debido proceso, tienen las demandadas de solicitar pruebas y que las mismas sean practicadas en debida forma.

24. Si bien lo aquí considerado sería suficiente para confirmar el auto apelado, conviene efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud de nulidad por indebida notificación del auto que cambió la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento.

No se comunicó de manera efectiva el cambio de fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento

25. Previo a las medidas transitorias aludidas en los antecedentes, el *a quo* mediante proveído del 22 de marzo de 2018 (fl. 425, c. 1) señaló como fecha para llevar a cabo la audiencia de alegatos y fallo el 20 de agosto de 2019, esto es, cerca de año y medio después.

26. Supone lo anterior que el proceso no tendría mayor actividad durante el prolongado espacio de tiempo que debía transcurrir hasta la fecha de la audiencia de alegatos y fallo, y por tal razón, no resultaba imperioso acudir a las sedes judiciales para su revisión.

27. Durante ese periodo de tiempo, el CSJ profirió el Acuerdo PCSJA18-11097 del 25 de septiembre de 2018 (que creó los juzgados civiles del circuito transitorios), y en el art. 2° dispuso que el Juzgado 50 Civil del Circuito, debía remitir 125 procesos que se encontraran en la etapa de alegatos y fallo al Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio, dentro de los procesos remitidos, erróneamente se envió el proceso de la referencia.

28. Sostiene el *a quo* que la remisión del proceso al juzgado transitorio fue debidamente publicitada, no obstante, el Tribunal no halla evidencia de ello en el expediente, pues la actuación subsiguiente al auto de 22 de marzo de 2018 es el informe secretarial del 11 de octubre de 2018 de ingreso al despacho del Juzgado 4° Civil del Circuito Transitorio de Bogotá, (fl. 426, c. 1).

29. El juzgado transitorio avocó conocimiento del proceso el 12 de octubre de 2018, es decir, al día siguiente del ingreso del expediente, y adelantó la fecha en que se llevaría a cabo la audiencia antes mencionada, fijándola para el 24 de octubre de 2018, decisión que se notificó por estado (fl. 427, c. 1).

30. El Tribunal no desconoce que la fijación de una fecha más próxima para la celebración de la audiencia de que trata el art. 373 CGP tuvo por finalidad

imprimir celeridad al proceso, antes que sorprender a las partes; sin embargo, tal propósito sin la debida comunicación a las partes tiene entidad suficiente para vulnerar el derecho de defensa.

31. La notificación por estado del auto del 12 de octubre de 2018 debió estar acompañada de otros medios de comunicación efectiva, fuera a través de los correos electrónicos de las partes o mediante telegrama a las direcciones dispuestas para ese fin, incluso, publicitando la decisión a través de la página web de la Rama Judicial, sin embargo, al efectuar la consulta no se observa el registro de actuación alguna entre el 10 de septiembre de 2015 y el seis de junio de 2019, como se aprecia en la siguiente imagen:

06 Jun 2019	RECEPCIÓN MEMORIAL	RECEPCION MEMORIAL			06 Jun 2019
10 Sep 2015	ENVIO EXPEDIENTE	SE ENVÍA PROCESO AL JUZGADO 7° CIVIL CIRCUITO DE DESCONGESTION-ACUERDO PSAA15-10373			10 Sep 2015

32. Resalta el Tribunal que la debida comunicación del cambio de fecha de la audiencia era apenas necesaria, no solo por la importancia del acto procesal al cual convocaba, sino además porque las demandadas tenían la convicción fundada en que dicho acto tendría lugar más de un año después.

33. En la fecha y hora señalada por el juzgado transitorio se llevó a cabo la audiencia (fl. 431, c. 1) y el 14 de noviembre de 2018 el juzgado transitorio profirió sentencia escrita estimando las pretensiones de la demanda y condenando a las demandadas a indemnizar a la demandante (fls. 436 a 450, c. 1).

34. Las demandadas se pronunciaron hasta el dos de mayo de 2019, seis meses después de proferida la sentencia de primera instancia, y solicitaron la nulidad de lo actuado, precisamente por las presuntas irregularidades advertidas en la notificación del auto que modificó la fecha de la audiencia.

35. Por ser pertinente para resolver el problema jurídico planteado, y por considerar que la *ratio decidendi* es aplicable al presente asunto[7], el Tribunal pasa a citar las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema de Justicia en un caso de contornos similares[8]:

> Ahora, aun cuando en principio, la fijación de la fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento, en virtud de la disposición procesal antes citada, solo puede ser determinada oralmente durante la celebración de la audiencia inicial; ello no es óbice

[7] Si bien la CSJ efectuó las consideraciones a citar respecto de un proceso tramitado bajo las reglas del CGP, y no del CPC como el proceso que ahora ocupa la atención del Tribunal, los supuestos fácticos guardan identidad.
[8] CSJ Civil, 20 Sep. 2017, e2017-01695-01. L Tolosa (STC14870-2017).

> para que su reprogramación pueda hacerse por escrito, cuando por algún evento no sea posible desarrollarla en la data inicialmente establecida.
>
> Sin embargo, **dada la relevancia de este acto procesal, el juzgador está obligado a poner en conocimiento de las partes esa determinación por el medio más efectivo**, con miras a no vulnerar su derecho al debido proceso, específicamente, al de defensa del cual deriva el ejercicio de la doble instancia.
>
> Fíjese o no en forma pública en audiencia o, por escrito cuando las circunstancias lo impongan, jamás puede esquilmarse el derecho a la tutela judicial efectiva, uno de cuyos elementos centrales es el debido proceso, y, por tanto, debe notificarse efectivamente a las partes de la realización de ese acto.
>
> **En el caso *subjúdice,* la sola notificación por estado resultaba insuficiente para asegurar la publicidad de una decisión que al no ser comunicada eficazmente conllevó consecuencias gravosas para el aquí accionante, pues su inasistencia a la referida diligencia le impidió impugnar la sentencia emitida en esa oportunidad, adversa a sus intereses.**
>
> Con ese proceder, el sentenciador acusado constitucionalmente borró de tajo el derecho de las partes para ser convocadas, oídas y vencidas en juicio (resaltado del Tribunal).

36. Sobre la efectiva notificación de las actuaciones judiciales, y en contraste, la insuficiencia de la notificación por estado de decisiones como el cambio de la fecha de una audiencia de instrucción y juzgamiento, también se ha pronunciado este Tribunal[9]:

> (…) Muestra lo expuesto hasta el momento sin lugar a duda que la señora (…) no fue enterada de las actuaciones judiciales frente a las cuales existía el deber legal de hacerlo eficazmente y en igualdad de condiciones que a su contraparte en el trámite ordinario. Igualmente, tampoco se hizo lo propio en relación con alguno de los apoderados que tuvo al estimar que no era necesario por cuanto presentaron respectivamente renuncia que les fue aceptada.
>
> Podrá alegarse que hubo intentos para tales efectos, sin embargo, se quedaron en eso, en intentos que no se concretaron por cualquier otro medio de notificación previsto en el Código General del Proceso que permitiera garantizar la adecuada publicidad de las actuaciones, y por supuesto, diferente a la notificación por estado que para este tipo de casos se tiene por insuficiente.

37. Habida cuenta de la insuficiencia de la notificación por estado para comunicar a las partes el cambio de la fecha de la audiencia, concluye el Tribunal que la ausencia de una comunicación eficaz ubicó a las demandadas en un escenario de indefensión judicial que amerita corrección, por cuanto:

37.1. Les impidió solicitar prontamente la nulidad por pretermitir la prueba testimonial que fue decretada bajo la ley procesal anterior.

37.2. Aunque se convalidará lo anterior, les impidió hacer comparecer a la testigo cuya declaración echa de menos y además presentar sus alegatos finales.

---

[9] TSDJB SCE Restitución de Tierras, 19 Jul. 2019, e2019-01214-00. O. Ramírez.

37.3. Se desconoció el principio constitucional de la doble instancia, pues no contaron con la posibilidad de apelar la sentencia desfavorable y obtener una decisión de fondo por cuenta del superior funcional.

Conclusiones del Tribunal

38. En la medida que las irregularidades aquí advertidas, como se indicó ubicaron a las demandadas en un escenario de indefensión que amerita corrección, el Tribunal confirmará el auto apelado, pero bajo el entendido que las causales de nulidad que se configuraron fueron las previstas en los numerales 6° y 9° del art. 140 CPC.

Por lo anterior, el suscrito Magistrado,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia que el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá profirió el 11 de febrero de 2020 por las razones aquí expuestas, bajo el entendido que las causales de nulidad que se configuraron fueron las previstas en los numerales 6° y 9° del art. 140 CPC.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al apelante por la no prosperidad del recurso, liquídense.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

OSCAR HUMBERTO RAMÍREZ CARDONA
MAGISTRADO

Firmado Por:

OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CARDONA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3b58f8dc21d9a18c1b7770cc3ef2c8616066ea4a5a85244268e22a6be70c5525**

Documento generado en 16/12/2020 04:17:38 p.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Proceso No.	11001310302720130046901
Clase:	EJECUTIVO
Ejecutante:	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S.
Ejecutada:	ART CONDOMINIOS S.A.S.

Se resuelve la apelación interpuesta por la ejecutante contra el auto que el 1° de agosto de 2019 profirió el Juzgado 2° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esta ciudad (repartido al suscrito magistrado el día de hoy), mediante el cual declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito.

ANTECEDENTES

Mediante el proveído recurrido, el juzgador de primer grado decretó la finalización del compulsivo del epígrafe, tras hallar configurada la hipótesis prevista en el numeral segundo del artículo 317 del CGP, dado que el proceso permaneció inactivo en la secretaría del despacho por más de dos años.

Inconforme con esa decisión, la sociedad actora reparó, en lo medular, en que no era dable la terminación del proceso, pues la secretaría del despacho debió correr traslado a su contraparte del estado de cuenta, según se ordenó en auto de 23 de febrero de 2017.

Resuelto en forma adversa el recurso de reposición impetrado, corresponde resolver la alzada subsidiaria previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El suscrito magistrado confirmará el proveído recurrido, puesto que un estudio del expediente permite colegir que se imponía la terminación del juicio por desistimiento tácito.

La aplicación de la hipótesis prevista en el numeral 2° del artículo 317 del CGP se encuentra circunscrita a que el proceso permanezca inactivo en la secretaría del despacho "porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año…, contado desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación"; sin embargo, el literal b) de esa misma disposición prevé que "si el proceso cuenta con… auto que ordene seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años".

En el presente asunto, la actuación que precede a la clausura del proceso, data de 23 de febrero de 2017 (fl. 62, cdno. 1), fecha en la cual la juzgadora que entonces presidía la causa, revocó la decisión adoptada el 19 de octubre de 2016 y, en su lugar, le ordenó a la secretaría fijar "nuevamente la liquidación del crédito"; dicho proveído se notificó por estado del 24 siguiente, lo que implica que los dos años de pasividad que trata la norma en comento, fenecieron el 25 de febrero de 2019[1], sin que en dicho interregno se hubiere realizado alguna actuación de cualquier naturaleza que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 2° del artículo 317 del CGP, haya tenido la virtualidad de interrumpir el aludido lapso; desde esa perspectiva, no hay duda que verificado el supuesto de hecho de la mencionada disposición, se imponía la consecuencia jurídica allí prevista, esto es, la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Ahora bien, contrario a lo que manifestó la compañía recurrente, el avance del aludido término es objetivo, por lo que no se requiere que el juzgador requiera a las partes para que cumplan determinada carga que se encuentre pendiente y/o de la cual dependa el avance del juicio (hipótesis subjetiva que consagra el numeral 1° *ídem*); tampoco es necesario que determine a quién le compete el impulso del proceso, pues, conforme al precepto en comento, basta el simple transcurso del tiempo, es decir, la inercia del trámite durante dos años en los que no se realiza ninguna actuación "de cualquier naturaleza", para que pueda darse por terminado

[1] Si se considera que conforme al penúltimo inciso del artículo 118 del CGP "cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año", pero "si su vencimiento ocurren en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente".

el compulsivo; "precisamente porque en esta segunda modalidad no existe –ni debe hacerse- revisión de las razones por las cuales el proceso está inactivo, es por lo que, de una parte, no habrá condena en costas o perjuicios, y de la otra, cualquier actuación oficiosa o de parte, de cualquier naturaleza –que implique, desde luego, actividad procesal- interrumpe los términos en cuestión."[2]

Desde luego que la decisión recurrida encontró venero en la inactividad de la actuación por espacio superior a dos años, en los que, a riesgo de fatigar, no se realizó ninguna actuación de cualquier naturaleza que reprimiera el avance del señalado plazo.

Repárese en que "cualquier actuación de cualquier naturaleza" interrumpe el término objetivo, por lo que un obrar diligente antes del auto que decretó la terminación del proceso habría evitado la consecuencia que se cuestiona; obsérvese que la recurrente, durante el lapso de dos (2) años y seis (6) meses, que fue el plazo que transcurrió entre la última actuación y el proveído que dispuso el finiquito del proceso, no presentó solicitud alguna encaminada a que el juzgador de primer grado refrendara el estado de cuenta presentado; tampoco hubo actuaciones encaminadas a lograr la práctica de medidas cautelares, ni se prestó la caución que se ordenó en auto de 30 de julio de 2013 para el decreto de las cautelas en ese entonces solicitadas; menos aún se puso al juez de la causa al tanto del cumplimiento o no del acuerdo de pago celebrado con la ejecutada, o, en fin, se reitera, el expediente no reporta alguna actuación "de cualquier naturaleza" realizada en el interregno ya mencionado que sirviera a los efectos de interrumpir el término de inactividad procesal.

Así las cosas, no es entendible ni razonable la inercia de la ejecutante por más de dos años (para ser exactos, 2 años y 6 meses, que es el plazo que transcurrió entre la notificación de la última actuación y el proveído que ordenó la terminación del compulsivo), que es precisamente lo que castiga el instituto en comento, pues, según lo tiene decantado la Corte Suprema de Justicia, la figura del *desistimiento tácito* "se erige en sanción gravosa para el actor descuidado o moroso, mostrando también, una renuncia tácita de sus derechos subjetivos", en la medida en que "… [las] situaciones indefinidas… reclaman remedios para prevenir o conjurar el estancamiento procesal"[3].

---

[2] TSB. Auto de 15 de septiembre de 2014. M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez.
[3] CSJ. Sentencia de 18 de diciembre de 2019. SC5515-2019. M.P. Margarita Cabello Blanco.

Por lo demás, cumple resaltar que los términos previstos en el estatuto procesal civil son perentorios e improrrogables, sin que puedan modificarse o sustituirse por el juez o por las partes, dado que las normas allí contenidas son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento (arts. 13 y 117, CGP).

En conclusión, como en el presente asunto se encuentran dados los presupuestos para la finalización del proceso por desistimiento tácito, se refrendará la decisión confutada, sin que haya lugar a imponer condena en costas por lo dicho líneas atrás.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado sustanciador,

RESUELVE:

Primero. Confirmar el auto que 1° de agosto de 2019 profirió el Juzgado 2° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, por lo expuesto.

Segundo. Sin costas por las razones expuestas.

Tercero. Devuélvase la actuación al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
94963917dd6f67fef11f99598416766ba035d8dbf62684847ac5409687979150

Documento generado en 16/12/2020 03:13:30 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Basf Química Colombiana S.A. Nit: 860056150-8
Demandados	Luis Hernando Vásquez Higuera c.c. 17.139.094 Gilma Amparo Guerrero Chaquea c.c.21.224.659
Vinculado litisconsorte	Compañía Diversificada de Inversiones Técnicas – Dinatec Ltda Nit: 860500170-1
Radicado	11 001 31 03 **029 2018 00204 02**
Instancia	Segunda –*apelación de sentencia-*
Procedente	Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá
Fecha de la providencia	24 de septiembre de 2019
Apelante	Parte demandada

Proyecto discutido en salas del 19, 26 de noviembre, 03 y 10 de diciembre de 2020

Se procede a resolver el recurso de apelación en contra de la sentencia en referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Se pidió librar orden de pago, a favor de la sociedad demandante y en contra de los demandados por las siguientes cantidades de dinero: (i) $758.169.822,09 por concepto de capital representado en el pagaré Nro.001-95, con fecha de vencimiento 16 de febrero de 2018, firmado en su momento en blanco, actuando en sus dos calidades, como avalistas y representante legal de la época de la firma Dinatec Ltda. (ii) Por los intereses moratorios sobre la suma anterior, liquidados a partir del 17 de febrero de 2018 y hasta la fecha de pago de la obligación.

2. Fundamentos fácticos de las pretensiones

Los demandados se declararon deudores de la demandante en la forma y términos indicados en precedencia, sin que a la fecha de presentación de la demanda, hayan cancelado su obligación.

Se indica en el escrito que subsana la demanda, que el pagaré se firmó en blanco y que el señor Luis Hernando Vásquez Higuera firmó en su doble condición de persona natural avalista y como representante legal de Dinatc Ltda para la época de la firma.

El pagaré tiene la serie "*mil novecientos noventa y ____ (199__)*", porque corresponde a un formato preimpreso y al serial de la década 1900, en que fue firmado, sin que dicha circunstancia afecte la validez del título, ya que el mismo no contiene una limitante en el tiempo para llenar sus espacios en blanco.

La causa onerosa del pagaré son las obligaciones pendientes de pago a cargo de Dinatec Ltda, persona jurídica contra quien no se dirigió la demanda, debido a que el representante legal tiene limitaciones para actos con cuantías superiores a cien millones de pesos.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 1571 del Código Civil y el artículo 636 del Código de Comercio, la demandante decidió iniciar la acción de cobro solo contra los deudores solidarios.

3. Trámite impartido.

3.1. Mediante auto del 04 de septiembre de 2018 el A quo libró el mandamiento de pago en los términos solicitados, pero oficiosamente vinculó como pasiva en calidad de litisconsorte cuasinecesario a la sociedad Dinatec Litda, a quien también le libró orden de pago. La parte demandante no formuló ningún recurso contra esta disposición.

3.2. Contra la citada providencia, el codemandado Luis Hernando Vásquez Higuera formuló recurso de reposición, aduciendo que el pagaré base de ejecución fue otorgado en garantía, la cual no está vigente, porque tuvo su origen en un contrato de superdistribución Nro. 384-90 el cual está terminado desde noviembre de 2014. La demandante esperó 4 años para ejecutar un pagaré firmado 23 años atrás, por el otrora representante legal de Dinatec Ltda y su esposa, quienes

hoy en día no son socios de la empresa. De igual forma, dicho pagaré se llenó excediendo el monto pactado por 40 millones de pesos, pactado en la cláusula sexta del contrato.

3.3. El recurso se resolvió a través de providencia del 6 de mayo de 2019, en el cual se dispuso no reponer la orden de apremio librada, bajo el entendido que no atacaron los requisitos formales del título valor, sino sus requisitos sustanciales que deben ser analizados en la sentencia de fondo.

4. Excepciones de fondo

4.1. Los codemandados Luis Hernando Vásquez Higuera y Gilma Amparo Guerrero de Vásquez propusieron las siguientes excepciones de fondo: (i) El pagaré no cumple los requisitos esenciales que la ley exige para ser considerado título valor, al no indicar expresamente que se trataba de una promesa incondicional de pagar una suma de dinero, no incluye la expresión "páguese a la orden de", se alteró la forma de vencimiento y fue más allá de la carta de instrucciones, el contrato de Superdistribución 384-90 y la contabilidad de BQC. (ii) El pagaré fue alterado en la parte del vencimiento de la obligación, aduciendo que dicha garantía tendría vigencia hasta el año 1999. Además la carta de instrucciones hace referencia a otro pagaré, el Nro.010-95. (iii) Falta de requisitos necesarios para ejercer la acción en contra de los demandados personas naturales, toda vez que ellos no deben suma alguna de dinero. (iv) La demandante cubrió el pagaré por una suma superior a la máxima pactada con los deudores en el contrato subyacente a la emisión del pagaré Nro.001-95. La cuantía máxima permitida en la cláusula sexta era de $40.000.000,oo.

4.2. La sociedad Dinatec Ltda propuso excepciones que fueron declaradas extemporáneas mediante auto del 06 de mayo de 2019, el cual no fue objeto de recurso alguno.

4.3. Al descorrer el traslado de las excepciones de mérito, la parte demandante se opuso a las mismas, pronunciándose sobre cada una de ellas, concluyendo que el pagaré sí reúne los requisitos formales y sustanciales, no estaba delimitado a la década de 1990 y que la indicación de otro número de pagaré en la carta de instrucciones, corresponde a un error de transcripción. Afirma que es falso

que el pagaré se haya derivado del contrarto del 13 de julio de 1990. La cuantía del pagaré nunca fue limitada.

5. Sentencia de primera instancia

Declaró imprósperas las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante la ejecución en la forma indicada en el mandamiento de pago, junto con los demás ordenamientos de ley en este tipo de juicios. Para sustentar el fallo, argumentó:

Al suscribirse el pagaré Nro. 001-95 por cada uno de los demandados, en el mismo grado, tal cual lo muestra dicha prueba documental, que dicho sea de paso no fue tachada o redargüida de falsa tornándose en lo que se conoce como plena prueba, se vislumbra que son todos los demandados son obligados cambiarios, como otorgantes de la promesa incondicional de pagar el derecho del crédito que se incorporó al cartular.

5.1. La Promesa de pagar una suma de dinero no tiene un sacramental texto que deba suponerse. Debe cumplirse una suposición futura que exprese la voluntad de quien suscribe el pagaré. Ciertamente y bajo una apreciación razonable, la suposición de un hecho futuro e incondicionado que exige el Nro. 1º. Del art. 709 del C.Co., se encuentra satisfecha, puesto que hay un compromiso declarado de pago sin limitación o puesta a condición, sino más bien a plazo en fecha cierta que es el 16 de febrero de 2018.

5.2. La lectura del instrumento negociable permite ver sin asomo de duda que se emitió a la orden de "La Sociedad Basf Química Colombiana S.A. o a su nombre o a quien represente sus derechos…", por lo cual, se permite evidenciar a quien se compromete pagar el derecho incorporado al título y por lo demás, determina lo que resulta ser su función cardinal. Al fin y al cabo, se sabe, los títulos a la orden son aquellos expedidos a favor de determinada persona en palabras del artículo 651 ibídem.

5.3. La forma de vencimiento por su parte, quedó debidamente especificada en el título sin ninguna alteración. Si bien la carta de instrucciones señala que corresponde al pagaré Nro. 001-95., la verdad es que las partes dejaron manifiesto desde sus declaraciones, que no hubo otro pagaré suscrito entre ellas que a su vez se traduce en la imposibilidad de atribuir efectos diversos más que al pagaré 001-

95 que se trajo con la demanda. Y es que a decir verdad ninguno de los demandados, logró desvirtuar la obligación que entraña el derecho de crédito incorporado al título, sino que corresponde a un negocio jurídico causal de antaño, lo que sin duda no menoscaba el derecho cartular.

5.4. No opera la prescripción porque el pagaré dejó sentado que su exigibilidad a fecha cierta, estaría determinada por el acreedor, a quien se facultó expresarla sin ningún miramiento temporal o tempestividad. El acreedor es el arquitecto supremo de la relación cartular para señalar su exigibilidad, y a ello se atuvieron las partes. Sin duda porque ese proceder es recto y demostrativo de confianza de reciprocidad.

5.5. No puede disputarse que la obligación se haya suscrito por suma superior a la autorizada por los otorgantes del pagaré. Nótese la predisposición volitiva de quienes suscribieron ese instrumento y las instrucciones que impartieron son claras y no requieren interpretaciones forzadas. Según su voluntad manifiesta en la carta de instrucciones, el monto adeudado estaría limitado por "El valor de todas las obligaciones exigibles, que, a nuestro cargo y a favor de Basf Química Colombiana S.A. existan en la contabilidad de dicha sociedad. Al momento de ser llenados los espacios en blanco, bien sea por compra de mercancía, intereses o cualquier otro gasto previamente acordado." Al efecto la contabilidad y las sumas exigibles, son puntos coincidentes en este proceso, para determinar la suma de $758.169.822,09. Primero, ese monto se comprobó con los documentos obrantes a folios 46 a 61 del primer cuaderno del Dosier, en palabras incluso del representante legal de la sociedad demandante. Segundo. Tales documentos enseñan un estado de cuenta y sendas facturas por negocios ocurridos en el año 2014. Que las facturas sean del año 2014 y probablemente estuvieren cobijadas con el fenómeno de la prescripción, extintiva, no las hacen inexigibles como pretende apuntar el extremo demandado. Pues se sabe la prescripción extintiva, debe declararse por un Juez de la República y de suyo alegarse en juicio. Luego, ninguna extralimitación se avizora en lo que atañe al monto de la obligación consignada en el pagaré 001-95. Además, exceder el límite de contratación que se impuso estatutariamente al representante legal de Dinatec, no hace que el monto legal de la obligación consignada en el título, exceda la obligación porque esa es la función del avalista para el título valor y en este caso fungen como tal, los demandados naturales. Ellos son garantías personales del derecho incorporado al título, cual es la naturaleza del aval en tanto, avalaron el título, no el contrato. De

otro lado, porque sobrepasar el límite de contratación señalados estatutariamente, a un administrador también lo obliga y no cabe duda del documento aportado por la Demandante, que Luis Vásquez, fue representante de Dinatec, al tiempo de concebirse el cartular y según el art. 641 del Co. de Co., debe responder como persona natural.

6. Recurso de apelación.

Después de ajustado el proceso al trámite previsto por el Decreto 806 de 2020, el apelante único que apodera a los demandados Luis Hernando Vásquez Higuera y Gilma Amparo Guerro, sustentó por escrito su recurso de apelación en los siguientes términos:

6.1. Indebida interpretación del principio de autonomía del pagaré a la orden base de la acción ejecutiva. El origen del principio de autonomía del título valor y su desarrollo jurisprudencial hacen referencia a la eficacia del derecho patrimonial incorporado en el documento mercantil independiente de quien lo tenga y de la misma relación causal, cuando ha sido negociado o transferido, no para cuando el título valor permanece y pertenece en el negocio original que suscribieron la parte y que determinaron su nacimiento.

En este caso, a diferencia de un título valor en circulación, está regulado y gobernado por lo pactado por las partes contratantes, pues el negocio jurídico es ley para las partes. (Art. 784 Num. 12 C.Co.) Y en este caso puntual, se determinó desde un inicio, que el Pagaré, además de tener espacios en blanco con carta de instrucciones, tenía un límite en su cuantía de cubrimiento de cuarenta millones de pesos ($40.000.000.oo), y la razón, la explica la misma parte demandante, representante legal y testigo, al decir que este pagaré es la garantía de los créditos que rotativamente se iban concediendo en el desarrollo contractual.

Los negocios iniciales SI correspondían al monto garantizado, pero en años posteriores, se exigieron garantías diferentes y superiores, por ser mayores los créditos otorgados. (3 hipotecas).

El pagaré tuvo vigencia entre el año 1995 a 1999, según su interpretación lógica y contractual, por lo tanto, debió ser ejecutado dentro del periodo de su vigencia.

6.2. Las pruebas surtidas en el proceso muestran cubrimiento arbitrario del pagaré base de la ejecución. Las instrucciones que en carta se anexan al título valor en blanco está supeditada al acuerdo directo de las partes, entre otras razones porque:

- El contrato de distribución y posterior de suministro terminaron en el año 2014, en tanto que el pagaré fue cubierto en el año 2018 por una suma superior veinte (20) veces a la pactada originalmente.
- Los socios originales suscriptores del pagaré y deudores solidarios se desvincularon de la empresa y, en tal virtud, de los contratos mismos, sin que sea legal hacerles extensivos los efectos, de una demanda ejecutiva, en cuyo incumplimiento no hicieron parte.
- La suerte de lo accesorio (Carta de Instrucciones y Pagaré) sigue la suerte de lo principal, los contratos de distribución y suministro, los cuales terminaron en el año 2014, y de acuerdo a las instrucciones, es en ese momento que debía cubrirse el título valor. Es decir, el cubrimiento del pagaré fue arbitrario al contravenir la instrucción y el contrato mismo.

De la lectura de la carta de instrucciones se observa que señala como instrucción para su llenado al momento de vencimiento de las obligaciones a cargo de los deudores, en este caso, dichas obligaciones se contraen a facturas de venta. (Aportadas al expediente).

Estas facturas de venta tenían como fecha de vencimiento diciembre de 2015 e inicios de 2016, por lo que era el momento del llenado y cobro del aludido pagaré. Es evidente que cobrarlo 4 o 5 años más tarde del vencimiento de las obligaciones a cargo de los obligados cartulares, le está generando ilegalmente unos intereses de mora y plazo a favor del ejecutante.

II. CONSIDERACIONES

1. La competencia del Tribunal está delimitada por los puntos de controversia expuestos en la sustentación de la apelación, quedando vedados los temas que no hayan sido debatidos frente al fallo de primera instancia, como lo prevén los artículos 320 y 328 del mismo Estatuto.

2. Desde el umbral de esta providencia, imperioso se torna advertir, que al ser apelantes únicos los codemandados Luis Hernando Vásquez Higuera y Gilma Amparo Guerrero Chaquea, se analizarán los puntos de reparo relacionados con el alcance del fallo en su contra, quedando incólume la orden de pago ejecutiva en contra del otro demandado y obligado directo Compañía Diversificada de Inversiones Técnicas – Dinatec Ltda, quien no presentó oportunamente excepciones de mérito ni formuló recurso contra la sentencia de primer grado.

3. De acuerdo a los reparos concretos expuestos en la sustentación del recurso de apelación, los problemas jurídicos que debe dilucidar la Sala para desatar la alzada se concretan en lo siguiente: a) ¿se interpretó en indebida forma el principio de autonomía de los títulos valores? b) ¿se probó un indebido diligenciamiento del título valor según la carta de instrucciones?, y c) ¿la terminación del contrato que dio origen al título valor, implica que el mismo pierda la exigibilidad?

4. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 619 del Código de Comercio, títulos valores son los documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, estableciendo con ello, las características fundamentales de éstos, como son, la literalidad, la autonomía, la legitimación y la incorporación.

El fundamento de la acción cambiaria, según el artículo 625 del Código de Comercio, deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a su ley de circulación. Cualquier convención o restricción a la circulación del título valor, debe quedar expresa en el mismo o en hoja adherida a éste, pues según el artículo 626 ibídem, el suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia.

Por su parte, el artículo 710 *ejusdem,* consagra: "*[e]l suscriptor del pagaré se equipara al aceptante de una letra de cambio".* Y el artículo 689 del mismo Estatuto, preceptúa: "*[l]a aceptación convierte al aceptante en principal obligado. El aceptante quedará obligado cambiariamente aún con el girador; y carecerá de acción cambiaria contra éste y contra los demás signatarios de la letra".*

Con respecto a los efectos de la aceptación, la doctrina versada ha explicado: "*El aceptante asume la obligación cierta, incondicional, abstracta, unilateral, literal, y directa de pagar (…) dicha obligación es cierta porque es perfecta; incondicional, puesto que rechaza cualquier condición, en cuanto cambiaria; abstracta, porque el tercero resulta ser un extraño inmune a las excepciones nacidas de la relación fundamental; literal, por estar escrita en la propia letra; unilateral, porque la única fuente de esa obligación es su promesa de aceptante, sin contraprestación; y directa, porque no está sometida a la previa interpelación de nadie*[1].

Las anteriores premisas permiten sostener que, la obligación cambiaria nace de una firma puesta en un título valor y su entrega con la intención de hacerlo negociable, en el que el suscritor queda obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia. Ahora, puntualmente el suscriptor de un pagaré por equiparse al aceptante en una letra de cambio, asume la obligación cierta, incondicional, abstracta, unilateral, literal y directa de pagar.

Por lo tanto, la autonomía del título valor, predicada en la sentencia de primera instancia, estuvo acorde con las normas especiales que regulan la materia, porque si bien los títulos valores pueden tener origen en contratos o convenios previos, su naturaleza jurídica de ninguna manera los hace accesorios. Cualquier limitación en la cuantía del importe del título, debía hacerse constar en su texto, en la carta de instrucciones o en hoja adherida.

La parte demandante señala que el contrato que dio origen al título valor fue el 058-92 fechado a 01 de abril de 1992 (fl 157-163) denominado contrato de suministro para venta de productos, cuyo objeto era suministrar en forma periódica productos agroquímicos fabricados o adquiridos por BQC, en el cual no se limitó la cuantía de las negociaciones y se exigió como garantía el otorgamiento de una póliza de seguro de cumplimiento hasta por el valor otorgado como cupo de crédito (cláusula décima).

Por su parte, la demandada funda el origen del pagaré en el contrato denominado superdistribución Nro. 384-90 del 13 de junio de 1990 (fl 71-75), cuyo objeto era autorizar al distribuidor mayorista (Dinatec Ltda) distribuir en forma exclusiva por su cuenta y riesgo, y utilizando sus propios recursos, los productos

[1] Trujillo Calle, Bernardo. De los títulos Valores. Tomo II. Bogotá: Leyer. 2012. Pág. 133.

de la división agroquímicos que BQC fabrica o comercializa, el cual en su cláusula sexta dispuso lo siguiente: "*El distribuidor mayorista garantizará el pago de las obligaciones a plazos que contraiga en la ejecución de este contrato, a favor de BQC mediante el otorgamiento de un pagaré abierto con autorización para diligenciar sus espacios en blanco hasta la concurrencia de cuarenta millones de pesos mlc ($40.000.000).*"

Si bien podría escogerse el acuerdo contractual posterior, inane resulta descrifrar cuál de los dos contratos dio origen al título valor base de ejecución, porque la restricción contractual convenida recayó exclusivamente sobre la persona jurídica y no en relación con los codeudores o avalistas, sobre los cuales se guardó silencio absoluto, así que no podría extenderse dicha limitación a los demás obligados cambiarios cuando éstos no firmaron con salvedades en el tenor literal del documento.

De igual forma, la existencia del pagaré no estuvo nunca condicionada a la emisión de otro tipo de títulos valores como facturas de venta, por lo que este cargo de apelación es carente de soporte probatorio. Dichas facturas sirvieron de base para diligenciar los espacios en blanco del pagaré, hecho que no está prohibido por las normas comerciales.

Tampoco es relevante que el contrato que le dio origen al título valor se hubiese extinguido, porque como bien se confiesa por los mismos demandados, el pagaré se constituyó como garantía de las obligaciones, y por ende, su existencia individual se justifica precisamente para prever las divergencias que suponen la terminación de los contratos. Es perfectamente viable que se extinga previamente el contrato, pero susbsistan los títulos valores que se hayan constituido como garantía del cumplimiento de las obligaciones que emanan de la convención.

Así las cosas, el cargo de apelación fundado en que el título no podía superar la cuantía de $40.000.000,oo, o que debía extinguirse la obligación por terminación del contrato que le dio origen, está llamado al fracaso, porque dicha limitación no se hizo extensible a los demás deudores solidarios y tampoco se hizo constar en el instrumento cartular.

5. Los artículos 622 y 631 del estatuto mercantil permiten inferir que está permitido suscribir títulos valores con espacios en blanco, condicionados a que se

completen antes de ejercerse el derecho en ellos incorporados; estando legitimado para hacerlo cualquier tenedor legítimo, el que debe atender las instrucciones dejadas por el suscriptor, escritas, verbales, o que se deduzcan del negocio causal. Instrucciones que deben ser claras, precisas y determinables, que permitan completar las menciones esenciales generales y específicas para cada tipo de título valor y así lograr que él produzca efectos conforme lo señala el artículo 620 del Código de Comercio.

En razón al atributo de la literalidad con la que se revisten los títulos valores, el contenido de los mismos es el que obliga en principio. Si posteriormente es negociado con un tercero tenedor de buena fe exenta de culpa, este último podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo a las autorizaciones dadas.

La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la falta de instrucciones no afecta la validez de los títulos valores firmados en blanco. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha mantenido una línea jurisprudencial constante sobre este tema, tal y como se indica en las sentencias STC del 8 septiembre de 2005 (Rad. 00769-01), STC4921 del 23 de abril de 2014 y STC15543 del 12 de noviembre 2015, al precisar en resumen que la inobservancia de las instrucciones impartidas para diligenciar los espacios en blanco dejados en un título valor no acarrea inexorablemente la nulidad o ineficacia del instrumento, pues, de establecerse la desatención de tales autorizaciones, lo que se impone es ajustar el documento a los términos originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor. En estos eventos, la Corte ordenó a los Tribunales que adapten los títulos valores a su verdadera autorización de llenado, partiéndose de su literalidad y acompasándose con el negocio jurídico subyacente, y así, indefectiblemente continuar adelante la ejecución.

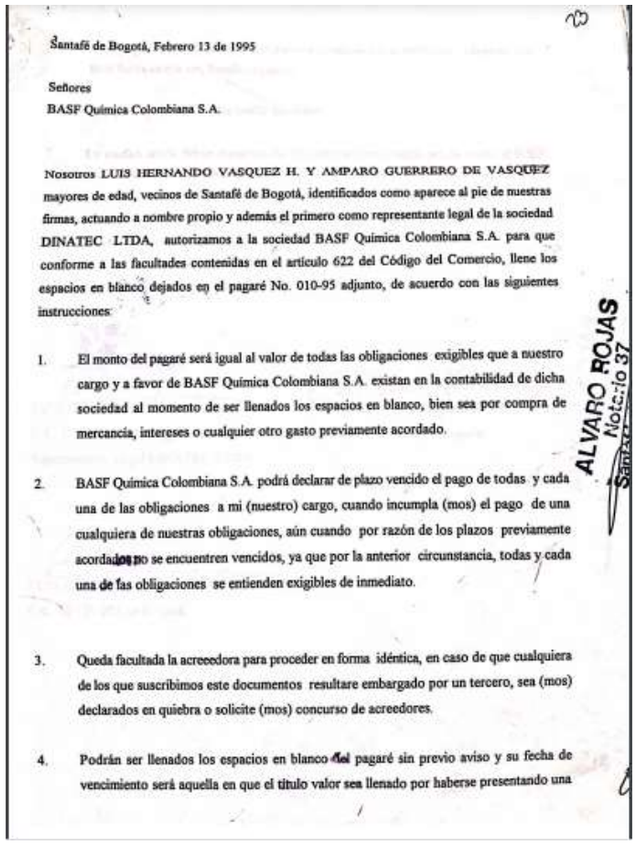
En la Sentencia SC16843-2016, la Corte recordó que la carta de instrucciones no hace parte de los títulos valores, sino que se suscribe como ilustración para diligenciarlos y, sólo cobra relevancia en el evento en el que se alegue que lo dicho en los mismos resultó contrario a lo plasmado en el instrumento cambiario. Al respecto, precisó:

> "*(…) se resalta que pese a que la carta de instrucciones es una mera reproducción o fotocopia, tal condición no riñe con los requisitos generales previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para los títulos ejecutivos y mucho menos con los consagrados en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio frente al pagaré. (…) A*

propósito de escritos como éste, esta Corporación ha señalado: [s]e admite entonces de manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear títulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibición tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor. Ahora, si una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada [artículo 622 del Código de Comercio] le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco; y en segundo, evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título. Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a los principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; (…) adicionalmente le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas (CSJ STC, 30 jun. 2009, Rad. 01044-00 reiterada en STC1115-2015)."

Para verificar si en el caso concreto se vulneró la carta de instrucciones, es importante verificar los documentos suscritos por las partes así:

Carta de instrucciones



Santafé de Bogotá, Febrero 13 de 1995

Señores
BASF Química Colombiana S.A.

Nosotros LUIS HERNANDO VASQUEZ H. Y AMPARO GUERRERO DE VASQUEZ mayores de edad, vecinos de Santafé de Bogotá, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actuando a nombre propio y además el primero como representante legal de la sociedad DINATEC LTDA, autorizamos a la sociedad BASF Química Colombiana S.A. para que conforme a las facultades contenidas en el artículo 622 del Código del Comercio, llene los espacios en blanco dejados en el pagaré No. 010-95 adjunto, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

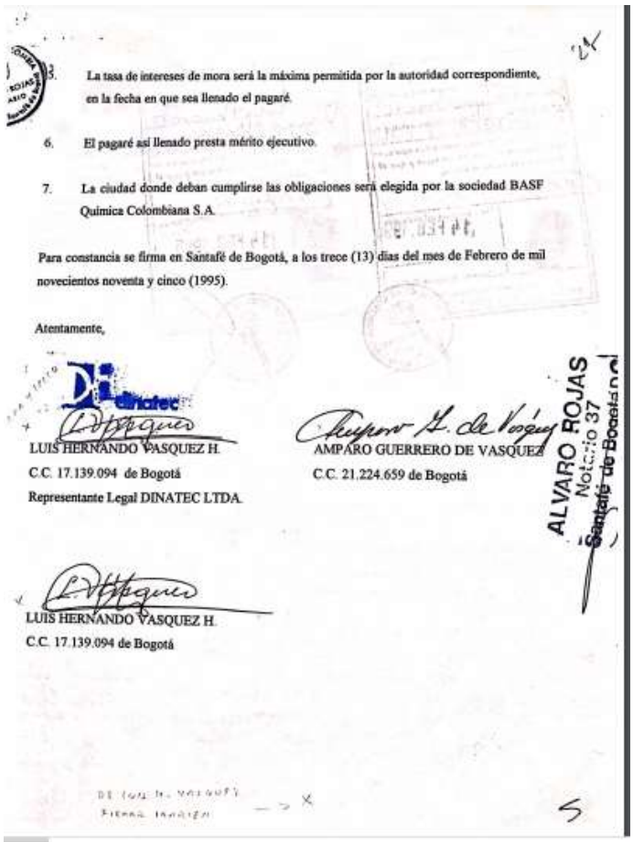
1. El monto del pagaré será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a nuestro cargo y a favor de BASF Química Colombiana S.A. existan en la contabilidad de dicha sociedad al momento de ser llenados los espacios en blanco, bien sea por compra de mercancía, intereses o cualquier otro gasto previamente acordado.

2. BASF Química Colombiana S.A. podrá declarar de plazo vencido el pago de todas y cada una de las obligaciones a mi (nuestro) cargo, cuando incumpla (mos) el pago de una cualquiera de nuestras obligaciones, aún cuando por razón de los plazos previamente acordados no se encuentren vencidos, ya que por la anterior circunstancia, todas y cada una de las obligaciones se entienden exigibles de inmediato.

3. Queda facultada la acreedora para proceder en forma idéntica, en caso de que cualquiera de los que suscribimos este documentos resultare embargado por un tercero, sea (mos) declarados en quiebra o solicite (mos) concurso de acreedores.

4. Podrán ser llenados los espacios en blanco del pagaré sin previo aviso y su fecha de vencimiento será aquella en que el título valor sea llenado por haberse presentando una

ALVARO ROJAS Notario 37 Santafé



5. La tasa de intereses de mora será la máxima permitida por la autoridad correspondiente, en la fecha en que sea llenado el pagaré.

6. El pagaré así llenado presta mérito ejecutivo.

7. La ciudad donde deban cumplirse las obligaciones será elegida por la sociedad BASF Química Colombiana S.A.

Para constancia se firma en Santafé de Bogotá, a los trece (13) días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Atentamente,

LUIS HERNANDO VASQUEZ H.
C.C. 17.139.094 de Bogotá
Representante Legal DINATEC LTDA.

AMPARO GUERRERO DE VASQUEZ
C.C. 21.224.659 de Bogotá

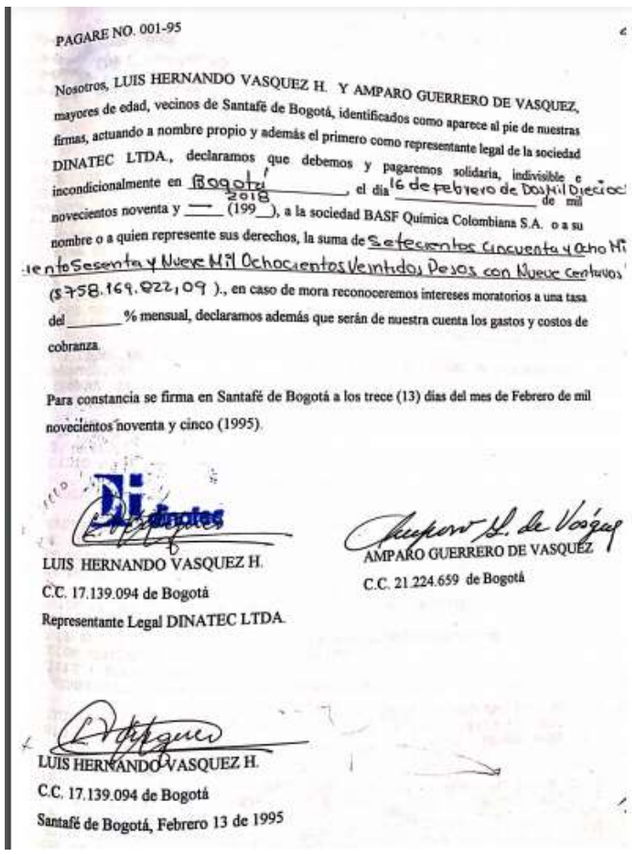
ALVARO ROJAS
Notario 37
Santafé de Bogotá D.C.

LUIS HERNANDO VASQUEZ H.
C.C. 17.139.094 de Bogotá

Obsérvese que los señores Luis Hernando Vásquez H. y Amparo Guerrero de Vásquez, no son simples avales como se indica por las partes, pues manifestaron actuar a nombre propio y autorizaron al acreedor para llenar los espacios en blanco dejados en el pagaré 010-95, por el monto de todas las obligaciones exigibles al momento de ser llenados los espacios en blanco, bien sea por la compra de mercancías, intereses o cualquier otro gasto, sin argüir alguna limitación en la cuantía o en el tiempo, es decir, no se restringieron las deudas al último día de la década de los 90´s como se aduce en las excepciones, pues incluso permitieron que la fecha de vencimiento sea aquella que el título valor sea llenado, sin indicarse un lapso o un término para dicho tópico. Tampoco indica que se someten a las restricciones de cuantía de la sociedad que respaldaban, así que el título fue creado sin limitación alguna y firmaron como obligados directos cambiarios.

El apelante asegura que la carta de instrucciones exigía para el llenado del pagaré, que las obligaciones debían ser al momento de vencimiento de las obligaciones a cargo de los deudores, en este caso, dichas obligaciones se contraen a facturas de venta. Dicha afirmación es carente de respaldo fáctico, porque dicho convenio no se infiere del tenor literal antes transcrito. Todo lo contrario, se deja muy claro que se trata de obligaciones exigibles al momento del llenado del pagaré en blanco sin referirse a la exigibilidad de otros documentos como facturas.

El pagaré suscrito fue el siguiente:



PAGARE NO. 001-95

Nosotros, LUIS HERNANDO VASQUEZ H. Y AMPARO GUERRERO DE VASQUEZ, mayores de edad, vecinos de Santafé de Bogotá, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actuando a nombre propio y además el primero como representante legal de la sociedad DINATEC LTDA., declaramos que debemos y pagaremos solidaria, indivisible e incondicionalmente en Bogotá, el día 16 de febrero de Dos Mil Dieciocho de mil novecientos noventa y ___ (199__), a la sociedad BASF Química Colombiana S.A. o a su nombre o a quien represente sus derechos, la suma de Setecientos Cincuenta y Ocho Mi[illegible]ientoSesenta y Nueve Mil OchocientosVeintidos Pesos con Nueve centavos ($758.169.822,09)., en caso de mora reconoceremos intereses moratorios a una tasa del _____% mensual, declaramos además que serán de nuestra cuenta los gastos y costos de cobranza.

Para constancia se firma en Santafé de Bogotá a los trece (13) días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).

LUIS HERNANDO VASQUEZ H.
C.C. 17.139.094 de Bogotá
Representante Legal DINATEC LTDA.

AMPARO GUERRERO DE VASQUEZ
C.C. 21.224.659 de Bogotá

LUIS HERNANDO VASQUEZ H.
C.C. 17.139.094 de Bogotá
Santafé de Bogotá, Febrero 13 de 1995

De la simple lectura del documento, puede inferirse que los señores Luis Hernando Vásquez H. y Amparo Guerrero de Vásquez, firmaron este documento como obligados directos y con espacios en blanco, pero ratifican que actuaron a nombre propio, recibiendo inequívocamente la orden incondicional de pagar la suma de dinero.

Si bien el número del pagaré difiere del indicado en la carta de instrucciones, se puede observar que los documentos tienen la misma fecha (13 de febrero de 1995) y en el interrogatorio de parte rendido por Luis Hernando Vásquez, al ser preguntado sobre si había suscrito otro pagaré diferente al que es cobrado, contestó sin dubitación alguna que sólo firmó un pagaré con su esposa.

Igualmente, en el documento visible a folio 164, el señor Vásquez suscribe un documento digirido a Basf Química Colombiana S.A., precisando que remite debidamente diligenciados, entre otros, el pagaré Nro. 001-95 con espacios en blanco, firmas y sello y la carta de instrucciones, firmada y autenticada.

Estas pruebas permiten adverar que efectivamente se trató de un error de digitación que alteró los números 001 por 010, pero que de ninguna forma tienen

la relevancia o connotación para afectar el mérito cambiario o ejecutivo del título, pues en virtud del principio de conservación del negocio jurídico[2], este tipo de falencias formales deben ceder ante el interés jurídico que reviste la necesidad de que los compromisos contractuales se cumplan a cabalidad, máxime cuando las partes han confesado la suscripción del documento.

Tampoco se sometió la obligación cambiaria a que los deudores tuvieran la calidad de socios o que las obligaciones a cobrar se debían incoporar en el título valor inmediatamente fueran exigibles. Se trata de una acusación carente de soporte probatorio y ajena al tenor literal del documento que es el que debe primar en materia de títulos valores, pues ninguna norma jurídica establece que los obligados cambiarios directos, avalistas o demás suscriptores deban tener la calidad de socios o representantes legales de las sociedades que avalan al momento de diligenciar los títulos valores que hayan firmado en blanco. Si se retiran posteriormente del órgano societario, debían prever las consecuencias de haber respaldado deudas del ente, y solicitar los paz y salvos y constancias respectivas antes del retiro definitivo, hecho que no fue probado en este juicio.

En conclusión, el título valor con espacios en blanco fue debidamente diligenciado conforme las instrucciones dadas por los deudores solidarios, no se plasmaron restricciones compatibles con la naturaleza del documento y se estuvo al tenor literal del mismo, así que los cargos de apelación no están llamados a prosperar.

6. De conformidad con lo discurrido, se confirmará el fallo de primera instancia y se condenará en costas a la parte demandada en favor del demandante, de conformidad con los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

---

[2] Este principio se deriva del contenido del artículo 1620 del Código Civil, según el cual, el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá D.C., conforme las razones expuestas.

SEGUNDO. CONDENAR en costas por el trámite de la segunda instancia a la parte demandada y en favor de la demandante.

Como agencias en derecho por la segunda instancia el Magistrado sustanciador fija la suma de $1.000.000,oo. Ante el *A quo* efectúese la correspondiente liquidación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE;

Los Magistrados,



IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Documento con firma electrónica

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9848dd0ae99a5c06a62e52e38f1cf8829140b1055ff37268f77df7f8bce11b68
Documento generado en 16/12/2020 10:06:50 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

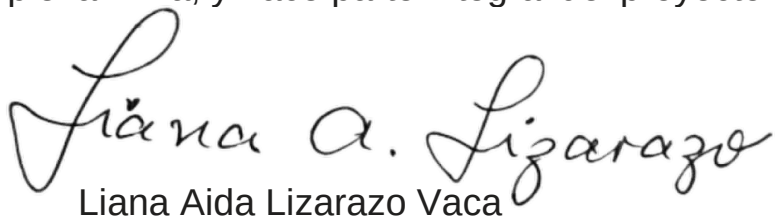
Magistrado
Ivan Dario Cardona Zuluaga

Atendiendo a la directrices de teletrabajo autorizadas mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 complementado por el acuerdo PCSJA20-11518, y conforme a lo lineamientos previstos en la ley 527 de 1999, por medio del presente correo electrónico manifiesto como Magistrada **la aprobación a los proyectos sometidos a estudio,** referente a los siguientes expedientes:

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Basf Química Colombiana S.A. Nit: 860056150-8
Demandados	Luis Hernando Vásquez Higuera c.c. 17.139.094 Gilma Amparo Guerrero Chaquea c.c.21.224.659
ulVinculado litisconsorte	Compañía Diversificada de Inversiones Técnicas – Dinatec Ltda Nit: 860500170-1
Radicado	11 001 31 03 **029 2018 00204 02**
Instancia	Segunda –*apelación de sentencia*-
Procedente	Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá
Fecha de la providencia	24 de septiembre de 2019
Apelante	Parte demandada

Esta aprobación suple la firma, y hace parte integral del proyecto

Cordialmente,



Liana Aida Lizarazo Vaca

Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: a1540e735f94f835040bea6cb4601d5c79ac53d592d53142ce3a8eacd5a2b02d
Documento generado en 01/12/2020 08:49:08 a.m.

RE: Complemento: salvedad de voto en proyecto civil 029 2018 00204 01

Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 15/12/2020 21:36

Para: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Despacho 18 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des18ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (157 KB)

Salv voto_Ej pagaré espacios en blanco029-2018-00204-01.pdf;

Señor Magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona, cordial saludo.

Conforme a los acuerdos vigentes del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas sobre trabajo en línea, a raíz de las medidas contra el COVID 19, por medio de este mensaje de datos remito SALVEDAD DE VOTO en el(los) proyecto(s) de acción(es) remitido(s), según el correo electrónicos que respondo ahora, aparte de los otros asuntos:

Radicado: 110013103 029 2018 00204 01
Proceso ejecutivo de Basf Química Colombia S.A. contra Luis Hernando Vásquez Higuera y otro.

Adjunto el archivo correspondiente. Y anexo firma copiada o digitalizada del suscrito servidor judicial, según los arts. 11 del Decreto 491 de 2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y demás normas pertinentes.



De: Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 15 de diciembre de 2020 5:05 p. m.
Para: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Proyectos aviso de sala del 19 de noviembre de 2020

Señor magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona, cordial saludo.

Conforme a los acuerdos vigentes del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas sobre trabajo en línea, a raíz de las medidas contra el COVID 19, por medio de este mensaje de datos **APRUEBO** el(los) proyecto(s) de acción(es) remitido(s), según el correo electrónico que respondo aquí, así:

ASUNTO(S) CIVILES:

Radicado: 110013103 010 2016 00347 03
Proceso: Ejecutivo
Demandante: Inversiones Mensuli S.A.S.
Demandado: Luis Eduardo Ordoñez Cardozo
Observaciones: Confirma

Radicado 11 001 22 03 000 2019 1111
Recurso extraordinario de revisión
Demandante Grupo Comercial Jordania S. A. S. En reorganización
Demandado Banco de Occidente S. A.
Observaciones: Declara infundado

Respecto del proyecto Radicado: 110013103 029 2018 00204 01, ejecutivo de Basf Química Colombia S.A. contra Luis Hernando Vásquez Higuera y otro, estoy en revisión, conforme a lo comentado, para posible salvedad de voto, que en caso de ser necesario, remitiré en correo separado.

Este mensaje desde el correo institucional debe tenerse como parte de la decisión, habida cuenta las circunstancias de dicho trabajo en línea. Anexo firma copiada o digitalizada del suscrito servidor judicial, según los arts. 11 del Decreto 491 de 2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y demás normas pertinentes.



De: Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de noviembre de 2020 6:38 p. m.
Para: Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Proyectos aviso de sala del 19 de noviembre de 2020

Apreciados compañeros de Sala.

Adjunto les remito los proyectos de la Sala del día de hoy.

Los enlaces de acceso a los expedientes están en el respectivo proyecto, salvo el proceso civil 029-2018-00204-02 que apenas se está escaneando. Una vez se termine se remitirá el link.

Se remite sin firma escaneada, atendiendo a que la información remitida desde el correo institucional personal se presume auténtica, conforme los artículos 2 y 11 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Atentamente;

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado Sala Civil Tribunal Superior de Distrito de Bogotá D.C.

Sobre la presunción de autenticidad de la información remitida por correo electrónico, ver las siguientes normas:
- DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020. ARTÍCULO 11
- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. ARTÍCULO 103
- LEY 527 DE 1999. ARTÍCULOS 1, 5 y 7
- ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020. ARTÍCULOS 1 Y 2. Suspensión de términos y Trabajo en casa.
- ACUERDO No. PCSJA17-10715 Julio 25 de 2017. ARTÍCULO DIECIOCHO. USO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Salvedad parcial de voto del magistrado José Alfonso Isaza Dávila

Ref.: Proceso ejecutivo de: Basf Química Colombia S.A. contra Luis Hernando Vásquez Higuera y otro
Rad.: 110013103 029 2018 00204 01 – Apelación sentencia

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

De manera respetuosa consigno las breves razones que me impiden estar de acuerdo con la sentencia en este asunto, pues considero que la decisión apelada debió revocarse parcialmente, en cuanto a la orden de seguir adelante la ejecución contra los apelantes.

1. La demanda se basó en un pagaré cuyos espacios en blanco fueron llenados por la sociedad demandante por $758.169.822,09 con vencimiento 16 de febrero de 2018, más los intereses moratorios respectivos, contra los suscriptores Luis Hernando Vásquez Higuera y Gilma Amparo Guerrero Chaquea.

Y aunque el juzgado vinculó *de oficio* como litisconsorte cuasinecesario a la sociedad Dinatec Ltda., que en realidad era la obligada primigenia, porque las negociaciones de la demandante eran con ella, lo cierto es que dicha firma no propuso excepciones, ni apeló la sentencia.

Ante esto último, comparto la decisión en cuanto a que eso no es materia de apelación y, por consiguiente, que debe mantenerse la orden de seguir la ejecución respecto de esa sociedad. Además, porque en últimas, Dinatec es la verdadera deudora.

2. Mi comedido disentimiento estriba en que los demandados como personas naturales, debieron ser desvinculados de la obligación, de acuerdo con los medios exceptivos que propusieron y el recurso de

apelación, porque la obligación cambiaria de ellos fue de muchos años atrás, más de 15 ó 20 años antges, y como avalistas, según se dijo desde la demanda y es aceptado en la sentencia, es decir, como una especie de garantía personal de co-suscriptores, como es de usual exigencia por muchas entidades acreedoras para que también queden vinculados con las sociedades realmente deudoras, los socios y representantes legales.

Así, como lo alegaron esos demandados, aunque no sea muy clara la expresión de sus defensas, el llenado del pagaré muchos años después, cuando inclusive no tenían ningún vínculo con la sociedad avalada o "*afianzada*", fue con un verdadero abuso de posición contractual y sin causa onerosa por parte de ellos. Se trataba de obligaciones a cargo de Dinatec Ltda. de muchos años posteriores al pagaré y la carta, sin ningún fundamento para cobrarlas a aquellos.

Acaso por las dificultades económicas o jurídicas de Dinatec, la empresa acreedora sacó un antiguo pagaré con espacios en blanco y su carta de instrucciones, para ejecutar a las personas naturales.

3. Hay muchos detalles que permiten ver que tal forma de proceder no debe vincular a los apelantes, pero esencialmente, admitir ese cobro conlleva a que la obligación garantizada por ellos en el primer lustro de los años noventa, adquirió el carácter de irredimible, porque así como fue en 2018, igualmente hubiera podido exigírseles en 2020, 2030 o cualquier otro año en que el acreedor hubiese considerado que podía llenar el añejo pagaré.

Los codeudores apelantes siempre alegaron, mediante reposición y excepciones, que firmaron como en una especie de garantía, a raíz de un antiguo contrato denominado "*Superdistribución 384-90*", que su vigencia no debió prolongarse por tanto tiempo y, en general, que el pagaré fue indebidamente llenado contra ellos, porque la causa de las obligaciones eran de otro contexto negocial y, por tanto, ya después de más de 15 años, no hay causa real frente a ellos, ni siquiera por la cuantía máxima pactada de $40.000.000.

4. Ahora, es verdad que hubo otro contrato posterior, a mediados de los noventa, sin la anterior limitación, pero eso tampoco podría atarlos de modo indefinido, y tanto menos si con los nuevos negocios, el representante legal de Dinatec no estaba facultado para obligar a la compañía por más de cien millones de pesos, como se dijo desde la subsanación de la demanda (folios 34 y ss.). Por eso no resulta razonable que el pagaré se hubiese llenado por más de setecientos millones de pesos, solamente para exigírsele semejante monto a los co-suscriptores garantes o avalistas. Eso fue lo aceptado por la ejecutante en dicho escrito complementario de la demanda.

Sobre este particular debe recordarse que siendo avalistas los apelantes, cuestión aceptada por la ejecutante desde la demanda y por la sentencia mayoritaria, no podían quedar obligados por montos superiores a los que podía obligarse la avalada, pues conforme al art. 636 del C.Co., "*el avalista quedará obligado* ***en los términos que correspondería formalmente al avalado*** *y su obligación será válida aun cuando la de este último no lo sea*" (se resaltó). Ahora, si se trata de garantizar el importe total (art. 635 ibidem), tiene que ser el total de la obligación del avalado, salvo pacto en contrario, que aquí no se ve.

En la sentencia se afirmó que podría escogerse cualquiera de los contratos, el de 1990 o el posterior, "*porque la restricción contractual convenida recayó exclusivamente sobre la persona jurídica y no en relación con los codeudores o avalistas, sobre los cuales se guardó silencio absoluto, así que no podría extenderse dicha limitación a los demás obligados cambiarios cuando éstos no firmaron con salvedades en el tenor literal del documento*".

Afirmación que no comparto por cuanto se opone a las normas sobre los términos de la obligación del avalista, ya comentados.

5. Otra defensa insistida por los apelantes es que el contrato de suministro y distribución terminaron en el año 2014, aspecto aceptado por la testigo Margarita Quintero, como luego se verá, y que es relevante porque el pagaré fue cubierto en 2018 por una suma muy superior a la prevista inicialmente, a principios o mediados de los años

noventa, amén de que tampoco podía ser por encima de la obligación de la codeudora avalada por aquellos.

Conforme a lo ya anotado, no se ve una razonabilidad del espacio temporal entre el otorgamiento inicial del pagaré y la carta de instrucciones, a principios de los noventa, el llenado de los espacios en blanco y su cobro después de 20 años, que conlleva a una forma de obligación perpetua de los avalistas.

6. También fue alegado por los apelantes, desde sus excepciones, que los montos del pagaré debían corresponder a obligaciones a cargo de ellos y que existan en la contabilidad de la ejecutante.

Y tal hecho está claramente acreditado con la carta de instrucciones aducida por la demandante, en la cual se lee que el valor del título "*será igual al valor de todas las obligaciones exigibles* ***que a nuestro cargo*** *y a favor de BASF Química Colombiana S.A* ***existan en la contabilidad de dicha sociedad al momento de ser llenados los espacios en blanco****, bien sea por compra de mercancía, intereses o cualquier otro gasto previamente acordado*" (se resaltó).

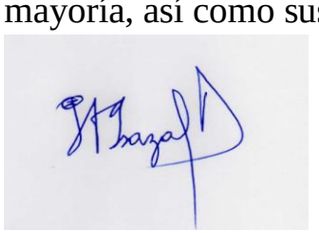
Pues bien, de acuerdo con los anexos digitalizados del proceso, ni con la demanda, ni la réplica a las excepciones se invocaron y los documentos que se anexaron, puede verse que las obligaciones eran a "*cargo*" de los apelantes, como tampoco se ven cuáles fueron los asientos o soportes contables para llenar el pagaré.

Sobre el particular se recibió el testimonio de Margarita Quintero, empleada financiera de la demandante y declaró sobre la relación comercial de esa entidad con Dinatec (minutos de la hora 1:40 y ss. de la audiencia), exhibió unos correos electrónicos en los que el representante legal de Dinatec, Alberto Guerrero, que es persona distinta de los demandados apelantes. Expuso que los últimos negocios entre las empresas fueron hacia el segundo semestre de 2014; señaló que al pagaré se incorporaron las sumas por facturas de ventas de productos, de 2014 y algunas de años anteriores, y ante una pregunta insinuante del apoderado de la actora (quien le dijo el contenido del capital cobrado), respondió que el monto era lo que figuraba en la

contabilidad (tiempo 1:58:20 y s.), aunque en realidad fueron manifestaciones, sin que se allegara ningún documento contable.

7. Llama la atención, finalmente, que la carta de instrucciones allegada no es completa, porque en el numeral 4 se anotó que podían "*ser llenados los espacios en blanco le! pagaré sin previo aviso y su fecha de vencimiento será aquella en que el título valor sea llenado por haberse presentando una...*" (hasta ahí), pues no aparece la continuación de esa estipulación.

No obstante lo anotado, acato con el mayor respeto la decisión de la mayoría, así como sus fundamentos.



JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL SUP. DE BOGOTÁ, SALA CIVIL
(FIRMA SEGÚN ARTS. 11 DEC. 491/2020, 6 AC. PCSJA20-11532 Y OTROS)

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	EJECUTIVO
DEMANDANTE	**:**	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS
DEMANDADO	**:**	FABIO NELSON AMAYA RINCÓN
RADICACIÓN	**:**	1100131 03 031 2012 00119 01
DECISIÓN	**:**	**CONFIRMA**
FECHA	**:**	16 de diciembre de 2020

Se decide el recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra el auto del 26 de octubre de 2019, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias mediante el cual se negó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

ANTECEDENTES

Por medio del auto apelado, el juzgado denegó la petición formulada por el demandado, encaminada a que se terminara el proceso por desistimiento tácito, por cuanto en consideración de aquél el expediente tenía más de dos años de inactividad, habida cuenta que *"la ultima actuación dentro del expediente data del 16 de octubre de 2018 (…) donde se expidió certificación estado actual del expediente; con la cual según la regla "c" para el desistimiento tácito, interrumpió el término previsto de los dos (2) años, razón por demás para negar la petición"*

Inconforme con la citada decisión, el demandado presentó recurso de reposición en subsidio apelación, y argumentó en resumen que, no puede considerarse como actuación judicial la expedición de una

certificación, por lo que no puede hablarse de interrupción del término de dos años de inactividad.

En providencia del 4 de febrero de 2020 se mantuvo la decisión y se concedió al alzada.

CONSIDERACIONES

El artículo 317 del Código General del Proceso consagra la consecuencia de terminación de proceso por desistimiento tácito por la desidia, inactividad o abandono de la actuación procesal en dos hipótesis distintas (numeral 1 y 2).

Las condiciones o pautas que deben tomarse en cuenta la forma de desistimiento tácito consagrada en el numeral 2, para el caso objeto de estudio, básicamente son las siguientes:

Que el proceso o actuación "de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho". Esto quiere decir que puede ser cualquier proceso o actuación, sin que importe que sea de naturaleza civil, comercial, declarativo, agrario, de familia, ejecutivo, o especial, salvo las limitaciones especiales que emanan de la propia ley. Tampoco importa el estado del proceso, porque la norma determinó que *"en cualquiera de sus etapas",* antes o después de notificarse el auto inicial a la parte demanda, e inclusive en la ejecución posterior a la sentencia, pero el expediente debe estar en la secretaría, no al despacho del Juez.

Que la inactividad ocurra "*porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia"* aunque si el proceso está en la fase posterior de ejecución de la sentencia, o auto que impulso la ejecución, el plazo será de *"dos (2) años".* De tal manera que basta con la simple inactividad por el término fijado, así los

actos omitidos correspondan al impulso de las partes o del juez, sin que sea necesario averiguar aspectos subjetivos.

También es importante resaltar que el término se contabiliza desde *"el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación",* pauta que se determina por año calendario (art. 121 CGP), aunque sus plazos deben computarse desde el 1 de octubre de 2012, data en que ingresó a regir (art. 625-7 y 627-4 CGP).

Así, las condiciones para la procedencia de la segunda forma de desistimiento tácito dejan de cumplirse en el asunto bajo análisis, pues como bien lo manifestó el a quo la interrupción a que hace alusión del ordinal c), del artículo 317 del CGP se configura en este asunto, pues la actuación de cualquier naturaleza, de oficio o a petición de parte *"interrumpirá los términos previstos en este artículo",* que fue lo que sucedió en este asunto, como viene a verse, sin necesidad de calificar la actuación surtida, es decir, la expedición de una certificación sobre la existencia del proceso, pues la norma contempla que será *"cualquier actuación",* y puntualiza que puede ser *"de cualquier naturaleza"*

Si bien es cierto puede haber discusión en cuento a la eficacia de la actuación para que ocurra la interrupción, como lo argumentó el impugnante, lo cierto es que el precepto muestra una clara objetividad al señalar que la actuación puede ser de *"cualquier naturaleza"*

Y es que en este asunto, la última providencia proferida era la notificada en estado del 17 de octubre de 2017 mediante la cual se resolvió un recurso de reposición, y el término de inactividad vencería el 17 de octubre de 2019; no obstante, el término fue interrumpió con la petición y expedición de un certificado del estado del proceso realizada el 16 de octubre de 2018; además, en gracia de discusión, también se dio la interrupción con la presentación del poder especial para actuar otorgado por el demandado a un abogado, el cual fue allegado el 21 de octubre de

2019 y se le reconoció personería para actuar el 23 de octubre del mismo año.

En tal virtud, se confirma la decisión tomada el 23 de octubre de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias.

En mérito de lo expuesto, se **RESUELVE**

Primero. Confirmar el auto materia de apelación, de fecha y origen preanotados.

Segundo. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE



LIANA AIDA LIZARAZO VACA

Magistrada.

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b592863bbcca7329ef6bda3962135ee73c9c2fd0269206081e4a4673550fb56c**
Documento generado en 16/12/2020 04:43:29 p.m.

República de Colombia

Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-031-2014-00401-01

Asunto. Incumplimiento de Contrato

Demandante: María Alicia Candela y otro

Demandado: Manuel Antonio Jiménez González y otros.

El artículo 14 del Decreto 806 de 2020[1], prevé que "Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto.

(…)".

Pues bien, en el presente asunto el 20 de noviembre de 2020, fue proferido el auto a través del cual se otorgaba la oportunidad al extremo apelante para que sustentara su recurso de apelación ante esta instancia y, a su vez, para que en ese caso, su contradictor presentará la réplica respectiva. Dicha decisión fue notificada por estado No.130 del día 23 del citado mes y año.

[1] Decreto que empezó a regir a través de su publicación, esto es, desde el 4 de junio de 2020.

No obstante, según el informe secretarial que antecede el opugnante guardó silencio, por lo que ha de declararse desierta la alzada.

Por lo brevemente expuesto, se

RESUELVE

Primero.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia proferida en primera instancia.

Segundo.- En firme este pronunciamiento, **devolver** el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

ACLARACION DE VOTO

Ref. PROCESO 11001310303120150123102

DEMANDANTE: María Nelly Guerrero Salazar y otros

DEMANDADO: La Previsoria Compañía de Seguros S.A

MAGISTRADA PONENTE: Martha Patricia Guzmán Álvarez.

Sentencia primera instancia: Julio 12 de 2019

Sentencia segunda instancia: diciembre 9 de 2020

En relación con el asunto de la referencia, con el respeto debido a las decisiones de Sala, aclaro mi voto a la sentencia de segunda instancia mediante la cual fue revocada la de primera, en tanto comparto la decisión, pero no el argumento referido a que como el asegurado "no fue llamado a este juicio, no es admisible condenarlo en ausencia y menos ordenar al asegurador el pago de la indemnización".

No porque sin desconocer que la responsabilidad del asegurado es presupuesto axiológico de la acción directa, no puede obviarse que (i) la acción directa contra la aseguradora y la acción contra el asegurado que puede ejercer la victima para obtener la reparación del daño causado por éste, no son acumulables; (ii) el derecho del asegurado surge del contrato de seguro mientras que el del perjudicado se deriva de la ocurrencia del daño; (iii) es facultativo de la victima iniciar la acción directa contra el asegurador evento en el que "…*éste podrá defenderse alegando que en el especifico ámbito de responsabilidad de que se trate no han concurrido todos y cada uno de los presupuestos exigidos por la Ley para que pueda ser declarada la responsabilidad del asegurado. De forma que defendiendo a éste último se defiende a sí mismo*"[1], actuar con el que se preserva la garantía del debido proceso de los intervinientes en el juicio respectivo; (iv) la obligación de indemnizar no nace cuando se declara la responsabilidad del asegurado en tanto que

[1] Reglero Campos, Fernando. El seguro de responsabilidad civil. En Tratado de Responsabilidad Civil. Cap. VIII. I. Parte General, Edit. Aranzadi S.A, Camino de Galar, Cizur Menor (Navarra) España. Pág. 640

"hasta entonces el dañante solo será potencialmente responsable pero reconocida o declarada la responsabilidad, sus efectos se retrotraen al momento en que acaeció el hecho dañoso"[2], el cual coincide con el "*en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado*" en que se entiende "*ocurrido el siniestro*" establecido en el art. 1131 del C. de Cio; y (v) diferentes los derechos, sus fuentes y las acciones para ejercitarlos, no puede predicarse una relación necesaria e inescindible entre asegurador , asegurado y victima que provoque la estructuración de un litisconsorcio necesario previsto en el art. 61 del C.G.P., para el efecto de la acción directa consagrada en el art. 1133 del C. de Cio en favor de la victima en el seguro de responsabilidad civil establecido en el art. 1127 ib.

Conclusión:

Por lo anterior creo y estoy convencida que, demostrada la responsabilidad del asegurado se puede para efectos de la acción directa de la victima contra el asegurador, ordenar a éste el pago de la indemnización a aquella, sin el llamamiento del asegurado a esta clase de juicio. Circunstancia que en el sub-lite no ocurrió, en tanto no fue acreditada la responsabilidad del convocado como dañante.

Con el debido respeto, diciembre 15 de 2020



HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Magistrada.

Firmado Por:

HILDA GONZALEZ NEIRA

[2] Ob. Cit. Pág. 631

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL 009 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
651e6e0720503aa1116ace52d58bbf28827a06c1989bc977daebca2c13f65a96

Documento generado en 16/12/2020 04:59:48 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-033-2010-00172-05
Asunto: Declarativo
Recurso. Apelación Auto
Demandante: Mauricio Abdalah Mustafá.
Demandados: Olga Yolanda Ordoñez P., Ciro Sergio Mutis Caballero, Inmobiliaria Valor SA y Mutis Asociados S en C, Fiduciaria Superior, Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., Desarrollos Comerciales al Grano & Cía. S en C.A y Central de Inversiones SA.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por la parte actora frente al auto emitido el 1º de agosto de 2019, por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del juicio adelantado por Mauricio Abdalah Mustafa contra Olga Yolanda Ordoñez Pérez, Ciro Sergio Mutis Caballero, Inmobiliaria Valor SA y Mutis Asociados S en C, Fiduciaria Superior, Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., Desarrollos Comerciales al Grano & Cía. S en C.A. y Central de Inversiones S.A.

ANTECEDENTES

1. El proveído opugnado aprobó la liquidación de costas en cuantía de $8’067.904.000, diferenciada de la siguiente manera:

Fase	Concepto		Valor
Primera	Gastos de pericia		$200.000
	Agencias en derecho	Primera instancia	$8’067.704.000
	Subtotal correspondiente a la primera fase del juicio		*$8’067.904.000*
	Porcentaje aplicado para la regulación de agencias en derecho		5%
	Total costas de la primera fase		***$8’067.904.000***
TOTAL LIQUIDACIÓN DE COSTAS			**$8’067.904.000**

2. Oportunamente la parte demandante recurrió esa esa decisión, en reposición y apelación subsidiaria, pidiendo disminuir el importe total de la liquidación a $16’562.320, pues desatendió lo establecido en el artículo 4º del Acuerdo 1887 de 2003, aplicable en este caso, el cual determina que cuando la sentencia es solamente declarativa, la tarifa no podrá exceder los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sustentó su inconformidad, en síntesis, en que la precitada decisión no respetó los límites establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, pues la demanda contenía solamente pretensiones declarativas. Además, acrecentó los montos de las indemnizaciones pedidas, toda vez que se solicitó: i) como renta mensual por incumplimiento la suma total de $157’440.000, no de $157’440.000.000 y ii) por daño emergente $4’041.520.000, no $161’324.080.000. Por esa razón, al aplicarse el porcentaje para su tasación dio esa suma exorbitante.

Alegó que teniendo en cuenta que la demanda también contenía obligaciones de hacer, se pudo haber impuesto dicha tarifa.

3. La parte demandada, en la réplica a la impugnación, solicitó confirmar el proveído recurrido, aduciendo, en esencia, que las agencias en derecho aprobadas con la liquidación de costas están acordes a las súplicas del escrito introductor principal.

4. El A quo mantuvo la providencia impugnada, porque consideró el libelo no contenía una reclamación meramente declarativa, en tanto las súplicas consecuenciales fueron enderezadas al reconocimiento y pago de unas sumas de dinero a título de perjuicios, las cuales como fueron negadas se tomaron en cuenta para la liquidación de las agencias en derecho.

Así, conforme al artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003 que estableció que el porcentaje para tasar las agencias en derecho era de hasta el 20% sobre las pretensiones de la demanda, aplicó el 5% de las peticiones de orden pecuniario.

Subsecuentemente, concedió la alzada subsidiaria, la que ahora es objeto de decisión, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El pago de la condena en costas corre por cuenta de la parte vencida en el proceso y, de ser el caso, está a cargo de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto, como también en los casos especiales previstos en el estatuto procesal civil (artículo 392 del C. de P. C., hoy 365 del C.G.P.).

Además, para la fijación de agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, y si éstas fijan únicamente un mínimo, o éste y un máximo, habrá de tomarse en consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del asunto y otras circunstancias especiales (art. 393 núm. 3° del C. de P. C., y 366 núm. 4° del C.G.P.).

2. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reguló las tarifas de agencias en derecho propias de los procesos judiciales en el Acuerdo 1887 de 2003 -aplicable al caso por haberse formulado la demanda antes del 5 de agosto de 2016[1]-, el cual en su artículo 6º estableció para la primera instancia de los litigios ordinarios "*hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia*", y agrega que en los casos en que únicamente se "*ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer*", ese tope es de hasta "*cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes*".

3. La discusión aquí planteada versa sobre la regla del precitado acuerdo aplicable en la tasación de las agencias en derecho censuradas.

[1] El artículo 7° del Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016, prevé que su vigencia comienza "*a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha*".

De la revisión del plenario se puede establecer que en el *petitum* de la demanda realiza, entre otras, las siguientes peticiones por concepto de daño emergente:

Pretensión	**Monto**
Valor pactado en la cláusula décima del grupo dos del convenio de conciliación.	$2'688.000.000
Valor de los lotes 132 y 135 del Peñón	$50'000.000
Valor pactado en la cláusula décima, grupo tres del convenio de conciliación	$525'000.000
Valor pactado en la cláusula décima, grupo tres, cancelada en efectivo por el demandante.	$15'000.000
Valor pactado en la cláusula décima grupo tres literal B del literal B3 del B de la cláusula segunda del convenio de conciliación	$23'040.000
Por la prórroga de la tenencia del apartamento 502 del Edificio Mirador del Chicó.	$23'040.000
Valor comercial del apartamento 502 del Edificio Mirador del Chicó.	$500'000.000
Valor de transferencia de la suite 315 del Edificio Hotel Avenida Chile – PH	$60'000.000
Valor aproximado por incumplimiento de las obligaciones contempladas en el parágrafo cuatro del otro si convenio de conciliación de fecha 8 de abril de 2002 (valor renta mensual apartamento 502 de $1'920.000 como se pactó en el convenio de conciliación)	$157'440.000.000
TOTAL	$161'324.080.000

4. Entonces, la parte actora formuló pretensiones declarativas y, en forma consecuencial, imploró las referidas condenas, súplicas todas negadas en la sentencia que dirimió el litigio; por tanto, la regulación de las agencias en derecho está regida por el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, concretamente, por el artículo 6º, numeral 1.1, según el cual aquellas en primera instancia equivaldrán *"hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia*".

Y ocurre que en la tasación del mentado concepto, en primera instancia, fueron tomados en consideración cada uno de los montos pedidos en las condenas imploradas en la demanda desestimada, calculando el porcentaje autorizado, luego dichas agencias fueron determinadas en legal forma.

Recuérdese, la sentencia fechada 13 de agosto de 2015, mediante la cual fue dirimida la primera instancia negó las súplicas de la demanda principal, decisión confirmada por el Superior el 23 de mayo de 2017, lo cual pone de relieve que la base para calcular las agencias de derecho era los montos de las condenas desestimadas.

Tampoco podía perderse de vista que la instancia inicial de la primera fase del litigio fue desatada en un lapso prolongado -aproximadamente 5 años y 4 meses, entre la presentación de la demanda y el proferimiento de la respectiva sentencia-, lo cual requirió la vigilancia del proceso, gestión que, indiscutiblemente, debe ser compensada[2], pues la parte convocante estuvo atenta a todo cuanto pudiera suceder en el juicio.

5. Pues bien, frente a la actuación surtida en la primera etapa del *sub lite*, dichos parámetros fueron escrutados al momento de hacer la liquidación de esa instancia, como quiera que se tomó en consideración la naturaleza del asunto, la calidad y el tiempo de la labor desplegada por el profesional del derecho que representó al extremo pasivo.

Por tanto, el valor de las agencias en derecho ordenado por el juez ($8’067.704.000, es decir, el 5% de la sumatoria de las condenas negadas), constituye una justa compensación por la tarea allí desarrollada, pues, insístase, la tarifa máxima prevista en la normatividad aplicable al caso -20%-, será aplicada de manera **inversamente proporcional** al *quantum* de las pretensiones, como en efecto sucedió.

6. De manera tal, que acertó el fallador de primera instancia al fijar las agencias en derecho en $8’067.704.000, por lo que la decisión controvertida será

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 5 de marzo de 2010, exp. 2000-23975-01, que reitera los proveídos de 25 de agosto de 1998, exp. 4724; 27 de septiembre de 1999, exp. 5180; 24 de junio de 2004, exp. 7843, y 5 de abril de 2006, exp. 1996-05893.

refrendada, con la condigna condena en costas al opugnante (numeral 1°, art. 365 del C.G.P.).

Por lo expuesto, se

RESUELVE

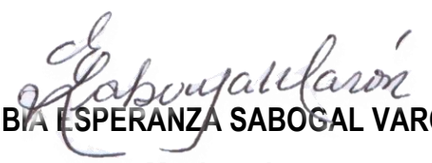
Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 1º de agosto de 2019, por el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso dentro del juicio adelantado por Mauricio Abdalah Mustafa contra Olga Yolanda Ordoñez Pérez, Ciro Sergio Mutis Caballero, Inmobiliaria Valor SA y Mutis Asociados S en C, Fiduciaria Superior, Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., Desarrollos Comerciales al Grano & Cía. S en C.A y Central de Inversiones SA.

Segundo.- Costas de la instancia a cargo del apelante. Liquídense de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., incluyendo como agencias en derecho la suma de $900.000.oo.

Tercero.- Oportunamente, **devolver** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas en la instancia.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

Sala Civil

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Ref.: Proceso de verbal de Productores de Envases Farmacéuticos S.A.S. – Proenfar S.A.S. contra Compañía Aseguradora de Fianza S.A. - Confianza.

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandada interpuso contra el auto de 18 de noviembre de 2020, proferido en audiencia por el Juzgado 32 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia, para rechazar de plano una solicitud de nulidad y negar la convocatoria de un tercero, bastan las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. La confirmación del auto apelado se impone con sólo reparar en que el inciso final del artículo 135 del CGP habilita al juez para rechazar "de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación" (se subraya).

Sobre el particular puntualizó la Corte Suprema de Justicia, en una hipótesis similar, porque concierne a ese tipo de excepciones, que,

> …examinadas las excepciones previas propuestas por la parte demandada (fls. 1 a 5, C-3), en ninguna de ellas aparece que se hubiere alegado como tal la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales que, ahora, se echan de menos por los recurrentes en revisión en la proposición de los cargos primero y segundo contra la sentencia impugnada, lo que significa que su alegación no es procedente en casación pues, a tenor de lo dispuesto por el artículo 100 del Código de Procedimiento Civil los hechos que configuran excepciones previas no pueden ser invocados como causal de nulidad por el

> demandante, ni tampoco por el demandado cuando tuvo la oportunidad de proponer dichas excepciones, a menos que sea insaneable.[1]

Desde esta perspectiva, si la aseguradora demandada no formuló la excepción previa de "no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios", prevista en el numeral 9º del artículo 100 del CGP, no podía luego acudir al régimen de nulidades, amparada en el numeral 8º del artículo 133 de esa codificación, para protestar contra la actuación desplegada hasta el momento, so pretexto de la vulneración de su derecho a un debido proceso, por no haberse vinculado a la sociedad Payanes S.A.S. Se imponía, pues, darle aplicación al artículo 135 del CGP.

2. Pero, además, téngase en cuenta que si el legislador, en el inciso 2º del artículo 61 del CGP, dispuso que la citación de los litisconsortes necesarios puede hacerse "mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia", fue porque los actos de gestión procesal surtidos en el entretanto son válidos, lo que descarta el motivo de nulidad alegado.

Pero sea lo que fuere, téngase en cuenta que ni la ley ni la relación sustancial imponen la convocatoria del tomador al proceso impulsado por el beneficiario de un seguro que reclama del asegurador el pago de la indemnización respectiva. Al fin y al cabo el debate gira, en lo que disputa la recurrente, en torno de un hecho (el incumplimiento), y algunas otras cosas más. Por esta otra razón, la nulidad invocada tampoco tenía vocación de prosperidad.

3. Luego se confirmará el auto apelado. Se impondrá condena en costas, por aparecer causadas.

---

[1] Sala de Casación Civil, sentencia de 16 de junio de 1998, exp. 5131, MP. LAFONT PIANETTA Pedro.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, **CONFIRMA** el auto de 18 de noviembre de 2020, proferido en audiencia por el Juzgado 32 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia.

Se condena en costas a la parte recurrente. El Magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de $900.000,oo.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 006 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1b57526981779d865406f3731d181f5095f353d840f10e90cc30c4e435995ef6
Documento generado en 16/12/2020 04:27:24 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad. N° 11001 31 03 ***032 2019 00656*** *01*

Verificado el expediente, así como el sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI, se observa que el Juzgado *a quo* no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110 y 326 del Código General del Proceso, en torno al traslado que, con inclusión en la lista respectiva, se debía realizar antes de remitir el expediente al Superior, por lo que previo a resolver el recurso de apelación objeto de conocimiento, y en aras de evitar futuras nulidades, resulta necesaria la devolución del expediente, a fin de que se revise la actuación y se observe con rigurosidad la normatividad en comento, para que la parte **no** apelante ejerza sus derechos a la contradicción y defensa.

Secretaría proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE[1],

Firmado Por:

ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 017 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0b0d72f2a557e9dc874b8b60627f2c2f30ab9fa7ae0b252c936ca2e3c5635d7d**
Documento generado en 16/12/2020 04:03:01 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[1] *Para consultar el proceso digital visite: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil-despacho-17/14*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

DEMANDANTE	:	MARÍA IDALIDES CASTILLO ARIZA (accionante principal, demandada en reconvención)
DEMANDADA	:	MARTHA YENNY GONZÁLEZ ARROYAVE (accionada principal, demandante en reconvención).
CLASE DE PROCESO	:	ORDINARIO.

Se ADMITE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación formulado por MARÍA IDALIDES CASTILLO, contra la sentencia proferida por escrito el 21 de agosto de 2020 (conforme el sentido del fallo del día 13 de ese mes) por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Transitorio de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, la Secretaría procederá a contabilizar el término de cinco (5) días que tiene la apelante para sustentar su recurso, pues en caso de no hacerlo, el mismo se le declarará desierto; y de la sustentación que se presente correrá traslado a la parte contraria en la forma y términos previstos por el artículo 14, en concordancia con el 9, del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Tanto la sustentación como la réplica se remitirán al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cada parte, si es del caso, acreditará el envío del escrito a su contraparte para los efectos del artículo 3 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto mencionado, lo cual deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría

Notifíquese

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrado Sustanciador: **Iván Darío Zuluaga Cardona**

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Proceso	Verbal
Demandante	María Eugenia Guzmán Pérez
Demandada	Lida Bravo Hernández
Radicado	11 001 31 **03 034 2017 00010 01**
Instancia	Segunda – *apelación de sentencia-*
Decisión	Niega reposición

En cumplimiento de lo dispuesto por la Magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca en providencia del 21 de octubre de 2020, se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto del 12 de agosto de 2020, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación formulado por la misma parte, contra la sentencia anticipada proferida el 29 de noviembre de 2019, por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, en el asunto en referencia.

I. LA IMPUGNACIÓN

1. La parte demandante solicita *"modificar el auto de fecha 12 de agosto de 2020, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación formulado por el suscrito contra la providencia de fecha 29 de noviembre de 2020, emitida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito, y en su lugar se ordene el trámite que por ley corresponde".*

Sus argumentos son los siguientes:

1.1. Dentro del trámite normal del proceso y específicamente del recurso de

apelación formulado, con fecha 5 de diciembre de 2019, por escrito se sustentó de manera amplia el mencionado recurso, como bien puede observarse en el expediente.

1.2. El 9 de junio de 2020, se dejó sin efecto el auto de fecha 4 de junio de 2020, y en cambio se corrió traslado al apelante, sin indicar el link en el que podía consultarse el mencionado auto, sin que se hubiera notificado al correo suministrado en la demanda, y sin remitir comunicaciones a la dirección física y/o a los números telefónicos informados.

2. La parte demandada manifestó que el auto impugnado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020. Se confunde la presentación del recurso de apelación con la sustentación, se dejaron vencer los términos y ahora se argumenta que se trata del mismo acto.

II. CONSIDERACIONES

Se mantendrá incólume el auto impugnado, en razón a que en la providencia atacada se advirtió que de no sustentarse el recurso de apelación dentro del término concedido se declararía desierto. Tanto ese auto, como el estado electrónico mediante el cual se notificó, han estado en internet a disposición del interesado, situaciones que derriban cualquier vestigio de vulneración del debido proceso. Las razones que sustentan estas tesis son las siguientes.

1. En proveído del 9 de junio de 2020, con miras a garantizar el debido proceso, el principio de la efectividad de los derechos y en aras de no sorprender a las partes con trámites o contabilización de términos en forma automática, se ordenó tramitar este asunto en segunda instancia de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020.

Para ese efecto, se concedió al apelante el término de **cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación por estado de ese auto** para que sustentara por escrito su apelación, remitiéndolo a la siguiente dirección de correo electrónico:

des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

De igual forma, se advirtió que, en caso de no sustentarse oportunamente el recurso sería declarado desierto, decisiones contra las cuales no se formuló ningún reparo.

Esa providencia se notificó por estado electrónico del 11 de junio de 2020 que a la fecha todavía se puede consultar en el siguiente link:

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2233156/38662022/ESTADO+E-23+JUNIO+10+DE+2020.pdf/6fed5217-9f4c-49d9-926f-d9d9d6995014

Del mismo modo, ese auto se subió con el estado electrónico y que también puede consultarse en el siguiente link:

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2233156/38662022/PROVIDENCIAS+NOTIFICADAS+EN+ESTADO+E-23+JUNIO+10+DE+2020.pdf/0b7e40ee-0752-4a27-be19-d65124da167b

El anterior recuento permite concluir que ese trámite de notificación se ajusta a lo que dispone el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, el cual dispone: "*[n]otificación por estado y traslados. Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva (…). Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado*".

De manera que, como el auto atacado fue fijado virtualmente, con la inserción de la providencia a notificar, y sus ejemplares se conservan aun en la web para consulta permanente de cualquier interesado, no cabe la menor duda que la forma en que fue puesto en conocimiento de las partes se ajusta al trámite legal.

Por eso, refulge evidente que las denuncias relativas a que en su contenido no se informó el link donde se podía consultar, no se envió al correo electrónico, tampoco a la dirección física, y menos comunicado a los números telefónicos informados por las partes, en verdad corresponden a requisitos que esa regla no contempla, y por eso no puede entenderse mal notificado.

2. Es importante resaltar que en lo que tiene que ver con que la apelación quedó sustentada en primera instancia, también es un argumento condenado al fracaso.

En primer lugar, el escrito que se dice contener la sustentación del recurso de apelación (fls. 357 C1), y que en realidad corresponde a la "*ampliación de los reparos"* formulados en audiencia, fue presentado por fuera del término que contempla el numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, es decir, vencidos los tres (3) días siguientes a su finalización.

Téngase en cuenta que, la audiencia en que se profirió la sentencia de primera instancia se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2019 (fls. 356 C1), los tres días para ampliar reparos vencieron el 4 de diciembre siguiente, y dicho escrito se presentó el 5 de diciembre de 2019 (fls. 367), cuando ese término se encontraba fenecido.

Por otro lado, las reglas de carácter procesal a partir de que se presentó el recurso de apelación en primera instancia, fijaron el derrotero a seguir y que denotaban pendiente el acto procesal de sustentación en segundo grado, con la consecuencia procesal que devenía en caso de que no se procediera así oportunamente -recurso desierto-.

Véase, el artículo 322 del C. G. P. prevé: *"[C]uando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,* ***deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior (…). El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado***" (negrilla fuera de texto).

Como si lo visto fuera poco, una vez adecuado el trámite de este juicio en segunda instancia a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, en garantía al derecho de defensa y contradicción se advirtió: "*en caso de no sustentar oportunamente su recurso,*

será declarado desierto", sin que se dijera algo al respecto, quedando en firme no solo que estaba pendiente la sustentación, sino también la consecuencia procesal advertida que ahora tardíamente lamenta el impugnante.

3**.** Corolario de lo expuesto es que ninguno de los puntos de inconformidad abre paso a la revocatoria del auto atacado, y por eso no queda más camino que refrendarlo.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

No reponer el auto proferido el 12 de agosto de 2020, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia anticipada proferida el 29 de noviembre de 2019, por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, en el asunto en referencia.

NOTIFÍQUESE

Documento con firma electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
66548981e02a8207490c33c79c3da6b0b26cf6be7f528696126f2d32002cd16f
Documento generado en 16/12/2020 02:19:39 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad. N° 11001 31 03 ***034 2017 00393*** *01*

Verificado el expediente, así como el sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI, se observa que el Juzgado *a quo* no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110 y 326 del Código General del Proceso, en torno al traslado que, con inclusión en la lista respectiva, se debía realizar antes de remitir el expediente al Superior, por lo que previo a resolver el recurso de apelación objeto de conocimiento, y en aras de evitar futuras nulidades, resulta necesaria la devolución del expediente, a fin de que se revise la actuación y se observe con rigurosidad la normatividad en comento, para que la parte **no** apelante ejerza sus derechos a la contradicción y defensa.

Secretaría proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE[1],

Firmado Por:

ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 017 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0a0a3195582569c5ff2b1b6c0766fe508f92db8a401dd9bcf55bcdcd3cc5bdff**
Documento generado en 16/12/2020 04:03:36 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[1] *Para consultar el proceso digital visite: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil-despacho-17/14*

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad. N° 11001 31 03 **036 2013 00150** *[03, 04, 05, 06]*

Verificado el expediente, así como el sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI, se observa que el Juzgado *a quo* no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110 y 326 del Código General del Proceso, en torno a los traslados que, con inclusión en la respectiva lista, debían realizarse antes de remitir el expediente al Superior, por lo que previo a resolver los recursos objeto de conocimiento, y en aras de evitar futuras nulidades, resulta necesaria la devolución del expediente, a fin de que se revise detalladamente la actuación y se observe con rigurosidad la normatividad en comento, para que la parte **no** apelante, en cada una de las alzadas concedidas, ejerza sus derechos a la contradicción y defensa.

Secretaría proceda de conformidad.

Cumplido lo anterior y acreditada la respectiva actuación se decidirá sobre lo pertinente.

Entre tanto, **abónese** la apelación concedida respecto al auto de 9 de julio de 2018.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE[1],

Firmado Por:

ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 017 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8bc2aea55f27ff76ac92a386ddef9139cd2440647e4bbcf3428c94e90fb4bac9**
Documento generado en 16/12/2020 04:04:14 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[1] *Para consultar el proceso digital visite: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil-despacho-17/14*

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	OTROS (entrega del tradente al adquirente)
DEMANDANTE	**:**	JUAN ANDRÉS SANTAFÉ SANTAFÉ y OTROS
DEMANDADO	**:**	AMPARO GONZALEZ CANO
RADICACIÓN	**:**	1100131 03 037 2019 00127 01
DECISIÓN	**:**	**CONFIRMA**
FECHA	**:**	Dieciséis de diciembre de dos mil veinte

Conforme lo prevé el artículo 35 del C.G. del P., decide el Tribunal el recurso de apelación formulado por el apoderado de Pedro Raúl Torres Bernal, contra el auto que rechazó la oposición a la entrega.

ANTECEDENTES

Los señores Leonardo Fabio Santafé y Juan Andrés Santafé Santafé formularon demandada de entrega del tradente al adquirente contra Amparo González Cano, a fin de que se les entregue real y materialmente el inmueble ubicado en la calle 154 No. 91-51 apartamento 202, interior 2 del Conjunto Residencial Multifamiliar El Mirador del Pinar de Suba.

El 4 de julio de 2019 se dictó sentencia, se ordenó la entrega del citado bien a favor de los demandantes y se comisionó para la diligencia, la cual le correspondió al Juzgado 29 Civil Municipal de Bogotá.

Llegado el día y hora señaladas por el comisionado, y una vez allanado el bien, se hizo presente el señor Pedro Raúl Torres Bernal junto con su apoderado y formuló oposición bajo el argumento que aquél era

poseedor del inmueble; allí mismo se recepcionó interrogatorio de parte al opositor y se incorporaron pruebas documentales. Finalmente, se rechazó aquella, bajo el argumento central de que el señor Pedro reconoció dominio ajeno, y que no habían actos contundentes de señorío y dueño, decisión contra la cual el interesado formuló recurso de reposición y en subsidio apelación.

CONSIDERACIONES

Se sabe que según el numeral 2° del artículo 309 del CGP, podrá formular oposición a la entrega la persona en cuyo poder se encuentre el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, y que en cualquier forma alegue hechos constitutivos de posesión y presente prueba siquiera sumaria que los demuestre.

De manera que el opositor debe acreditar la tenencia con "ánimo de señor y dueño" *ánimus domini,* como elemento intelectual o psicológico (artículo 762 del C.C.); sin que sea forzoso demostrar el preciso tiempo de "posesión", por cuanto la discusión no gira propiamente en torno a la usucapión. Lo más relevante es que quien se postule como tercero, devele su condición de "poseedor" al momento de la diligencia.

Ciertamente la sala confirmará la decisión tomada.

En efecto, el apoderado del señor Pedro Raúl Torres Bernal, al formular la oposición, la fundó en que "*solicito se ampare la vivienda diga, mi poderdante no tiene a dónde irse, solicito suspensión de la diligencia por lo menos de 20 días para desocupar el bien*"; argumento que de por sí desdibuja la presunta posesión alegada, pues si tiene la intención de abandonar el inmueble es porque no tiene la plena convicción del papel que juega en el bien. Además, la documental allegada no permite inferir la posesión alegada, pues únicamente se adjuntó copia del pago de algunos

recibos públicos de hace dos años y fotocopia de la promesa de compraventa, sin que ello permita llegar a razonar que el señor Pedro es poseedor, pues aquellos actos pueden ser realizados por un mero tenedor.

Contrario a lo sostenido por el recurrente y de cara a lo que ha sostenido por la jurisprudencia, "*el simple pago de servicios públicos no permiten presumir aquella otra calidad (poseedora), la cual, se itera, reclama el ejercicio de actos propios de quien se considera propietario, acompañados, por supuesto, del ánimo de señor y dueño*."[1]

Aunado a lo anterior, ordenado el interrogatorio bajo juramento al precitado opositor para que depusiera sobre los hechos constitutivos de su "posesión material", contestó, entre otras, a la pregunta de qué buscaba con el proceso que se adelantaba en el Juzgado 32 Civil del Circuito contestó *"la idea es, o que me reintegren el dinero que yo aporté o continuar con el negocio del apartamento (…)";* además, manifestó que adeuda aproximadamente $115.000.000 al señor "Elvis" para completar la totalidad del precio pactado en la promesa de compraventa.

Quiere ello decir, sin ambages, que el señor Torres incumple con el presupuesto del numeral 2° del artículo 309 del CGP, pues de su interrogatorio se deriva una postura que no permite inferir que sea poseedor con el ánimo de señor y dueño, pues inclusive reconoce dominio ajeno al punto que afirma que de restituírsele el dinero dado en la promesa ($50.000.0000) devuelve el bien, o que por el contrario, se le dé la oportunidad de llegar a firmar contrato de compraventa para alcanzar la titularidad; inclusive, reconoce que aún adeuda dinero de la promesa de compraventa.

Sumado a lo anterior, el opositor acordó con la demandante una fecha de entrega del inmueble completamente desocupado, compromiso

---

[1] TSB. Sala Civil. Sentencia de 7 de noviembre de 2007, exp. 03200300475 01.

que fue incumplido y la actora solicitó reanudación de la diligencia de entrega, acuerdo con el que se desprende aun más que el opositor no es poseedor sino un mero tenedor.

Lo anterior, depara, indefectiblemente, en que el recurrente es un tenedor y, por consiguiente, no se situó en la hipótesis prevista en el evocado precepto, por lo que a falta de un alegato concreto de posesión no podía menos que rechazarse la oposición formulada.

Y si a ello se agrega que dicho tercero tampoco allegó pruebas que soportaran la posesión que ahora invoca, no puede menos que confirmarse el auto apelado.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, se **RESUELVE**

Primero. Confirmar el auto materia de apelación, de fecha y origen preanotados.

Segundo. Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE

LIANA AÍDA LIZARAZO VACA
Magistrada

JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA
Magistrado.
IVÁN DARIO ZULUAGA CARDONA
Magistrado.

RE: PROYECTOS SALA 3/12/2020

Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 04/12/2020 12:35

Para: Despacho 08 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des08ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señora magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca, cordial saludo.

Conforme a los acuerdos vigentes del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas sobre trabajo en línea, a raíz de las medidas contra el COVID 19, por medio de este mensaje de datos APRUEBO el(los) proyecto(s) de acción(es) remitido(s), según el correo electrónico que respondo aquí, así:

ACCIONES DE TUTELA		
000-2020-01835-00 (1a instancia)	*HENRY RODOLFO RAMOS*	*JUZGADO CUARTO CIVIL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS*
Observaciones: Deniega		
000-2020-01868-00 (1a instancia)	*ASER INGENIERÍA LTDA*	*JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO*
Observaciones: Deniega		
005-2020-00343 (2a instancia)	*RONALD OSCAR JAUREGUI*	*JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL*
Observaciones: Confirma		
028-2020-00282-01 (2a instancia)	*JUAN MANUEL FALLA*	*JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL*
Observaciones: Revoca-deniega		

AUTOS		
037-2019-00127-01 (Verbal)	*LEONARDO FABIO SANTA FE SANTA FE Y OTRO*	*AMPARO GONZALEZ CANO*
Observaciones: Confirma		

Este mensaje desde el correo institucional debe tenerse como parte de la decisión, habida cuenta las circunstancias de dicho trabajo en línea. Anexo firma copiada o digitalizada del suscrito servidor judicial, según los arts. 11 del Decreto 491 de 2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y demás normas pertinentes.



De: Despacho 08 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des08ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de diciembre de 2020 3:36 p. m.
Para: Jose Alfonso Isaza Davila <jisazad@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Ivan Dario Zuluaga Cardona <izuluagc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PROYECTOS SALA 3/12/2020

Respetados Magistrados
Buenas tardes

Acorde a la instrucción dada por la Dra Liana, me permito adjuntar cuatro proyectos de tutela (dos de primera y dos de segunda), y un auto civil de sala; asimismo, los respectivos links de consulta.

TUTELAS DE PRIMERA INSTANCIA

000-2020-01835-00

000-2020-01868-00

IMPUGNACIONES

11001310302820200028200

11001310300520200034300

AUTO DE SALA

11001310303720190012700

Cordialmente,

Despacho de la Magistrada Liana Aida Lizarazo Vaca
Sala Civil
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

De: Liana Aida Lizarazo Vaca <llizarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de diciembre de 2020 12:00
Para: Despacho 08 Sala Civil Tribunal Superior - Bogota - Bogota D.C. <des08ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Diana Paola Gordillo Rojas <dgordilr@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: proyectos de tutela y auto corregidos para enviar hoy a los magistrados con el link de los expedientes

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2020.

Magistrada Ponente:
LIANA AIDA LIZARAZO VACA
Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá D.C.

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Me permito manifestarle que por medio de este documento, **apruebo en su totalidad** el siguiente proyecto de auto civil discutido en Salas del 03 y 10 de diciembre de 2020:

CLASE DE PROCESO: OTROS (entrega del tradente al adquirente)
DEMANDANTE: JUAN ANDRÉS SANTAFÉ SANTAFÉ y OTROS
DEMANDADO: AMPARO GONZALEZ CANO
RADICACIÓN: 1100131 03 037 2019 00127 01
DECISIÓN: CONFIRMA

Atentamente;



IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado
Documento con firma electrónica

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
69f5ae8e5bf71c2908ab317e17be79bfff1e144c1059a3b9b5de1a6b3bf4455a
Documento generado en 15/12/2020 12:18:38 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADO PONENTE	: **JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO**
RADICACIÓN	: **11001-31-03-037-2019-00240-01**
PROCESO	: **EJECUTIVO**
DEMANDANTE	: **JOSÉ FERNANDO SERNA VASQUEZ**
DEMANDADO	: **MÓNICA SERNA VÁSQUEZ**
ASUNTO	: **IMPUGNACIÓN SENTENCIA**

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre del año en curso, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del asunto del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1. La parte interesada, por medio de la cuerda ejecutiva singular, acudió a la jurisdicción, a fin de alcanzar el recaudo de $90’000.000,oo, por concepto de capital contenido en la letra de cambio base de acción, junto a los intereses corrientes causados desde el 18 de diciembre de 2011, al 27 de febrero de 2018, a la tasa del 2% pactada en el cartular, así como los réditos moratorios desde la presentación de la demanda hasta el pago efectivo de la obligación.

Como sustento de sus aspiraciones, el ejecutante aludió que, el 18 de diciembre de 2011, Mónica Serna Vásquez se constituyó en deudora cambiaria de Silvia Adriana Serna Vásquez, por la cantidad de $90’000.000,oo, suma que debía cancelarse el 11 de febrero de 2018.

Narró que Silvia Adriana Serna Vásquez endosó en propiedad la letra de cambio a Jorge Fernando Serna Vásquez el día 16 de abril de 2019, y que los réditos remuneratorios cobrados del 2% corresponden a la tasa acordada en el instrumento comercial.

2. Frente a tales aspiraciones, la conminada presentó como excepciones de mérito, las que rotuló: *"Inexistencia de causa o ausencia de negocio jurídico quicio del título"; "Enriquecimiento sin causa"; "Falta de presentación de la letra para su pago";* y *"Endoso inane, inocuo y fútil".*

En torno al primer medio de enervación, destacó que Silvia Adriana Serna Vásquez no efectuó erogación alguna, ni entregó física, real y materialmente tales recursos a la convocada. Resaltó que ésta no necesitaba el monto aludido en el título valor, ni tampoco le pidió prestada tal cantidad, por lo que la obligación, cuya exacción aquí se exige, carece de una causal real y lícita.

Del mismo modo, señaló que, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del C. G. del P., al haberse afirmado por el actor que el dinero fue prestado a la pasiva -quien asegura no haberlo recibido "*nunca*"-, le incumbe a la primera de las nombradas demostrar que así lo hizo, puesto que las negaciones indefinidas no requieren de prueba.

Frente a la segunda de las defensas, indicó que, a sabiendas de la falta de causa real del título cobrado, el ejecutante pretende obtener el recaudo injustificado de un capital sin contraprestación alguna.

Sobre la tercera excepción adujo que el título no fue presentado a la deudora en la fecha de su exigibilidad, ni dentro de los ocho días comunes siguientes, tal y como lo consagra el artículo 691 del C. de Co. razón por la que no está compelida a cubrirla; situación a la cual agregó que tal exigencia legal no es susceptible de ser suplida con la notificación del mandamiento de pago.

Finalmente, respecto de la inutilidad del endoso, reseñó que, llegada la data del vencimiento del papel cambiario, éste perdía la

posibilidad de ser circulado. De ahí que, al haberse endosado en propiedad después del vencimiento del plazo, la transferencia se avista ilegal, inválida e ineficaz; máxime cuando "(…) *todo lo que su endosatario irregular emprenda, carece de fuerza vinculante, de eficacia y de validez*".

II. LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Agotado el trámite de rigor, el funcionario de primer orden dispuso seguir adelante con la ejecución, conforme lo dispuso en el mandato coactivo, tras no encontrar demostrados los medios defensivos propuestos por la parte enjuiciada.

Al respecto, recalcó que el título valor báculo de la contienda goza de todos los atributos establecidos en la ley mercantil y adjetiva. De cara al examen de las defensas formuladas por la intimada, precisó que en este caso "(…) *la letra tiene una fecha de vencimiento (27 de febrero de 2.018) está reconocido* (…) *que fue endosada al ejecutante con posterioridad, lo que quiere decir que* (…) *este endoso en propiedad es totalmente válido* (…) [,] *pero tendría relevancia que el hecho de haber sido transferida la propiedad del título valor con posterioridad al vencimiento* (…) *tiene los efectos de una cesión que fundamentalmente implica que* (…) *las excepciones que hubiere podido plantear la obligada cambiaria, contra la cedente* [.] *Entonces, entramos a mirar varios aspectos: Se trató en este caso de que aquí hay ausencia de presentación del título.* (…) *Es cierto* [que] *el artículo 691* [del C. de Co.] *establece unas pautas para la presentación del documento cambiario para efectos del pago, pero,* (…) *de acuerdo con las reglas que ahí se establecen, ni con la amplia explicación doctrinaria que pudiera caber a este caso, no puede entenderse que para el ejercicio de la acción cambiaria se haya* [establecido] *necesaria y obligatoriamente un requisito de procedibilidad de la acción para presentar al cobro ejecutivo el título valor a manera de exhibición o de requerimiento, que lo pudiere hacer los acreedores, pero eso no es necesariamente una exigencia legal. Es más, doctrinariamente,* [Trujillo Calle] *podemos ver que* (…) *la acción compulsiva directa no requiere previa oportuna presentación al pago y protesto que se haga a la letra protestable, con el fin de salvarla, si es contra el obligado cambiario directo; en este caso, la persona que apareció suscribiendo el título, ello no es necesario, así lo podemos establecer de estas normas.*

Que hay un enriquecimiento sin causa, (…) *no podemos predicar la existencia de esta institución en este evento, porque hay una causa, un*

instrumento cambiario que se presenta para el pago (…) *que es la misma que la suscripción de un título a cargo o a favor de una persona, en este caso, el demandante y la demandada* (…).

Ha sido reconocido, sin dudas, (…) *que el documento que se presentó para el cobro ejecutivo fue firmado por ella* (…) *así se reconoce* (…), *pero lo que argumenta y ratifica en su declaración* (…) *fue que probablemente esta letra fue entregada en blanco, pero no girada a su hermana Silvia, quien figuró como la primera acreedora* (…), *que le giraba varias letras a su hermano Jorge, hoy demandante, y que probablemente ésta sea* (…) *alguna de esas letras que* (…) *acostumbraba él a girar, en razón de algunas negociaciones o algunas expectativas que se tienen en relación con la herencia de uno de sus padres.* (…) *No podemos desconocer en este evento que la ley mercantil* (…) *habilita que se firmen, se giren documentos espacios en blanco* (…) *tampoco puede olvidarse que conforme a los artículos 625 y 626 del C. de Co., la acción cambiaria tiene un fundamento derivado del hecho de estampar una firma en el título valor, si se firma el título es por algo, porque asume el compromiso de honrar la prestación o la obligación que allí se plasma, conforme a la literalidad* [;] (…) *que implicación tiene este tema en los títulos en blanco, que de entrada se atiene a lo que el tenedor legítimo del título vaya a* (…) *consignar en la parte en que no fue diligenciada al momento de la creación del documento, se asume, tiene pleno valor y plenos efectos, solo que delega* (…) *y autoriza a que el tenedor lo diligencie* (…)*; muy contrario a lo que se ha venido diciendo en el proceso, no es obligatorio que esas instrucciones sean por escrito,* (…) *en tratándose de personas de distinta índole, personas naturales o jurídicas, no se exige el documento escrito* [de instrucciones] *para su validez* (…) *no basta negar unos hechos, debe alegarlos y además probarlos.*

Que ocurre, está claro en este caso que el título fue firmado por la aquí demandada (…) *que fue entregado mas bien al hoy demandante y no a su hermana que fue la testigo, era lo que debía demostrarse, como se dijo en el curso de la audiencia,* [que] *hubo un montaje, algún movimiento entre dos hermanos en perjuicio de la aquí ejecutada, era lo que tenía que haber demostrado o aportar los medios que se pudiera inferir que se presentó ese montaje* [;] (…) *lo cierto es que aquí la letra si existió y aquí hubo una obligada cambiaria* (…), *existió esa letra y se firmó con un propósito y se da cuenta que se diligenció con base en unas instrucciones que vía telefónica y verbalmente se dieron,* [empero,] *no existe manera de demostrar que se trató de un montaje, o de alguna situación derivada de la animadversión que entre una y otra hermana existen en este caso.* (…) *No existe otra prueba de que la letra fue girada a otra*

persona o que existió otra clase de condiciones, o que el valor que allí se incorporó carezca de realidad o de veracidad, o que la suma que debía consignarse allí sea diferente a la que está cobrándose, que sea inferior, inclusive; (…) *lo cierto es que está la letra, el documento cambiario* (…)*."*

III. LA IMPUGNACIÓN

1. Inconforme con tal determinación, el mandatario del extremo convocado la impugnó, arguyendo que "(…) *el fallo atenta contra el inciso final del artículo 167 del C. G. del P., norma que establece que cuando se hace una afirmación negativa o una afirmación indefinida, éstas, no requieren prueba. ¿Qué pasa procesalmente con esa situación? Que se invierte la carga de la prueba.* (…) [L]*a parte demandada, en este caso, hizo una afirmación negativa, ha venido insistiendo, profusamente en que la señora Silvia Adriana* [Serna Vásquez] *no desembolsó $90'000.000,oo, la señora Silvia Adriana no le entregó $90'000.000,oo, a Mónica Serna, ni en partidas de treinta, ni en una partida única de $90'000.000,oo. Hemos dicho que ese desembolso de los $90'000.000,oo, nunca se produjo, que no es cierto; tenía entonces, ante esa negación,* [la obligación] *de demostrar, la parte ejecutante, que sí hizo el desembolso, esa prueba señoría no aparece en el proceso. Es que estamos frente a una letra de cambio, y esa letra de cambio es una especie de pequeño dios que circula en el mercado,* [eso] *no es tan absoluto, porque, o si no, la excepción primera que propusimos nosotros* (…) *no tendría razón de ser, no existiría esa excepción, y esa excepción, señoría, es de vieja data. Llama, entonces, la atención, que el fallo* (…) *no haya tenido en cuenta esa circunstancia, me llama más la atención que el fallo no haya respetado el inciso último del 167 del C. G. del P.*

Llama también la atención (…) *en cuanto a la exhibición de la letra o presentación para el cobro, si, jurisprudencia en ese sentido, en el sentido de que no existe un acto formalístico, propio, específico, como usted dijo, no es un requisito de procedibilidad que el acreedor le exhiba la letra para el pago al deudor, pero es que* [en] *el ordenamiento positivo* (…) *no hay ninguna norma que excuse del cumplimiento de ese requisito, no existe esa norma que perdone, que exculpe la presentación para el pago;* (…) *el hecho de presentar la demanda no presupone que se realizó la exhibición de la letra para su pago, que se presentó la letra* [al] *deudor para su pago, y la ley no exculpa, no dispensa de esa circunstancia, pues habrá mucha jurisprudencia y mucha doctrina en ese sentido, pero la ley tiene que cumplirse* (…) *aquí no aparece demostrado que se haya cumplido con ese requisito* (…) *vuelve y juega, si decimos, no hubo, no se cumplió*

con ese requisito, de la presentación para el cobro, es una negación indefinida, no requería prueba, tenía que demostrar que sí lo hicieron, y es otra prueba que no aparece en el expediente.

Es más, aparecen demostraciones diferentes que nos sirven para mostrar que evidentemente la supuesta acreedora inicial, tenedora inicial, jamás se le ocurrió presentar la letra y nunca la cobró y nunca se refirió a ella".

2. En la etapa de sustentación de que trata el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2.020, agotada en esta instancia, la parte recurrente persistió en los mismos planteamientos efectuados al momento de la interposición de la alzada, ahondando, fundamentalmente, en que las excepciones rotuladas *"Inexistencia de causa o ausencia de negocio jurídico quicio del título"* y *"Falta de presentación de la letra para su pago"*, se abren paso en el compulsivo de la referencia.

Asimismo, recabó en que, al haberse manifestado por la demandada que no se efectuó el desembolso del dinero por la giradora de la letra de cambio y que el título valor no fue presentado oportunamente para su pago, correspondía a su contraparte acreditar que así lo hizo; empero, como así no aconteció en el *sub examine,* las reseñadas defensas tienen vocación de prosperidad.

3. El extremo demandante, dentro del término otorgado para que se pronunciara frente a la sustentación de su contraparte, guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

1. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y no advirtiéndose vicio que invalide la actuación, se hace necesario anotar, de manera preliminar, que esta Sala se circunscribirá a examinar, exclusivamente, los motivos de censura demarcados por la parte opugnante, acatando los lineamientos del inciso 1º del canon 320 del Código General del Proceso, reparos que, en esencia, centran el debate jurídico en la probanza de las defensas intituladas *"Inexistencia de causa o ausencia de negocio jurídico quicio del título"* y *"Falta de presentación de la letra para su pago"*; embates que dejan al margen del escrutinio de este Colegiado los aspectos de la sentencia que no fueron rebatidos, esto es, lo

concerniente a las exceptivas de "*Enriquecimiento sin causa"* y "*Endoso inane, inocuo y fútil"*, esta última, porque, además de no haberse cuestionado, tras la verificación de la letra objeto del litigio, se advierte que su endoso guarda los lineamientos de la legislación cambiaria, y el hecho de que su transferencia haya sido efectuada con posterioridad a su vencimiento, produce los efectos de una cesión ordinaria,[1] siendo oponibles todas las excepciones que el deudor tuviere contra el creador, según el artículo 660 del C. de Co., como lo concluyó el juez de primera instancia.

2. Delimitado de esta forma el escenario dialéctico en el *sub lite*, de entrada incumbe apuntalar que el juicio ejecutivo tiene como característica elemental, la certeza y determinación del derecho sustancial pretendido, por lo que, desde su preludio, es necesaria la presencia de un pliego proveniente del deudor o de sus causahabientes, de cuyo contenido emane una obligación clara, expresa y exigible, al tenor de lo consagrado en el artículo 422 del Código General del Proceso.

3. Entre la variedad de documentos susceptibles de soportar su coercibilidad por vía ejecutiva se encuentran los títulos valores, instrumentos que, para alcanzar tal apellidamiento legal, inexorablemente deben reunir las formalidades previstas en los artículos 619 a 621 del C. de Co., así como las exigencias del canon 671, *ejusdem*, en el específico evento de la letra de cambio.

4. Dentro del marco conceptual y fáctico previamente descrito, resulta importante recordar que las confutaciones elevadas por el mandatario de la encartada se encaminan a criticar, específicamente, la desestimación de dos de los medios de enervación incoados contra el *petitum* compulsivo. El primero porque, en su sentir, se desconoció lo estatuido en el aparte final del artículo 167 del C. G del P., en relación con

---

[1] Artículo 660 del C. de Co. Frente a este tópico esta Colegiatura, en copiosas oportunidades, ha insistido en que "*la consecuencia derivada del endoso efectuado con posterioridad a su vencimiento* '(…) *no es la de dejar de representar el derecho en él mismo incorporado, sino la de* ***serle oponibles todas las excepciones que el deudor tuviere contra el creador del mismo.*** *De este modo, el tenedor no puede ampararse bajo la calidad de autónomo del título valor para considerar que los medios exceptivos que se le propongan no lo cobijen, sino que se mantiene atado a la relación causal que diera origen a la emisión del título valor.Bueno resulta aclarar que el artículo 660 inciso in fine no implica que dicha cesión deba someterse al cumplimiento del procedimiento indicado en los artículos 1959 y siguientes de esa codificación* (…) *Su correcto sentido es el de facultar al deudor a entablar en contra del acreedor, las excepciones derivadas de la acción cambiaria que pudiera proponer al creador del título, lo que permite entender el por qué la norma se refiere a sus* ***'efectos'****, dejando de lado su forma.*"' (Negrillas hacen parte del texto citado) TSB SC Sentencia del 20 de noviembre de 2.019, Exp. 32 2.019 00070 01, en la cual reiteró las sentencias TSB Sala Civil. Sentencia del 29 de septiembre de 2010 Exp. 28 2007 00526 01 M. P. M. L. B. En ese mismo sentido, pueden consultarse las sentencias de 27 de julio de 2011 Exp. 36 2008 00224 01 M.P. M. A. A. G., y fallo del 22 de noviembre de 2010. Exp. 09 2005 00485 02 M.P. M. A. Z. M.

la no acreditación de la entrega del dinero aludido en el cartular, por parte de la actora, así como el efectivo préstamo a la aquí intimada; y el segundo, por cuanto, a su parecer, la cambial no se presentó a la deudora para su descargo, en los términos del precepto 691 de la ley de los mercaderes.

4.1. Frente al primero de los cuestionamientos, resulta pertinente resaltar que, a voces del Alto Tribunal de Casación Civil, "(…) *de conformidad con el canon 177 del C. de. P. C.,* [subrogado por el artículo 167 del C. G. del P.] *'[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. –Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba" y, al tenor del artículo 1757 del Código Civil,* "[i]*ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta".*

Según el entendimiento doctrinario, las citadas disposiciones consagran los principios básicos que orientan la solución al problema del Derecho Probatorio expresado en el interrogante de "¿quién prueba?", los cuales según la tradición jurídica, son enunciados así: onus probandi incumbit actori: al "demandante" le corresponde probar los fundamentos fácticos de su "acción"; reus, in excipiendo, fit actor: el "demandado", cuando excepciona funge de actor y le compete demostrar el sustento de su defensa y, actore non probante, reus absolvitur: el "demandado" debe ser absuelto de los cargos si el "demandante" no logra acreditar los hechos en que apoya su pretensión (…)".[2]

Asimismo, respecto de la manifestación de negaciones indefinidas, por parte de los intervinientes de una disputa judicial, el mentado Corporativo ha decantado que "(…) ***no es suficiente con que se diga que algo dejó de pasar para que se releve al interesado de las cargas que le imponen las normas adjetivas****, cuando con tal proceder se cuestionan posiciones contrarias asumidas con antelación,* ***ya que con ello se estaría patrocinando el desconocimiento del principio básico del derecho de la validez de los actos jurídicos.****[3]"* (Negrillas del Tribunal).

Partiendo de la tesitura jurisprudencial *ut supra* señalada, en el presente asunto se otea que, al ser el ejecutado quien excepcionó no haber recibido la prestación dineraria contenida en el pliego cambiario, por concepto de mutuo, al referido extremo procesal le incumbía, entonces,

[2] C.S.J., Cas. Civil, 7 oct. 2012, exp. 2001-00049-01.
[3] CSJ SC 9072 de 2.014.

traer el convencimiento suficiente sobre el sustento de su defensa, pues, como lo tiene dicho la doctrina autorizada, "*1) La carga de la prueba en los procesos ejecutivos y similares.* (…) *Al demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuestos a las normas legales en que fundamenta sus excepciones*", [4] deber demostrativo que se erige en la literalidad del ya citado artículo 167 del estatuto adjetivo civil; comprobación que en estas diligencias se echa de menos, dado que el compilado persuasivo militante en el expediente se devela escaso para desgajar que el desembolso de los recursos enunciados en el título base de acción, signado por la encartada, no se hubiere efectuado realmente; defecto probatorio que impide tener por desvirtuada la regla general contenida en el ordenamiento mercantil, consistente en que la firma obliga cambiariamente a quien la impone en un instrumento negocial, de donde se desprende que la girada y suscriptora del título fuente de esta ejecución, no puede desconocer, de un tajo, los derechos incorporados en el mismo, cuando "*por sabido se tiene que la obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a su ley de circulación (artículo 625 Ibídem)";*[5] para lo que se recuerda que "(…) *los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción."*[6]

En línea con lo anterior, comporta relievar que, al revisarse la literalidad del documento báculo de la presente recaudación, fácilmente aflora la determinación del derecho crediticio en él incorporado, por el monto de $90'00.000,oo; se observa claramente la firma de la otorgante, Silvia Adriana Serna Vásquez, la rúbrica de la aceptante de la orden incondicional de pago, Mónica Serna Vásquez, así como su fecha de vencimiento, 27 de febrero de 2.018, surgiendo la obligación de la

[4] Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, tomo II, 5ª edición, Bogotá DC, Temis, 2006, p.482.
[5] C.S.J. Cas. Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2007. Exp. 2005 00101 -01.
[6] CC. Sentencia T-310/09.

ejecutada en los términos del artículo 625 del C de Co., pues no se avista intención distinta que la de hacer negociable la letra, ni que en ésta se hayan consignado salvedades según lo previene el canon 626, *ejusdem,* quedando, de esa manera, la conminada vinculada conforme a la redacción plasmada en el título.

Asimismo, se avizora que el ejecutante se encuentra habilitado para ejercer la acción cambiaria derivada del instrumento comercial objeto de esta ejecución, comoquiera que, a tono con lo dispuesto en el citado canon 619, *ibídem*, "[l]*os títulos-valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora*". Por consiguiente, la idoneidad del pliego recaudativo base de ejecución y la circunstancia de ser el actor su tenedor legítimo, lo faculta para exigir el cumplimiento del débito en él contenido, a quien se ligó cambiariamente a través de la suscripción del cartular; situación que patentiza, sin más, la viabilidad de la acción de cobro aquí ventilada.

Sin embargo, y pese a ser temas decantados jurisprudencial y doctrinariamente que los títulos valores son por sí mismos suficientes y que a la demandada no le basta simplemente negar los hechos afirmados por el actor, sino que debe invocar otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante,[7] para dar respuesta cabal a los reparos formulados contra la decisión del *a quo* es menester llamar la atención en que Mónica Serna Vásquez, al rendir su declaración de parte, reconoció como suya la rúbrica impuesta en el cartular materia de esta cobranza, aclarando que acostumbraba a suscribir letras en blanco, pero en favor de Jorge Serna Vásquez, por ocasión de los recursos económicos que, de la herencia de su padre, en forma anticipada, le peticionaba a aquél, y que la cambial aquí cobrada es un montaje, puesto que siempre le firmó a su hermano y no a su otra consanguínea.

También relató, en su interrogatorio, que el título báculo de acción lo habría suscrito para Jorge Serna y no para su hermana Silvia Adriana Serna Vásquez, de quien aseveró, vehementemente, no haber recibido ninguna cantidad de dinero, y menos pedirle prestado.

[7] CSJ. Cas. Civil. Sentencia de 30 de junio de 2009, exp. 1100102030002009-01044-00.

Para probar esta facticidad, la pasiva trajo al juicio las deponencias de Rodrigo Guerrero, Esther Alessandra López y Giovanni Marini, quienes, al unísono, dieron cuenta de la deteriorada relación que sobrellevaban las hermanas Serna Vásquez, de la ausencia de necesidad que tenía la demandada Mónica Serna para comprometerse con su allegada y la falta de capacidad de ésta última para mutuar la cantidad dineraria que aparece enunciada en el cartular.

No empece lo anterior, al escrutarse estas versiones junto a las aserciones de la encausada, fuera del descubierto distanciamiento familiar, sus manifestaciones difícilmente pueden ser útiles para corroborar que la endosante Silvia Adriana Serna no le hubiere mutuado el dinero a la convocada, pues, si bien los testigos enunciaron que ésta es la propietaria de un local comercial y de un inmueble ubicado en el barrio los Rosales, de los cuales llegó a percibir ingresos mensuales, también salta a la vista que ella admitió haber acudido en múltiples oportunidades a Jorge Serna para aprovisionarse de efectivo, acaecimiento del cual se alcanza a inferir que Mónica Serna, a pesar de sus habituales ingresos, sí necesitó recursos monetarios para inyectar a su economía personal. Por lo que, contrario a lo sostenido por la opugnante y las aseveraciones de los declarantes, ésta, al tener motivos para solicitar ayuda pecuniaria y, por contera, verse forzada a comprometerse inicialmente con la giradora de la letra base de este proceso, las inferencias de los testigos refulgen exiguas para desvirtuar la existencia del negocio documentado en dicho instrumento mercantil.

Y si se miran con mayor rigor los dichos de Rodrigo Guerrero, este testigo comentó que no habría la posibilidad de que Silvia Adriana le hubiere prestado dinero a su hermana, dado que Mónica Serna no lo requería y entre éstas no había una relación cercana, motivos a los que agregó que el número de referencia de la letra de cambio, aquí cobrada, es contiguo a varios instrumentos comerciales utilizados por Jorge Serna Vásquez, en su labor de prestamista -los que llegaron a estar bajo la custodia de la querellada-; tesis que la ejecutada también planteó en su interrogatorio de parte, al expresar que su firma en el título obedecería a los papeles que suscribía en favor de su hermano.

No obstante, tras el análisis de estos supuestos factuales bajo la égida de la sana crítica y de forma holística con los restantes elementos de juicio obrantes en el plenario, resulta poco verosímil colegir que Mónica Serna no hubiere recibido la prestación documentada en el título valor, ya que, se itera, sí hubo causa para que se valiera de su hermana y aquélla no desconoció la firma del documento mercantil; lo que, en puridad, no se desvirtúa con la simple coincidencia numérica avistada en la referencia de las letras cambio, ni menos desdice el vigor compulsivo de título suscrito por la aceptante, pues, a fin de cuentas, de su literalidad no asoma salvedad, reseña o manifestación, en torno a que la rúbrica de la girada no correspondiera a la intensión de obligarse cambiariamente.

Es más, verificadas a plenitud las diligencias, en primer lugar es pertinente señalar que de la literalidad del cartular no se vislumbra prueba sólida que permita inferir que Jorge Serna hubiera participado en su confección, como lo insinuó la enjuiciada; y, en segundo término, al no aparecer relacionado el título valor aquí cobrado en las piezas anexadas a la actuación por parte del reseñado deponente durante su testimonio, no es posible tener por cierto que el documento comercial en ciernes fuera de propiedad del señor Serna y no de Silvia Adriana, lo que, sin duda, además de generar incertidumbre sobre la veracidad de la teoría sostenida por la demandada y Rodrigo Guerrero, pone en evidencia que si la encausada suscribió el título en blanco, abrió la posibilidad de que su tenedor legítimo lo diligenciara según las recomendaciones impartidas por su signatario, a tono con lo previsto en el artículo 622 del C. de Co., las cuales, en este caso, según lo relatado por Silvia Serna, fueron suministradas telefónicamente, cuya inobservancia no se demostró; circunstancias que "(…) *declara* [a la demandada] *de antemano satisfech*[a] *con su texto completo, haciendo suyas las menciones que se agregan en ellos,"*[8] y si permitió "(…) *que el cartular se* [hubiere creado y circulado] *con un contenido no determinado literalmente ni limitado por las instrucciones a observar, está asumiendo un riesgo a cuyas consecuencias debe responder"*[9] frente a Jorge Serna, como cesionario de la letra de cambio y aquí demandante, más no ante Silvia Adriana Serna -giradora endosante-, con quien la conminada tuvo mayores diferencias.

[8] CSJ. STC. 20 mar. 2009, rad. 00032, reiterada el 28 sep. 2011, rad. 00196-01 y el 3 sep. 2013, rad. -01946-00.
[9] TSB SC 28 de abril de 2006. Exp. 23-97-4278-01.

A lo anterior debe aunarse que las declaraciones de Esther López y Giovanni Marini en poco contribuyen a demostrar los hechos materia de esta reyerta, pues éstos se revelan fundamentados en los comentarios realizados por la propia demandada, así como en deducciones basadas en la información que ellos manejaban, más no en el conocimiento directo de las facticidades por las cuales se les indagó.

Y si se entra a estudiar la versión de los hechos brindada por la testigo Silvia Adriana Serna Vásquez, quien fue llamada a declarar oficiosamente por el juzgado de cognición, su relato difiere sustancialmente de las exposiciones del extremo opositor, por cuanto aseguró que sí le prestó los $90’000.000,oo a Mónica Serna Vásquez, en tres contados, cada uno de $30’000.000,oo, lo cual motivó la suscripción del cartular en el año 2011; explanaciones cuya credibilidad no alcanza a verse mermada con los rebatimientos exteriorizados en la sustentación de la alzada, relativos a la ausencia de referencia en la declaración de renta de estos recursos ante el fisco, tampoco con su falta de registro en los extractos bancarios de la cuenta de la accionada, y menos al no mencionarse el mutuo pecuniario en el cruce de palabras que por distintos medios de comunicación han mantenido las hermanas, dado que ninguna de estas situaciones devela, *per se*, que la intimada no haya recibido el empréstito, ni que su firma incorporada en el título obedeciera a una causa distinta a comprometerse cambiariamente. Ello por cuanto, la información brindada a la autoridad tributaria no necesariamente coincide con los movimientos monetarios del contribuyente, pese a ser un deber legal impositivo; el préstamo de dinero no tiene que realizarse indefectiblemente a través de canales bancarios; y la omisión de dicho acto en las conversaciones citadas por el impugnante al fundamentar su apelación, a decir verdad, no conduce a concluir, en forma determinante, que la ejecutada no haya adquirido la obligación cambiaria, la cual cobra su eficacia al concurrir las condiciones establecidas en el artículo 625 de la codificación comercial, circunstancias aquí no desvirtuadas.

En ese orden de ideas, ante el proscenio comprobatorio antes evidenciado, del cual se patentiza una encontrada posición entre los declarantes escuchados en el proceso, esta Colegiatura llega a la conclusión

que la coercibilidad ejecutiva del título valor aquí reclamado no alcanza a verse menguada. De ahí que la suscripción realizada por la intimada resulte suficiente para respaldar su recaudo por esta vía coactiva, en los términos del canon mercantil delanteramente referido.

4.2. En lo atinente a la inconformidad de la pasiva, encaminada a reprobar la falta de acreditación de la presentación de la letra de cambio a la deudora en los términos del artículo 691 del C. de Co., basta con remembrar que, según las previsiones de la mencionada normatividad y lo reiterado por este Tribunal, con respaldo en autorizada doctrina emitida sobre el tópico bajo análisis, éstas exigencias sólo resultan imperiosas cuando se busca '"*habilitar* [al acreedor] *(si el obligado directo no paga) para que pueda exigir el derecho incorporado y sus accesorios a los* ***obligados de regreso*** *(girador y endosantes)"*[10]*, eventualidad que no se presenta* [si] *los ejecutados son obligados cambiarios directos",*[11] (negrillas fuera de texto), criterio que, aplicado al asunto de marras, pone en evidencia que la presente demanda compulsiva no se obstruye por la no exhibición del cartular, para su pago a la aquí ejecutada, dada su calidad de parte principal y vinculada en primer grado, contra quien se ejercita esta acción cambiaria, como aceptante de la orden de pagar una suma de dinero impartida por la giradora Silvia Adriana Serna Vásquez (art. 781, C. de Co.), quedando, por ende, obligada conforme al tenor literal del título (art. 626, *ibídem*); aspecto sobre el que se insiste en que "[l]*a presentación al cobro, inexcusable debe hacerse precisamente en los plazos señalados,* (…) *so pena de perderse por caducidad* ***las acciones de regreso****."*[12], (resalto de la Sala), como lo regula el artículo 787, numeral 1°, del C. de Co.

5. Las explanaciones hasta aquí esbozadas respaldan la confirmatoria del fallo confutado, con la consecuente condena en costas a la parte vencida, tal y como lo dispone la regla 1ª del artículo 365 del C. G. del P.

---

[10] Peña Castrillón, Gilberto. De los Títulos-Valores en General y de la Letra de Cambio en Particular. Editorial Temis Librería, Bogotá, 1981. Pág. 163.
[11] TSB SC Sentencia del 26 de abril de 2.016. Exp. 33 2012 00415 01
[12] Bernardo Trujillo Calle. De los Títulos Valores. Editorial Leyer. Bogotá, 2018. Décima segunda Edición. Pág. 155. Parte Especial.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre del año en curso, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad, conforme a lo esgrimido en el cuerpo motivo de esta providencia.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas de esta instancia a la parte impugnante. El Magistrado Sustanciador fija como agencias en derecho de esta instancia la suma $1’000.000,oo. Liquídense según lo establecido en el artículo 366 del C. G. del P.

TERCERO.- En oportunidad, por Secretaría, ofíciese a la Delegatura de origen informándole sobre la presente decisión, y remítasele copia magnética de esta providencia, para que haga parte de la actuación respectiva.

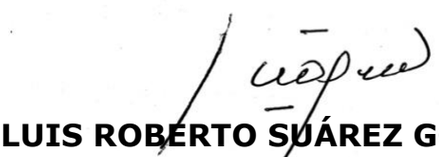
NOTIFÍQUESE,



JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO
Magistrado
(37 2019 00240 01)



NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ
Magistrada
(37 2019 00240 01)



LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ
Magistrado
(37 2019 00240 01)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Magistrada Ponente

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Bogotá D. C. dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación:	**11001-3103-020-2014-00566-04**
Asunto:	Ordinario
Recurso:	Súplica
Demandante:	Vivir Arquitectura Ltda.
Demandado:	Miroal Ingenieria S.A.S

Para resolver sobre la procedencia del recurso de súplica interpuesto por la parte demandante -Vivir Arquitectura Ltda.-, frente al auto proferido el 28 de septiembre de 2020, en el juicio citado en la referencia, en el cual actúa como Ponente la Dra. Adriana Saavedra Lozada, bastan las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Al tenor del artículo 331 del Código General del Proceso, el recurso de súplica procede únicamente contra los siguientes pronunciamientos: a) **los autos apelables** por su naturaleza, dictados por el Magistrado Sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la alzada de un auto; b) el proveído que resuelve sobre la admisión del susodicho recurso o la casación, y c) las decisiones que profiera el magistrado sustanciador en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión, y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. Así mismo, la norma en comento prevé que la súplica "no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o queja".

2. En el caso *sub-júdice*, el apoderado judicial de la actora, tras haberse surtido el traslado para sustentar la apelación propuesta frente al fallo de primer grado (Art.14, Decreto 806 de 2020), solicitó la concesión de un plazo adicional para sustentar la apelación interpuesta contra la sentencia de primer grado y, en subsidio, tener el escrito contentivo del

mentado medio de impugnación como fundamentación del mismo.

La Magistrada Ponente del asunto negó esa petición, mediante auto emitido el 28 de septiembre de 2020, el cual recurrió la demandante en reposición y "en subsidio apelación".

La reposición fue resuelta por proveído de 17 de noviembre de 2020, manteniéndose incolúme la determinación confutada; igualmente, la alzada formulada fue reconducida como recurso de súplica.

Empero, ocurre que la decisión censurada no sería apelable, por cuanto no está enlistada en el artículo 321 del Código General del Proceso, ni en norma especial; y, por consiguiente, no es susceptible del recurso de súplica, a la luz de las prescripciones del artículo 331 ibídem.

3. Siendo ello así, el recurso propuesto resulta improcedente.

Por lo expuesto, se

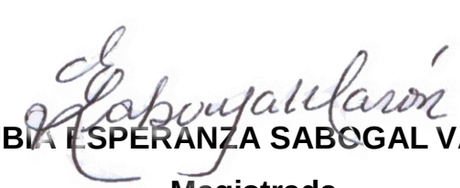
RESUELVE

Primero.- **DECLARAR IMPROCEDENTE** el recurso de súplica interpuesto contra el proveído dictado el 28 de septiembre de 2020, en el juicio citado en la referencia, en el cual actúa como Ponente la Dra. Adriana Saavedra Lozada.

Segundo.- En firme esta decisión, **devolver** el expediente al despacho judicial de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas del recurso, por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Proceso No. 11001310302320130049803
Clase: EJECUTIVO
Demandante: JOSPE FRANCISCO RODRÍGUEZ MALDONADO y otro
Demandado: DIANA CAROLINA BECERRA DURÁN y otros

Se declarará inadmisible el recurso de apelación que el extremo demandado interpuso contra el auto de 18 de junio de 2019 proferido por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá (fl. 20, cdno. 1 PDF), mediante el cual denegó la nulidad que por extralimitación de las facultades del comisionado, deprecó la pasiva, pues esa decisión no es pasible de alzada; en verdad, de acuerdo con el artículo 40, inciso 2° del CGP, "toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad podrá alegarse a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, **y el auto que la decida solo será susceptible de reposición"** (se subraya y resalta).

En consecuencia, como la decisión objeto de reproche no es susceptible de apelación según las previsiones del precepto que viene de citarse, el suscrito Magistrado, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 326 *ídem*.

RESUELVE

Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandado contra el auto de 18 de junio de 2019 proferido por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, conforme a lo dicho.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

Firmado Por:

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 005 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
4b9d4398fdf2f52fa34611865740befb8ba109ca8e27f9d13e9327424b296588
Documento generado en 16/12/2020 04:54:05 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: **José Alfonso Isaza Dávila**

Radicación: 110013103024-2018-00107-01 (Exp. 5150)
Demandante: Hernando Dueñas Jiménez y otro
Demandado: Constructora HHC Península 140 SAS
Proceso: Verbal
Trámite: Apelación sentencia
Discutido en Sala de 3 de diciembre de 2020

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Decídese el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 7 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, en este proceso verbal de Hernando Dueñas Jiménez y María Elena Montalvo de Dueñas contra Constructora HHC Península 140 SAS.

ANTECEDENTES

1. Pidieron los demandantes[1]: a) declarar a la demandada responsable de los daños presentados en la casa 2 de la agrupación de vivienda Aragón, ubicada en la calle 142 # 9 - 71, matrícula inmobiliaria 50N-600848, po la construcción aledaña del edificio "*Espacio 140*"; b) en consecuencia, condenarla al pago y reconocimiento del valor comercial del inmueble afectado, valorado en $729.142.005, puesto que debe ser demolido, más $2.824.000

[1] Demanda subsanada, folios 140 a 147 del primer cuaderno.

mensuales por concepto de cánones de arrendamiento, que tendrán que pagar los afectados desde que evacúen la casa y durante el tiempo que se demore volver a construirla. En subsidio formularon pretensiones similares, con la variación de que la condena sea por $600.000.000 para ejecutar obras de reparación.

2. Según la demanda, el sustento fáctico se resume en que los demandantes son propietarios de la casa tema del litigio, afectada por fisuras, agrietamientos e inclinación de la estructura, averías que la hacen inhabitable por amenazar ruina y que fueron causadas por la excavación, construcción y asentamiento de la edificación del terreno vecino y colindante a la agrupación de vivienda Aragón.

El actuar de la constructora demandada en la realización de ese proyecto denominado "*Espacio 140*" fue irregular, pues para el inicio de las obras los vecinos no fueron citados conforme a la ley 388 y el decreto 564 de 2006, en la medida en que el 19 de enero de 2015 se presentó un fuerte movimiento de tierra a causa de las excavaciones, actividad que desestabilizó no solo el predio de los demandantes, sino a toda la agrupación de vivienda, además de que la construcción fue de dos torres con 9 pisos y un semisótano de 5,60 metros.

3. La demandada contestó el libelo introductor, aceptó parcialmente unos hechos, negó otros y formuló las excepciones que llamó: *ausencia de nexo causal*, *inexistencia de ruina o peligro*, *culpa exclusiva de la víctima*, *falta de prueba que cuantifique el daño*, *enriquecimiento sin causa*, *carencia de buena fe*, *omisión de mitigar perjuicios* y *cualquier otra excepción que se encuentre probada*[2]. Defensa fundadas en que el predio de los demandantes tiene más de 30 años de antigüedad, está a más de 50 metros de distancia respecto del aislamiento de la edificación "*Espacio 140*", sin que haya prueba de la relación causal entre la construcción y los desperfectos aducidos

[2] Folios 333 a 348 del cuaderno 1.

en la demanda, los cuales obedecen más a la falta de mantenimiento y vetustez de la casa.

En oportunidad la parte actora descorrió el traslado de las excepciones[3].

4. El juzgado denegó las pretensiones y condenó en costas a los demandantes.

Para esas decisiones estimó, en resumen, si bien la jurisprudencia ha dicho que los daños por la construcción generan responsabilidad con presunción de culpa, y aquí fue demostrado que el predio afectado es de propiedad de los demandantes desde 1989, que hace parte de la agrupación de vivienda Aragón y que en 2013 la demandada comenzó a edificar el predio contiguo, no fue probado el nexo de causalidad entre esa actividad y los perjuicios alegados por la parte actora.

Precisó que el estudio de la empresa Sefin SAS y el diagnóstico técnico de la Subdirección de Análisis y Mitigación de Riesgos de la Alcaldía de Bogotá, aluden a problemas en la agrupación de vivienda, pero sin citar afectación a la casa número 2, de los actores, a lo sumo el primer documento hizo una referencia tangencial sin fundamento técnico.

Afirmó que el dictamen pericial aportado con la demanda tampoco acreditó el nexo causal, porque el perito no es idóneo para expresar las conclusiones, pues es de profesión arquitecto, sin conocimiento en ingeniería civil o que consultó a una persona con esta calidad, pues la ley 400 de 1997 (mod por la ley 1229 de 2008), los decretos 926 y 2525 de 2010, el decreto 92 de 2011 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10, determinan que la elaboración de diseños estructurales, estudios geotécnicos, análisis de

[3] Folios 370 a 375 del cuaderno 1.

sismo resistencia y la revisión de diseños de una construcción en curso, es de ingenieros civiles en forma exclusiva. Además, esa experticia carece de un desarrollo argumental sobre los cálculos, las normas técnicas y las fuentes científicas utilizadas, que por esas falencias debe ser descartada al incumplir los requisitos del artículo 232 del CGP.

Analizó el diagnóstico técnico DI 2018 de 26 de julio de 2018 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, quien determinó que la estabilidad estructural del predio de los demandantes no está comprometida.

Echó de menos algún soporte probatorio sobre el estado de la casa antes de construirse el edificio "*Espacio 140*", pues resulta imposible determinar la fecha exacta en que aparecieron las fisuras. Y dejó de lado el testimonio de Francisco Javier Vargas, porque no brinda claridad sobre los perjuicios y se contradice con el diagnóstico de IDIGER, en punto a no estar comprometida la estabilidad estructural y mención de fisuras relacionadas con las cargas normales de servicio, además de que la casa de los demandantes es una de las más alejadas de la construcción realizada por la demandada, a diferencia de las casas 9 a 14.

EL RECURSO DE APELACIÓN

En su inconformidad expresaron los demandantes, en resumen, las siguientes críticas:

a) La juez incurrió en una equivocada apreciación y valoración de las pruebas, especialmente el dictamen pericial aportado con la demanda.

b) Hernando Dueñas Jiménez en su declaración enfatizó que era dueño de la casa hace 25 años, la cual estaba en perfecto estado hasta que, en el 2014, comenzaron a aparecer grietas, época en que la demandada hizo la excavación del predio colindante con la agrupación de vivienda Aragón, hecho acreditado con fotografías y documentos del IDIGER.

c) Quedó probado que la constructora omitió las actas de vecindad antes de iniciar la edificación, pues nunca las aportó, lo que da credibilidad a las afirmaciones de los demandantes y el testigo Francisco Javier Vargas, en cuanto a que la vivienda estaba en buenas condiciones antes de iniciar las obras del predio vecino, hecho corroborado por un concepto de IDIGER y lo dicho por el representante legal de la demandada, quien reconoció el compromiso de reparar unas viviendas afectadas por la construcción.

d) Francisco Vargas es arquitecto, con experiencia de 45 años en la construcción, fue empleado del Banco de la República como director del departamento de edificios, también propietario de una de las casas del conjunto, quien conoció de las circunstancia de modo, tiempo y lugar de los hechos y se notó el error en la construcción del edificio "Espacio 140", por carecer de vigas para conformar anillo, pilotes y pantallas, además de la falta de una placa de concreto de 10 centímetros a nivel de piso, descuidos que generaron fallas en el terreno que conllevaron a la aparición de daños a las casas de la agrupación Aragón.

e) No es cierto que falte claridad al dictamen, porque el perito es un profesional idóneo con larga experiencia en la Rama Judicial, además en su informe explicó sus investigaciones y se apoyó en el ingeniero Alirio Forero, dictamen que no fue objetado ni controvertido por la demandada.

f) Tampoco se atendió el último informe e inspección de IDIGER, sobre la situación de agrietamiento de las casas del Conjunto Residencial Aragón, ni se valoró o estudió el concepto científico y técnico elaborado por la empresa Servicios de Profesionales de Ingeniería SAS.

Oportunamente la parte demandada descorrió el traslado del reseñado recurso de apelación[4].

CONSIDERACIONES

1. Fuera de discusión los presupuestos procesales y sin vicio que impida tomar decisión de fondo, el problema jurídico para resolver el recurso de apelación consiste en verificar si están reunidos los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual invocada por los demandantes, en relación con los daños de la casa # 2 de la agrupación de vivienda Aragón, que los últimos alegan como dueños, al parecer por causa de la construcción del edificio "*Espacio 140*", realizada por la demandada.

La respuesta a esa cuestión debe ser que no están demostrada la atribución de esa responsabilidad a la demandada, pues las pruebas obrantes en el expediente no ofrecen certeza en cuanto a que los daños alegados en la demanda, hubieran sido causados por la actividad constructiva mencionada.

2. Para desplegar ese argumento, recuérdase que de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil, quien "*ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido*", norma en que se fundan los pivotes de la

[4] *13DescorreApelación*.

responsabilidad extracontractual, que son: una conducta culpable o susceptible de atribución de acuerdo con la ley, un daño y una relación de causalidad entre aquella y este último.

En el asunto bajo juicio la actuación cuestionada fue la construcción de un edificio, que es una de las actividades peligrosas conforme a la calificación de la jurisprudencia, en consideración al riesgo que ofrece, como ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil, sentencia 153 de 27 de abril de 1990, entre otras), y claro que tratándose de actividades peligrosas hay lugar a presumir la culpa o responsabilidad del demandado, según esa misma doctrina.

Ahora bien, en punto a la legitimación en la causa de las partes, se predica de los demandantes como dueños de uno de los predios colindantes al edificio Espacio 140, construido por la demandada, quien por esa razón se encuentra legitimada para comparecer a este litigio.

3. Despejado lo anterior, con la demanda se aportó el dictamen del arquitecto Jesús Manuel Bohórquez Pinto (folios 46 a 74 del cuaderno 1), el cual contiene varias fotos que muestran fisuras y dilataciones de la casa 2 del conjunto residencial Aragón, averías invocadas como el daño reclamado por los demandantes, quienes afirmaron que hay amenaza de ruina por estar afectados los cimientos y la estructura del inmueble.

Previo al análisis de la extensión y cuantía de esos daños, es indispensable verificar si fueron causados por la actividad de construcción desarrollada por la demandada, pues en caso de una respuesta negativa, aquella labor se tornaría inútil por no configurarse la responsabilidad civil extracontractual.

Los apelantes argumentaron que la relación de causalidad está probada con: *(i)* el dictamen anexo a la demanda, *(ii)* el testimonio de Francisco Javier Vargas, *(iii)* el estudio de la empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Sepin SAS, (iv) el diagnóstico más reciente emitido por IDIGER, *(v)* la declaración de Hernando Dueñas Jiménez, *(vi)* algunas manifestaciones del representante legal de la demandada y *(vii)* el hecho de que la constructora no elaboró las actas de vecindad antes de iniciar la obra, elementos de juicio que serán analizados a continuación.

4. El perito arquitecto Jesús Manuel Bohórquez Pinto afirmó que los daños son "*consecuencia de la construcción colindante con el Conjunto Residencial Aragón, valga decir, proyecto Espacio 140*", porque las manifestaciones del propietario y la situación en la que se encuentra el conjunto, permiten "*pensar que el daño es provocado por una causa común: desestabilización generalizada del terreno, producida por el asentamiento progresivo del edificio* [*Espacio 140*]"

También expresó que "*[n]o es aventurado aseverar que así como es demasiado evidente el daño en las casas del fondo del conjunto, este mismo daño con esas características se presentará tarde o temprano, también en las primeras casas, es decir las más inmediatas a la calle de acceso, como lo es el caso de la casa No. 2, de lo cual se están viendo los indicios desde hace aproximadamente dos (2) años..., esto demuestra que dicha desestabilización de la cimentación de todas las construcciones del conjunto, irá siendo cada vez más evidente y prácticamente no se va a detener*".

Explicó que el conjunto fue construido hace 35 años, cuando las normas de sismo-resistencia eran menos exigentes, sin que pueda decirse que las construcciones son defectuosas, pues las casas fueron diseñadas en un sector "*donde muy seguramente las construcciones no pasaban de los tres (3) pisos de altura, pero que con*

construcciones como el proyecto Espacio 140 se le está sometiendo a esfuerzos superiores a los diseñados estructuralmente para el momento (1978) y si no se tuvieron las debidas precauciones constructivas en construcciones colindantes actuales, se iban a presentar las consecuencias ya evidentes para todos, como lo son las fisuras en escala y verticales, y seguramente otras manifestaciones futuras, mucho más graves".

Agregó que el suelo del lugar está clasificado como "F", "*es decir de una capacidad portante muy baja y propiedades geológicas muy frágiles. Agrava más la situación, la evidente presencia de fisuras horizontales que demuestran que la estructura del conjunto Aragón está siendo sometido cargas igualmente horizontales, cargas para las que seguramente no fue diseñada la estructura del conjunto, cargas producto del movimiento que ha sufrido el terreno en el sector, movimiento y acomodación que como ya se mencionó, es progresivo y prácticamente no se va a detener*".

De esa experticia, respecto del nexo causal entre los daños alegados y la construcción de la demandada, se observa no está fundada en datos científicos, puesto que utilizó expresiones como "*permite pensar*", "*no es aventurado aseverar*", "*demasiado evidente*" y "*muy seguramente*", que denotan especulaciones o suposiciones, pues omitió bases especializadas, datos recopilados por alguna autoridad sobre la materia, experimentos o análisis de laboratorio, por el contrario, se limitó a decir que se trata de un suelo catalogado con la letra "F", de "*capacidad portante muy baja y propiedades geológicas muy frágiles*", expresión carente de cualquier fundamento científico y experimental.

En las conclusiones enfatizó que "*la única solución definitiva para recuperar el inmueble, es demolerlo y volverlo a hacer*", según consulta con "*ingenieros expertos en suelos y calculistas*

estructurales", pero contrario a lo aducido en la apelación, el perito no mencionó los nombres ni datos de los profesionales que apoyaron su labor, ni incluyó anexos de los conceptos o estudios realizados por esos colaboradores.

El artículo 225, inciso 6, del CGP, preceptúa que todo "*dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado, en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones*", características de las que adolece el medio probatorio bajo análisis conforme se explicó.

Adicionalmente, en la información del perito está relacionada experiencia desde 1982, en diseños arquitectónicos, trámite de licencias, manejo de presupuesto, mampostería, organización de espacio público, interventoría, coordinación de proyectos, remodelaciones, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos y actividades similares, con estudios en "*artes*", diseño urbano, arquitectura y avalúos, sin que ninguno refiera a especiales conocimientos en ingeniería civil, cálculos de estructuras, geotecnia y sismo resistencia, temas que conforme a la ley 400 de 1997 (modificada por la ley 1229 de 2008), y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10, son de manejo profesional de los ingenieros en esas áreas; por lo cual el perito no puede considerarse idóneo para afirmar y concluir –con rigor científico– que el terreno donde se encuentra la casa de los demandantes es de baja capacidad portante y de propiedades geológicas frágiles, menos cuando ni siquiera efectuó y acreditó estudios sobre el particular.

El artículo 228 del CGP permite que el dictamen aportado por una parte, pueda controvertirse por la otra mediante la solicitud de comparecer el perito a la audiencia, o la aportación de otro dictamen, o realizar ambas actuaciones; sin embargo, el hecho de que la

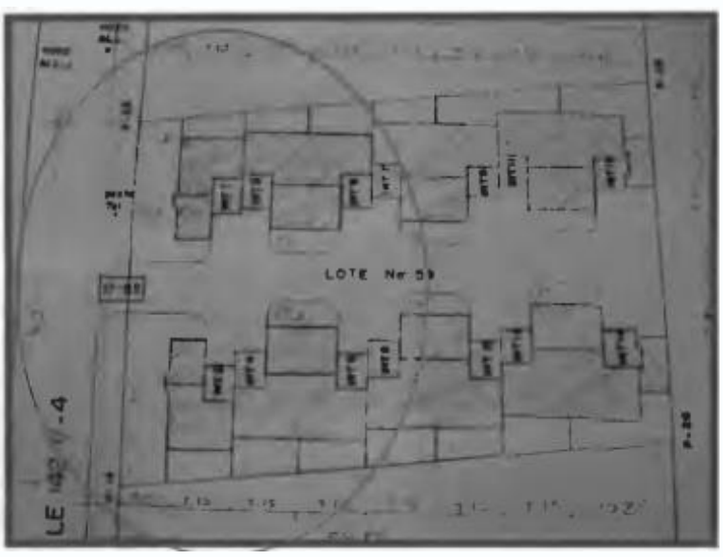
contraparte se abstenga de ejercer esa facultad, no implica que el juez esté conminado a aceptar las conclusiones de la experticia, pues la norma no prevé esa secuela. Y nada obsta para que la contraparte, en ejercicio de su defensa, allegue otros documentos que contradicen el dictamen, o considere innecesario preguntar al perito sobre su idoneidad, imparcialidad y contenido del trabajo, pues esa omisión procesal no obliga a reconocer en el auxiliar esas cualidades, ni que sus conclusiones tengan solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad, dado que en últimas es el juez quien siempre debe evaluar esos aspectos al tenor del artículo 232 del CGP.

Así mismo, conforme al artículo 228 del mismo estatuto, es facultativo para el juez, citar al perito a la audiencia, posibilidad que no configura un imperativo para valorar el medio de prueba, pues debe recordarse que cuando el dictamen es aportado, debe reunir todos los requisitos previstos en la ley (art. 226), sin que el interrogatorio al experto sea obligatorio ni pueda subsanar las falencias del trabajo.

En relación con el alegato de que el arquitecto Bohórquez estuvo inscrito en la lista de auxiliares de la justicia, según adujeron los recurrentes, no determina actualmente su idoneidad, puesto que tal requisito se aplica tratándose de secuestres, partidores, liquidadores, síndicos, intérpretes y traductores de acuerdo con el artículo 48, numeral 1º, del CGP, mientras que para la designación de peritos puede acudirse directamente a profesionales que tengan reconocida trayectoria e idoneidad sobre el área que se les pregunta, acorde con el numeral 2º de esa norma, cualidades de las que carece el referido arquitecto, en relación con la ingeniería civil, tal como fue explicado, falencia imputable a los demandantes, quienes tenían la carga de la prueba (art. 167 del CGP).

5. El estudio realizado por Sepin SAS (folios 11 a 44 del cuaderno 1), relacionó daños en la agrupación de vivienda, hizo especial mención a las zonas comunes y las casas 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pero respecto de la casa de los demandantes solo hay esta mención general y carente de precisiones técnicas: "*Las casas 1 a 8 se encuentran a una distancia entre 30 y 50 metros de la excavación y aunque el impacto del movimiento es menor y los daños se van disminuyendo de manera progresiva hacia el Norte, inclusive en la casa No.1 se evidencian pequeñas grietas en los muros, los cuales dan cuenta que el movimiento las ha afectado también. A medida que pasa en tiempo se van presentando nuevas grietas en los muros que al igual que los de las demás casas deben ser reparados ya que estas fisuras pueden generar filtraciones de agua hacia el interior de las casas*".

Adicionalmente mostró la siguiente foto:



Obsérvase que el documento carece de referencia concreta a la casa 2 y solo se toma como ejemplo la casa 1, para aludir a pequeñas fisuras que pueden presentarse en el transcurrir del tiempo y que pueden generar filtraciones de agua, defectos que no muestran relación causal adecuada con los daños aducidos en la demanda (problemas estructurales, cimentación, grietas y amenaza de ruina).

6. El diagnóstico técnico DI-12082 del IDIGER, de 26 de julio de 2018 (folios 502 a 511 del cuaderno 1), concierne a resultados de una inspección para "*valorar el grado de afectación de las edificaciones…, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas*", con la aclaración de que esa entidad "*no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados*".

Ese instrumento citó diagnósticos técnicos anteriores que también fueron aportados al expediente (folios 478 a 501 del cuaderno 1), pero que tan solo se enfocaron en las casas que sufrieron daños evidentes y de consideración (10, 11, 13 y 14).

El último diagnóstico fue de 26 de julio de 2018, único que relacionó la casa 2, visitada por los funcionarios, quienes observaron en su interior "*fisuras con aberturas aproximadas al milímetro en su mayoría de tendencia vertical en muros de cerramiento y divisorios*", calificaron los daños en muros de carga de "*leves*" y afirmaron –de manera general para todas las viviendas– como *posibles* causas, "*los asentamientos que ha presentado el suelo de cimentación de las mismas, desde su construcción a la fecha; o pudieren estar relacionadas a la redistribución de esfuerzos en los elementos estructurales de las viviendas debido a la imposición de desplazamientos originados por desconfinamiento del suelo de cimentación, al momento de realizar las actividades de construcción del proyecto urbanístico vecino…*".

Nótese como esa prueba tampoco demuestra la relación causal cierta entre los daños aducidos por los demandantes y la construcción de la demandada, porque hizo referencia a asentamientos desde el momento en que fueron construidas las viviendas, y la posibilidad, que no certeza, de la redistribución de esfuerzos de elementos estructurales, por desconfinamiento del suelo, conclusiones que solo generan dudas y ambivalencias en el caso bajo estudio y concretado a la casa 2 de la agrupación de vivienda.

7. Francisco Javier Vargas, arquitecto residente de la agrupación de vivienda Aragón, hace más de 20 años (casa 5), en su testimonio dijo haber presenciado los hechos cuando la demandada construyó el predio vecino, declaró que la constructora incurrió en varios errores en la excavación, porque observó la falta de una placa de 10 centímetros a partir del primer piso, además que percibió el derrumbe por falla del terreno que afectó las tres últimas casas, que continuaron moviéndose porque se perdió el confinamiento del terreno y la capacidad portante[5].

Sin embargo, sus manifestaciones fueron generalizadas sobre toda la agrupación de vivienda, en especial sobre las condiciones del suelo, pero cuando se le preguntó por la casa 2, no pudo hacer precisiones, porque explicó que ese inmueble inicialmente no estuvo afectado.

Amén de que ese testimonio, por sí solo, carece de fuerza técnico-científica, pues solo contiene las afirmaciones del declarante, quien además de tener interés por vivir en la agrupación, no acreditó especiales conocimientos de ingeniería civil y geotecnia, ni presentó estudios o experimentos realizados en el terreno, de ahí que sea insuficiente para demostrar la relación causal entre la actividad de la demandada y los perjuicios aquí reclamados.

[5] Minuto 9:31 a 54:10 de la audiencia de 7 de febrero de 2020.

8. En cuanto a la declaración de parte del representante legal de la constructora, carece de confesión la responsabilidad por los daños alegados, puesto que reconoció intervenciones para subsanar unos años a las zonas comunes y a varias viviendas del conjunto Aragón, en especial las casas 13 y 14, pero negó alguna incidencia en el inmueble de los demandantes, además de ser enfático en que ellos nunca hicieron reclamación de carácter policivo ante la Alcaldía o acción similar[6].

Por su lado, el demandante Hernando Dueñas Jiménez, quien es geólogo, en su declaración expuso que compró la casa hace 25 años, la cual nunca ha modificado, solo realizó mantenimiento de pintura, fachada y pisos. Adujo que su propiedad comenzó a presentar grietas visibles desde el 19 de enero de 2014, cuando otras casas colapsaron, e hizo mención sobre las circunstancias generales de cómo fue afectado todo el conjunto con ocasión de la construcción vecina[7].

Esta declaración de ningún modo acredita la causalidad, como requisito de la responsabilidad civil demandada, por cuanto, aparte de ser de la parte interesada, carece de sustento técnico, es genérica y basada en la apreciación del demandante sobre los hechos que percibió y su interpretación de los documentos obrantes en el expediente, sin valoraciones técnicas y científicas de las fisuras de su casa, que permitan concluir que se presentaron por problemas en el suelo causados por la actividad constructiva de la demandada, ni ninguna otra prueba soporte de hecho semejante, la cual se echa de menos, de recordar que la casa 2 es la más alejada de donde la constructora hizo la excavación.

9. El hecho de que la demandada no hubiese realizado las actas de vecindad previo al inicio de la obra, aunado a que uno de los actores

[6] Minuto 50:40 en delante de la audiencia de 18 de noviembre de 2019.
[7] Minuto 9:55 a 50:20 de la audiencia de 18 de noviembre de 2019.

indicó la fecha en que se percató de las grietas en su casa, nada aportan sobre la verificación del nexo causal, pues como se ha expuesto en esta providencia, el expediente carece del medio probatorio idóneo que acredite ese hecho de manera técnica, científica y especializada.

El debate en punto a si los daños de la casa número 2 estaban o no antes del inicio de la construcción de los edificios vecinos, se circunscribiría al propósito de determinar si todas o algunas de las fisuras deberían ser reparadas por la demandada, en caso de ser responsable, pero como aquí no se probó el nexo causal, ahondar en ese tema es innecesario.

Además, con respecto a la manifestación del demandante Hernando Dueñas, en cuanto a que las grietas de su predio se evidenciaron en la misma época en que la demandada hacía la excavación, no tiene credibilidad por sí sola, pues se trata de un punto que requiere prueba técnica en concreto y no hay elemento que pueda servirle de sustento para tenerlo como un hecho probado.

10. En resumen, se confirmará la sentencia de primera instancia, por no estar demostrada la reunión de los requisitos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual endilgada a la demandada.

Se condenará en costas de segunda instancia a los demandantes, conforme al art. 365, numerales 1º y 3º, del CGP.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil Cuarta de Decisión, administrando justicia en

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia de fecha y precedencia anotadas.

Costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente. Para su valoración el magistrado sustanciador fija la suma de $2.000.000 como agencias en derechos.

Este documento es válido con firma digitalizada de cualquiera de los magistrados y su aprobación por correo electrónico, según los arts. 11 del Dec. 491/2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y pertinentes.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase.



JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADA

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2020.

Magistrado Ponente:
JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA
Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá D.C.

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Me permito manifestarle que por medio de este documento, **apruebo en su totalidad** el siguiente proyecto discutido en Salas del 03 y 10 de diciembre de 2020:

Radicación: 110013103024-2018-00107-01 (Exp. 5150)
Demandante: Hernando Dueñas Jiménez y otro
Demandado: Constructora HHC Península 140 SAS
Proceso: Verbal
Trámite: Apelación sentencia
Decisión: confirma fallo de primera instancia

Atentamente;



IVAN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6f7ef72d0cc43f9adcefeabb0b47bd1bfb95f6014fe6d31b8a083e00f2b048b4
Documento generado en 16/12/2020 09:10:56 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Magistrado
José Alfonso Isaza Dávila

Atendiendo a la directrices de teletrabajo autorizadas mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 complementado por el acuerdo PCSJA20-11518, y conforme a lo lineamientos previstos en la ley 527 de 1999, por medio del presente correo electrónico manifiesto como Magistrada **la aprobación a los proyectos sometidos a estudio,** referente a los siguientes expedientes:

Radicación:	110013103024-2018-00107-01 (Exp. 5150)
Demandante:	Hernando Dueñas Jiménez y otro
Demandado:	Constructora HHC Península 140 SAS
Proceso:	Verbal
Trámite:	Apelación sentencia
Decisión:	Confirma

Esta aprobación suple la firma, y hace parte integral del proyecto

Cordialmente



Liana Aida Lizarazo Vaca

Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c09a76326542d329a0b59e104e1b994e878c2554c1493aa984f016cbbcacf3f9**

Documento generado en 10/12/2020 06:11:54 p.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ- SALA CIVIL

SALA SEXTA DE DECISIÓN

RAD. 11001220300020200151400.

Bogotá, D. C., quince (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

REF. PROCESO DECLARATIVO DE ANA RITA GUAVITA DE GUAVITA CONTRA ACERIAS CENTRALES LIMITADA Y OTROS.

Magistrada Ponente: **NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ.**

Discutido y aprobado en Sala del 3 de diciembre de 2020.
Acta No. 041

I. ASUNTO

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2019 por el Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

II. ANTECEDENTES

Ana Rita Guavita de Guavita, presentó demanda contra Acerías Centrales Ltda., Arístides Martínez Grecco, Arístides Martínez León, Luis Hernán Guavita Torres y Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., para que mediante sentencia se hagan las siguientes declaraciones:

Principales:

Declarar que es absolutamente simulado el contrato de compraventa del 100% de las acciones de la Sociedad Acerías Centrales Ltda., que fue celebrado el 5 de agosto de 2009 y el otro sí del 17 de septiembre del mismo año, entre Luis Hernán Guavita Torres (en nombre propio y de la demandante) y la sociedad Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., como vendedores y el señor Arístides Martínez Grecco, como comprador.

Se declare simulada la Escritura Pública 1401 del 25 de agosto de 2009, otorgada en la Notaría 65 del Círculo de Bogotá, contentiva del contrato de cesión que hicieron Ana Rita Guavita de Guavita, Luis Hernán Guavita Torres y la Sociedad Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., en favor de Arístides Martínez Grecco y Arístides Martínez León, del 100% de las cuotas sociales de la sociedad Acerías Centrales Ltda.

Como consecuencia, se declaren simulados los contratos de compraventa e hipotecas derivados de las negociaciones anteriores. Oficiar a la Cámara de Comercio para lo propio, respecto del certificado de Acerías Centrales Limitada y a la Notaría 65, para que tome las notas marginales en la Escritura Pública 1401 del 25 de agosto de 2009 y se dispongan las restituciones mutuas.

Primeras Subsidiarias

Declarar resuelto el contrato de compraventa celebrado el 5 de agosto de 2009 y otrosí del 17 de septiembre de hogaño, celebrado entre Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., Luis Hernán Guavita Torres (a nombre propio y de la demandante) en calidad de vendedores y Arístides Martínez Grecco, en su condición de comprador, del 100% de las cuotas sociales que los primeros poseen sobre la empresa Acerías Centrales Limitada, y se declare resuelto el contrato contenido en la Escritura Pública 1401 del 25 de agosto de

2009, a través del cual se confeccionó la cesión de las mencionadas acciones en favor de Arístides Martínez Grecco y Arístides Martínez León

Consecuentemente, ordenar las restituciones mutuas y oficiar a la Cámara de Comercio y a la Notaría 65, para que procedan a las respectivas anotaciones; condenar al demandado Arístides Martínez Grecco a pagar a favor de la demandante, la suma de $50´000.000 por concepto de cláusula penal, debido al incumplimiento del contrato de compraventa, las costas y los perjuicios ocasionados, conforme a la tasación en el acápite pertinente.

Segundas Subsidiarias

Declarar que Arístides Martínez Grecco, Arístides Martínez León, Luis Hernán Guavita Torres y Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., son responsables civil y contractualmente por incumplimiento del pago pactado en la cláusula segunda, parágrafos séptimo y noveno a favor de la demandante, en consecuencia, se le condene al pago de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante en la suma de $245´762.642,48 y al pago de las costas y agencias en derecho.

En respaldo narró, que la sociedad conyugal existente entre Ana Rita Guavita de Guavita y Luis Hernán Guavita Torres, fue disuelta mediante escritura pública 5079 del 8 de noviembre de 1989, otorgada en la Notaría 18 del Círculo de Bogotá, de la cual hicieron parte 750 cuotas de la sociedad Acerías Centrales Ltda., correspondiéndole a la demandante 375.

En conciliación celebrada el 19 de mayo de 2009 ante el centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se acordó que Luis Hernán Guavita Torres pagaría a la demandante, el 25% de la venta de la totalidad de los bienes, previa deducción de $500´000.000, en 60 meses, sin causar intereses durante el plazo, en tanto el señor Guavita Torres fuera enajenando las propiedades, por

su parte la actora, facilitaría la venta de las cuotas de Acerías Centrales Ltda.

En desarrollo de ese acuerdo, el 5 de agosto de 2009 se suscribió contrato de promesa de compraventa de la totalidad de las cuotas de Acerías Centrales Ltda., en donde Luis Hernán Guavita Torres (a nombre propio y representación de la demandante) y la sociedad Medina Reina Compañía Inversiones la Ponderosa S. en C., comprometen a transferir al señor Arístides Martínez Grecco, las 330.000 acciones que les corresponden en la sociedad Acerías Centrales Ltda., y que equivalen al 100% de las cuotas sociales. Además se comprometieron los primeros a vender y el último a comprar los bienes inmuebles con folios de matrícula inmobiliaria 50C-676591, 50C-764852, 50C-0393784, 50C-1336384, 50C-823477, pactándose como precio total de la referida venta, la suma de $3.000.000.000, pagaderos en la forma reseñada en el hecho 12 de la demanda, entre ellos, $500´000.000 que fueron cancelados a título de aras y el saldo en 60 cuotas mensuales, mediante consignación de unos porcentajes a las cuentas de cada uno de los vendedores.

La tradición de los bienes a favor del comprador se llevaría a cabo a los 8 días de la suscripción de ese convenio y se constituiría hipoteca a favor de los vendedores como garantía del pago.

Conforme a la conciliación realizada entre Luis Hernán Guavita Torres y la demandante, del saldo de esa venta, descontados los $500.000.000 le corresponden a ésta $702´867.810, representados en 60 cuotas, de los cuales se le han cancelado $507.105.167.52 adeudándole aún $195`762.642,48, en tanto que la actora "*CUMPLE con sus obligaciones, al CEDER las cuotas sociales que le pertenecen en la sociedad ACERIAS CENTRALES LIMITADA, mediante la Escritura Pública 01401 del 25 de agosto de 2009 otorgada en la Notaría 65 del Círculo Notarial del Bogotá D.C.*"

A modo de hechos específicos de la pretensión simulatoria indicó los que siguen:

La compraventa de las cuotas sociales de la empresa Acerías Centrales Ltda., junto con sus activos "*fue con el objeto de distraerlos de manera fraudulenta del acervo social objeto de LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL existente entre LUIS HERNÁN GUAVITA TORRES y ANA RITA GUAVITA DE GUAVITA y así, sustraerse a las obligaciones que les asiste, tanto a los vendedores demandados, como al comprador y así birlar, fraudulentamente los derechos de la demandante*".

Además, es simulada porque estando todos los vendedores en igualdad de condiciones se le discrimina "*para que ésta no perciba su ingreso por el 100% de la venta, atendiendo su porcentaje como propietaria de las cuotas sociales*", sino que lo limita al valor de la venta descontados los primeros $500.000.000.

Respecto de la pretensión resolutoria puntualiza que:

Está demostrado el incumplimiento del comprador en su obligación de pago, al cancelar las cuotas fuera de las fechas estipuladas y por valores incompletos "*Generándose así el derecho de la demandante para pretender la resolución del contrato de compra venta de la sociedad comercial y consecuencialmente de todos los contratos derivados del mismo*".

Frente a acción de responsabilidad civil contractual impetrada anotó que:

"*Las partes Contratantes, delanteramente, previeron el monto de los perjuicios derivados del incumplimiento de alguna de las obligaciones del contrato, plasmándolo en la CLÁUSULA DÉCIMA del adiado el 5 de agosto de 2009 a título de PENALIDAD*".

DEL TRAMITE

Admitida la demanda se ordenó la notificación de los demandados, quienes puestos a juicio replicaron las pretensiones, y

en ejercicio del derecho de contradicción plantearon las siguientes defensas.

✓ Luis Hernán Guavita Torres[1] a través del curador *ad litem* que se le designó esgrimió la excepción "*genérica*" (fls 183-186 CD 1).

✓ Acerías Centrales Ltda., Arístides Martínez Grecco, Arístides Martínez León, y la sociedad Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., de cara a la reclamación de simulación formularon las excepciones de "*inexistencia de los elementos sustanciales para la declaratoria de simulación*", "*falta de legitimación en la causa por activa para el ejercicio de la acción de simulación*", "*falta de legitimación en causa por pasiva*", "*excepción genérica*"; en lo que hace a la resolución invocada las de "*falta de legitimación en la causa por activa para solicitar las consecuencias del artículo 1546 del Código Civil*"; y en cuanto al reclamo de responsabilidad, las tituladas "*ausencia de los elementos que estructuran la responsabilidad civil contractual. Ausencia de hecho generador o de violación al deber de prestación*", "*ausencia de los elementos sustanciales y probatorios del año o perjuicio*", "*cosa juzgada frente a la solicitud de responsabilidad contractual frente a Acerías Centrales Limitada*" (fls. 198-209 Cd 1).

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado 39 Civil del Circuito, resolvió la primera instancia el 3 de diciembre de 2019, negando la totalidad de las pretensiones al estimar que las pruebas arrimadas acreditan que el negocio jurídico no fue simulado.

En cuanto a las pretensiones derivadas de la resolución del contrato, sostuvo que la demandante no se encuentra legitimada para endilgar incumplimiento en cabeza del comprador, porque ella sólo es beneficiaria de una parte del precio, por disposición de Luis Eduardo Guavita, más no fue parte en la venta.

Del mismo modo, atañedero a la responsabilidad civil contractual, fueron desvinculados de la acción los señores Arístides Martínez León, Luis Hernán Guavita Torres, sociedades Acerías Centrales Ltda. y Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S.A, porque no ostentan la calidad de compradores.

El señor Arístides Martínez Grecco, tenía a su cargo, el pago del precio de los bienes objeto de compra y conforme a las pruebas, los primeros $500.000.000,00 los entregó y de los sesenta (60) instalamentos siguientes, el primero debía pagarlo el 5 de octubre de 2009, fecha para la cual, los vendedores debieron suscribir las escrituras públicas de venta sobre los inmuebles, acto que no se cumplió, porque el predio con folio 050C-1336384, no se ha transferido, es decir, los vendedores fueron quienes incumplieron primero; no obstante, el comprador ha pagado algunas cuotas, aunque no en su totalidad.

Concluye el *a quo* que, como los vendedores incumplieron primigeniamente sus obligaciones, no pueden endilgarse al comprador, las consecuencias de la responsabilidad civil contractual.

Inconforme con lo así decidido la reclamante impetró el recurso de apelación que se examina.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

El extremo demandante mostró su conformidad con la negativa de simulación, ciñendo su disentimiento a la negativa de las pretensiones subsidiarias que, en esencia, fundó en que la única obligación de Ana Rita Guavita de Guavita en el plurinombrado contrato, era la de transferir las cuotas sociales, acto negocial que cumplió, como puede verse en la escritura número 01401 de la Notaría 65 del Círculo de esta ciudad, suscrita el 25 de agosto de 2009. Arguye que su obligación de enajenar el 25% del capital social, adquirida por la representación de su ex esposo Luis Eduardo Guavita, fue oportunamente cumplida, y por ello, el comprador se encuentra en el

deber de pagar el precio que a ella le corresponde, junto con los intereses causados.

Censura la valoración que se dio al folio de matrícula inmobiliaria 050C-1336384, porque esa venta se suscribió el 29 de diciembre de 2009 a favor de Acerías Centrales Ltda., donde actuó el demandado como representante de la empresa que le fue vendida, en ese mismo acto escriturario, se constituyó hipoteca a favor de Luis Eduardo Guavita y la Sociedad Medina Reina y Compañía, Inversiones la Ponderosa S en C.

IV. CONSIDERACIONES

1**.** Sea lo primero advertir que en el presente asunto concurren los denominados presupuestos procesales que habilitan a la Sala para emitir una decisión de fondo que dirimir la instancia. Asimismo, que la competencia de ésta se limita al examen de los puntos específicos objeto del recurso expuesto por la apelante, en aplicación a lo consagrado en el artículo 328 del Código general del Proceso, lo que excluye de facto la negativa a la declaración de simulación invocada.

2. De cara a resolver lo que corresponda, y en atención al líbelo inicial, así como al escrito de subsanación, se observa que las pretensiones se dirigieron a la declaración de simulación, resolución, o responsabilidad civil contractual, con ocasión del contrato respecto "*del 100% de las acciones sociales que los vendedores poseen sobre la Sociedad ACERIAS CENTRALES LTDA, calendado el cinco (5) de agosto de dos mil nueve (2009)", e igualmente de la "Escritura pública 1401 de veinticinco (25) de agosto de dos mil nueve (2009) otorgada en la notaría Sesenta y Cinco (65) del Círculo Notarial de Bogotá D.C. contentiva de la sesión a favor de ARÍSTIDES MARTÍNEZ GRECO y ARÍSTIDES MARTÍNEZ LEÓN del 100% de las cuotas sociales de la sociedad acería centrales limitada que se hiciera en cumplimiento del contrato de compra venta primeramente escrito".*

La acción de incumplimiento descansa en la falta de pago total del precio por el comprador, debido a que no cumplió con las consignaciones acordadas en favor de la señora Guavita de Guavita de los valores que le correspondían, lo que fuerza a examinar el vínculo negocial objeto de reproche para establecer no solo lo concerniente a la legitimación en causa sino lo tocante al acatamiento de las prestaciones a cargo de los convencionistas.

Para ello se encuentra que en el "*CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL*" actuaron como "*VENDEDORES*" Isabel Reina de Medina en representación de la sociedad Medina Reina Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C. y Luis Hernán Guavita Torres, este último en nombre propio y en representación de Ana Rita Guavita de Guavita, quienes según el certificado de existencia y representación que obra a folio 84 eran en común los titulares de las 330.000 cuotas sociales que integran el capital social de la empresa Acerías Centrales Ltda. objeto de negociación, lo que pone en evidencia que la última de las mencionadas sí tiene legitimación por activa para cuestionar dicho convenio.

Si bien en aquel negocio Luís Hernán Guavita, manifestó actuar en representación de Ana Rita Guavita "*según acta de conciliación*", lo que por sí solo no lo facultaba para asumir aquella representación, al haber concurrido ésta ante el dador de fe pública a solemnizar la trasferencia prometida ratificó el acto preparatorio que en su nombre se gestó. Y, en todo caso, al ser dueña del 0.14% de las cuotas sociales de la empresa Acerías Centrales Limitada, así no hubiera intervenido directamente, podría calificarse como un tercero relativo con un interés jurídico que la habilita para cuestionar aquellos acuerdos.

En lo que hace a la legitimación por pasiva, aun cuando la presunta falta de pago del precio concierne exclusivamente al comprador, ante la existencia de un litisconsorcio necesario entre quienes participaron en el acuerdo negocial era forzoso vincular a los

restantes participantes (vendedores), habida cuenta que a ellos se extenderían los efectos jurídicos de la declaración resolutoria.

3. Precisado ello se tiene que, a voces del artículo 1602 del Código Civil, es principio general de los contratos que estos se celebran para cumplirse, puesto que válidamente celebrado es ley para las partes y, en consecuencia, estas deben estar dispuestas a ejecutarlos efectiva y oportunamente, lo que deberán hacer de buena fe, quedando obligados no sólo a lo que reza el contrato sino también a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que la ley declare como pertenecientes a ella (art. 1603 *ib.*). Temática sobre la cual ha señalado la Corte que:

> "*bajo la égida de la libertad de estipulación de los contratantes, y conforme lo establece el canon 1546 del C.C., la parte que cumple "(…) tanto las obligaciones anteriores o simultáneas que tenía a su cargo o que se allanó a cumplirlas (…)" , está facultada para solicitar judicialmente a la contraparte inobservante, según lo estime pertinente, la ejecución de la prestación que se encuentra a su cargo, o la resolución del convenio si a ello hubiere lugar, en cualquiera de los casos, con indemnización de perjuicios. (…)*".

Fluye entonces que, ante el incumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes, quien haya cumplido o allanado a cumplir podrá reclamar judicialmente la resolución del contrato o su cumplimiento con la indemnización de perjuicios, no obstante, el demandado puede frustrar las aspiraciones, si demuestra que el actor no ha honrado sus obligaciones.

En otras palabras el canon 1546 del Código Civil, contempla que "*En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado*" y, por tanto, en tales casos podrá el contratante cumplido "*pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios*", con la premisa del artículo 1609 de la obra en cita de que "*En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos*", y bajo el entendimiento de que son contratos

bilaterales aquellos en que "*las partes se obligan recíprocamente*" (art. 1496 *ibídem*).

Lo anotado armoniza con lo expuesto el mandato del artículo 1608 *ejusdem* que enseña que el deudor está en mora "*Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora*", o "*Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla*" y "*En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor*", quedando así delimitados los supuestos en que debe entenderse incumplido el contrato por parte de alguno de los contratantes.

Ha sido constante la jurisprudencia y doctrina al indicar, que de tales postulados emergen los presupuestos indispensables para la prosperidad de la pretensión resolutoria, los que deben presentarse en forma concurrente, a saber: (**1**) la existencia de un contrato válido, (**2**) que el demandante haya cumplido, o cuando menos, haya estado dispuesto a cumplirlo, y (**3**) que el demandado haya incumplido, total o parcialmente las prestaciones a su cargo. Lo que se infiere de una interpretación armónica de las normas contenidas en los artículos 1496, 1546, 1602, 1603, 1609, 1610 y 1611 – subrogado por el art. 89 de la Ley 153 de 1887 – del Código Civil.

Entre la diversidad negocial existente está la promesa de contrato, en virtud del cual los sujetos convienen en la celebración posterior de un determinado negocio jurídico que por diversas razones no quieren o no pueden materializar de forma inmediata, sin que puedan confundirse en modo alguno, las obligaciones que del pacto preparatorio emergen con las propias del negocio prometido, aun cuando en aquel pueda anticiparse la atención de alguna de las prestación propias de este y que para su eficacia y validez debe cumplir con las exigencias dispuestas en el artículo 1611 del Código Civil, subrogado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887.

4. En el asunto que nos convoca, nota la Sala, que se confuta el convenio de 5 de agosto de 2009 y su *otrosí* de 17 de septiembre de esa calenda e, igualmente, el contenido en la escritura pública 1401 de 25 de agosto de 2009 otorgada ante la notaría 65 del Círculo Notarial de Bogotá.

4.1. Es del caso resaltar que el primero de los mencionados y su otrosí al margen de la titulación que dieron las partes de "*contrato de compraventa de sociedad industrial y comercial Ltda.*", de su contenido aflora que realmente corresponde a un contrato de promesa de compraventa del cual sólo surge la obligación de hacer que era a suscripción de los instrumentos públicos con los cuales se solemnizaran los contratos prometidos, y cumplido esto el mismo decae. Mientras que el segundo es contentivo de un negocio de cesión a título de venta de las cuotas sociales

De acuerdo con esto, bastaría para desestimar las reclamaciones de la actora indicar, que no existe discusión alguna entre las partes respecto a que la trasferencia de las cuotas sociales y de los inmuebles prometida fue formalmente cumplida por las partes, al haberse otorgado las escrituras públicas 1401, 1402 de 25 de agosto de 2009 de la Notaría 65 de Bogotá y la 6372 de 29 de diciembre de ese año de la Notaría 29 de esta urbe, incluyéndose en las dos últimas el gravamen hipotecario que garantizaría el pago total de los valores insolutos, lo que permitiría predicar el cumplimiento del negocio preparatorio, al honrarse el compromiso preacordado.

Y en lo que referente al contrato de venta contenido en la mentada escritura 1401, allí consta que la demandante cedió a título de venta las 375 cuotas sociales que poseía en la empresa Acerías Centrales Limitada "*por un valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una para un total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($375.000)*", en donde según su propia afirmación ha recibido del adquirente sumas de dinero que exceden en grado sumo el valor referenciado, lo que significaría que ninguna desatención le es imputable a su comprador.

4.2. Pero asumiendo el estudio a partir del cuestionamiento directo que hace la promotora, referido al no pago de la totalidad del valor que en la promesa se indicó se haría a su favor, tampoco podrían abrirse paso las pretensiones, por las razones que enseguida se exponen:

De la valoración razonada e integral del material demostrativo incorporado a la litis, según las reglas de la sana crítica se pueden inferir la ausencia de todos y cada uno de los presupuestos de procedencia de las acciones incoadas, pues de estos resultan hechos probados los siguientes:

4.2.1. Luis Hernán Guavita Torres celebró acuerdo conciliatorio con Ana Rita Guavita de Guavita el 19 de mayo de 2009, en el que acordaron "*aspectos relacionados con la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y con unas cuotas sociales de la sociedad ACERIAS CENTRALES LTDA*." Allí se estipuló que "*LUIS HERNÁN GIUAVITA TORRES se obliga a pagar a la señora ANA RITA GUAVITA DE GUAVITA la suma de dinero equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total (precio final de la venta de la EMPRESA ACERÍAS CENTALERS LIMITADA con sus bienes, como son la fábrica y la maquinaria y cinco bodegas que fueron adquiridas por ALBERTO MEDINA Y LUIS HERNÁSN GUAVITA TORRES, descontando la suma de QUINEINTOS MILLLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($500.000.000)*"

Igualmente se indicó, que el precio de la venta sería por $3.000.000.000, del cual se descontarían $500.000.000, y el saldo "*será afectado por el balance entre activos y pasivos corrientes. De esta cifra liquida, LUIS HERNÁNB GUAVITA TORRES pagará a la señora ANA RITA GUAVITA DE GUAVITA, el veinticinco por ciento (25%), en sesenta (60) mes, sin intereses*". Correlativamente Ana Rita Guavita se comprometió a "*participar, facilitar y aprobar el proceso de venta de la empresa ACERIAS CENTRALES LIMITADA con sus bienes, como son la fábrica y la maquinaria etc., y a autorizar la cesión de las acciones al comprador para que se formalice el proceso de venta*".

Emerge claro que mediante esta conciliación Luis Hernán Guavita se obligó para con Ana Rita Guavita a pagar un porcentaje del 25% del valor líquido que llegara a obtener por la venta de la empresa y ésta a facilitar y aprobar el proceso de venta proyectado.

Acuerdo que, conforme la ley 640 de 2001, presta mérito ejecutivo para exigir su cumplimiento forzado, salvo que la venta no se consolidara dentro de los cuatro (4) meses siguientes, como allí se determinó.

4.2.2. El 5 de agosto de 2009 se suscribió el acuerdo preparatorio entre los socios de Acerías Centrales Ltda. y Arístides Martínez Grecco, en donde además de comprometerse a celebrar los contratos de cesión de todas las cuotas sociales de esa compañía y de compraventa de los inmuebles por un monto integral de $3.000.000.000 pagaderos $500.000.000 a la firma del convenio que se recibieron a título a arras y el saldo por $2.500.000.000 pagaderos en sesenta (60) cuotas mensuales por valor de $41.666.666; precisando en el parágrafo primero, que "*el valor de las cuotas reales a pagarse mensualmente, quedarán sometidas al valor que resulte de los ajustes que se realicen después de cruzar los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa con verificación de los respectivos contadores designados por las partes*".

En el parágrafo segundo para efecto del pago se determinó que "*Sobre cada Una de las 60 cuotas pendientes, EL COMPRADOR gira y expedirá a favor de LOS VENDEDORES, letras de cambio a razón de una por cada cuota a pagar, con fecha de vencimiento al 30 de cada mes vencido el plazo de pago*". Además, que atendiendo a que el extremo vendedor estaba integrado por tres personas se acordó consignar a Isabel Reina de Medina el 50% y el restante distribuido entre Luis Hernán Guavita y Ana Rita Guavita en proporción del 25%, realizando la respectiva consignación en la cuenta bancaria de cada uno de ellos.

Si bien se indicó las fechas en que dichos pagos debían realizarse, igualmente previeron que ante la falta de pago se

reconocerían intereses a la tasa del 1%, "*pudiéndose acumular en mora hasta tres (3) cuotas mensuales, al cabo de las cuales se deberán pagar al menos dos (2) cuotas en su totalidad más los intereses*…". Sin perjuicio de la cláusula penal dispuesta en la estipulación décima del contrato en cuantía de $50.000.000 a cargo del incumplido.

En cuanto a la trasferencia de los inmuebles con folios de matrícula inmobiliaria 50C-676591, 50C-764852, 50C-0393784, 50C-1336384 y 50C-823477, vinculados a la negociación, se pactó que esta se efectuaría "*mediante sus respectivas escrituras públicas, actos que se realizarán y protocolizaran dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes"*, so pena de incumplimiento, oportunidad en la que el comprador debería constituir hipoteca en favor de sus tradentes para garantizar el pago total de la obligación a su cargo.

En el otrosí suscrito el 17 de septiembre de 2009 se modificó el parágrafo segundo que quedó del siguiente tenor:

> "*El pago de la primera cuota se efectuará el cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), por la cuantía de Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro pesos Mcte ($46.857.974.oo), resultados después de los ajustes a los que se refiere el parágrafo primero; sobre cada una de las sesenta (60) cuotas a pagar, incluida la de octubre cinco (5) de 2009 aquí descrita, el comprador girará a favor de cada uno de los vendedores de forma independiente la cantidad de sesenta (60) letras de cambio numeradas de 1 a 60, con fecha de vencimiento al 30 de cada mes, cada una por el valor del 50% de la cuota respectiva , es decir por Veintitrés Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos Veintisiete pesos M/cte $23.428.927.oo, que será anulada en la medida que se efectuó el pago respectivo a cada vendedor, y será responsabilidad de este, hacer llegar a la empresa acería centrales el título anulado una vez verificado el pago correspondiente a cada cuota*" (subraya la Sala).

Acorde con tales estipulaciones las obligaciones principales de la parte vendedora era hacer cesión de todas las cuotas sociales de la empresa Acerías Centrales Limitada y trasferir el dominio de los inmuebles, en tanto que las del comprador eran cancelar el precio de venta y respaldar el cumplimiento de los pagos diferidos con hipoteca a favor de los vendedores.

4.2.3. Se arrimó al legajo la Escritura Pública 1401 del 25 de agosto de 2009, otorgada ante la Notaría 65 del Círculo de Bogotá, en la cual se materializa la cesión de la totalidad de las cuotas sociales de la empresa Acerías Centrales Ltda., a título de venta, siendo cedentes Ana Rita Guavita de Guavita, Luis Hernán Guavita Torres y Medina Reina & Cía. Inversiones La Ponderosa S en C. y cesionarios, los señores Arístides Martínez Grecco y Arístides Martínez León. En ese acto negocial, la actora cedió 375 cuotas correspondientes al 0.14% de la participación, mientras que Luis Hernán Guavita Torres 164.625 correspondientes al 49.86% y Medina Reina y Cía. Inversiones La Ponderosa S. en C. el 50.00% para un total del 100%.

4.2.4. Los certificados de tradición adosados al sumario reflejan que la trasferencia de los inmuebles se dio así (a) 50C-676591[2], 50C-764852[3], 50C-0393784[4], 50C-823477[5] el 25 de agosto de 2009 con escritura pública 1402 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.; (b) y 50C-1336384[6] el 29 de diciembre de 2009 con Escritura 6372 de la Notaría 29 de esta ciudad. Y, sobre éstos, en las mismas fechas se constituyó hipoteca a favor de los vendedores a efectos de garantizar las cuotas del precio pendientes de pago.

4.2.5. En los interrogatorios de parte recibidos por el *a quo*, la demandante no dudó al afirmar que el negocio sí se realizó, y ella cumplió el acuerdo conciliatorio realizado con su ex esposo Luis Eduardo Guavita Torres, en el entendido de hacer los trámites necesarios y permitir la venta de las cuotas sociales de la empresa Acerías Centrales Ltda., pero el demandado le adeuda un saldo del precio.

Luis Eduardo Guavita Torres indicó que, por decisión propia, autorizó al comprador para que mensualmente consignara a órdenes

---

[2] *Anotación 13.*
[3] *Anotación 7*
[4] *Anotación 10*
[5] *Anotación 6*
[6] *Anotación 6*

de la demandante un porcentaje determinado, pero ella no fue parte de ese negocio. Precisó que Arístides Martínez Grecco cumplió con el pago de las cuotas mensuales, pero luego las suspendió, porque la demandante inició otro proceso imponiendo medidas cautelares sobre los inmuebles, culminado éste, se dedujo el monto de las costas y continuó el pago de los instalamentos, aún se encuentran pendientes de pago varias cuotas.

5. La demandante pretende que se declare resuelto tanto el contrato de promesa como el de compraventa de las acciones que transfirió a favor del demandado, al considerar que no dio cumplimiento al pago de las sesenta (60) cuotas mensuales, pues, únicamente cumplió con 46, quedando pendientes 14, lo cual le ha generado perjuicios y, como consecuencia, solicita se condene al contratante incumplido al pago de la cláusula penal.

5.1. De lo precedentemente reseñado y del marco conceptual expuesto, surge incontestable que la negativa a las pretensiones era la decisión llamada, puesto que si bien se puede predicar la existencia de un contrato válido que satisface el primer presupuesto de la acción resolutoria, esto no resulta suficiente ante la ausencia de los restantes.

Ello, por cuanto el compromiso de pagar a la actora un 25% del valor liquido de la venta, descontados los primeros $500.000.000,oo, cuando su participación accionaria no superaba el 0.14% correspondió a un adeudo individual de su ex cónyuge para dirimir las diferencias existentes entre ellos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal por ellos conformada, quien se comprometió a dicho pago, condicionado a la celebración efectiva de la venta de la empresa Acerías Centrales Limitada, amen que al haberse pactado un precio integral por esta (acciones, maquinarias, inmuebles), en favor de todos los asociados el crédito en favor de cada uno ascendería legalmente al monto de sus respectivos aportes, de suerte que competía a la actora demostrar que el comprador no le canceló la suma que por ley le correspondía, lo que no acaeció, puesto que la misma indicó que se le han pagado

$507.105.167.52, que alcanzaría aproximadamente un 20.29%, lo que excede el porcentaje de participación que tenía en el ente social.

En tal medida, si se predicara algún incumplimiento en cuanto al porcentaje que debía recibir la actora del precio de venta este es pregonable del acuerdo conciliatorio que ajustó con su excónyuge, y no del precontrato de venta de la empresa Acería Centrales Limitada que se firmó con Arístides Martínez Grecco y, mucho menos, de las sociedades Medina Reina y Compañía Inversiones La Ponderosa S. en C., y Acería Centrales Limitada, toda vez que la participación de una en la negociación fue de enajenante de sus derechos, sin que en tal condición asumiera obligación de pago en favor de la señora Guavita, y la otra fue en sí misma "*objeto*" del contrato y de suyo constituye una persona distinta a los socios salientes o entrantes individualmente considerados que fueron los participantes a título personal del negocio jurídico.

5.2. A esto se suma que, aun haciendo abstracción de lo anterior, en lo relativo al pago del precio, si bien se indicó que el comprador haría consignaciones por el valor de las cuotas en las cuentas bancarias de los vendedores la acción resolutoria no se aviene como consecuencia ineludible de su no realización, toda vez que pese a ello este puede tenerse como debidamente cumplido, en virtud a que según se describe en el parágrafo segundo del *"otrosí"* del contrato, el comprador debía entregar sendas letras de cambio por el valor de cada instalamento en favor de cada vendedor, comenzando la primera el 5 de octubre de 2009 (fl. 19), previa transferencia de los inmuebles a que alude en la cláusula sexta, con el compromiso de estos de restituirlas a medida que se fueran descargando, lo que a voces del artículo 882 del Código de Comercio resulta valido como pago lo que, en línea de principio, desvirtuaría tal atestación, salvo que se den los precisos supuestos que la norma indica.

Obsérvese que la mentada disposición es inequívoca al señalar que:

> ***ARTÍCULO 882. PAGO CON TÍTULOS VALORES.*** *La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago de ésta si no se estipula otra cosa;* ***pero llevará implícita la condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera****.*
>
> *Cumplida la condición resolutoria, el acreedor podrá hacer efectivo el pago de la obligación originaria o fundamental, devolviendo el instrumento o dando caución, a satisfacción del juez, de indemnizar al deudor los perjuicios que pueda causarle la no devolución del mismo.*
>
> *Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año.*

En ese orden, ninguna manifestación se hizo en cuanto a que no se hubieran expedido los títulos valores, lo que apareja que se presuma su cumplimiento y, de contera, que para habilitar la acción resolutoria se impusiera la carga de devolver los instrumentos, u ofrecer caución para garantizar eventuales perjuicios, amen que con estos sería viable el ejercicio de la acción cambiaria para procurar su descargo, lo que aquí no se dio, de tal manera que devendría infructuosa la pretendida resolución, al no acreditarse fehacientemente la desatención del comprador de las obligaciones que le son inherentes, máxime que, en todo caso, de acuerdo con lo declarado por el señor Guavita Torres la interrupción del pago obedeció a una acción ejecutiva previa que la actora instauró, y en la que se cautelaron los inmuebles, pero que al finalizar se reanudaron.

5.3. Respecto del tercer presupuesto, esto es, que el demandante haya cumplido, o cuando menos, haya estado dispuesta a cumplir, carece de relevancia el reproche que hizo el recurrente frente la atención debida de los compromisos por parte de la actora, habida cuenta que, como ya se vio, los presupuestos de la acción resolutoria son concurrentes y ante la insatisfacción de cualquiera de ellos su reclamación resulta infértil, y dado que en este asunto no se demostró un incumplimiento culposo del comprador es suficiente para negar las

pretensiones, sin que resulte necesario evaluar la conducta negocial particular de la actora. Lo que da al traste con dicha reclamación.

6. En lo atinente a la pretensión de responsabilidad civil contractual se ha dicho, que para su prosperidad el demandante estará llamado a acreditar la existencia de los siguientes supuestos: *«i) que exista un vínculo concreto entre quien como demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquél que, señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa (existencia de un contrato); ii) que esta última consista en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo (incumplimiento culposo), iii) y en fin, que el daño cuya reparación económica se exige consista, básicamente, en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante habría tenido derecho (daño) de no mediar la relación tantas veces mencionada (relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño)»* (CSJ Sent. SC380-2018 de 22 de feb. de 2018, Exp. 2005-00368-01, reiterada SC5170-2018 de 3 de dic, Exp. 2006-00497-01).

Para el decaimiento de la pretensión indemnizatoria basten los argumentos anteriores, amen que, al no haberse demostrado el incumplimiento injustificado y culposo del comprador de los deberes a su cargo, no le es imputable la comisión de un hecho dañoso derivado de este, que le imponga la obligación de indemnizar los perjuicios reclamados.

Resalta la Sala, que las partes coinciden en afirmar que el acuerdo aún está vigente y en ejecución, los compradores se encuentran pagando parte de las cuotas pactadas y sobre los bienes inmuebles transferidos, recaen gravámenes hipotecarios que garantizan el cumplimiento de esa obligación dineraria.

7. Así las cosas, carecen de asidero los reparos traídos por el apelante contra la sentencia de primer grado, razón por la cual, deberá confirmarse la decisión de instancia, pero, por las razones expuestas en la presente sentencia.

8. Lo anterior, conlleva a la natural imposición de condena en costas de segunda instancia, las que correrán a cargo del extremo recurrente ante el fracaso de su apelación (art. 365 del C.G.P.).

V. DECISIÓN

Por lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Sexta Civil de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 03 de diciembre de 2019, emitida por el Juzgado 39 Civil del Circuito dentro del proceso adelantado por Ana Rita Guavita de Guavita contra Arístides Martínez Grecco y otros, conforme a lo explicado en precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte demandante. La Magistrada ponente fija como agencias en derecho la suma de $1.600.000. Liquídense oportunamente.

TERCERO: Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

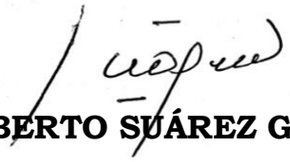
Notifíquese y Cúmplase



NANCY ESTHER ÂNGULO QUIROZ

Magistrada

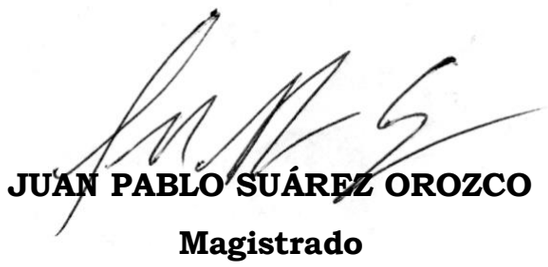
(39201600639 01)



LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ

Magistrado

(39201600639 01)



JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO

Magistrado

(39201600639 01)

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-039-2014-00190-04
Asunto: Declarativo
Recurso. Apelación Auto
Demandante: Pedro León Muñoz Carreño.
Demandados: Orlando Martínez Muñoz y Constructora e Inmobiliaria Pasadena S.A.S.

Decídese el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jhon Jairo Gil Vaca frente a la decisión de regular como honorarios a su favor la suma de $1'000.000.oo, proferida en audiencia del 9 de julio de 2020, dentro del trámite del incidente de regulación de honorarios que aquel adelantó contra Pedro León Muñoz Carreño.

ANTECEDENTES

1. El proveído opugnado tasó los honorarios, a favor del profesional del derecho que actuó como apoderado del señor Muñoz Carreño (demandante), en un millón de pesos ($1'000.000.oo) m/cte., resultantes de aplicar el 20%, pactado entre las partes, a la suma de $5'000.000.oo que recibió el actor en la transacción realizada con su contendora -Constructora e Inmobiliaria Pasadena S.A.S.-, pues no se evidencia que el actor haya recibido algo más. Así mismo, condenó en costas al incidentado fijando el monto de $100.000.oo como agencias en derecho dentro de ese trámite.

2. Oportunamente el incidentante recurrió esa decisión, en apelación, pidiendo aumentar el importe total de los honorarios a su favor, porque, en su criterio, desatiende las prescripciones del artículo 76 del C.G.P, toda vez que el juez debió tener en cuenta los criterios para la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo a la gestión realizada por el togado dentro del proceso y no a la cuota *litis* pactada con su poderdante. Además, indica que la posición jurídica del demandante mejoró gracias a las actuaciones surtidas por él, lo que debe reconocerse al momento de fijar la contraprestación por su gestión, pues el contrato de compraventa firmado con el demandado Orlando Martínez Muñoz fue anulado.

3. El incidentado, en la réplica a la impugnación, solicitó confirmar el proveído recurrido, aduciendo, en esencia, que no es cierto que su situación jurídica haya mejorado durante el proceso, incluso fue condenado a restituir un dinero, determinación que después fue revocada por *ad-quem*. Además, aduce que el incidentante debió probar lo dicho en cuanto a lo recibido por su mandante y sobre lo que pretende sus honorarios.

4. El A quo, concedió la alzada, que ahora es objeto de decisión, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Dentro del trámite incidental para la regulación de honorarios al apoderado judicial a quien se le ha revocado el poder, el monto se determina tomando como base el respectivo contrato y los criterios señalados en el código procesal para la fijación de las agencias en derecho (art. 76 del C.G.P).

A su vez, para esa tasación deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, y si éstas fijan únicamente un mínimo, o éste y un máximo, habrá de tomarse en consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la

cuantía del asunto y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichos rubros (art. 393 núm. 3° del C. de P. C., y 366 núm. 4° del C.G.P.).

2. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reguló las tarifas de agencias en derecho propias de los procesos judiciales en el Acuerdo 1887 de 2003 -aplicable al caso por haberse formulado la demanda antes del 5 de agosto de 2016[1]-, el cual estableció para la primera instancia de los litigios ordinarios que en los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o ésta sea solamente declarativa*, "se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes*" (parágrafo, art. 4º).

3. Entonces, en este caso, entre el apoderado y su representado se suscribió un contrato de prestación de servicios donde se pactó la forma de pago, por medio del sistema de la cuota litis, así: a) en el evento en que se llegue a un acuerdo judicial o extrajudicial, mediante conciliación o transacción, si hay entrega de bienes o dinero el 20% sobre el valor de los mismos y b) si el bien es recuperado el 20% sobre los derechos de posesión.

Por ende, resulta procedente estipular si los parámetros determinados por La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fueron escrutados al momento de tasar las agencias en derecho dentro del trámite incidental, tomando, en consideración la naturaleza del asunto, la calidad, el tiempo de la labor desplegada por el mandatario del extremo activo, así como el contrato de servicios profesionales suscrito entre ellos.

4. Acá, la gestión del abogado se dio desde la presentación de la demanda y hasta que fue aceptada la revocatoria del poder el 14 de enero de

[1] El artículo 7° del Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016, prevé que su vigencia comienza "*a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha*", la demanda se presentó el 20 de marzo de 2014.

2019 -aproximadamente 4 años y casi 12 meses-, lapso dentro del cual aquel participó en las actuaciones siguientes: envío de citatorios para notificar a los demandados, descorrer el traslado de las excepciones de mérito, asistir a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 101 del CPC, donde por demás, el proceso frente a la inmobiliaria terminó, atendiendo a la transacción suscrita entre ésta y el actor, prosiguiendo el trámite respecto al otro convocado, por lo dicho profesional estuvo en la etapa probatoria e interpuso recursos. Faltando solamente la presentación de alegatos y sentencia para terminar su encargo en la primera fase.

Adicionalmente, lo anterior requirió la vigilancia del proceso, gestión que, indiscutiblemente, debe ser compensada[2], pues el apoderado estuvo atento a todo cuanto pudiera suceder en el mismo.

Así, en este caso se tiene, por un lado el porcentaje acordado en el contrato de prestación de servicios y por el otro la terminación del proceso frente a la Constructora e Inmobiliaria Pasadena S.A.S por transacción, donde el mandante recibió $5'000.000 y la sentencia favorable al incidentado a la pretensión de nulidad del contrato de promesa de compraventa sobre los derechos de posesión firmado con Orlando Martínez Muñoz.

5. En suma, atendiendo a la gestión positiva por parte del abogado, el acuerdo al que se llegó con uno de los demandados para terminar anticipadamente el litigio, las resultas del mismo por medio del cual se logró declarar la nulidad de la otra promesa de compraventa sobre los derechos de posesión y el monto máximo que se puede tasar en casos como este, según el Acuerdo citado, resultaría procedente ajustar los honorarios para reconocerle al togado la suma de $8'778.000, correspondientes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. En esos términos, se modificará la tasación de las agencias en derecho dentro del trámite incidental de regulación de honorarios.

---

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 5 de marzo de 2010, exp. 2000-23975-01, en el que se reiteran los proveídos de 25 de agosto de 1998, exp. 4724; 27 de septiembre de 1999, exp. 5180; 24 de junio de 2004, exp. 7843, y 5 de abril de 2006, exp. 1996-05893, entre otros.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

Primero.- MODIFICAR el auto opugnado, en el sentido de regular los honorarios a favor Jhon Jairo Gil Vaca y a cargo del incidentado, en la suma de ocho millones setecientos setenta y ocho mil pesos ($8’778.000.oo) m/cte.

Segundo.- Oportunamente, **devolver** la actuación a la oficina de origen, previas las constancias de rigor.

Sin costas en la instancia, ante el éxito parcial de la alzada.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARON
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Radicado: Divisorio No. 11001 31 03 040 2018 **00302** 01
Proceso: Angie Milena García Ríos y otros *vs.* Janeth Sierra Pineda y otros.
Asunto: **Apelación de auto que decretó venta de la cosa común.**

1. Se resuelve la apelación subsidiaria interpuesta por la parte demandada contra el auto de 17 de septiembre de 2020, proferido por el Juzgado 40 Civil del Circuito, mediante el cual decretó la venta en pública subasta del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 50N-510389.

2. Para dar solución, es preciso destacar que en el expediente digital obra copia del folio de matrícula inmobiliaria del predio ubicado en la Calle 128A bis No. 88B-11 de Bogotá, documental que verifica que Angie Milena García Ríos, Brayan Yesid García Ríos y Gress Glenis García Ríos *(demandantes),* como Janeth Sierra Pineda, Juan José García Sierra y Manuela García Sierra *(demandados)*, son los condueños del referido predio, quienes se hicieron del dominio común por la adjudicación de la sucesión de Manuel Antonio García Lozano, cuyo trabajo de partición que fue aprobado y protocolizado se encuentra en el expediente.

3. En relación con los reparos expuestos en la apelación, se precisa:

3.1. Frente a la demanda de pertenencia que actualmente cursa en el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá (exp: 2013-00243), se destaca que en el certificado de matrícula inmobiliaria aparece anotada la medida

cautelar de inscripción de demanda de esa actuación, anotación fechada el 21-10-2013, con fundamento -según allí se lee- en oficio de 03-08-2013, proveniente del "JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ".

Al respecto, hay que reseñar que si la medida cautelar de inscripción de la demanda no saca los bienes del comercio (art. 591 Cgp), forzoso resulta concluir que tampoco puede impedir que los comuneros, no estando obligados a permanecer en la indivisión, demanden que se ponga fin a la comunidad en la forma en que proceda, como en este caso, que demandaron la división *ad valorem*.

No sobra indicar que el proceso en que se decretó dicha cautela no ha tenido resultado positivo desde luego que por lo menos hasta julio de 2018 -cuando se expidió el último certificado de tradición que obra en el expediente-; tampoco aparece registrada sentencia alguna que declare una pertenencia, a más de que, con apoyo en la herramienta tecnológica "Consulta siglo XXI", en el aludido proceso aún no se ha proferido sentencia de primera instancia.

De todas maneras la supuesta "posesión" que los aquí demandados invocaron en la usucapión no puede establecerse a partir de la inscripción de la demanda de pertenencia.

Esa "posesión" que no está demostrada de manera fehaciente en este trámite, y de la cual obviamente tampoco se conocen sus alcances y efectos, no puede impedir el decreto de división por venta, sin perjuicio de la incidencia que sobre la subasta llegaran a tener eventuales trámites que al respecto pudieran sobrevenir. Por lo demás, de las pruebas hasta ahora acopiadas no surge de modo irrefutable y al margen de toda duda

razonable, que en verdad el inmueble o parte de él esté bajo posesión de algunos de los condóminos.

Bajo esa línea, esta Corporación acoge de forma íntegra el contenido de la aludida certificación registral, esto es, la atestación del organismo de instrumentos públicos dando cuenta de la existencia del predio y que sirve al propósito de determinar que los propietarios actuales del inmueble son los sujetos acá enfrentados y en las porciones allí establecidas, situación que, según se indicó en precedencia, no logró refutarse; y no está de más aclarar a la parte apelante que, en principio, el dominio ostenta un carácter perpetuo pues no lleva ínsita una causal de extinción de las prerrogativas que confiere, entre ellas, la derivada de que al condueño no pueda obligársele a permanecer en la indivisión, así que, en consonancia con lo discurrido, mal puede argüirse que los actores no tienen la facultad para solicitar la división de la cosa.

3.2. Por otra parte, se repara en que '*los demandantes prevalidos de maniobras engañosas recurrieron al proceso divisorio para obtener un derecho patrimonial ilícito en detrimento de los intereses económicos de la parte demandada*'.

Sobre el punto se cuestionan los porcentajes en que fue adjudicado el inmueble, en específico las porciones que correspondieron a Angie Milena García Ríos, Brayan Yesid García Ríos y Gress Glenis García Ríos; no obstante, la publicidad de los actos que se encuentran registrados en la tradición del predio gozan de la presunción de legalidad hasta tanto no se demuestre lo contrario por decisión de autoridad judicial.

En este caso para fundamentar la alegada irregularidad no se trajo ninguna prueba con la que se demuestre que el registro de la sucesión de

Manuel Antonio García Lozano fue invalidado por sentencia que se encuentre ejecutoriada.

Por ende, los argumentos no sobrepasaron el propio dicho de quien apeló la decisión impugnada, que por obvias razones no logra la revocatoria de la providencia.

3.3. Frente a los presuntos vicios y falsedades que se alegan sobre el avalúo rendido por Orlando Parra Medina (se dice que no inspeccionó el predio, por cuanto no ingresó al mismo) y que se han interpuesto denuncias penales, basta decir que esa prueba fue aportada con la demanda en cumplimiento de lo previsto en el inciso 3 del artículo 406 del Cgp[1], pero la misma no fue tenida en cuenta por el a-quo en la decisión apelada, comoquiera que oficiosamente decretó la práctica de un nuevo dictamen que fue rendido por Rahab Giovanni Rico Escobar, y éste último fue acogido en punto al valor sobre el cual debe hacerse la pública subasta, aspecto que no fue objeto de reproche. (Art. 328 Cpg)

Así entonces, al margen de la configuración o no de tales 'falsedades', lo cierto es que el primer avalúo en su momento sirvió para cumplir con el presupuesto procesal, a pesar de que no fuera atendido por la falladora. Pero es que incluso, el reparo no tiene ningún tipo de incidencia para que se trunque la orden de remate, habida cuenta que en este tipo de procesos es el pacto de indivisión, que debe ser alegado, el único obstáculo actual para que se disponga la división.

Que se determinó la competencia con un dictamen falso es un aspecto que debió discutirse formulando excepciones previas. Ante todo, el

[1] "En todo caso el demandante deberá acompañar un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división que fuere procedente, la partición, si fuere el caso, y el valor de las mejoras si las reclama"

certificado de catastro del predio informa que para el 2018 el inmueble tenía un avalúo de $270.348.000 (página 126 del expediente digitalizado), monto que ajustaba la actuación a la mayor cuantía, casos que son asumidos por los jueces civiles de categoría circuito.[2]

3.4. Finalmente, se propone una ‘nulidad constitucional del pleno derecho’ que se sustenta en no haberse ordenado las pruebas pedidas en la contestación de la demanda (oficiar al Juzgado 49 Civil del Circuito y el interrogatorio de parte de los demandantes), pero debe recordarse que el proceso divisorio está sometido a unas reglas especiales que lo diferencian de las demás actuaciones.

Nótese que la actividad de contradicción que puede desplegar el extremo demandado una vez es notificado, se circunscribe a: (i) aportar un nuevo dictamen pericial en caso de no estar conforme con el adosado con el libelo, o pedir que el experto sea citado a interrogatorio; y (ii) alegar la existencia de un pacto de indivisión. Es decir, no está previsto el campo probatorio dispuesto para la mayoría de las contiendas civiles, como parece entenderlo el apelante; de suerte que si no se decretaron y practicaron los elementos de juicio pedidos es porque no eran procesalmente viables[3], argumentos que son suficientes para desestimar la nulidad propuesta a modo de reproche en contra de la decisión impugnada.

4. En suma, no se revocará el auto atacado.

DECISIÓN

---

[2] Numeral 1 del artículo 20 Cpg. En consonancia con el numeral 6 del artículo 26 ibídem.

[3] De todos modos nótese que el a-quo sí dispuso oficiar al Juzgado 49 Civil del Circuito para indagar sobre el proceso de pertenencia, pero esa prueba no se obtuvo por la falta de actividad de las partes en punto a su recaudo.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, **CONFIRMA** el auto apelado, proferido el 17 de septiembre de 2020 por el Juzgado 40 Civil del Circuito.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
Radicado: 11001 3103 040 2018 00302 01

Firmado Por:

GERMAN VALENZUELA VALBUENA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 019 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
102f77852f358c5b8b270ea86753be9b4122b3e65a2b45acdfdf2441161129cd
Documento generado en 16/12/2020 04:25:12 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	EJECUTIVO
DEMANDANTE	**:**	CEPAIN IPS S.A.
DEMANDADO	**:**	MEDIMAS EPS S.A.S.
RADICACIÓN	**:**	1100131 03 040 2020 00337 01
DECISIÓN	**:**	**CONFIRMA**
FECHA	**:**	16 de diciembre de 2020

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra del auto de veintiséis (26) de octubre de 2020, mediante el cual el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá denegó el mandamiento de pago solicitado en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES:

Por intermedio de apoderado judicial, CEPAIN IPS S.A. presentó demanda ejecutiva contra MEDIMAS EPS S.A.S., con el fin de obtener de este el pago del saldo de las obligaciones contenidas en las facturas No. CEPA85592, No. CEPA86132 y No. CEBS126, correspondiente a $1.361.062.076.

Mediante el auto apelado el Juzgado de conocimiento negó la ejecución deprecada; decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación.

FUNDAMENTOS DEL AUTO APELADO:

El Juzgado negó el mandamiento por considerar que, tratándose de facturas de prestación de servicios de salud, el titulo ejecutivo es de carácter complejo, conforme a la regulación prevista en el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social, sin que se hubieran acompañado en este caso la totalidad de los documentos necesarios para proceder con la ejecución de las obligaciones cuyo cobro ejecutivo se persigue.

ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE:

Expuso que, conforme la evolución normativa reflejada en la Ley 1231 de 2009, las facturas no deben dar cuentas de que los servicios facturados han sido efectivamente prestados. Añadió que resultaría contrario al requisito de autonomía de los títulos valores exigir la demostración del cumplimiento efectivo del negocio causal. Ambas circunstancias ponen en evidencia que la interpretación dada por el *a quo* a la normativa citada en la providencia resulta contraria a los principios de los títulos valores y a la finalidad de la Ley 1231 de 2008.

Adicionalmente, se cuestionó que no se hubiera tenido en cuenta que durante el término para rechazar o glosar las facturas la demandada hubiera guardado silencio, a pesar de que ello resultaba suficiente para concluir que aquella había recibido los servicios facturados.

Por último, manifestó que aportaba las historias clínicas que daban cuenta de la efectiva prestación de los servicios médicos facturados, de tal forma que se continúe con la ejecución.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:

De cara a resolver el recurso propuesto, sea lo primero señalar que no resulta viable valorar las pruebas aportadas por la demandante al momento de proponer el recurso. Lo anterior, pues es sabido que todos los documentos que integran el título valor deben acompañarse con la demanda, sin que resulte viable subsanar dicha falencia con ocasión de la impugnación del auto que niega el mandamiento de pago, en tanto que no se trata de una oportunidad probatorio. Debido a lo anterior, el estudio se adelantará sin consideración a dicha documentación y solo con las pruebas oportunamente allegadas (art. 164 del C.G.P.).

Ahora bien, en lo tocante a la objeción presentada relativa a que el *a quo* impuso exigencias respecto del título valor contrarias a la regulación en la materia y los principios de dichos documentos negociables, el Despacho considera que no le asiste razón al apelante.

En efecto, la exigencia establecida por el fallador de primer grado cuenta con pleno sustento normativo en las diversas reglas que regulan la factura expedida por la prestación de servicios de salud. Tratándose del cobro de una I.P.S. a una E.P.S. por la prestación de servicios de salud a los afiliados de esta última, existe una regulación especial que debe cumplirse, según lo determina el artículo 13 (literal d) de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 21 del Decreto 4747 de 2007.

Es por ello que, en estos casos, debe recurrirse a las normas de la seguridad social que regulan la materia, en relación con las cuales se ha reconocido que “*establece[n] requisitos totalmente ajenos al estatuto comercial que se ocupan de los anexos, términos de presentación, glosas y condiciones de pago, todos vinculados a la*

dinámica auténtica del SGSSS"[1], premisa que dio lugar a que se apuntara "*que la factura de que trata la regulación en salud, esta despojada de cualquier mérito ejecutivo como título valor, al igual que como título ejecutivo si se le considera de manera aislada de los condicionamientos legales especiales del sector ya referenciados*"[2].

Todo lo anterior traduce que, en tratándose de facturas de cobro por la prestación de servicios de salud entre una I.P.S. y una E.P.S., existen una serie de condiciones que deben agotarse entre ellos para que luego se proceda al pago, aspectos ajenos a las características propias de la factura cambiaria regulada netamente por la normatividad del derecho comercial.

No se trata de una doctrina aislada, sino que aquella fue acogida en sede de tutela por la Corte Suprema de Justicia, que en relación con el cobro ejecutivo de dichos documentos, ha explicado que "*las normas comerciales deben interpretarse, armónicamente, con las regulaciones especiales impuestas por el ordenamiento jurídico*"[3], lo que de suyo supone que el estudio en estos casos no se limita a las reglas que regulan los títulos valores en la legislación mercantil, como lo aduce en su escrito la recurrente.

Por el contrario, las facturas por la prestación de servicios de salud están sometidas a una extensa regulación legal y administrativa para su cobro, dado que necesariamente se ven sujetas a agotar plazos para el trámite de objeciones, glosas y el cumplimiento de una serie de requisitos reglamentados por el Ministerio de Protección Social, de allí que no puedan reputarse estrictamente como títulos valores ya que hay aspectos diferentes

---

[1] Salvamento de voto de la totalidad de los Magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto de la decisión de Sala Plena de 23 de marzo de 2017 (APL2642-2017), en la que se dirimió el conflicto de competencia identificado con Rad. No. 11001023000020160017800.
[2] Ibíd.
[3] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de Tutela 10 de febrero de 2020. No. STC-1098 de 2020. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

que desbordan el ámbito de la ley mercantil que regula esos instrumentos cambiarios.

En efecto, del mencionado artículo 13 (literal d) de la Ley 1122 de 2007 se colige que el legislador reconoció al Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), la potestad de expedir la reglamentación en punto de la forma y los tiempos de presentación, recepción, remisión y revisión de facturas, glosas y respuesta a las glosas y pagos e intereses de mora.

A su vez, de la lectura de los artículos 21 y 22 del Decreto 4747 de 2007, se colige que también se encargó a dicho Ministerio para que regulara todo lo relacionado con las glosas, devoluciones, respuestas y pago de las facturas que una I.P.S. le presenta a una E.P.S. para que ésta le pague a aquélla en razón a la prestación de servicios de salud.

A ese respecto, en la Resolución No. 3047 del Ministerio de la Protección Social (modificada por la resolución 416 de 2009), se estableció cuáles son los soportes que se deben acompañar a las facturas de prestación de servicios para su cobro (art. 12). Se dijo que aquellos serían "*como máximo los definidos en el Anexo Técnico No. 5*", en que se estableció un "*listado estándar de soportes de facturas*" dependiendo del tipo de servicio y el mecanismo de pago (literales b, c y d). De manera general para el mecanismo de pago por evento, que fue el acordado en el contrato celebrado por las partes[4], se requiere que se acompañen como soportes de la factura, entre otros, los siguientes: i) detalle de cargos; ii) autorización; iii) comprobante de recibido del usuario; iv) orden y/o fórmula médica; y, v) recibo de pago compartido.

[4] Contrato No. DC-1962-2017 de prestación de servicios de salud del plan beneficios de salud modalidad pago por evento suscrito entre MEDIMAS y el CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL IPS SAS – sigla CEPAIN SAS— régimen contributivo.

Verificada la documentación acompañada con la demanda ejecutiva, se echan de menos los documentos requeridos por la normativa antes expuesta. En efecto, la demandante únicamente trajo al proceso las facturas presentadas ante MEDIMAS, los soportes de su radicación y el contrato junto con sus otrosíes y anexos técnicos.

Así las cosas, es claro que no se encuentran reunidos los requisitos que demandan las facturas derivadas de la prestación de servicios de salud para su ejecución, pues sin los soportes que se deben adjuntar, conforme a la Resolución No. 3047 del Ministerio de la Protección Social, no es viable reconocerles mérito ejecutivo.

Y es que, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, resulta razonable que se exijan mayores requisitos para la ejecución de estas facturas, en la medida en que involucran la disposición de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que están destinados a la garantía de prerrogativas *ius* fundamentales de los ciudadanos. En palabras del Alto Tribunal estas mayores exigencias se explican "*por el interés público del servicio de "salud", en el cual, las relaciones derivadas de su prestación no son de naturaleza meramente mercantil, por el contrario, buscan hacer efectivo el derecho fundamental a la "salud" de la colectividad*"[5].

En consecuencia, se confirmará la providencia apelada, debido a que la negativa del mandamiento ejecutivo se fundó en una adecuada aplicación de la normativa que regula las facturas derivadas de la prestación de servicios de salud.

[5] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de Tutela 10 de febrero de 2020. No. STC-1098 de 2020. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. – Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de veintiséis (26) de octubre de 2020, mediante el cual el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá denegó el mandamiento de pago.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE,



LIANA AIDA LIZARAZO V.
Magistrada.

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ac3bab503ceba7e579ebc47e2e19214bf52434766b8fcfce6bbea67c235d91d0**
Documento generado en 16/12/2020 03:14:02 p.m.

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicado:	**11001-3103-041-2007-00629-03**
Asunto:	Responsabilidad Civil Contractual.
Recurso:	Casación
Accionante:	Juan Carlos Ramos Buitrago.
Accionando:	Radio Taxi Aeropuerto S.A. y otro.

Al tenor de los artículos 339 y 341 (inciso tercero) del Código General del Proceso, la Magistrada Sustanciadora decide sobre la concesión del recurso de casación propuesto por la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A. -demandada- contra la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de noviembre de 2020, en el juicio citado en la referencia.

Para resolver,

SE CONSIDERA

1. Además de la tempestividad, la procedencia del recurso de casación pende de la naturaleza de la sentencia, pues son susceptibles del aludido medio impugnatorio aquellas dictadas por los Tribunales Superiores para dirimir la segunda instancia en toda clase de procesos declarativos y en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, como también, las tendientes a liquidar la condena en concreto, y las que versan sobre declaración de unión marital de hecho, e impugnación o reclamación del estado civil.

Adicionalmente, resulta relevante la legitimación, como quiera que sólo puede acudir a este recurso extraordinario quien apeló en primera instancia o adhirió a la apelación de la otra parte, claro, si el fallo del Tribunal refrenda íntegramente la decisión de primer grado, pues en caso de que, por el contrario, hubiese revocado aquélla, también tendría legitimación la parte triunfante en primera instancia.

Por último, está el concepto del interés para recurrir en casación, alusivo al monto de las resoluciones desfavorables para el recurrente y cuantificado por el legislador como mínimo en 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, factor que conforme al artículo 338 del Código General del Proceso, se excluye "*cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil*".

2. En el caso en cuestión, la providencia censurada es susceptible del recurso de casación, toda vez que fue dictada por este Tribunal, en segunda instancia, dentro de un juicio de carácter declarativo, en tanto versó sobre la declaración de responsabilidad civil de los demandados por el daño irrogado al actor en un accidente de tránsito.

Dicho recurso extraordinario, además, fue interpuesto por Radio Taxi Aeropuerto S.A., el día 19 de noviembre de 2020, es decir, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del aludido fallo, surtida en el estado electrónico de 11 de noviembre de 2020 -E-123-, a lo que se suma la legitimación del recurrente, en tanto no sólo ostenta la condición de demandado, sino que el fallo afecta sus intereses económicos, puesto que lo declaró civil y solidariamente responsable del daño irrogado a la víctima y lo condenó a indemnizarla, sin que le prosperara la alzada formulada frente a la sentencia de primer grado.

La resolución desfavorable al aquí recurrente se contrae al monto de la indemnización impuesta como condena para resarcir el daño a su contendor, la cual ascendió a $1.118.698.429.09 (lucro cesante, daño a la vida en relación y perjuicio moral), cifra que supera ampliamente los 1.000 salarios mínimos legales mensuales

vigentes para la fecha en que fue proferida la sentencia combatida (10 de noviembre de 2020), es decir, **$877.803.000**, como lo exige el artículo 338 del C.G.P.

Así las cosas, se impone la concesión del recurso extraordinario formulado por la demandada Radio Taxi Aeropuerto S.A.

3. Por otra parte, en atención a que la opugnante solicita la suspensión integral del cumplimiento de la sentencia recurrida en casación se dispondrá, con apoyo en el inciso cuarto del artículo 341 del C.G.P., que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, el interesado preste caución bancaria o de seguros por la suma de **$450.000.000.oo**, cifra que se estima suficiente para garantizar el pago de los eventuales perjuicios que dicha suspensión pueda acarrear a la parte actora durante el término de duración de la misma.

Por lo expuesto, se

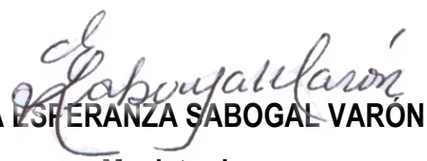
RESUELVE

Primero.- CONCEDER el recurso de casación interpuesto por Radio Taxi Aeropuerto S.A., contra la sentencia de 10 de noviembre de 2020, proferida en el asunto de la referencia.

Segundo.- ORDENAR a la recurrente que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, constituya caución bancaria o de seguros por la suma de **$450.000.000.oo**, so pena que se ejecuten las órdenes impartidas en el fallo en cuestión

Vencido dicho término, reingrese el expediente al despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
(2 Autos)

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

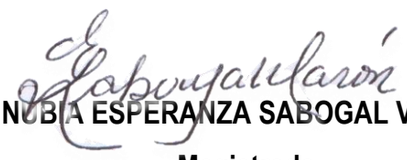
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicado:	**11001-3103-041-2007-00629-03**
Asunto:	Responsabilidad Civil Contractual.
Accionante:	Juan Carlos Ramos Buitrago.
Accionando:	Radio Taxi Aeropuerto S.A. y otro.

Atendiendo la manifestación efectuada por el extremo demandante, circunscrita a la falta de envío del escrito contentivo de la interposición del recurso de casación por parte de Radio Taxi Aeropuerto S.A., ha de puntualizarse que de cara a las nomas que gobiernan el mismo -arts. 333 y s.s. del C.G.P.), esa actuación no está prevista dentro del trámite de ese recurso extraordinario; empero, sin perjuicio de ello, por secretaría envíese copia de tal memorial al actor.

Finalmente, conmínese a las partes con el objeto de que remitan, a través del correo electrónico suministrado dentro del expediente, copia a su contradictor de los memoriales que presenten.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Magistrada

(2 Autos)

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: **José Alfonso Isaza Dávila**

Radicación: 110013103041-2016-00481-01 (Exp. 5165)
Demandante: Ana Procesa Gordillo Gualteros
Demandado: Pedro José Herrera Martín y otros
Proceso: Verbal
Trámite: Apelación sentencia
Discutido en Sala de 3 de diciembre de 2020

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Decídese el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 2 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, en este proceso verbal de Ana Procesa Gordillo Gualteros contra Pedro José Herrera Bermúdez, Carlos Arturo Herrera, María Delfina Herrera Bermúdez, Ana Lucía Herrera Bermúdez, Héctor Alejandro Herrera Bermúdez, herederos indeterminados de Angel María Herrera Martín, y demás personas indeterminadas.

ANTECEDENTES

1. Pidió la demandante: a) declarar que adquirió por prescripción extraordinaria el 50% del dominio sobre predio ubicado en la calle 74 A # 61-37, con matrícula inmobiliaria 50C-874672, cuyos linderos y demás características se anotaron en la demanda; b) ordenar la inscripción de la sentencia en la oficina de registro de instrumentos públicos.

2. Según la demanda, el sustento fáctico se resume en que Cayetano Herrera Bohórquez fue el dueño del inmueble objeto de usucapión, quien lo habitó junto con su hijo Gumercindo Herrera Martín hasta 1999, cuando aquel falleció, momento a partir del cual el referido descendiente comenzó a ejercer dominio sobre el predio de manera individual, también adquirió los derechos de cuota de sus hermanos José María, Blanca María, Juan María y Angel María Herrera Martín, quienes también fueron adjudicatarios en la sucesión de del papá.

El referido poseedor instaló la acometida de gas natural, pintó la casa y le hizo mantenimiento, además pagó servicios públicos e impuestos, con posesión por más de trece años. El 13 de septiembre de 2013 Gumercindo vendió a la demandante su derecho de cuota de propiedad (50%) y la posesión sobre el 50% restante, sin que se conozca el paradero de quienes figuran como titulares de este último porcentaje.

Desde esa fecha, la actual poseedora ha implantado mejoras, asume impuestos y arrienda el inmueble a terceros.

3. Carlos Arturo Herrera y las personas indeterminadas fueron representados por curador *ad litem*, quien contestó la demanda sin oposición[1].

Ana Lucía, Héctor Alejandro, María Delfina y Pedro José Herrera Bermúdez, sucesores de Juan María Herrera Martín, contestaron la demanda, aceptaron unos hechos, negaron otros y formularon excepciones, además presentaron demanda de reconvención. Sin embargo, por un posterior contrato de transacción que suscribieron con la demandante, fueron desvinculados del proceso, toda vez que transfirieron a ella la cuota parte del dominio de la que eran titulares.[2]

[1] Folios 129 a 131 del primer cuaderno.
[2] Folios188 a 207 del cuaderno 1.

Los herederos indeterminados de Angel María Herrera Martín también fueron representados por curador *ad litem*, quien tampoco esgrimió medios defensivos.[3]

4. Surtidas las etapas correspondientes, el juzgado denegó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

Para adoptar esas decisiones estimó, en resumen, que luego de la desvinculación de cuatro demandados en el proceso, las pretensiones se contrajeron a adquirir, por prescripción extraordinaria, el 33,34% del dominio sobre el inmueble tema del litigio, y solo quedaron como demandados los herederos indeterminados de Angel María Herrera Martín, Carlos Arturo Herrera y las personas indeterminadas[4].

Destacó que el predio es susceptible de ser adquirido por usucapión, cuya identificación, ubicación y linderos fueron corroborados mediante inspección judicial y dictamen pericial. Pero la pertenencia es improcedente, porque la demandante no puede desconocer que busca adquirir parte de un inmueble del cual es comunera, motivo por el que la norma aplicable es el artículo 375, numeral 3º, del CGP.

Afirmó que cuando ella obtuvo el 50% del predio el 17 de octubre de 2015, implícitamente reconoció dominio ajeno de los otros comuneros, a quienes no les compró la otra cuota parte, adicionalmente, desde esa fecha hasta el momento en que presentó la demanda (17 de agosto de 2016), transcurrió menos de un año.

Precisó que la suma de posesiones invocada por la parte actora es inviable, porque Gumercindo Herrera Martín tan solo transfirió su posesión como propietario a la demandante, pero no una posesión material a la que alude el artículo 762 del C.C., además de que en el acto escriturario se transfirió el 50% del dominio, conducta que implica

[3] Folios 232 a 234, 237 a 240 y 245 a 262 del cuaderno 1, y audiencia de 23 de agosto de 2019.
[4] Minuto 33:40 audiencia de fallo.

reconocimiento ajeno sobre el porcentaje restante. La suma de posesiones debe ser homogénea, sin que sea viable la adición entre la posesión material o de hecho y la de dominio.

Analizó la declaración rendida por Gumercindo Herrera y concluyó que él reconoció dominio ajeno de la parte distinta de la suya, pues aceptó que sus hermanos tenían derechos sobre el inmueble en virtud de la sucesión del papá, situación corroborada con el hecho de que en el 2015 compró dos cuotas partes a José María y Blanca María.

EL RECURSO DE APELACIÓN

En su inconformidad la demandante expresó, en resumen, las siguientes críticas:

a) La juez no valoró los documentos aportados con la demanda, los cuales demuestran actos de dominio entre 1999 a 2013 por parte de Gumercindo Herrera.

b) Efectuada la sucesión de Cayetano Herrera, el referido poseedor inmediatamente mutó su condición de comunero a la de poseedor exclusivo en 1999, porque solo él fue quien canceló impuestos, pagó servicios públicos e hizo mejoras, sin que los condóminos le exigieran arriendo o hicieran aportes para atender los gastos del inmueble, hechos que fueron corroborados por los testigos, y que pueden considerarse como actos de rebeldía o desconocimiento de la propiedad en comunidad.

c) La escritura 2757 de 5 de agosto de 2015, de la Notaría 74 de Bogotá, por el cual Gumercindo Herrera compró los derechos de cuota de sus hermanos José María y Blanca María, es irrelevante, porque antes de ese momento ya habían transcurrido 15 años de posesión, motivo por el cual los requisitos de pertenencia estaban configurados.

CONSIDERACIONES

1. Como no hay reparo en torno a los presupuestos procesales ni vicio que impida tomar una decisión de fondo, limitada la competencia del Tribunal al punto que es objeto de recurso vertical, el debate se centra en dilucidar si la demandante cumple con los requisitos de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre el 50% inmueble objeto del litigio, frente a sus comuneros en el derecho de propiedad, según la invocada suma de posesiones de ella y de quien alega fue su antecesor, sin incluir el otro 50% cuyo dominio adquirió del último.

La respuesta a esa cuestión es contraria a lo pretendido, examinado que la demandante dejó sin demostrar en forma inequívoca la posesión durante el término de la prescripción extraordinaria, como pasa a verse.

2. Cumple recordar que el artículo 2512 del Código Civil define la prescripción como el "*...modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales*".

Y por lo que atañe con los requisitos para la procedencia de la pretensión de pertenencia, desde hace mucho tiempo se ha sostenido que son los siguientes: 1) cosa u objeto susceptible de adquirirse por prescripción; 2) posesión de la cosa por el término legal respectivo; y 3) que la posesión no haya sido interrumpida.

Sobre el segundo requisito, el artículo 2532 del Código Civil, que había sido modificado por la ley 50 de 1936, exigía para la prescripción extraordinaria una posesión por el tiempo de 20 años, norma vigente hasta el 27 diciembre de 2002, cuando fue modificada por la ley 791, que redujo ese lapso a la mitad.

A su vez, según el art. 41 de la ley 153 de 1887, una "*prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir*".

3. En la demanda de autos se adujo posesión del antecesor a partir de 1999, antes de empezar a regir la ley 791 de 2002, y como la demanda fue presentada el 17 de agosto de 2016[5], cuando no habían transcurrido 20 años desde 1999, debe interpretarse ese libelo genitor en el sentido de haberse invocado el término prescriptivo de dicha ley 791, de manera implícita, pues alegada la prescripción extraordinaria con menos de 20 años, hay lugar a entenderlo de esa manera.

Pero ni siquiera desde esa perspectiva tienen éxito de las pretensiones, de atender que la actora reconoció que la posesión de ella sólo es de tres años, y carece de prueba la suma de posesión invocada respecto de su antecesor, Gumercindo Herrera, respecto del restante 50% del inmueble aquí pretendido, en tanto que ninguna prueba hay de que dicho tercero hubiese intervertido o mutado el título de heredero en la sucesión y comunero luego de la adjudicación, vale decir, que hubiese excluido a los otros condueños de la posesión, de acuerdo con la jurisprudencia y lo previsto en el artículo 375, numeral 3º del Código General del Proceso (antes art. 407-3º del Código de Procedimiento Civil), conforme a la cual: "*La declaración de pertenencia también podrá pedirla el comunero que, con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad*".

[5] Folio 53 del cuaderno 1).

4. Para el efecto, importa destacar que el certificado de tradición y libertad del inmueble determina que mediante sentencia de 9 de junio de 1999, proferida por el Juzgado 16 de Familia, se realizó la adjudicación del predio en la sucesión de Cayetano Herrera Bohórquez, a seis (6) herederos: *(i)* Carlos Arturo, *(ii)* Angel María, *(iii)* Blanca María, *(iv)* Gumercindo, *(v)* José María y *(vi)* Juan María, todos Herrera Martín.

Después, con escritura 2757 de 5 de agosto de 2015, de la Notaría 64 de Bogotá, Gumercindo Herrera Martín adquirió los derechos de cuota de José María (16,66%) y Blanca María (16,66%).

En la anotación siguiente aparece la escritura 3891 de 27 de octubre de 2015, de la Notaría 64 de Bogotá, por la cual, a los herederos de Juan María Herrera Martín les fue adjudicada la respectiva cuota del dominio.

Finalmente, por escritura pública 3763 de 17 de octubre de 2015 otorgada en la Notaría 64 de Bogotá, Gumercindo Herrera Martín vendió el 50% de la propiedad a la aquí demandante.

5. El recuento precedente muestra que Gumercindo Herrera, luego de obtener el 16,66% del predio, en la sucesión de su padre en 1999, estuvo allí como comunero, en la medida en que ninguna prueba hay de que hubiese excluido a sus hermanos de la posesión en la cosa común, pues el 5 de agosto de 2015 compró las cuotas partes de José María y Blanca María, acto que no se justificaba si realmente él se consideraba el único señor y dueño del todo el predio por más de 10 años.

Conclusión corroborada con su testimonio, en audiencia de 23 de agosto de 2019[6], pues reconoció que sus hermanos tenían derecho, que con ellos llegó a un acuerdo para comprarles sus cuotas partes, aunque sin precisar fechas, solo mencionó que hizo esos negocios de 1999 en adelante,

[6] Minuto 51:53 en adelante.

asertos que impiden identificar un acto franco y directo de rebeldía de rechazo de los derechos de los demás comuneros.

La declaración de José María Herrera Martín también fue en similar sentido, porque aceptó que vendió a Gumercindo su cuota parte, y refirió los años 2013 y 2015, hecho que también fue mencionado por Flor María Ortega (esposa de Gumercindo) y Segundo Cayetano Herrera Ortega (hijo de Gumercindo).[7]

Acorde con los medios probatorios, no está acreditado que Gumercindo Herrera ejerció posesión exclusiva desde el 9 de junio de 1999, porque para el 5 de agosto de 2015 necesariamente debió reconocer dominio ajeno, en la medida en que adquirió dos cuotas partes, cada una de 16,66% respecto de sus dos hermanos José María y Blanca María.

6. Con la demanda se aportaron documentos sobre pago de impuestos prediales entre 1998 a 2015 (folios 26 a 41 y 44 del cuaderno 1), unos recibos de servicios públicos (folios 38 s 46 ibidem), y un comprobante de la contribución por valorización (folio 46 ib.). Sin embargo, contrario a los argumentos de la apelación, ninguno de esos elementos prueba actos de rebeldía de un comunero contra los demás, porque atender los gastos de los bienes raíces es una conducta que también puede realizar un mero tenedor, como lo sería el arrendatario o el administrador.

En el folio 8 del cuaderno principal obra la autorización que Angel María y Juan María Herrera Martín hicieron a su hermano José María, para que "*tramite y haga todas las veces con carácter urgente de la venta de nuestra casa habitación ubicada en el barrio 'San Fernando' de la ciudad de Bogotá (...) con destino a nuestro hermano Gumercindo Herrera Martín, quien tiene actualmente como vivienda la casa y todos somos propietarios, ya que nos correspondió por sucesión de nuestros padres*".

[7] Declaración de José María Herrera Martín 1:08:46; declaración de Flor María Ortega 1:42:38; declaración de Segundo Cayetano Ortega Herrera 2:01:19.

El documento carece de fecha, pero las firmas fueron autenticadas el 18 de agosto de 2005, prueba determinante para inferir que en esa época todos los hermanos eran conscientes de su propiedad sobre el inmueble, hecho también mencionado en los testimonios de Gumercindo y José María Herrera Martín, Flor María Ortega y Segundo Cayetano Herrera Ortega, solo que no recordaban con precisión el momento exacto en que se presentó esa situación. Por consiguiente, si entonces todos los hermanos se reconocían como comuneros, antes de esa fecha no puede contarse la posesión exclusiva del comunero Gumercindo.

Porque como lo explica la jurisprudencia, el acto por el cual el comunero muta su condición a la de poseedor exclusivo y excluyente, debe ser inequívoco, hecho que no se acreditó en este caso, pues tiene sentado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, "*...que la posesión del comunero, apta para prescribir, ha de estar muy bien caracterizada, en el sentido de que, por fuera de entrañar los elementos esenciales a toda posesión, tales como el desconocimiento del derecho ajeno y el transcurso del tiempo, es preciso que se desvirtúe la coposesión de los demás copartícipes. Desde este punto de vista, la exclusividad que a toda posesión caracteriza sube de punto, si se quiere; así, debe comportar, sin ningún género de duda, signos evidentes, de tal trascendencia que no quede resquicio alguno por donde pueda calarse la ambigüedad o la equivocidad. Es menester, por así decirlo, que la actitud asumida por él no dé ninguna traza de que obra a virtud de su condición de comunero, pues entonces refluye tanto la presunción de que solo ha poseído exclusivamente su cuota, como la coposesión.*"[8]

En sentencia posterior fue más enfática sobre el tema, al precisar que cuando alguien ingresa a un inmueble "*en calidad de comunero o heredero, las exigencias son mayores, pues la ambigüedad de la relación con el predio, exige una calificación especial de su conducta que debe*

[8] C.S.J, S.C.C., sentencia de 2 de mayo de 1990 (137), M.P. Rafael Romero Sierra.

ser abiertamente explicitada ante los demás herederos o comuneros, para que de ese modo se revele con toda amplitud ante aquellos que el comunero o heredero, ya no lo es, que ha renegado explícitamente de su condición de tal, que ha iniciado el camino de la usucapión y que no quiere otro título que el de prescribiente".

Agregó que la buena fe exige "*que no haya porosidad en la actitud del comunero poseedor, este debe haber enviado a los demás comuneros o herederos, el mensaje inequívoco de que no ejerce la posesión o los actos como heredero, sino como un extraño. Esta exigencia es fundamental para poder deducir reproche a los demás comuneros y herederos. En verdad,* ***no se puede reprobar a los comuneros de haber sido negligentes o desidiosos al no reclamar lo suyo****, si es que pueden entender plausiblemente que otro heredero o comunero los representa, y que todos los actos que ejecuta sobre el inmueble los hace en bien de la comunidad o para la herencia*"[9].

Postura reiterada, entre otras, en sentencia de 1º de diciembre de 2011. (Ref. 54405-3103-001-2008-00199-01).

7. En el folio 7 del cuaderno principal se encuentra la promesa de compraventa suscrita entre Gumercindo Herrera Martín y Ana Procesa Gordillo Gualteros, de 13 de septiembre de 2013, sobre la totalidad del inmueble por el precio de $232.500.000.

De entender, en gracia de discusión, ese negocio como un acto de rebeldía de Gumercindo Herrera para desconocer los derechos de sus hermanos, que sirviera a los fines de la suma de posesiones alegada, las pretensiones de ningún modo tendrían la vocación de prosperar, porque desde esa fecha hasta el momento de la presentación de la demanda (17 de agosto de 2016), tan solo transcurrieron algo más de tres (3) años, tiempo insuficiente para la pertenencia extraordinaria.

[9] C.S.J. S.C.C., sentencia de 21 de febrero de 2011, exp. 05001-3103-007-2001-00263-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla.

Amén de que en todo caso ese último lapso de tiempo fue interrumpido por reconocimiento de dominio ajeno, en tanto que, como ya se dijo, el certificado de tradición y libertad evidenció que Gumercindo Herrera compró los derechos de cuota de sus hermanos José María y Blanca María el 5 de agosto de 2015, acto que resultaba innecesario si realmente tenía la convicción de considerarse como único dueño.

8. De otro lado, por medio de la escritura 3764 de 17 de octubre de 2015 de la Notaría 64 de Bogotá, siguiente a la 3763 ya comentada (folios 11 a 16 del cuaderno 1), se protocolizó la venta de la posesión material sobre el 50% del inmueble entre Gumercindo Herrera y la demandante, a cambio de $105.000.000. Tal instrumento puede ser el título de traslado de la posesión invocada para la suma de ésta, aunque por sí solo no demuestra que Gumercindo Herrera, antes de ese momento, hubiera ejercido una posesión exclusiva sobre ese 50%, siquiera por 10 años, lo que no emana de la escritura, en la que tampoco fueron protocolizadas pruebas en tal sentido, además de que es una circunstancia desvirtuada, según fue explicado anteriormente.

También se trajo escrito privado de la misma fecha, denominado "*contrato de compraventa, de posesión (50%) y derechos de cuota (50%)*", que relacionó la venta de propiedad y de la posesión del 50% restante del inmueble, que se anotó estaba ejerciendo el primero (archivo escaneado *02ContratoCompraventa.pdf*).

9. Finalmente, el testimonio de Rubén Darío Castro Mayorga (yerno de la demandante), se refirió a la forma en que su suegra adquirió el predio y los actos de señorío que ella ha ejercido, que por sí solos son insuficientes para la prosperidad de la demanda, porque desde la fecha de los últimos documentos (17 de octubre de 2015), hasta el momento de la presentación de la demanda, ni siquiera alcanzó a transcurrir un año.

10. En resumen, como se no acreditó la posesión por el término legal para prescripción extraordinaria, con la invocada suma de posesiones, se confirmará la sentencia apelada.

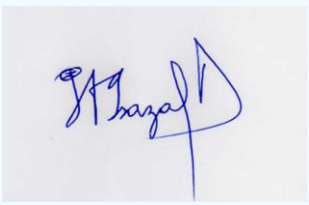
Sin condena en costas de segunda instancia por no aparecer causadas, conforme al art. 365, numeral 8º, del CGP.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil Cuarta de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia de fecha y precedencia anotadas.

Este documento es válido con firma digitalizada de cualquiera de los magistrados y su aprobación por correo electrónico, según los arts. 11 del Dec. 491/2020, 6 del Acuerdo PCSJA20-11532 y pertinentes.

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase.



JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
MAGISTRADO

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADA

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2020.

Magistrado Ponente:
JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA
Sala Civil
Tribunal Superior de Bogotá D.C.

Reciba un cordial y respetuoso saludo.

Me permito manifestarle que por medio de este documento, **apruebo en su totalidad** el siguiente proyecto discutido en Salas del 03 y 10 de diciembre de 2020:

Radicación: 110013103041-2016-00481-01 (Exp. 5165)
Demandante: Ana Procesa Gordillo Gualteros
Demandado: Pedro José Herrera Martín y otros
Proceso: Verbal
Trámite: Apelación sentencia
Decisión: confirma fallo de primera instancia

Atentamente;



IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado
Documento con firma electrónica

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2387c66f75464b4c1800f10a3d5c16e130f2fe8b18f017efff716116ad15dfe2
Documento generado en 15/12/2020 02:52:54 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

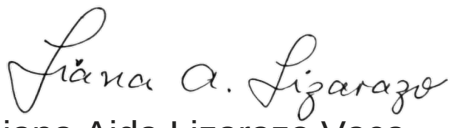
Magistrado
José Alfonso Isaza Dávila

Atendiendo a la directrices de teletrabajo autorizadas mediante el Acuerdo PCSJA20-11517 complementado por el acuerdo PCSJA20-11518, y conforme a lo lineamientos previstos en la ley 527 de 1999, por medio del presente correo electrónico manifiesto como Magistrada **la aprobación a los proyectos sometidos a estudio,** referente a los siguientes expedientes:

Radicación:	110013103041-2016-00481-01 (Exp. 5165)
Demandante:	Ana Procesa Gordillo Gualteros
Demandado:	Pedro José Herrera Martín y otros
Proceso:	Verbal
Trámite:	Apelación sentencia
Decisión:	Confirma

Esta aprobación suple la firma, y hace parte integral del proyecto

Cordialmente



Liana Aida Lizarazo Vaca
Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a74b2fac106699197c67f3e4129cb03251cf20ff5b0ec56b9eec4dfca7b2c97f**

Documento generado en 10/12/2020 05:57:46 p.m.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

DEMANDANTE	:	CARLOS MARIO LONDOÑO CASTRO
DEMANDADOS		JAIME MUÑETÓN GONZÁLEZ, LUIS LEONARDO Y CÉSAR JULIÁN VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ.
CLASE DE PROCESO	:	EJECUTIVO.

Se ADMITE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación formulado por Luis Leonardo y César Julián Velázquez Rodríguez, contra la sentencia escrita proferida el 3 de noviembre de 2020 por el Juzgado 41 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.

Una vez ejecutoriada esta providencia, la Secretaría procederá a contabilizar el término de cinco (5) días que tienen los apelantes para sustentar su recurso, pues en caso de no hacerlo, el mismo se les declarará desierto; y de la sustentación que se presente correrá traslado a la parte contraria en la forma y términos previstos por el artículo 14, en concordancia con el 9, del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Tanto la sustentación como la réplica se remitirán al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cada parte, si es del caso, acreditará el envío del escrito a su contraparte para los efectos del artículo 3 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto mencionado, lo cual deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría

Notifíquese

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL

MAGISTRADA PONENTE	**:**	LIANA AIDA LIZARAZO VACA
CLASE DE PROCESO	**:**	OTROS
DEMANDANTE	**:**	CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.
DEMANDADO	**:**	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
RADICACIÓN	**:**	1100131 03 041 2018 00241 03
DECISIÓN	**:**	**CONFIRMA**
FECHA	**:**	16 de diciembre de 2020

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de decretar una medida cautelar, contenida en el auto proferido el 10 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Civil del Circuito de esta ciudad.

I. ANTECEDENTES

1. Dentro del proceso de la referencia la parte demandada promovió ejecución por las costas procesales que le fueron reconocidas en las diferentes instancias del trámite ejecutivo, las cuales se aprobaron mediante auto de 20 de agosto de 2019.

2. En el marco de dicha ejecución, solicitó como medida cautelar el embargo de los dineros de la cuenta corriente No. 7920989109 de Bancolombia, de titularidad de CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.

3. Mediante auto de 10 de diciembre de 2019, el *a quo* libró mandamiento de pago y decretó "*el embargo y retención de los dineros que en el banco y cuenta relacionada en el escrito obrante a folio 3 del presente cuaderno posea la entidad demandada*".

4. Contra tal providencia la CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, el primero fue despachado desfavorablemente y el segundo es objeto de estudio en esta instancia.

LA IMPUGNACIÓN

La apelación, en punto de las medidas cautelares, versó sobre el principio de inembargabilidad de los recursos de la salud. Fundado en el artículo 25 de la Ley 1751 de 2015, la sociedad afectada con la cautela alegó que no se podían embargar sus recursos por la restricción que a esos efectos establece la norma citada, sin que se les pueda dar una destinación distinta que la de atender las necesidades de salud de los usuarios.

II. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el tenor literal del artículo 25 de la Ley 1751 de 2015, "***[l]os recursos públicos que financian la salud*** *son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente*" (negrillas fuera del texto original).

Para verificar si resulta aplicable dicho precepto para resolver sobre la improcedencia de la medida cautelar decretada, lo primero que debe averiguarse es qué se entiende por recursos públicos que financian la salud. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha explicado:

"*Primeramente, que las fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, grosso modo, son variadas y distintas, y obedecen a rubros ya fiscales ora parafiscales, así: (a) Cotizaciones -CREE-; (b) otros ingresos (incluye rendimientos financieros); (c) Cajas de Compensación Familiar; (d) Sistema General de Participaciones (SGP); (e) Rentas Cedidas; (f) Subcuenta ECAT (SOAT); (g) Subcuenta de Garantía; (h) Excedentes Fin (Adres otrora Fosyga); (i) Regalías; (j) Esfuerzo propio; (k) Recursos de la Nación (Ley 1393 de 2010); (l) Aportes de la Nación (Fosyga).*

Dichas vertientes, en tratándose del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, son: aportes de solidaridad del régimen contributivo; recursos del Sistema General de Participaciones para Salud (SGPS); recursos obtenidos del Monopolio de Juegos de Azar y Suerte; recursos transferidos por ETESA a los entes territoriales; recursos propios de los entes territoriales; recursos provenientes de Regalías; recursos propios del Fosyga, hoy Adres; recursos del Presupuesto General de la Nación; recursos propios de las Cajas de Compensación Familiar; recursos por recaudo del IVA; recursos por recaudo de CREE; recursos destinado al financiamiento de regímenes especiales;

recursos provenientes de Medicina Prepagada, y, recursos provenientes del Sistema de Riesgos Profesionales."[1]

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-155 de 2004, reiterada en sentencia C-313 de 2014, señaló:

"*…los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.*"

Como se colige de las anteriores citas jurisprudenciales, el concepto de "*recursos públicos que financian la salud*" se encuentra claramente delimitado[2]. De tal forma que no basta con alegar que el titular de cuenta bancaria en que aquellos que se encuentra depositado es un agente del Sistema General de Seguridad Social en Salud para que se aplique la citada regla de inembargabilidad de los recursos. Por

[1] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de tutela de 7 de junio de 2018. No. STC7397-2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.
[2] También se encuentra regulación legal sobre esta materia. A este respecto, se encuentra el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, que lista los recursos "*QUE ADMINISTRARÁ LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.*"

el contrario, es menester que se demuestre que en dicha cuenta bancaria efectivamente se depositan alguno de los rubros que conforman los recursos públicos que sirven a la financiación de la salud.

Además, debe señalarse que, en línea de principio, no se trata de recursos que sean del manejo de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (I.P.S.), como es el caso de la sociedad demandada. Muestra de ello es el artículo 2.6.4.1.4. del Decreto 780 de 2016[3], en el que se establece:

> "*Inembargabilidad de los recursos públicos que financian la salud. Los recursos que administra la ADRES, incluidos los de las cuentas maestras de recaudo del régimen contributivo, así como los destinados al cumplimiento de su objeto son inembargables conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1751 de 2015*"[4].

Una conclusión similar arroja parágrafo 2° del art. 275 de la Ley 1450 de 2011[5], en el que se menciona que el manejo de esos dineros, para el caso del régimen subsidiado, se encuentra en cabeza

---

3 Adicionado por el art. 2° del Decreto 2265 de 2017.

4 Esta norma debe ser entendida en conjunto en el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, en el que se señala:
"*ARTÍCULO 66. DEL MANEJO UNIFICADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS). Con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, créase una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado que se denominará Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La Entidad hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente.*"

5 "*PARÁGRAFO 2o. Los recursos que la Nación y las Entidades Territoriales destinen para financiar el régimen subsidiado en salud, son inembargables. En consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado "EPS-s" con cargo a dichos recursos cancelarán en forma prioritaria los valores adeudados por la prestación del servicio a las IPS Públicas y Privadas. Los cobros que realicen las IPS a las EPS-s requerirán estar soportadas en títulos valores o documentos asimilables, de acuerdo con las normas especiales que reglamenten la prestación del servicio en salud.*"

de la Entidades Promotoras de Servicios de Salud, con cargo a los cuales realizan el pago de los valores adeudados por la prestación del servicio a las IPS Públicas y Privadas. Ello quiere decir, que los recursos que se entregan a las IPS como pago por sus servicios no son recursos públicos que financien el servicio de salud, sino que se trata de dineros propios de aquellas, los cuales no se encuentran protegidos por el principio de inembargabilidad.

Este entendimiento lo ratifica la Circular No. 14 de 8 de junio de 2018, expedida por el Procurador General de la Nación, que tiene por asunto la "*inembargabilidad de los recursos destinados al Sistema General de Seguridad Social en Salud*". Con fundamento en el análisis de diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional en dicho documento se señaló:

> "*…para efectos del recaudo de cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que las EPS actúan en calidad de DELEGATARIO del entonces Fondo de Salud de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, hoy Administradora del los Recursos del Sistema General de Seguridad Sociales en Salud – ADRES y que los valores obtenidos por dicho concepto no hacen parte del patrimonio de las EPS, sino que pertenecen concretamente al referido Sistema.*"

Conforme con lo expuesto, es claro que quienes administran los recursos "*los recursos públicos que financian la salud*" son, en principio, el ADRES y las EPS, lo que descarta que las IPS por el simple hecho de participar en el prestación de los servicios de salud se

beneficien de la regla de inembargabilidad de sus recursos, pues aquella únicamente cobija los dineros públicos que sirven a su financiación.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que si una Entidad Prestadora de Servicios de Salud pretende beneficiarse del principio de inembargabilidad de los "*recursos públicos que financian la salud*" aquella tiene la carga de demostrar, de manera concluyente, que los recursos depositados en la cuenta cuyo embargo se ha ordenado corresponden a recursos de financiación de la seguridad social y que no se trata de recursos propios, para lo que no basta la simple afirmación de su carácter de entidad que hace parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En consecuencia, dado que la CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. no demostró que en su calidad de IPS administrara "*recursos públicos que financian la salud*", como tampoco que los dineros que se encuentra en la cuenta corriente No. 7920989109 de Bancolombia correspondan a recursos de esa naturaleza, es claro que no resulta aplicable el principio de inembargabilidad y, por ende, se confirmará la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de decretar "el embargo y retención de los dineros depositados por la CLÍNICA

ASOTRAUMA S.A.S. en la cuenta corriente No. 7920989109 de Bancolombia, contenida en el auto proferido el 10 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado Cuarenta y Uno (41) Civil del Circuito de Bogotá, D.C.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LIANA AIDA LIZARAZO V.
Magistrada

Firmado Por:

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 008 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b46037debc78d803bfff81ff7ed0e07a73d5c8b0aacdaac1d11599cb5cc7c73b**
Documento generado en 16/12/2020 12:26:27 p.m.

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Asunto. Proceso Ejecutivo Singular (Pagarés) promovido por Levi Méndez Sandoval contra Avícola Zaragoza Ltda.

Rad. 042 2018 00121 01

SE ADMITE en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá el 30 de octubre de 2020, dentro del presente asunto.

La parte apelante deberá tener en cuenta lo establecido en el inciso 3º del artículo 14 del Decreto 806 de 2020, a cuyo tenor: "*Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes"*, vencidos los cuales la contraparte deberá descorrer, si a bien lo tiene, el correspondiente traslado; términos que comenzaran a contabilizarse desde la ejecutoria de esta determinación.

Concurrente con lo antes señalado, los profesionales del derecho deberán dar estricto cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, so pena de imposición de multa, en los términos allí previstos.

Para efecto de dar la plena garantía del debido proceso y derecho de defensa a las partes, por Secretaría **NOTIFÍQUESE a los apoderados de los intervinientes** esta determinación en el marco de la norma reseñada vía correo electrónico a las direcciones que obran en el expediente digital; y en caso de no llegar a obrar las mismas en este, pese a ser una obligación de los togados, remítanse las comunicaciones correspondientes a la dirección física que hayan informado en el expediente o en el Registro Nacional de Abogados.

A su turno, las partes contendientes deberán dirigir sus escritos o memoriales con destino a este asunto al correo electrónico del Secretario Judicial de esta Corporación

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia del mismo a la escribiente encargada de los procesos de la suscrita Magistrada mparradv@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cumplido lo anterior, ingresen las presentes diligencias **inmediatamente** al despacho con informe pormenorizado de Secretaría y, para proveer lo que en derecho corresponda.

Notifíquese,



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Magistrado Sustanciador: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Proceso	Verbal
Demandante	Miguel Antonio Cuesta Monroy
Demandado	Cristo Lector Ltda.
Radicado	110013103 0042 2020 00176 02
Decisión	Confirma auto

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto calendado 8 de octubre de 2020, proferido por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual se dispuso negar la medida cautelar solicitada, en el asunto en referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Miguel Antonio Cuesta Monroy presentó demanda contra Cristo Lector Ltda., para que a través del proceso verbal, se declare la nulidad de las decisiones inherentes y subsiguientes, adoptadas por la junta de socios de la sociedad demandada durante la sesión llevada a cabo el 20 de enero 2020.

2. Mediante auto del 8 de octubre de 2020, la demanda de impugnación de actos de asamblea de socios fue admitida, sin embargo, se negó la suspensión del acto impugnado, entre otras razones, por cuanto *"de la narración de los hechos de la parte actora no se avizora, de entrada, violación a las disposiciones legales y estatutarias invocadas por la solicitante y conforme requiere el artículo 382 del Código General del Proceso para lo de su procedencia"*.

3. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio, solicitando se revoque el auto impugnado, y en su lugar, se acceda a la medida cautelar solicitada.

Argumentó que en el caso de la solicitud correspondiente debe atenderse a la demanda en sus fundamentos fácticos y jurídicos, esto es, artículo 186, 190, 423, 899 del Código de Comercio y 368 y 382 del Código General del Proceso, puesto que "*de la regla legal y estatutaria, se colige razonablemente que los socios no pueden convocar directamente la asamblea extraordinaria y habrán de hacerlo mediante solicitud, en este caso, al representante legal que en aquel momento era el suscrito*".

4. Resuelta la reposición en forma desfavorable a los intereses del impugnante, fue concedida la alzada.

II. CONSIDERACIONES

1. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la decisión adoptada por el juez de primera instancia, por la cual negó la medida cautelar, se encuentra ajustada a derecho. En tal virtud, se analizará si la solicitud de medidas cautelares contenida en el escrito de la demanda, tiene respaldo bajo los fundamentos del artículo 382 del Código General del Proceso.

2. Para resolver la alzada, debe partirse de un hecho incontrovertible y es que la parte actora pretende se suspenda de manera provisional los efectos del acta de la junta extraordinaria de socios de Cristo Lector Ltda. – en liquidación- No. 26 del 20 de enero de 2020.

Acorde con lo establecido en el inciso 2º del artículo 382 del C.G.P. *"En la demanda podrá pedirse la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado por violación de las disposiciones invocadas por el solicitante,* ***cuando tal violación surja del análisis del acto demandado, su confrontación con las normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud*****"**. (Negrillas fuera de texto original).

Partiendo de lo anterior, se advierte la confirmación del auto impugnado, pues como fue expuesto por la *A quo*, en el estado actual de la actuación no resulta factible acceder a la cautela solicitada, encaminada a ordenar la suspensión del acto controvertido, como quiera que a partir de los hechos de la demanda y los medios de prueba obrantes en el proceso no se puede inferir, al menos en principio, que la pretensión de la parte actora es factible o probable.

Así las cosas, no se encuentra cuestionable la decisión adoptada por la primera instancia en el auto objeto de censura, pues acorde con lo establecido en la norma en cita, para que sea procedente la medida deprecada, resulta indispensable que se acrediten los supuestos allí señalados, esto es, que la violación surja del análisis del acto demandado, su confrontación con las normas, el reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, lo que en este momento resulta prematuro determinar.

En efecto, revisada el acta controvertida, se observa que allí se dejó plasmado que el socio Carlos Ernesto Gaviria Camacho, en su condición de propietario del 62% de las cuotas sociales y de conformidad con la ley y los estatutos de la empresa (artículo 14), realizó convocatoria y se reunió junto con Gustavo Guevara Aldana, quien actuó según poder otorgado por Luz Del Carmen Barahona de López, socia y propietaria del 14% de las cuotas sociales.

En tal sentido, se itera, en el actual estado procesal no se puede tener un grado de certeza en la categoría de probabilidad que permita adoptar la medida cautelar peticionada en el escrito de la demanda, pues será en la etapa probatoria donde se podrá dilucidar si efectivamente los hechos que fundan la demanda, esto es, si la presunta trasgresión de los artículos 186, 190, 423 y 899 del C. de Co., artículos 368 y 382 del Código General del Proceso, tuvieron lugar, por lo menos en el grado antes referido, destacándose que los medios probatorios aportados y los que se lleguen a recaudar en el proceso están sujetos a controversia.

Y es que en las circunstancias actuales se observan encontrados los argumentos expuestos por la parte demandante y lo plasmado en el acta controvertida, sin que en este momento pueda concluirse forzosamente la representación de las cuotas sociales de quien convocó a la junta como de sus partícipes, mucho menos los presuntos actos defraudatorios que se le indilgan a los señores Carlos Gaviria Camacho y Gustavo Guevara Aldana, aspectos que serán eventualmente objeto de debate al interior del proceso, razón por la que mal podrían adoptarse la medida cautelar tendiente a ordenar la suspensión de lo acordado en el acta reprochada, pues eventualmente podría verse afectada la sociedad demandada, lo que lleva a inferir que la medida solicitada resulta improcedente.

No puede desconocerse que quienes participaron en la asamblea controvertida, al igual que el demandante, ostentan la condición de socios de la sociedad antes referida, resultando así que la seguridad jurídica podría verse afectada, en caso de adoptarse la medida deprecada.

3. Así las cosas, se concluye que en el *sub examine* no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 382 del C. de Co. para acceder a la medida cautelar solicitada, razón suficiente para confirmar el auto impugnado.

En consecuencia, el auto por medio del cual se negó la medida cautelar se encuentra revestido de legalidad, y en tal virtud, será refrendado.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el suscrito magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar el auto objeto de apelación.

SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Despacho de origen, previo el registro de las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE

Documento con firma electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:

IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
JUEZ CIRCUITO

TRIBUNAL SUPERIOR SALA 007 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9675fe70facf53922204e3370ac1753acc154b06cf4a87f454bb68faa729bbc9

Documento generado en 16/12/2020 04:18:46 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D. C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte

11001 3103 017 2015 00845 01

Demandante. José Israel Forero Méndez.
Demandados. Personas indeterminadas.
Proceso declarativo de pertenencia.

El suscrito Magistrado confirmará el auto que, el 16 de octubre de 2019, profirió el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá (cuya alzada le correspondió a este despacho, por reparto, el 20 de noviembre del año que avanza). A través de esa providencia y con soporte en el artículo 375 (numeral 4) del C. G. del P., se decretó la terminación del proceso de la referencia.

En el criterio del juez *a quo,* la demanda de declaración de pertenencia recae sobre un bien de uso público. Así lo dedujo con soporte en oficio enviado por el DADEP – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del 10 de junio de 2019, en el cual se indicó que "el predio de interés ubicado en la carrera 6A No 36-87 Sur" se traslapa con un inmueble que se encuentra "en el Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales" del Distrito Capital, a cargo del DAPEP.

El inconforme alegó: ***i)*** que mediante el referido oficio no es posible establecer de manera contundente que el predio sobre el que recae su demanda pertenece al Estado, porque el DADEP no es claro al indicar si se traslapa de manera parcial o total con otro que está en su inventario, ni tampoco ilustró sobre sus linderos; ***ii)*** que el DADEP pudo incurrir en un error ya que por las características del inmueble, el vecindario, su inclusión en el plano catastral, el pago de impuestos y el tiempo de posesión, no puede inferirse que se trate un bien de uso público y ***iii)*** que lo procedente era vincular al DADEP, como litisconsorte necesario, conforme al artículo 61 del C. G. del P., y no dar aplicación a lo que manda el artículo 375 (numeral 4) del C. G. del P.

Para decidir, según se anunció el suscrito Magistrado CONSIDERA:

1. En punto al reparo realizado al oficio o certificación incorporada al expediente (fl. 138), ha de precisarse que, contrario a lo sostenido por el recurrente, este sí ofrece la idoneidad requerida para establecer que el predio materia de este proceso judicial, y como allí se manifestó, se "traslapa" con uno de uso público.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con el vigente Acuerdo 018 de 31 de julio de 1999, con el que se creó el DADEP y se le asignó, entre otras funciones, la inspección, regulación, vigilancia, control y defensa del espacio público; la administración del

patrimonio de la ciudad y, primordialmente, como lo consagra el artículo 7º, la conformación del Inventario General del Patrimonio Inmobiliario Distrital[1], es decir, el actual **Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales**.

En la normatividad en cita, se estableció que todos los bienes de uso público y fiscales aparecerán en registro computarizado y se identificarán por medio un mapa digital (que, hoy, es conocido con las siglas SIGDEP, y que es de acceso libre en internet).

También ha de tenerse en cuenta la Resolución Interna 388 de 29 de noviembre de 2016, que reglamenta el Sistema de Información del DADEP, identificado como SIDEP, y que constituye, "la única fuente válida para la expedición de cualquier informe, reporte, o archivo referente a información del Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales del nivel central del Distrito Capital"[2].

Deviene de lo que recién se reseñó, que, para la expedición del oficio o certificación por medio de la cual -en esta precisa oportunidad- se decretó la terminación del proceso judicial de la referencia y que es la que aquí cuestiona el apelante, José Israel Forero Méndez, se tomó en consideración, tanto el SIGDEP, como el SIDEP, mapa computarizado y sistema de información, cuyo contenido y alcance no puede desconocer hoy el suscrito Magistrado, máxime por cuanto dicho documento público (fl. 138) aparece suscrito por la Asesora de la **Subdirección de Registro Inmobiliario**, la señora Carolina Cuenca Medina, quien -de conformidad con la Resolución atrás citada-, "es el responsable de generar el reporte de información registrada en el inventario" y dar "confiabilidad de la información incorporada y actualizada en el"[3] SIDEP.

Así las cosas, y ante la falta de elementos que impongan desconocer el mérito probatorio del documento público del que se habla (ver arts. 250 y 257 del C. G. del P.), ha de tenerse por cierto a partir del gráfico o mapa contenido en la certificación que el bien objeto del litigio -ubicado en la carrera 6A No 36-87 Sur de Bogotá- se traslapa -o entrecruza- de manera parcial, con un inmueble identificado con el código RUPI 28-7, que hace parte del Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales lo cual, imponía,

---

[1] El Acuerdo 018 de 31 de julio de 1999 del Consejo de Santa Fe de Bogotá, estableció en su "artículo 7. - Inventario General del Patrimonio Inmuebles Distrital.
A. **Diseñar, organizar, operar, controlar, mantener, reglamentar y actualizar el Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital**, que se compondrá de dos capítulos básicos: **Espacio Público y Bienes Fiscales del nivel central**. Todos los bienes constitutivos del Espacio Público y del patrimonio inmueble del Distrito Capital, aparecerán en un **registro computarizado** a través de un sistema de información geográfica y de una base de datos referida a las coordenadas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, **mediante identificación en mapa digital y acudiendo a los recursos más modernos que ofrezca la técnica**.
(…)
C. Organizar, operar, controlar, mantener, reglamentar y actualizar con base en dicho **inventario el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario Distrital.** Para todos los efectos legales y fiscales el registro de cada bien será certificado por la Defensoría del Espacio Público y el avalúo respectivo se registrará en los estados financieros del Distrito Capital.
(…)
D. **Expedir las certificaciones** correspondientes sobre **los inmuebles** que se lleven en el **Inventario General del Patrimonio Inmueble Distrital**".
[2] Artículo 1 de la Resolución interna 388 de 29 de noviembre de 2016.
[3] Artículos 3 y 4 de la Resolución interna 388 de 29 de noviembre de 2016.

desde ya, desestimar la demanda de pertenencia en atención a lo que regula el numeral 4 del artículo 375 de C.G. del P.

2. También el apelante sugirió que, por las características del inmueble, el tiempo de posesión, el pago de impuestos y su inclusión en el plano catastral, dicho bien no tenía la connotación de uso público.

El suscrito Magistrado tampoco acoge tales argumentos, por cuanto la existencia de construcciones o edificaciones aledañas y la ubicación del bien perseguido en pertenencia, no le dan, *per se,* categoría distinta de la certificada por la autoridad competente (el DADEP).

Ahora, frente al pago de impuestos que trajo a cuento el apelante, ha precisado la Corte Constitucional, que **"las construcciones, edificaciones y cualquier otro tipo de mejoras que realicen los particulares sobre bienes de uso público** (…) mientras se encuentren "en manos de particulares" y ellos los estén aprovechando económicamente, hasta tanto no vuelvan al dominio del Estado bien por el vencimiento de los términos señalados en las autorizaciones legalmente otorgadas, **o mientras el Estado logra la restitución de dichos bienes en caso de que se encuentren en manos de particulares en forma ilegal o irregular, no contraría la Carta Política que el Congreso considere como predios objeto de gravamen esas construcciones, edificaciones o mejoras**"[4].

No sobra resaltar que, en nada contribuye al éxito de la apelación el hecho de que, eventualmente, el entrecruzamiento que certificó el DADEP no recaiga sobre la totalidad del predio cuya declaración de pertenencia ambicionara el señor Forero Méndez (lote de terreno con una edificación de varias plantas), sino solo sobre una parte de él.

Dícese lo anterior, por cuanto la demanda de pertenencia se reclamó sobre el inmueble ubicado en la carrera 6A No 36-87 Sur de Bogotá, como cuerpo cierto, debiéndose entender que la pretensión comprende la edificación de varios niveles que se erigió sobre el terreno, vale decir, sin hacer exclusión de la zona afectada, según lo certificó el DADEP.

Tal vicisitud haría inviable, incluso, el acogimiento parcial de la demanda de pertenencia, para restringir la implorada declaración judicial a una fracción de ese lote de terreno, con sus edificaciones accesorias. Ello por cuanto una sentencia favorable, en este linaje de litigios, solo puede recaer sobre el bien que, por su ubicación, descripción, linderos, etc., haya sido materia de demanda, cual lo establecen entre otros, los artículos 83 y 375 del C. G. del P.

3. Por último, la vinculación del DADEP como litisconsorte necesario que sugirió el apelante, tampoco era procedente, por cuanto lo que manda el artículo 375 del C.G. del

[4] Corte constitucional, sent. C-183 de 4 de marzo de 2003 exp. 4244.

P. en su numeral 4, con claridad, es la terminación anticipada del proceso, sin que sea menester vincular a ese Departamento Administrativo, para se oponga a las pretensiones que recaen sobre un inmueble, que al menos, parcialmente es de uso público y que por expresa disposición del artículo 63 de la Constitución será imprescriptible.

4. No prospera, por ende, la reseñada apelación.

DECISION.

Así las cosas, el suscrito Magistrado CONFIRMA el auto que, el 16 de octubre de 2019 profirió el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, por cuyo conducto y con soporte en el artículo 375 (numeral 4) del C. G. del P., se decretó la terminación del proceso declarativo de la referencia.

Sin costas en segunda instancia, por no aparecer justificadas.

Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Notifíquese



OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Radicado: 11001 31 03 043 2016 **00284** 02

1. Se admiten, en el efecto **DEVOLUTIVO**, los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la llamada en garantía contra la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2020 por el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso verbal de Pedro Alfonso Urrego Morera y Otros contra Blinsecurity de Colombia Ltda.

2. Cabe advertir que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, los apelantes cuentan con el término de cinco (5) días, a partir de la ejecutoria del admisorio, para sustentar los precisos reparos en los que fundamentaron sus recursos de apelación, y que si se presenta tal sustentación, la parte no apelante tiene cinco (5) días para la réplica.

NOTIFÍQUESE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 043 2016 00284 02

Firmado Por:

GERMAN VALENZUELA VALBUENA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 019 CIVIL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4fb9019993c2ab6af2fa6685824ab106df73fc4910da58bd4bf94d34c8b52db1**
Documento generado en 16/12/2020 03:27:14 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte

1. El presente proceso fue remitido a este despacho por la H. Magistrada a quien, de manera inicial, le fue repartido, al considerar que el término para emitir sentencia de segunda instancia había fenecido desde el pasado 28 de mayo sin que, oportunamente, se prorrogara el plazo legal, por lo que dispuso "declarar la pérdida de competencia de [ese] despacho judicial para continuar conociendo de este proceso", ordenando que se enterara de esa determinación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el envío del expediente al suscrito magistrado, quien le sigue en turno en esta sala de decisión.

2. No obstante que esa remisión tiene apoyo formal en lo dispuesto por el artículo 121 del Código General del Proceso, existen variadas razones de orden legal y fáctico que me llevan a rechazar la competencia que se asigna, comenzando por la circunstancia de que antes de la emisión de la sentencia C-443 de 2019 -que definió la constitucionalidad de la citada regla-, resolví cerca de 38 conflictos de competencia suscitados entre juzgados civiles del circuito en los que expuse mi posición sobre la inviabilidad de la pérdida de competencia que se amparaba en la norma evocada, analizando las circunstancias acaecidas en cada evento particular, como: *i)* la verificación de si se cumplía con un plazo razonable, *ii)* el contraste de la gestión desplegada por las partes con el principio de lealtad procesal, *iii)* el escrutinio acerca del uso de los medios de defensa utilizados y la incidencia en la duración del juicio, *iv)* la justificación del tiempo tomado para resolver el debate e, incluso, *v)* la posibilidad de que el titular del despacho hubiere cambiado. Por igual, en algunos casos fue preciso establecer la correcta

aplicación del tránsito de legislación entre los Códigos de Procedimiento Civil y General del Proceso.

Así mismo, es importante destacar que en las referidas decisiones se tuvo en cuenta que mediante sentencia T-341 de 2018, la Corte Constitucional había explicado que en la implementación del artículo 121 es "necesario armonizar el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia, contribuir en hacer realidad la aspiración ciudadana de una justicia recta, pronta y oportuna, y hacer efectivo el deber de lealtad procesal que le asiste a las partes en sus actuaciones ante las autoridades judiciales", época desde la que se advertía que la incursión en un "incumplimiento meramente objetivo" no implica "*a priori*, la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto, la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática".

3. De otra parte, no obstante que la regla 121 del CGP expresa que "salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior…a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal", para emitir sentencia de segunda instancia –con la posibilidad de prorrogar ese período una sola vez hasta por el mismo plazo–, a cuyo vencimiento, sin haberse cumplido ese propósito, "el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso", y que esa norma prevé como consecuencia la nulidad de las actuaciones adelantadas después de agotado el término para fallar, sin embargo, la Corte Constitucional, en providencia C-443 de 2019, la halló conforme con el texto Superior bajo el entendido de que "debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y…es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso", por lo que es de rigor evaluar si en el caso concreto concurren las condiciones que avalan esa pérdida de competencia, a lo que se procede en los siguientes términos:

3.1. Da cuenta la actuación que en proveído del pasado 17 de julio –fecha naturalmente posterior al 28 de mayo– quien –en aquel entonces– fungía como Magistrado a cargo del asunto, puso en conocimiento de las partes la interpretación judicial remitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3.2. Mediante escrito del 21 de julio, Jesús Esquivel Navarro, aduciendo actuar como apoderado de la parte demandada, solicitó copia del auto anteriormente citado, mediante mensaje enviado al buzón electrónico de la secretaría.

3.3. El 22 de julio, el magistrado Sustanciador ordenó remitir la copia de la interpretación prejudicial a las partes por correo electrónico.

3.4. El día 28 siguiente, se dejaron sin valor y efecto los autos del 17 y 22 de julio, debido a las dificultades para remitir el evocado documento por la vía electrónica.

2.5. El 8 de octubre, Juan Carlos Monroy Rodríguez, abogado del extremo demandante allegó copia de sentencia proferida por otra sala de esta corporación, en su decir, “sobre hechos similares o equivalentes a los que son objeto de controversia en el presente proceso”.

4. En consonancia con la narración que antecede, la influencia que hubiera podido tener el trascurso del tiempo sobre la gestión adelantada después de vencer el plazo para emitir sentencia ha quedado depurada, conclusión que se impone de acuerdo con estas reflexiones:

4.1. La pérdida automática de competencia *per se* encarna una irregularidad que, conforme lo establece el artículo 133 del Código General del Proceso queda subsanada “si no se impugna oportunamente por los mecanismos que este código establece”, tal cual acaece en este asunto, porque ambos litigantes actuaron en el proceso sin censurar las providencias emitidas con posterioridad al día en el que, según la H. Magistrada, vencía la oportunidad para definir la instancia. Además, en concordancia con el artículo 139 del estatuto adjetivo “el

juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes [circunstancia que aquí ocurrió], salvo por los factores subjetivo y funcional", de los cuales ninguno se configura.

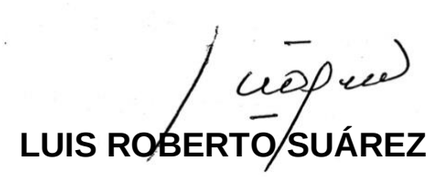
4.2. De otro lado, si la problemática se escrutara a partir de la nulidad consagrada en el artículo 121 del Código General del Proceso, la cual, se itera, es constitucional bajo la comprensión de que "es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso", la aparente razón para abandonar el proceso se desvanece al desaparecer la informalidad que la justificaba, por haber operado su saneamiento, al tenor de lo reglado en el numeral 1 del artículo 136 procesal, el cual se materializa, entre otras hipótesis, "cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla", contexto en el que cobra importancia el hecho de que ambas partes acudieron al proceso radicando memoriales sin hacer valer causal alguna de anulación. Este mismo pensamiento ha sido avalado por la Corte Suprema de Justicia al resaltar que "…al no estar la nulidad del artículo 121 del Código General del Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una 'nulidad especial', no es posible afirmar que es una anomalía procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidación o saneamiento. De esta forma, si se actuó sin proponerla, o la convalidó en forma expresa, la nulidad quedará saneada…", criterio desarrollado en sentencia STC15542 de 2019.

4.3. Las anteriores reflexiones compaginan con el criterio desarrollado por la Corte Constitucional al resaltar que "la circunstancia de que el sólo vencimiento de los términos legales tuviese como consecuencia inexorable el traslado del respectivo proceso a otro operador de justicia, independientemente de la voluntad de las partes, del estado del trámite judicial y de las razones de la tardanza, genera una serie de traumatismos en el funcionamiento de los procesos y del sistema judicial en general. Estos traumatismos y disfuncionalidades, muchas veces de gran calado, provocan la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y del derecho al debido proceso".

5. Bajo el orden de ideas que se trae, en mi criterio no existe motivo para considerar que la H. Magistrada perdió competencia para seguir adelantando el proceso, fundamentalmente porque las partes ya sentaron su anuencia para que continúe el trámite en esa oficina. En consecuencia, estimo que, ante esa circunstancia, este despacho carece de atribución para presentar la ponencia que resuelva la instancia, siendo del caso proponer **conflicto negativo de competencia**.

Por cuanto la divergencia se suscita entre dos autoridades de la misma categoría pertenecientes al mismo distrito, y como de acuerdo con pronunciamiento del 12 de diciembre de 2019, al resolver un conflicto también generado por la aparente ocurrencia de la nulidad consagrada en el artículo 121 del CGP, la Sala de Gobierno de esta corporación estimó ser la competente para tal efecto, en aplicación de lo consagrado en el artículo sexto literal e del acuerdo PCSJA17-10715, según el cual concierne a esa dependencia "resolver los conflictos que por razón del reparto de asuntos sometidos a las salas especializadas se susciten entre los magistrados", remítasele para los fines pertinentes.

Notifíquese,



LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Asunto. Proceso Ordinario (Reivindicatorio) promovido por el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. contra la Asociación Distrital de Educadores -ADE-.

Rad. 038 2014 00189 01

Previo a resolver sobre la admisión del recurso de apelación que formuló la parte demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Tercero Civil del Circuito Transitorio de Bogotá el 31 de julio de 2020 dentro del proceso de la referencia, por Secretaría requiérase a este último para que remita a esta sede el archivo contentivo de la audiencia en que se practicó el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, en atención a que el que figura en la carpeta *01InterrogatorioParte* y a su vez en la carpeta *MY_DATA_011916* se encuentra en un formato no compatible toda vez que al intentar abrirlo aparece el mensaje "*Este vídeo está codificado en un formato que no es compatible*"; lo cual resulta indispensable para resolver sobre la admisión del recurso y consecuentemente la alzada, máxime si en cuenta se tiene que en la parte motiva de la decisión apelada se hace alusión puntual a lo registrado en dicha actuación.

Adviértase que el término previsto en el artículo 121 del C.G.P., habrá de computarse una vez se registre la recepción de la totalidad del expediente en la secretaría del Tribunal.

Notifíquese,

MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad. N° 11001 31 03 ***038 2019 00390*** *01*

Verificado el expediente, así como el audio visual que contiene la audiencia inicial de 27 de noviembre de 2020 y el sistema de Gestión Judicial Justicia Siglo XXI, se observa que el Juzgado *a quo* no dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110 y 326 del Código General del Proceso, en torno al traslado que, bien sea *"permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra"* o con inclusión en la lista respectiva, se debía realizar antes de remitir el expediente al Superior, para que la parte **no** apelante se pronunciara sobre la alzada concedida.

En consecuencia, y en aras de evitar futuras nulidades, resulta necesaria la devolución del expediente, a fin de que se revise la actuación y se observe con rigurosidad la normatividad en comento, en aras de garantizar derechos de raigambre constitucional como la contradicción y defensa.

Secretaría proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE[1],

Firmado Por:

ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 017 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8bedac06373d87792054182305ed5bca723d86a0f974c4867d526bfab7260af4**
Documento generado en 16/12/2020 04:04:52 p.m.

[1] *Para consultar el proceso digital visite: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil-despacho-17/14*

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
Sala Civil Dual

Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Magistrado Ponente: **Germán Valenzuela Valbuena.**

Radicado: 11001 31 03 039 **2014 00344** 02
Ordinario: Golox S.A. y Golox Bebidas y Snacks S.A.
Vs. Contac Center Americas S.A, hoy Americas Business Process Services
Asunto: **Recurso de Súplica**.
Aprobación: Sala virtual 50.

En atención a lo ordenado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de tutela de 2 de diciembre de 2020, dentro de la acción con radicado 2020-3208, se deja sin efecto el auto emitido por esta sala dual el 26 de octubre de 2020, y se procede a resolver nuevamente el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto de 13 de julio de 2020, por medio del cual el Magistrado sustanciador rechazó la solicitud de nulidad formulada por dicho extremo.

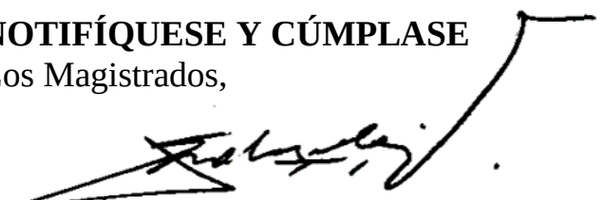
Al efecto tan solo basta con señalar que, en consideración de la Corte en la referida providencia de tutela, existieron defectos en el enteramiento de las actuaciones surtidas en este trámite respecto del abogado de la parte demandante dada su discapacidad visual, por manera que no había lugar a rechazar la petición de nulidad, sino que debía tramitarse y resolverse, habida cuenta que esa solicitud, y todos los hechos allí señalados, están relacionados íntimamente con la aducida imposibilidad del referido mandatario judicial de acceder al contenido de las decisiones emitidas, lo que en principio descarta, en ese sentido, un eventual saneamiento y la aducción de hechos ajenos a las causales o hipótesis establecidas en el artículo 133 Cgp.

Además, la Sala Dual pone de presente que no le sería dable revocar el proveído impugnado y entrar a estudiar de fondo la solicitud de nulidad, comoquiera que *i.* en el auto cuestionado se dispuso rechazar de entrada tal petición, y al infirmar tal rechazo, corresponde al Magistrado sustanciador resolver el fondo; y *ii.* el mismo recurrente pidió, en su recurso, *"revocar lo decidido en el auto del 13 de julio de 2020, notificado por estado del 14 de julio de 2020, para en su lugar estudiar y tramitar de fondo la solicitud de nulidad presentada, y consecuencialmente declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde el 29 de mayo de 2020"*.

DECISIÓN

Por lo expuesto, se **REVOCA** el auto suplicado, proferido por el Magistrado sustanciador el 13 de julio de 2020, y se dispone la devolución del expediente a su Despacho para el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los Magistrados,



GERMÁN VALENZUELA VALBUENA



ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

Rad. 11001310300320140034402

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Rad. N° 110013103 ***039 2008 00415*** *02*

Tomando en consideración que la hora señalada en auto inmediatamente anterior se cruza con otro proceso designado para la misma calenda, se reprograma para las **11:30 a.m.** del **19 de enero de 2021**. Tómese nota y efectúense las adecuaciones que resulten necesarias para la convocatoria de las partes a la audiencia virtual.

En firme el presente proveído ingrese a Despacho para continuar con su trámite.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE[1],

Firmado Por:

ADRIANA AYALA PULGARIN
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 017 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab1128bdb526132d24ad6678a67ea1a2507583135a599b1526a928ebbbf714cc**
Documento generado en 16/12/2020 04:43:29 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

---

[1] *Para consultar expediente digital siga este link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil-despacho-17/14*

República de Colombia

Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación: **11001-3103-017-2018-00047-01**
Asunto: Ejecutivo
Recurso: Apelación Sentencia
Demandante: Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P. – Servigenerales.
Demandado: Le Parc 86 S.A.S. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Reparto. 23/11/2020

ADMÍTASE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación propuesto por Le Parc frente a la sentencia de 15 julio de 2020, dictada por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de ejecutivo instaurado por Servicios Públicos de Carácter Privado S.A. E.S.P.- Servigenerales en contra de Le Parc 86 S.A.S. y Acción Sociedad Fiduciaria S.A.

En firme, reingrese **INMEDIATAMENTE** el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

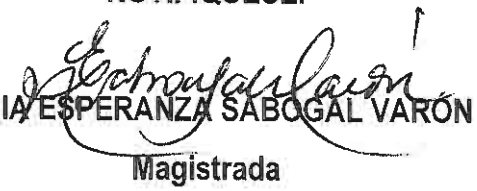
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Radicación: 11001-3103-041-2019-00172-01
Asunto: Verbal -nulidad contrato-
Recurso. Apelación fallo
Demandante: Alfonso Silva Vásquez
Demandado: Néstor Javier Murcia

En virtud del cúmulo de asuntos por resolver, la complejidad de los mismos y las dificultades logísticas y técnicas que aparejó la emergencia sanitaria originada por la propagación del corona virus Covid 19, no es factible dirimir la segunda instancia de este asunto, dentro de los 6 meses siguientes a la recepción del expediente en la Secretaría de la Sala Civil de esta Corporación, razón por la cual se **PRORROGA** el aludido plazo por seis (6) meses más para proferir el fallo respectivo.

En firme la presente decisión ingrésense las diligencias para proveer el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE.



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada
(2 autos)

República de Colombia

Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

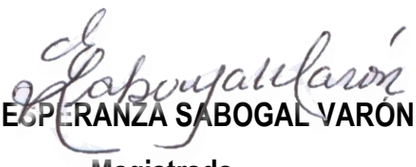
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación:	**11001-3103-045-2017-00204-01**
Asunto:	Verbal - Simulación
Recurso:	Apelación Sentencia
Demandante:	Yolanda Morales Cadena.
Demandado:	Ángel Uriel y Aura María Fontecha Fontecha.
Reparto.	19/11/2020

ADMÍTASE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación propuesto por la parte demandada frente a la sentencia de 7 septiembre de 2020, dictada por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso verbal (simulación) instaurado por Yolanda Morales Cadena en contra de Ángel Uriel y Aura María Fontecha Fontecha.

En firme, reingrese **INMEDIATAMENTE** el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE



NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN

Magistrada

República de Colombia

Tribunal Superior
Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación: **11001-3103-032-2017-00357-01**
Asunto: Verbal - reivindicatorio
Recurso: Apelación Sentencia
Demandante: Sandra Elizabeth Flórez Cárdenas y otros.
Demandado: Poliproductos Ltda. y otros.
Reparto. 13/11/2020.

ADMÍTASE, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación propuesto por la parte demandada frente a la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2020, por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso verbal (reivindicatorio) impetrado por Sandra Elizabeth Florez Cárdenas, Julián Cadena Gómez, Edgardo Correa Pimiento, Luis Eduardo Bernal Coca, Euclides Mora Arias, Omar Orlando Chávez Mazorca, Luis Armando, Astrid Adilia, Mignolia Judit, Luz Mireya y Gloria Liliana Vargas Díaz contra Poliproductos Ltda., Civil Plast Ingeniería Ltda. y John Jairo Piernagorda Cardozo, proceso al que se acumularon las demandas promovidas por el ICBF y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

En firme, reingrese INMEDIATAMENTE el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE

NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARÓN
Magistrada

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: HILDA GONZÁLEZ NEIRA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Advertido el informe secretarial que antecede, y de conformidad con el art. 365 del C.G. del P, para efectos de la condena en costas impuesta en el ordinal segundo de la sentencia del 02 de diciembre de 2020, la Magistrada Ponente como agencias en derecho señala la suma equivalente a **CINCO (05) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** conforme al Acuerdo No. PSAA16-10554, de agosto 5 de 2016, artículo 5º.

CÚMPLASE,



HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada

(25**2018**00**069** 01)

Firmado Por:

HILDA GONZALEZ NEIRA
MAGISTRADO
MAGISTRADO - TRIBUNAL 009 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3c0c0eee9dd0e262286ef740a201e8302f35f7e99a423846f331f41d23e1f0f7
Documento generado en 16/12/2020 05:03:39 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA CIVIL

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Radicación: **41 2019 172**

Asunto. Verbal nulidad contrato-

Demandante. Alfonso Silva Vásquez

Demandado. Néstor Javier Murcia **Márquez**

Como quiera que en el presente asunto actúa como apoderado de la parte demandada, el Dr. José Alfonso Salazar Ramírez, hermano del Dr. Ariel Salazar Ramírez, a su vez esposo de la Dra .Adriana Saavedra Lozada, se impone pasar el expediente a la prenombrada Magistrada para que emita el pronunciamiento que corresponda sobre esa situación (Art.141 y s.s. del C.G.P.).

La secretaría dará cumplimiento a lo aquí ordenado, en forma inmediata.

CÚMPLASE

NUBIA YSPERANZA SABOGAL VARÓN

Magistrada

(2 autos)

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
SALA PRIMERA CIVIL DE DECISIÓN

AUDIENCIA PÚBLICA DE SUSTENTACIÓN Y FALLO

Referencia: Ejecutivo
No. 11001310302720120061503

En Bogotá D.C., a las diez y cuarenta de la mañana (10:40 a.m.) del diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyeron en audiencia pública los Magistrados que conforman la Sala Primera Civil de Decisión, a través de los medios electrónicos dispuestos por la rama judicial, dentro del proceso ejecutivo del Grupo Comercial la Concordia S.A.S. en contra de Carlos Andrés Barriga Salgado, María Dolores Salgado Velandia, Rafael Antonio Sánchez y Edgar Solina Moyano, con el fin de adelantar la audiencia de sustentación y fallo. Obra como secretaria ad hoc la auxiliar judicial, Angie Salomé Cuesta González.

Comparecientes:

Nombre	Calidad
Otoniel González Orozco	Abogado parte demandante
Martha Irene Molina Segura	Abogada parte demandada.

Actuaciones:

En forma oral se surtió la sustentación de los apelantes y sus correspondientes réplicas. Se decretó un receso que se prorrogó hasta las 2:00 p.m.

Reanudada la audiencia se procedió a dictar sentencia, acorde con las consideraciones contenidas en la grabación de esta vista pública, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el numeral 1º y revocar los numerales 2º al 6º de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, dentro del proceso de la referencia, por haber prosperado la apelación de la parte ejecutada.

SEGUNDO. Declarar probada la excepción de "la arrendadora expidió recibos documentos o facturas donde literalmente plasma que recibió muchos cánones", en el sentido en el que fue expuesto en las consideraciones de esta sentencia. En consecuencia, cesar la ejecución en contra de los demandados

TERCERO. Condenar en costas de ambas instancias a la parte ejecutante. Las agencias en derecho de la primera instancia serán fijadas por el juez a quo y las de segunda por el Tribunal.

CUARTO.- Devolver el expediente al juzgado de origen.

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS

Auto de Magistrado Sustanciador:

En virtud de la condena en costas a la parte demandada, se fija como agencias en derecho por la segunda instancia la suma de un salario mínimo legal vigente, de conformidad con el artículo 4º del Acuerdo 101564 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

Agotado el objeto de la audiencia, se da por terminada.

Los Magistrados,

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Magistrado

ADRIANA AYALA PULGARÍN
Magistrada

Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Primera Civil de Decisión

Audiencia pública de sustentación y fallo

Referencia: Proceso No. 11001 31 03 **2001 2019 00325** 01

En Bogotá D.C., a las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.) del diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyeron en audiencia pública los Magistrados que conforman la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de la ciudad, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro del proceso verbal de Marco Lindenau contra Techmed S.A.S., con el fin de adelantar la audiencia de sustentación y fallo. Obra como secretario *ad hoc* el auxiliar del despacho, Edwin Stivens Oliveros Rojas.

Comparecientes:

Nombre	Calidad
Leydi Carranza Ortiz	Apoderada parte demandante
Dionisio Enrique Araujo Angulo	Apoderado parte demandada

Actuaciones:

Se escucharon las alegaciones de las partes y se decretó un receso.

Reanudada la audiencia la Magistrada Sustanciadora informó que conforme lo autoriza el inciso 3º del numeral 5º del artículo 373 del Código General del Proceso, el fallo se proferirá por escrito dentro del término legal, procediendo a anunciar su sentido, que será confirmatorio de la sentencia recurrida.

No siendo otro el objeto de la audiencia, se dio por terminada.

Adriana Ayala Pulgarin.
ADRIANA AYALA PULGARIN
Magistrada

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Magistrado

Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Primera Civil de Decisión

Audiencia pública de sustentación y fallo

Referencia: Proceso No. 11001 31 03 **046 2017 00308** 02

En Bogotá D.C., a las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.) del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyeron en audiencia pública los Magistrados que conforman la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de la ciudad, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dentro del proceso ejecutivo de Payanes Asociados S.A.S. contra Promotora Terrazzino S.A., con el fin de adelantar la audiencia de sustentación y fallo. Obra como secretario *ad hoc* el auxiliar del despacho, Edwin Stivens Oliveros Rojas.

Comparecientes:

NOMBRE	CALIDAD
Álvaro Diazgranados de Pablo	Apoderado de la parte ejecutada
Hernán Roberto Medina Acosta	Apoderado de la parte ejecutante

Actuaciones:

Se indagó a los abogados sobre pronunciamientos adicionales respecto a los documentos cuyo traslado se corrió en auto inmediatamente anterior y se decretó un receso.

Reanudada la audiencia se dictó **SENTENCIA**, cuya parte resolutiva es la siguiente:

DECISIÓN

Por el mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR no probada la excepción denominada *"prescripción extintiva",* planteada por la Promotora Terrazzino S.A.

2. MODIFICAR el inciso segundo del auto de 21 de mayo de 2018 que quedará así: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por OBLIGACIÓN DE HACER ordenando a la empresa Promotora Terrazzino que dentro del término de tres días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia emita la instrucción a Acción Fiduciaria S.A., para que realice la trasferencia de dominio del inmueble ubicado en la oficina No. 607 de la calle 22 B No. 44 C – 90 o diagonal 22 B No. 45 – 01 (dirección catastral), Proyecto Salitre Office a favor de los beneficiarios de área, Jorge Payan y Silvia Jiménez, autorizados para tal efecto por la aquí demandante.

3. ORDENAR seguir adelante la ejecución en la forma indicada en el mandamiento de pago con la modificación atrás realizada.

4. DECRETAR el avalúo y posterior remate de los bienes que se encuentran cautelados para el presente proceso y los que en un futuro fueren objeto de dichas medidas.

5. ORDENAR la liquidación del crédito y costas en los términos del artículo 446 del Código General del Proceso.

6. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandada.

En firme esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al juzgado de origen.

AUTO DE PONENTE

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, las que deberán ser liquidados por el juzgado de primera instancia.

La anterior decisión quedó notificada en estrados.

No siendo otro el objeto de la audiencia, se dio por terminada.

Adriana Ayala Pulgarin

ADRIANA AYALA PULGARIN
Magistrada

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
SALA PRIMERA CIVIL DE DECISIÓN

AUDIENCIA PÚBLICA DE SUSTENTACIÓN Y FALLO

Referencia: Verbal - Impugnación de actas de asamblea.
No. 11001310300620180013801

En Bogotá D.C., a las nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.) del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyeron en audiencia pública los Magistrados que conforman la Sala Primera Civil de Decisión, a través de los medios electrónicos dispuestos por la rama judicial, dentro del proceso verbal de impugnación de actas de asamblea de Fanny Benavides en contra Conjunto Cerrado Mediterráneo P.H., y la Constructora Apicalá S.A.S., con el fin de adelantar la audiencia de sustentación y fallo. Obra como secretaria ad hoc la auxiliar judicial, Angie Salomé Cuesta González.

Comparecientes:

Nombre	Calidad
Giovanni Garibello	Abogado parte demandante
Jorge Rubio	Abogada parte demandada.

Actuaciones:

Se reconoció personería jurídica al abogado Jorge Rubio, para actuar en representación de la parte demandada, conforme la sustitución de poder que le fuera otorgada.

El Magistrado Sustanciador puso en conocimiento de las partes que hizo parte de la Sala que resolvió el recurso de apelación que se formuló contra la reforma al reglamento contenido en la Escritura Pública No. 4363 de 2010, reglamento de la Copropiedad demandante, en decisión que se profirió el 23 de marzo de 2017 con otros Magistrados, lo que ya había sido evidenciado en el expediente conocido por las partes, sin que ellas realizasen alguna manifestación.

De igual forma, precisó que la Escritura Pública No. 4363 de 2010 se encontraba incompleta por lo que se solicitó aportarla, lo que cumplió el abogado de la parte demandada. Se incorporó como prueba de oficio y se compartió el respectivo documento en pantalla a los apoderados comparecientes.

En seguida, de forma oral se surtió la sustentación del apelante y su correspondiente réplica.

Se decretó un receso para deliberaciones de la Sala.

Reanudada la audiencia se procedió a dictar sentencia, acorde con las consideraciones contenidas en la grabación de esta vista pública, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de febrero de 2020 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte apelante.

TERCERO. Devolver el expediente al juzgado de origen.

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS

Auto de Magistrado Sustanciador:

En virtud de la condena en costas a la parte demandada, se fija como agencias en derecho por la segunda instancia la suma de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 5º del Acuerdo 101564 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

Agotado el objeto de la audiencia, se da por terminada.

Los Magistrados,

RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Magistrado

ADRIANA AYALA PULGARÍN

Magistrada